



**FACULTAD DE PSICOLOGÍA**

**Departamento de Psicología Biológica y de la Salud**

**Programa de doctorado: Psicología Clínica y de la Salud**

**TESIS DOCTORAL**

**VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  
VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS CASOS DE  
VIOLENCIA DE GÉNERO DEL MINISTERIO DEL  
INTERIOR DE ESPAÑA**

**AUTORA: María José Garrido Antón**

**CODIRECCIÓN:**

**Dr. Luis F. García Rodríguez**

**Dr. Sergio Escorial Martín**

**Madrid, abril de 2012**

**Esta tesis fue parcialmente financiada por el Instituto Universitario  
de Investigación de Seguridad Interior (IUI SI)**

***C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui  
rend la vie intéressante***

***L'alchimiste***

**A mis padres, mi hermana y mi abuelita  
Por estar siempre ahí, por su paciencia conmigo.**



## ÍNDICE GENERAL

	Página
AGRADECIMIENTOS.....	1
INTRODUCCIÓN (VERSIÓN EN CASTELLANO) .....	3
INTRODUCCIÓN (ENGLISH VERSION).....	7

### PARTE I. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

#### CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1.1.- Introducción .....	13
1.2.- Conceptualización.....	18
1.3.- Estadística. Situación e incidencia de la VDG .....	21
1.3.1.- Cifras globales de la VDG en España .....	22
1.3.2.- Prevalencia de la VDG en España .....	26
1.3.3.- Comparativa mundial .....	29

#### CAPÍTULO 2. MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL PROBLEMA DE VDG

2.1.-Introducción .....	33
2.2.- Normas Específicas.....	34
2.2.1.- Antecedentes en el ámbito internacional .....	34
2.2.2.- Antecedentes en España .....	37
2.3.- Medidas Policiales .....	44
2.3.1.- Guardia Civil .....	46
2.3.2.- Cuerpo Nacional de Policía .....	50
2.3.3.- Policías Autonómicas .....	52
2.3.4.- Policía Local .....	53
2.4.- Medidas creadas para el seguimiento y control de la violencia de género .....	53
2.4.1.- Sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ).....	54
2.4.2.- El servicio de Teleasistencia.....	54
2.4.3.- Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la VDG.....	56
2.4.4.- Sistema de seguimiento integral de los casos de VDG .....	57

#### CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE RIESGO CONTRA LA PAREJA

3.1.- Introducción.....	59
3.2.- Factores de riesgo de violencia.....	63
3.3.- Especificaciones de los instrumentos de valoración de riesgo .....	69
3.4.- Principales instrumentos de valoración de riesgo .....	76
3.5.- Valoración policial de riesgo .....	80

## **CAPÍTULO 4.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VDG (Sistema VDyG) Y DE LOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DE RIESGO CONTRA LA PAREJA (VPR Y VPER)**

4.1.- Introducción.....	89
4.2.- Creación de la plataforma informática .....	91
4.3.- Creación de los instrumentos / Protocolos de valoración policial ...	95
de riesgo	
4.3.1.- Génesis del protocolo del VPR.....	95
4.3.2.- Estudios piloto del VPR .....	99
4.3.3.- Génesis del VPER .....	105
4.3.4.- Estudios Piloto del VPER .....	107
4.3.5.- Versiones definitivas .....	109
4.3.6.- Procedimiento de actuación policial.....	115
4.4.- Medidas policiales asociadas a los niveles de riesgo.....	119
4.5.- Puesta en marcha del Sistema VDyG .....	120

## **CAPÍTULO 5.- INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS**

5.1.- Introducción .....	123
5.2.- Los estándares de la evaluación psicológica .....	124
5.3.- Objetivos de la investigación.....	127
5.4.- Obtención y depuración de datos.....	129
5.5.- Análisis de las propiedades psicométricas de los protocolos de valoración del riesgo ...	133
5.5.1.- Análisis descriptivos.....	135
5.5.2.- Análisis de la fiabilidad .....	135
5.5.3.- Análisis de la validez.....	137
5.5.3.1.- Validez de constructo.....	138
5.5.3.2.- Validez Externa.....	143

## **PARTE II. ESTUDIOS EMPÍRICOS**

### **CAPÍTULO 6. ESTUDIO 1: ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES GENERALES DEL VPR**

1.- INTRODUCCIÓN .....	147
2.- MÉTODO .....	148
2.1.- Participantes.....	148
2.2.- Procedimiento e instrumento de medida .....	152
2.3.- Análisis de datos .....	152
3.- RESULTADOS .....	157
4.- DISCUSIÓN .....	176

### **CAPÍTULO 7. ESTUDIO 2: ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES GENERALES DEL VPER**

1.- INTRODUCCIÓN .....	187
2.- MÉTODO ..	187
2.1.- Participantes.....	187
2.2.- Procedimiento e instrumento de medida .....	190

2.3.- Análisis de datos .....	191
3.- RESULTADOS .....	193
4.- DISCUSIÓN .....	211
 <b>CAPÍTULO 8. ESTUDIO 3: VALIDEZ EXTERNA</b>	
8.1.- INTRODUCCIÓN .....	217
8.2.- <b>ESTUDIO A: CONFORMIDAD DEL AGENTE CON EL RESULTADO OBTENIDO EN LOS TESTS .....</b>	<b>218</b>
8.2.1.- INTRODUCCIÓN .....	218
8.2.2.- MÉTODO .....	220
Participantes .....	220
Procedimiento e instrumentos .....	220
Análisis de datos .....	221
8.2.3.-RESULTADOS .....	221
8.2.4.-DISCUSIÓN .....	230
8.3.- <b>ESTUDIO B: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS CON LAS MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN .....</b>	<b>234</b>
8.3.1.- INTRODUCCIÓN .....	234
8.3.2.- MÉTODO .....	234
Participantes .....	234
Procedimiento e instrumentos .....	235
Análisis de datos .....	235
8.3.3.- RESULTADOS .....	236
8.3.4.- DISCUSIÓN .....	239
8.4.- <b>ESTUDIO C: EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS POLICIALES</b>	
8.4.1.- INTRODUCCIÓN .....	242
8.4.2.- MÉTODO .....	243
Participantes .....	243
Procedimiento e instrumentos .....	244
Análisis de datos .....	244
8.4.3.- RESULTADOS .....	245
8.4.4.- DISCUSIÓN .....	248
 <b>CAPÍTULO 9.- DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES.....</b>	<b>253</b>
9.1.- JUSTIFICACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL .....	253
9.2.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS .....	257
9.3.- IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN .....	264
 <b>CAPÍTULO 9. GENERAL DISCUSSION AND CONCLUSIONS (ENGLISH VERSION.....</b>	<b>275</b>
9.1.- PhD JUSTIFICATION .....	275
9.2.- CONCLUSSIONS OF THE STUDIES.....	279
9.3.- IMPLICATIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH.....	285

### **PARTE III. REFERENCIAS Y ANEXOS**

<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>297</b>
-------------------------	------------

<b>ANEXOS.....</b>	<b>321</b>
--------------------	------------

Anexo I.- Formulario de Valoración Policial de Riesgo VPR .....	323
---	-----

Anexo II.- Formulario de Valoración Policial de Riesgo VPER.....	324
--	-----

Anexo III.- Niveles de riesgo estimado y medidas policiales de protección a adoptar Instrucción SES 5/ 2008. ....	326
--	-----

Anexo IV.- Cuestionario de satisfacción con las medidas policiales .....	327
--	-----

Anexo V.- Secuencias de evolución de los casos VPER con respecto la VPER anterior .....	328
--	-----

Anexo VI.- Formulario VPR vigente (Mayo 2012) .....	330
---	-----

Anexo VII.- Formulario VPER vigente (Mayo 2012).....	331
--	-----

Anexo VIII.- Cuestionario OPPOL .....	332
---------------------------------------	-----



## ÍNDICE DE TABLAS

### Capítulo 1

Tabla 1.1.- Artículo 2 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer .....	15
Tabla 1.2.- Prevalencia de la violencia contra la mujer-pareja en España según los estudios de Medina-Ariza y Barberet y Calvete, Corral y Estévez.....	28
Tabla 1.3.- Situación de abuso por alguna pareja, actual y/o pasada, detectados en atención primaria (Cano y cols., 2010).....	29
Tabla 1.4.- Muertes por violencia violenta por millón de mujeres en el mundo.....	30
Tabla 1.5.- Número de feminicidios de pareja por millón de mujeres mayores de 14 años en Europa (2006).....	32

### Capítulo 2

Tabla 2.1.- Servicios prestados en VDG por cometido .....	49
---	----

### Capítulo 3

Tabla 3.1.- Factores de riesgo de violencia identificados.....	65
Tabla 3.2.- Factores de riesgo de violencia contra la pareja descritos a partir del Meta análisis de Stith (2004).....	68
Tabla 3.3.- Principales instrumentos de valoración del riesgo de violencia .....	76

### Capítulo 4

Tabla 4.1.- Fórmula de puntuación inicial del protocolo VPR.....	100
Tabla 4.2.- Nivel de riesgo predicho, intervalo de puntuaciones y porcentaje de casos .....	100
Tabla 4.3.- Tabla de contingencia cruzando el nivel de riesgo predicho por el formulario con el criterio externo de gravedad .....	102
Tabla 4.4.- Fórmula de puntuación inicial del protocolo .....	104
Tabla 4.5.- Nivel de riesgo predicho por los agentes, intervalo de puntuaciones y porcentaje de casos .....	104
Tabla 4.6.- Tabla de contingencia cruzando el nivel de riesgo predicho por el formulario con el criterio externo de gravedad .....	104
Tabla 4.7.- Revisión periódica del nivel de riesgo .....	106
Tabla 4.8.- Fórmula de puntuación protocolo VPER .....	108
Tabla 4.9.- Puntos de corte VPER corregidos .....	109
Tabla 4.10.- Sistema de puntuación corregido VPER .....	109

Tabla 4.11.- Factores de riesgo VPR relacionados con la literatura .....	111
Tabla 4.12.- Ponderación de los ítems VPR y niveles de riesgo asignados .....	112
Tabla 4.13.- Magnitud en las opciones de respuesta del VPER (111) .....	113
Tabla 4.14.- Procedimiento de valoración del VPER en función del VPR .....	114

## **Capítulo 5**

Tabla 5.1.- Estructura de los estándares de 1999 de la APA.....	126
Tabla 5.2.- Estructura de la parte empírica de la Tesis .....	128
Tabla 5.3.- Distribución de la muestra en función de las versiones del VPR .....	130
Tabla 5.4.- Distribución de la muestra VPER en función de los protocolos completados en plazo.....	132
Tabla 5.5.- Tamaño muestral de cada protocolo VPR y VPER en función del cuerpo policial de procedencia .....	133
Tabla 5.6.- Principales funciones de los instrumentos VPR y VPER .....	134

## **Capítulo 6**

Tabla 6.1.- Distribución de la muestra en función del cuerpo policial de procedencia (N= 20.576).....	148
Tabla 6.2.- Valor mínimo que debe alcanzar el coeficiente de congruencia para considerar un factor comparable en dos grupos con una determinada probabilidad asociada y un número de variables comunes (Adaptada de Cattell, 1978).....	156
Tabla 6.3.- Estadísticos descriptivos de los elementos que forman el VPR (N=20.576) .....	157
Tabla 6.4.- Análisis de elementos VPR en función de las opciones de respuesta (N=20.576) .....	158
Tabla 6.5.- Estadísticos descriptivos de los ítems del VPER en función del cuerpo policial de procedencia (N=20.576) (159).....	159
Tabla 6.6.- Comparación de la variable índice global en función del cuerpo policial de procedencia .....	162
Tabla 6.7.- Distribución de los casos de VDG en función de los niveles de riesgo y del cuerpo policial de procedencia (N=20.576) .....	163
Tabla 6.8.- Índice de fiabilidad obtenido a través del alfa de Cronbach (VPR) .....	164
Tabla 6.9.- Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPR.....	165
Tabla 6.10.- Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPR (CNP) .....	165
Tabla 6.11.- Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPR (GC) .....	166
Tabla 6.12.- Distribución de la varianza total explicada para cada factor .....	167
Tabla 6.13.- Comunalidades de los ítems del VPR .....	169

Tabla 6.14.- Estructura factorial de la escala VPR. Matriz de configuración .....	170
Tabla 6.15.- Principales marcadores identificados mediante AFE .....	171
Tabla 6.16.- Coeficientes de congruencia factorial del VPR .....	173
Tabla 6.17.- Cargas factoriales estimadas para ambos grupos en el modelo base (AFC) .....	174
Tabla 6.18.- Cargas factoriales estimadas para el modelo de equivalencia total (AFC) .....	175
Tabla 6.19.- Índices de bondad de ajuste del modelo base y del modelo forzado a mantener la igualdad en las cargas factoriales .....	175

## **Capítulo 7**

Tabla 7.1.- Distribución de la muestra (cuerpo policial de procedencia) .....	188
Tabla 7.2.- Sistema de puntuación VPER .....	191
Tabla 7.3.- Estadísticos descriptivos de los elementos que forman el VPER .....	194
Tabla 7.4.- Análisis de elementos VPER en función de las opciones de respuesta ..	195
Tabla 7.5.- Estadísticos descriptivos de los ítems del VPER en función del cuerpo policial de procedencia .....	196
Tabla 7.6.- Comparativa de la variable índice global entre cuerpos policiales .....	199
Tabla 7.7.- Distribución de los casos de VDG en función del nivel de riesgo .....	200
Tabla 7.8.- Resumen de los índices de fiabilidad en el VPER (N=2.592) .....	200
Tabla 7.9.- Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPER .....	201
Tabla 7.10.- Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPER (CNP)....	202
Tabla 7.11.- Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPER(GC) .....	202
Tabla 7.12.- Distribución de la varianza total explicada para cada factor (VPER)...	203
Tabla 7.13.- Comunalidades de los ítems del VPER .....	205
Tabla 7.14.- Estructura factorial de la escala VPER .....	206
Tabla 7.15.- Principales marcadores identificados mediante AFE.....	207
Tabla 7.16.- Coeficientes de congruencia factorial del VPER .....	209
Tabla 7.17.- Cargas factoriales estimadas para ambos grupos en el modelo base ....	210
Tabla 7.18.- Cargas factoriales estimadas para el modelo de equivalencia total .....	210
Tabla 7.19.- Índices de bondad de ajuste del modelo base y del modelo forzado a mantener la igualdad en las cargas factoriales .....	211

## **Capítulo 8**

Tabla 8.1.- Tamaño muestral en función del protocolo VPER .....	220
Tabla 8.2.- Matriz factorial .....	237
Tabla 8.3.- Tamaño muestral de cada protocolo de valoración de riesgo .....	244

Tabla 8.4.- Evolución de los casos VPER1 con respecto al VPR (N= 2.592) .....	245
Tabla 8.5.- Evolución de los casos VPER1 con respecto al VPER2 (N=1.414) .....	246
Tabla 8.6.- Evolución de los casos VPER2 con respecto al VPER3 (N=898) .....	247

## ÍNDICE DE FIGURAS

### Capítulo 1

Figura 1.1.- Formas de violencia doméstica .....	19
Figura 1.2.- Evolución del número de casos con resultado de muerte .....	23
Figura 1.3.- Evolución del número de casos con resultado de muerte en relación a la L.O. 1/2004. ....	23
Figura 1.4.- Evolución del número de denuncias .....	24
Figura 1.5.- Procedencia de las denuncias .....	25
Figura 1.6.- Distribución de las víctimas de VDG en función del nivel de riesgo ....	25
Figura 1.7.- Prevalencia de feminicidios de pareja (2006).....	31

### Capítulo 3

Figura 3.1.- Niveles de Riesgo de la VCP (Dutton, 1995) .....	66
---	----

### Capítulo 4

Figura 4.1.- Procedimiento de actuación policial de la Guardia Civil en casos de VDG .....	115
Figura 4.2.- Dinámica del proceso de valoración del riesgo de VDG (SES 5/2008).....	116
Figura 4.3.- Distribución geográfica por competencias policiales .....	118

### Capítulo 5

Figura 5.1.- Proceso de obtención de la muestra VPER.....	131
---	-----

### Capítulo 6

Figura 6.1.- Distribución de la edad de las víctimas de la muestra (N=20.226) .....	149
Figura 6.2.- Distribución de las víctimas de VDG en función de la nacionalidad (N=20.473) .....	150
Figura 6.3.- Distribución de las víctimas de VDG en función del nivel académico (N=1.108) .....	151
Figura 6.4.- Distribución del estado civil de las víctimas de VDG (N=16.755) .....	151
Figura 6.5.- Distribución de la variable índice global VPR (N= 20.576) .....	160
Figura 6.6.- Distribución de la variable índice global de las puntuaciones obtenidas por el CNP (N=12.561) .....	161
Figura 6.7.- Distribución de la variable índice global según las puntuaciones obtenidas por la GC (N=8.097) .....	161

Figura 6.8.- Distribución de los casos de VDG en función del nivel de riesgo (N=20.576) .....	162
Figura 6.9.- Factores identificados a través del AFE correspondientes al VPR representados a través del gráfico de sedimentación .....	168
Figura 6.10.- Modelo de medida contrastado mediante AFC .....	172

## **Capítulo 7**

Figura 7.1.- Distribución de la edad de las víctimas de la muestra 2 (N=2.556) .....	188
Figura 7.2.- Distribución de la víctimas de la muestra 2 en función de la nacionalidad(N=2.504) .....	189
Figura 7.3.- Distribución de las víctimas de VDG en función del nivel cultural (N=265) .....	189
Figura 7.4.- Distribución del estado civil de las víctimas de VDG .....	190
Figura 7.5.- Distribución de la variable índice global VPER .....	197
Figura 7.6.- Distribución de la variable índice global en el VPER .....	198
Figura 7.7.- Distribución de la variable índice global en el VPER .....	198
Figura 7.8.- Niveles de riesgo del protocolo .....	199
Figura 7.9.- Factores identificados a través del AFE correspondientes al VPER representados a través del gráfico de sedimentación .....	204
Figura 7.10.- Modelo de medida contrastado mediante AFC .....	208

## **Capítulo 8**

Figura 8.1.- Porcentajes de conformidad del agente con el resultado del VPR (N=20.576) .....	222
Figura 8.2.- Porcentajes de conformidad del agente con el VPR en función del nivel de riesgo (N=20.576) .....	222
Figura 8.3.- Distribución de los porcentajes de conformidad y disconformidad del agente con el VPR (N=20.576) .....	223
Figura 8.4.- Porcentajes de conformidad- disconformidad del agente con el sistema VPR (N=20.576) .....	224
Figura 8.5.- Porcentajes de conformidad agente con el VPER (N=2.592) .....	225
Figura 8.6.- Porcentajes de conformidad global VPER (N=2.592) .....	226
Figura 8.7.- Distribución de los porcentajes de conformidad y disconformidad del agente con el VPER .....	227
Figura 8.8.- Porcentajes de conformidad- disconformidad del agente con el sistema VPER .....	227
Figura 8.9.- Grado de conformidad del agente a través de los protocolos VPER ....	229
Figura 8.10.- Distribución de la variable conformidad con el resultado VPR según el cuerpo policial de procedencia .....	229

Figura 8.11.- Número de factores observados a través del gráfico de sedimentación .....	237
Figura 8.12.- Grado de satisfacción de las víctimas de VDG (N=198) .....	239
Figura 8.13.- Tendencias observadas de la variable evolución del riesgo .....	247





## GLOSARIO DE ABREVIATURAS FRECUENTES

<b>AFE</b>	Análisis Factorial Exploratorio
<b>AFC</b>	Análisis Factorial Confirmatorio
<b>B-SAFER</b>	<i>Brief Spousal Assault Form for The Evaluation of Risk</i>
<b>CNP</b>	Cuerpo Nacional de Policía
<b>COS</b>	Centro de Operaciones
<b>DA</b>	<i>Danger Assessment</i>
<b>EMUMEs</b>	Equipos Mujer Menor
<b>FCS</b>	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
<b>FCSE</b>	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
<b>GAV</b>	Grupo de atención a las víctimas
<b>SACE</b>	Servicio de atención al ciudadano extranjero
<b>SIRAJ</b>	Sistema de Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia
<b>GBV</b>	<i>Gender based violence</i>
<b>GC</b>	Guardia Civil
<b>GESI</b>	Gabinete de Estudios de Seguridad Interior
<b>GTI</b>	Grupo de trabajo de investigación
<b>GTP</b>	Grupo de trabajo policial
<b>GRUME</b>	Grupo de Menores
<b>ICFS</b>	Instituto de Ciencias Forenses y de la Salud
<b>IUISI</b>	Instituto Universitario de Seguridad Interior
<b>ODA</b>	Oficina recepción de denuncias
<b>OMS</b>	Organización Mundial de la Salud
<b>ONU</b>	Organización de las Naciones Unidas
<b>SAF</b>	Servicio de Atención a la Familia
<b>SAM</b>	Servicio de Atención a la Mujer
<b>SARA</b>	<i>Spousal Assault Risk Assessment</i>
<b>SES</b>	Secretaría de Estado de Seguridad
<b>SIGO</b>	Sistema Integrado de Gestión Operativa
<b>SIVIPAS</b>	<i>Severe Intimate Violence Partner Risk Prediction Scale</i>
<b>UAM</b>	Universidad Autónoma de Madrid
<b>UOPJ</b>	Unidades Orgánicas de Policía Judicial
<b>UPAP</b>	Unidades de Prevención, Asistencia y Protección
<b>VCP</b>	Violencia Contra la Pareja
<b>VD</b>	Violencia Doméstica
<b>VDG</b>	Violencia de Género
<b>Sistema VDyG</b>	Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género
<b>VPER</b>	Valoración Policial de Evolución del Riesgo
<b>VPR</b>	Valoración Policial de Riesgo



## AGRADECIMIENTOS

No podría empezar mis agradecimientos sin mencionar la persona de José Luis González Álvarez, por brindarme la oportunidad de poder trabajar con él, el lujo de poder conjugar la experiencia investigadora con la práctica diaria, y por haber confiado en mí y abrirme la puerta al mundo de la investigación criminal.

A Manuel De Juan Espinosa, por su generosidad intelectual y su humor, aspecto necesario en este largo camino de investigación. A Luis García y a Sergio Escorial por su infinita disponibilidad y por haberme guiado metodológica y científicamente. A Laura Requena por haberme ayudado en todo el trabajo que rodea una Tesis Doctoral, a sus escasos segundos en darme respuesta a todas mis consultas a kilómetros de distancia, su más absoluta incondicionalidad, su tiempo infinito, su ser y su amistad, sinceramente muchas gracias.

Al equipo de estadística de la Guardia Civil, José Luis, Eduardo y Jesús por su paciencia y su infinita colaboración estadística, así como a Rafael Pulido y a Carlos Martín del Puesto de la Comandancia de Madrid por su amabilidad y su infinita ayuda. A Manolo Domínguez, Carlos Garrido y José Manuel Quintana del EMUME CENTRAL por su atenta colaboración.

Al departamento de Criminología de la *Mit Sweden University* por haberme acogido y haberme hecho sentir una más, por la oportunidad que me dieron de investigar en sus proyectos, especialmente a Dr. Henrik Belfrage y la Dra. Susanne Strande.

A mi familia, por su paciencia y sus consejos. Mis padres por una vida de apoyo y amor, por leerme libros cuando era pequeña y por todavía cogerme de la mano cuando tengo miedo. Mi hermana por aguantar mis agobios y ayudarme a conseguir que mis más improbables sueños se convirtieran en realidad, a mis abuelos por entender mis ausencias relativas en su lucha por seguir con nosotros.

A mis amigos por estar siempre pendientes, por preguntarme, por ayudarme, por asesorarme, Tomi, Irene, Verónica, Carmen, Lidia, María y María José, animándonos mutuamente y siendo constantes.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros policías y guardias civiles que me permitieron invadir sus labores diarias en beneficio de la investigación, así como a al Grupo de Estudios de Seguridad Interior, a los miembros del equipo central de investigación del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, y por supuesto al Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior, sin cuya ayuda este trabajo no podría haberse realizado de la misma manera. Todo ello me hace pensar que cuando el objetivo es bienintencionado, la buena voluntad por parte de todos es espectacular.

Finalmente quiero dar mi más profundo y sentido agradecimiento a Jorge, por animarme e inspirarme y sobre todo por estar siempre siempre siempre sonriendo.

## INTRODUCCIÓN

### VERSIÓN EN CASTELLANO

El problema de la violencia de género no se puede enfocar desde una disciplina o desde un único punto de vista, sus determinantes son múltiples y complejos. Se necesita tener un conocimiento multidisciplinario para poder abordarlo. Desde la promulgación de la L.O. 1/ 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, las reformas en la sociedad han sido muy significativas. Se han implantado numerosas medidas de protección y de prevención de diferente índole (publicitarias, en el sistema de enseñanza, en el sistema sanitario, se han creado nuevos juzgados, nuevos fiscales, etc...). La rama policial por su parte, ha sido una de las disciplinas que mayores reformas ha experimentado, creándose entre otras, unidades especializadas en violencia de género, una base de datos nacional con acceso a diferentes entidades relacionadas directamente con este fenómeno. Finalmente como exponente de la confianza depositada por el estado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para afrontar situaciones hasta hace poco desconocidas como es el tema de la valoración del riesgo, y por tanto, difíciles de lidiar, se han creado y desarrollado dos protocolos de valoración del riesgo de violencia, que tratan de estimar la probabilidad que sufre una víctima de ser agredida nuevamente, así como una serie de medidas policiales para proteger a los damnificados de estos delitos. Todo ello queda incardinado en el Sistema VDyG, objeto de validación de esta Tesis Doctoral.

La violencia de género es un tema de seguridad pública, que requiere de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar y asegurar esta “*seguridad*” que se encuentra quebrantada en estos casos. La actuación de estas fuerzas debe trabajar al unísono con los juzgados, con los servicios sociales y con el resto de administraciones públicas para proteger en primera instancia a la víctima y para erradicar la violencia por parte de los agresores.

El fenómeno de la violencia de género se encuentra encuadrado dentro de las líneas de investigación más importantes de la Institución de la Guardia Civil en particular y del Ministerio del Interior en general. Como miembro de la Guardia Civil en activo, me encuentro en una situación privilegiada para su estudio, puesto que debido a la sensibilidad de los datos, hay restricciones en este sentido para acceder a

ellos. Puedo decir que he tenido la oportunidad, posibilidad y suerte de haber tenido no solo acceso a los datos, sino que en muchas ocasiones haber podido trabajar con víctimas, agresores y en muchos casos los descendientes de ambos.

Actualmente no existe investigación que trate directamente el fondo del problema que con esta Tesis Doctoral se está abordando, la validación del procedimiento de valoración del riesgo de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior de España. No obstante en otros colectivos existen algunos estudios al respecto (Policía Autonómica Vasca, ámbito forense, penitenciario y salud pública entre los principales) que se irán detallando a lo largo de esta investigación.

El principal objetivo del estudio que se presentará a continuación es dar a conocer a la comunidad científica el análisis sobre las bondades del procedimiento de valoración de riesgo de violencia de contra la pareja, que desde agosto de 2007 está implantado por el Ministerio del Interior en el marco del sistema integral de seguimiento de las víctimas de violencia de género. Así, se analizará el Sistema VDyG: las propiedades psicométricas de los protocolos de valoración del riesgo VPR (valoración policial de riesgo) y VPER (valoración policial de la evolución del riesgo) así como la adecuación de las medidas policiales de seguridad y protección creadas al efecto, y que tratan de erradicar o en su defecto reducir el riesgo de violencia que existe entre una valoración y la siguiente.

Para cubrir este objetivo principal la presente tesis doctoral está formada por los siguientes capítulos distribuidos en dos grandes bloques: una parte teórica donde se incluyen los capítulos del 1 al 5 y una parte empírica que incluye 3 estudios independientes dirigidos a recabar distintas evidencias relativas a las características psicométricas de los instrumentos. Cierra la tesis un último capítulo que integra y sintetiza las conclusiones de los estudios realizados y delinea futuras líneas de investigación. A continuación las referencias bibliográficas y los diferentes anexos.

En el capítulo primero se analiza la situación actual de la violencia de género, a través de una revisión de los trabajos más relevantes en España y en el extranjero recogiendo datos epidemiológicos nacionales e internacionales. Se aborda también la problemática que existe actualmente con los términos violencia contra la pareja/ violencia de género/ violencia doméstica y se ofrece una estadística sobre la incidencia y prevalencia de este delito en España en comparación con el resto del mundo.

El capítulo segundo se centra en las medidas que se han ido desarrollando para hacer frente a este problema, empezando con la evolución que nuestro sistema legal ha ido sufriendo. Sólo desde este esencial marco de referencia se puede entender la respuesta policial que paralelamente el Ministerio del Interior ha tenido que ir desarrollando.

En el capítulo tercero se propone un recorrido profundo sobre el concepto de valoración de riesgo, ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿en qué ámbito se ha desarrollado?, ¿desde cuándo?, ¿en qué países? ¿dónde se iniciaron los primeros estudios?, ¿qué aproximaciones existen en la valoración del riesgo?. También se describen los instrumentos más importantes en España y en el resto del mundo, haciendo especial alusión a los instrumentos desarrollados por el Ministerio del Interior y objeto de esta Tesis Doctoral. Es importante señalar que se han propuesto un gran número de clasificaciones y de estudios en los últimos años respecto a la valoración del riesgo. Esta investigación se va a centrar en aquellos que se consideran más importantes dada su actualidad, relevancia y apoyo empírico, y que se considera que pueden ayudarnos mejor a entender el problema desde el punto de vista policial.

El cuarto capítulo está dedicado al estudio de la creación y desarrollo de los protocolo de valoración del riesgo VPR y VPER desde su nacimiento, hasta el resultado final. Se lleva a cabo también un conocimiento de las actuaciones policiales puestas en marcha en la lucha contra este fenómeno por diferentes cuerpos policiales, así como las medidas policiales que desde que se crearon, se encuentran vigentes

Para finalizar este primer bloque, en el capítulo quinto se plantean los objetivos e hipótesis que van a guiar la parte empírica, que constituye un segundo bloque formado por tres estudios independientes. El primero de ellos comprende el estudio descriptivo, la fiabilidad y la validez de constructo del primer protocolo (el VPR). El segundo estudio abarca igualmente la descriptiva, la fiabilidad y la validez del segundo de los protocolos (el VPER), y finalmente el tercer y último estudio trata de la validez externa de los test, dividiéndose a su vez en tres análisis, uno por cada variable criterio. Primero se analizará la conformidad del agente con el resultado obtenido en los cuestionarios, en segundo lugar la satisfacción de las víctimas con el sistema de valoración y las medidas policiales obtenidas, y el tercer estudio, se centrará en la evolución de los niveles de riesgo obtenidos a lo largo de sucesivos protocolos VPER administrados.

Una vez finalizada la presentación de los estudios empíricos, en el capítulo 9, se exponen la discusión general y las conclusiones donde se integran los resultados desprendidos de los tres estudios empíricos. Tras esto, se presentan las futuras líneas de investigación que se derivan principalmente de las limitaciones halladas en el trabajo.



## **INTRODUCTION ENGLISH VERSION**

The problem with Gender Based Violence can not be focused from a certain discipline or from only one point of view, its determinants are multiple and complex. To be able to address it, it is necessary to do it multidisciplinary. Since the promulgation of the L.O. 1/ 2004, the social reforms have been very significant. Numerous measures of protection and prevention of different types have been implemented (in advertising, education system, health system, new courts have been created, new district attorneys, etc.) The police branch has been one of the disciplines that has experienced greater reforms, creating among other things, special units in gender violence, a national data base with access to different entities directly related with this crime, and finally, as an exponent of the trust by the state in the law enforcement to deal with recent situations like risk assessment, and there by, difficult to deal with two risk assessment protocols have been created and developed which try to estimate the probability that suffers a victim to be attacked again, as well as a series of police measures to protect the victims of this crimes.

Gender Based Violence is a public security issue, that requires of the law enforcement units to “deposit” this “security” which is broken in these cases. The performance of the law enforcement police officers must work together with the courts, with social services and with the rest of the public administration to protect primarily the victim and to eradicate the violence of the offenders.

This phenomenon is framed within the most important investigation guidelines of the Guardia Civil Institution in particular and of the Ministry of Interior in general. As an active member of the Guardia Civil, I find myself in a privileged situation to study this phenomenon, since due to the sensibility of the data, there are restrictions in this regard to have access to them. I can say I have had the opportunity, possibility and luck of having not only access to the data but in many occasions to have been able to work with victims, offender and in many cases the descendants of both.

Nowadays, inside the Guardia Civil there is not an investigation that addresses directly the bottom of the problem that this PhD Dissertation is addressing, the study of the process of risk assessment of partner violence. Nonetheless in other groups there is

abundant investigation on this subject (Autonomic Bask Police, forensics field, prison environment and public health among the main ones).

The principal objective of the study presented below is to introduce the study of the procedure of Gender Based Violence risk assessment that is actually being implemented by the Ministry of Interior within the comprehensive gender violence victim monitoring system to the scientific community, so the psychometric properties of the risk assessment protocols VPR and VPER and to check the adequacy of the police measures created on the subject.

In order to serve the main objective this PhD Dissertation is formed by multiple chapters distributed in two big blocks: a theoretical part where chapters one through five are included and an empirical part which includes three independent studies aimed at gathering different evidence in relation to psychometric characteristics of the instruments. The Thesis ends with a last chapter, which integrates and synthesizes the conclusions of the studies performed and outlines future research lines. At last, the references and the different annexes.

In chapter one the current gender violence situation is analyzed, through a review of the most relevant Spanish and foreign studies collecting epidemiological national and international data. The current partner violent problem, gender violence, and domestic violence is also addressed and provides statistics on the incidence and prevalence of this type of crime in Spain in comparison to the rest of the world.

The second chapter proposes a deep review of the risk assessment concept, what is it? How those it work? In which environment has it been developed? Since when? In which countries? Where were the fist studies indicated? Which approximations exist in risk assessment? As well as the most important instruments developed by the Ministry of Interior and objective in this PhD Dissertation. It is important to note that a great number of classifications and studies have been proposed in the last years regarding risk assessment, this investigation will focuses in those studies that have been selected according to their currency relevance and empirical support, and that is considered that they can help us understand better de problem from a police point of view.

The third chapter focuses in the measures that have been developed to deal with the problem, starting with the evolution that our legal system has suffered thus serving

as an essential framework to understand the police response that the Ministry of Interior has had to develop in parallel.

Chapter four is dedicated to the study of creation and development of the risk assessment protocol VPR and VPER since they were created, until the final result. Knowledge of police actions that fight this phenomenon is carried out by different police forces, as well as police measures that are current nowadays in their application to the victims of this phenomenon.

Finally in chapter fifth, the objectives and hypothesis that will guide the empirical portion of this Thesis arise. In the second part there are three independent studies. The first one includes the descriptive study, the reliability and the construct validity of the first protocol (VPR). The second one covers the same analysis but according to the second protocol (VPER), and finally, the third and last study is about the external validity of the forms dividing itself, in three brief studies, one for each criteria variable, analyzing first: the agent compliance with the result obtained from the questionnaires, in the second one: the victim satisfaction with the police measures obtained, and finally in the third study: the evolution in the risk levels obtained through the different VPER protocols administered, will be the variable to analyze.

After the empirical studies presentation, chapter 9 sets out a general discussion and final conclusions, where the results detached from the three empirical studies are integrated. After that, future lines of research, stemming mainly from the limitations found in the work, are presented.



PARTE I

CONTEXTUALIZACIÓN  
TEÓRICA



## **CAPÍTULO 1**

### **EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

#### **1.1.- INTRODUCCIÓN**

Actualmente la violencia de género (en adelante VDG) es uno de los problemas de salud pública más importantes por su creciente incidencia y mortalidad (Krug, Dahlberg, Mercy y Lozan, 2002). Otros autores la califican como la forma más seria de terrorismo hacia la mujer, debido a sus tasas de prevalencia, su naturaleza repetitiva y su alto riesgo de morbilidad y mortalidad (Kropp, Hart, Webster y Eaves, 1995).

Aproximadamente, un tercio de las mujeres de todo el mundo son víctimas y/o supervivientes de maltratos, violaciones y asesinatos (Pickup, Williams y Sweetman, 2001). En Estados Unidos se trata del motivo más importante de asesinatos de mujeres representando entre un 30% - 40% de los asesinatos anuales (Campbell, O'Sullivan, Roehl y Webster, 2005). Datos más recientes confirman que al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros abusos durante su vida, y, por lo general, quien la ha maltratado ha sido alguien conocido por ella (Naciones Unidas, 2010). En España también es un suceso muy frecuente y adquiere actualmente unas cifras muy elevadas. Así, por ejemplo, según el estudio realizado en 2006 por el Instituto de la Mujer con una muestra de más de 32 mil mujeres, hay al menos un 3,6% de mujeres mayores de 18 años que resultan maltratadas por su pareja (lo que implicaría una cifra de alrededor de 680 mil mujeres en la población general). Y también habría un 6% adicional (alrededor de un millón doscientas mil) que, aún no considerándose maltratadas, sufren unas conductas vejatorias impropias en una relación de pareja sana (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral, 2008). Su prevalencia puede alcanzar el 10% (Zorrilla, Pires, Lasheras, Morant, Seoane, Sánchez y Durbán, 2010), aunque varía entre comunidades (Ruíz-Pérez, Plazaola-Castaño, Vives-Cases, Montero-Piñar, Escribà-Agúir y Jiménez-Gutiérrez 2010). Estas cifras son tan elevadas debido a que este tipo de violencia a menudo se extiende más allá de los límites de la familia y del matrimonio, ya que suele afectar también a las mujeres que conviven sin formalizar su relación, así como a las que no han comenzado aún la convivencia o ya se han separado (Alberdi, 2005).

Sea como fuere, es un atentado contra los Derechos Humanos, reconocido así en 1993, por la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), cuando los representantes de 171 Estados adoptaron por consenso la **Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer**, en la que se plasmó tanto la existencia de violencia sobre la mujer como una definición de este fenómeno. A partir de este momento se empieza a reconocer a nivel internacional que la mujer, no sólo sufre discriminación, sino que sufre violencia por el hecho de ser mujer. En su artículo 1 establece la definición de violencia de género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”. En su artículo 2, se establecen los diferentes actos que pueden constituir violencia sobre la mujer, si bien, como se puede apreciar en la tabla 1, dicho artículo no limita la violencia sólo a actos producidos por la pareja, sino que reconoce que pueden existir más formas de violencia contra la mujer, como por ejemplo la trata de personas y la prostitución forzosa (ONU, 1993).

Antes de esta Declaración, en 1979, se había creado también por parte de las Naciones Unidas, la **Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer** (CEDAW<sup>1</sup>), en la que no se hablaba de violencia sobre la mujer pero sí de discriminación (Maqueda, 2006). En esta Convención se establece que, a pesar de la existencia de diversos instrumentos para la lucha contra esta problemática (la carta de las Naciones Unidas, la declaración universal de los Derechos Humanos, la obligación de los estados partes en los pactos internacionales de Derechos Humanos de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos y las diversas resoluciones, declaración y recomendaciones aprobadas por la ONU), las mujeres sufren discriminación por el hecho de ser mujeres. En esta convención aún no se explicita que las mujeres sufran violencia sino que se establece que “siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”.

---

<sup>1</sup> Convention on the elimination of all forms of discrimination against women



*Tabla 1.1. Artículo 2 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.*

Violencia física, sexual y psicológica en la familia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Violencia relacionada con la dote</li><li>• Abuso sexual de las niñas en el hogar</li><li>• Malos tratos, violación por el marido</li><li>• Actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia</li><li>• Prácticas tradicionales nocivas para la mujer</li><li>• Violencia relacionada con la explotación</li></ul>
Violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general	<ul style="list-style-type: none"><li>• Violación y abuso sexual</li><li>• Acoso e intimidación sexual en el trabajo e instituciones educativas</li><li>• Trata de mujeres y prostitución forzada</li></ul>
Violación física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado	

A partir de la Declaración de 1993, la VDG se consagra internacionalmente como problema social, adquiere una definición clara y se sitúa dentro del campo fundamental de los Derechos Humanos y de igualdad de oportunidades. Este hecho fue reforzado en 1995 por la **Plataforma de Acción de Beijing** de la ONU, documento firmado por representantes de 189 gobiernos y encaminado a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, que ya denunciaban los colectivos feministas<sup>2</sup>. En esta conferencia se amplía la definición de violencia hacia las mujeres, especificando que abarcara también la violación de los Derechos Humanos de la mujer en situación de conflicto armado, incluyendo la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos; selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino. Se reconoce también la vulnerabilidad particular de las mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de refugiados y

---

<sup>2</sup> Aunque el feminismo fue consolidado en el siglo XIX, existen textos feministas de mayor antigüedad, como movimientos de toma de conciencia y lucha de las mujeres por sus derechos y emancipación social. En el S. XV existieron algunas mujeres que se involucraron en la reivindicación sobre los derechos de la mujer, una corriente de pensamiento que fue conocida como la "*Querelle des femmes*", reivindicando reformas sociales así como el acceso a la educación y a la cultura para las mujeres. Este movimiento se extendió hasta finales del S. XVII, siglo donde se iniciaron cambios; pero es con la Ilustración cuando se gestaron los principios de igualdad y libertad, y cuando las mujeres aprovecharon para reivindicarse con la Revolución Francesa, destacando entre ellas Olimpia de Gouges, quien en 1791 escribió los derechos de las mujeres y de la ciudadanía. Dos años más tarde de este manuscrito, Napoleón mando asesinarla.

emigrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas o en instituciones correccionales.

Con respecto a España, en la década de 1980 se comienza a reconocer la gravedad del problema publicándose cifras relativas a denuncias por malos tratos. Se crea el **Instituto de la Mujer** (Ley 16/ 1983), los centros de información a la mujer, y se dan las primeras respuestas institucionales al problema con campañas de formación e información. Pero es a mediados de los noventa (especialmente después del asesinato de Ana Orantes Ruiz)<sup>3</sup> cuando se ha ido observando un progresivo proceso de construcción de políticas sobre el problema. En 1998 se puso en marcha el **I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica** (1998-2000), impulsado por el Instituto de la Mujer, en colaboración con los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Sanidad y Consumo e Interior y de las distintas Comunidades Autónomas, de la Federación de Municipios y Provincias y con las Organizaciones no Gubernamentales. Los objetivos eran: a) reducir y llegar a erradicar los actos violentos en el seno de las familias y b) arbitrar los medios necesarios para paliar los efectos de la violencia en las víctimas. A este plan le siguió el **II Plan Integral contra la violencia doméstica** (2001-2004), que estructuró sus medidas en cuatro áreas (preventivas y de sensibilización; legislativas y procedimentales; asistenciales; y de intervención social e investigación) a las que se dotó presupuestariamente con 78 millones de euros, (30 millones más que la asignación al primer plan), y del que surgieron diferentes medidas, entre las que destacan por su importancia las siguientes (Sanmartín, 2006):

- Inhabilitación del agresor para ejercer la patria potestad, cuando el interés del menor lo aconseje.
- Privación del derecho a la tenencia y porte de armas del agresor, desde el momento mismo de la interposición de la denuncia.
- Establecimiento de un turno de oficio especializado en materia de violencia doméstica, con formación específica para profesionales.

---

<sup>3</sup>El 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes Ruiz dio testimonio de la situación de violencia que estaba sufriendo en un programa televisivo. Días después de denunciar la situación ante las cámaras, su ex marido José Parejo Avivar, la golpeó y quemó viva, produciendo su muerte.

- Creación de puntos de encuentro, atendidos por personal cualificado para las visitas entre padres y madres a menores en los casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia doméstica.

Desde el punto de vista normativo, se han experimentado grandes cambios. Han ido introduciéndose poco a poco reformas en todos los órdenes (civil, penal, procesal...) y dictándose Leyes de diferente rango. Pero, indudablemente, es a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 1/ 2004, de medidas de protección integral contra la VDG, cuando se introducen las reformas más significativas en diferentes niveles (educativo, social, laboral, etc.). Esta Ley Orgánica introduce en su primer artículo el término de violencia de género, para describir “la situación de violencia a la que se puede ver sometida una mujer por una relación de dominio y control por parte de un hombre”. Este concepto abarca diferentes situaciones típicas dentro de la violencia, como agresiones físicas, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, tráfico de mujeres, explotación sexual o acoso sexual en el trabajo, etc. Abarca situaciones que se producen con independencia del tipo de relaciones interpersonales que mantengan agresor y víctima, que a veces son de tipo sentimental, familiar, de amistad o simplemente inexistentes.

Desde un punto de vista policial, la L.O. 1/ 2004 destaca entre sus principios rectores “el de asegurar la prevención de los hechos de violencia de género, a través de los recursos e instrumentos que articulen los distintos poderes públicos”. Es aquí donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante FCS) tienen un papel fundamental. A tal efecto, en su artículo 31, dispone, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán conforme al **Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género** (10 de junio de 2004).

En definitiva, la VDG es un problema social. Las sociedades occidentales han ido tomando conciencia de las consecuencias que tiene la violencia contra las mujeres tanto para las propias víctimas, como para las sociedades en su conjunto. En los siguientes capítulos se van a ir describiendo con más profundidad algunas de las reformas y medidas que se han ido desarrollando con el objetivo de hacer frente a este fenómeno. Entre estos cambios destacan por ser objeto principal de esta tesis doctoral, las reformas policiales que se han ido implantando: la creación de la plataforma del

sistema de seguimiento integral en VDG (Sistema VDyG) y los protocolos de valoración de riesgo de violencia, así como las medidas policiales para prevenir y proteger a las víctimas de nuevos incidentes violentos.

## **1.2.- CONCEPTUALIZACIÓN**

Con el paso del tiempo, los términos que se han ido utilizando para referirse a la violencia contra las mujeres han sido muy numerosos: violencia doméstica, violencia de género, violencia machista, discriminación hacia la mujer, violencia contra la mujer, violencia contra la pareja, etc. Estos términos se han empleado a menudo como intercambiables o sinónimos de un mismo concepto que pretende describir el abuso de una mujer por su pareja, ex pareja, miembro de su familia, u otros con quien tiene o ha tenido una relación íntima. Todos estos conceptos reflejan un uso de la violencia como manifestación de poder, control y dominación hacia la mujer. Sin embargo, se considera necesario hacer una distinción de cada término, diferenciando conceptos que pueden conducir a error.

Se empezó hablando sobre “**discriminación contra la mujer**” a raíz de la CEDAW celebrada bajo los auspicios de la ONU en 1979. Este término denotaba “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tuviese por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Este concepto también ha sido muy utilizado, especialmente en la época de los noventa, para establecer diferencias en determinados aspectos sociales en función del sexo (sueldo, empleo, oportunidades, etc.).

La expresión evolucionó hacia **violencia doméstica, violencia familiar, violencia intrafamiliar o violencia física en el ámbito familiar**, refiriéndose a la violencia física o psíquica ejercida tanto por el hombre como por la mujer contra: la pareja, descendientes (hijos y nietos), ascendientes (padres y abuelos), hermanos naturales, adoptivos o afinidad, propios o del cónyuge o convivientes, menores e incapaces que convivan con el agresor. El término abarca también a las personas amparadas en cualquier otra relación por la que se encuentren integradas en el núcleo de

su convivencia familiar y personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en un centro público o privado (Art., 153 del Código Penal. Libro II. Delitos y sus penas; de las lesiones). Por tanto, la violencia doméstica o familiar incluye cuatro categorías esenciales de violencia: violencia contra los hijos, contra los padres, **contra la pareja** y contra los ancianos, incluyendo a todos aquellos miembros que forman la llamada familia extensa (Andrés-Pueyo, López y Álvarez, 2008).

La figura 1 refleja cómo la violencia contra la pareja (en adelante VCP) forma parte de la violencia doméstica.

*Figura 1.1. Formas de violencia doméstica.*



La **violencia contra la pareja** es una de las más comunes formas de violencia interpersonal en todo el mundo (Krug y cols., 2002). Al igual que otras formas de violencia intrafamiliar, es diferente de la violencia ejercida contra extraños, es decir, de la violencia en general. La estrecha relación que a menudo existe entre el agresor y la víctima hace que ésta tenga dos características fundamentales: su **frecuencia y su gravedad** (Kropp, Hart y Belfrage, 2010).

Aunque puede afectar tanto a hombres como a mujeres de manera diferente, es mucho más probable que las mujeres sean las víctimas de repetidos y graves episodios de violencia a manos de su pareja, resultando frecuentemente en lesiones físicas o psicológicas que pueden llegar hasta el homicidio (Kropp y cols., 2010). Por este tipo de razones, la VCP a menudo se suele llamar VDG, y por estas mismas razones a lo largo

de esta Tesis Doctoral, se hará referencia a las víctimas suponiendo que son mujeres y a los agresores suponiendo que estos son hombres.

Por otro lado, la expresión **violencia de género**, proviene de la traducción directa del inglés “*gender-based violence*” o “*gender violence*”, expresión difundida a raíz de la Conferencia de Beijing de la ONU en 1995, donde las mujeres acuerdan utilizar el término “violencia de género” en los diferentes pueblos y lenguas (Delgado, 2010). Sin embargo, es una traducción al castellano que quizá conduzca al error, puesto que, a diferencia del español, en inglés las palabras no tienen género. Desde la Real Academia Española (en adelante RAE), hasta conocidos escritores y polemistas, expresaron su desacuerdo con este modo de designar la violencia contra las mujeres, aludiendo a la incorrección léxica de tal designación. Son abundantes las referencias periodísticas que a lo largo del 2004 recogían la posición de la RAE recomendando el uso del término “violencia doméstica” en lugar de violencia de género (Velandó, 2005). Del mismo modo, se generó mucha polémica aludiendo que las personas tienen sexo y son las cosas las que poseen género.

Bajo esta denominación, la VDG agrupa todas las formas de violencia que se ejercen por parte del hombre sobre la mujer en función de su rol de género: violencia sexual, tráfico de mujeres, explotación sexual de las mismas, mutilación genital, acoso laboral, etc. (Andrés-Pueyo y cols., 2008), independientemente del tipo de relaciones interpersonales que mantengan agresor y víctima, que a veces son de tipo familiar, de vecindario o simplemente inexistentes.

Otros autores hablan de **Uxoricidio** y **Feminicidio** para referirse a aquellos casos más violentos y más agresivos de violencia contra las mujeres. El Uxoricidio (del latín “*uxor*” “*esposa*” y “*caedere*” “*matar*”) consiste en el homicidio del cónyuge por parte del marido. Comúnmente es tratado legalmente como una forma de parricidio (Wilson, Daly y Wright, 1993). Por otro lado, el **Feminicidio** o **femicidio** es un neologismo creado a través de la traducción de los vocablos ingleses “*femicide*” o “*gendercide*” y se refiere a todo asesinato de mujer, sin importar el motivo o el estatus del agresor (Campbell y Runyuan, 1998). Otros autores hablan de este nuevo concepto para referirse a los crímenes ejercidos contra mujeres con un elevado sesgo misógino (Cantos, 2010).

Merece la pena también dedicar unas líneas para llamar la atención sobre el uso de la violencia entre las prácticas comunes en diversos países como pueden ser India, Turquía, Pakistán, entre otros, donde abundan los llamados “crímenes de honor” o las denominadas “muertes por dote”. En el primer caso, se produce vejación y asesinato de la mujer, puesto que se ha considerado que ésta ha deshonrado a la familia por motivos como los que siguen: rechazando un matrimonio concertado, haber sido víctima de agresión sexual, o simplemente por querer divorciarse, tener tendencia homosexual o haberse vestido de manera “inapropiada”. En el segundo caso, se producen muertes cuando las mujeres son asesinadas o llevadas al suicidio por acoso continuo y a veces hasta la tortura, por parte de los maridos y/o parientes políticos en un intento por aumentar la dote o “precio” por estas mujeres.

Como conclusión general, queremos resaltar que esta investigación tiene como objeto analizar una muestra de víctimas que han denunciado un hecho de naturaleza de Violencia de Género, y por tanto, forman parte del Sistema VDyG. Por ello y para los propósitos de esta Tesis Doctoral, la VDG significará cualquier acto de violencia física, psicológica y sexual, incluyendo las amenazas, coacciones o la privación arbitraria de libertad, hacia la pareja o expareja (o hacia quienes hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia), ocurriendo estos hechos bien en ámbito público o privado.

### **1.3.- ESTADÍSTICA: SITUACIÓN E INCIDENCIA DE LA VDG**

No es tarea fácil estimar los datos que existen sobre VDG en la sociedad actual, ya que dependiendo de la fuente consultada las cifras pueden variar. Tampoco se puede obviar la presión política que existe detrás de cada dato. Incluso, como hemos visto, en función del concepto de VDG que se esté manejando, puede existir disparidad.

También, dependiendo de la técnica del muestreo se pueden obtener diferentes cifras según se estudie por ejemplo, población general, población clínica, población que denuncia, tipos de maltrato considerados (violencia física, sexual, psicológica, lesiones, etc.), siendo esto muchas veces objeto de crítica por reflejar sólo la violencia leve o moderada que existe en las relaciones de pareja (Gordon, 2000), el medio en el que se hace el estudio y las variables contaminantes que esto puede llevar, (cara a cara, telefónicamente, encuestas poblacionales...). A veces, todas estas formas de conseguir

información pueden ofrecer datos sesgados, encubiertos o no del todo realistas. En este sentido, en la literatura existente no hay un acuerdo unánime entre los objetivos a evaluar cuando se hacen estudios de este tipo, lo cual hace difícil muchas veces la comparativa entre investigaciones.

Pese a todo, la VDG arroja cifras muy elevadas en todas las investigaciones realizadas al efecto. Sólo en el año 2010, 73 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas. Según informes de la organización mundial de la salud (en adelante OMS), el 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o ex parejas (OMS, 2002) siendo ésta la principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad.

### **1.3.1.- Cifras globales de la VDG en España**

Los datos que se van a presentar a continuación proceden del **Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer**. Este organismo dispone de acceso directo a diversas fuentes de información (Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, Delegación del Gobierno para la VDG, Instituto de la Mujer), y, recientemente (2011), ha publicado los resultados del IV informe anual (informe ejecutivo), sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a los que se refiere el artículo 1.1 de la Ley Integral 1/ 2004<sup>4</sup>. Se pretende con estos datos, ofrecer una radiografía de la situación actual de la VDG en España.

A continuación se van a ir exponiendo, las variables consideradas más relevantes para los objetivos de esta Tesis Doctoral y que han sido extraídas del mencionado informe.

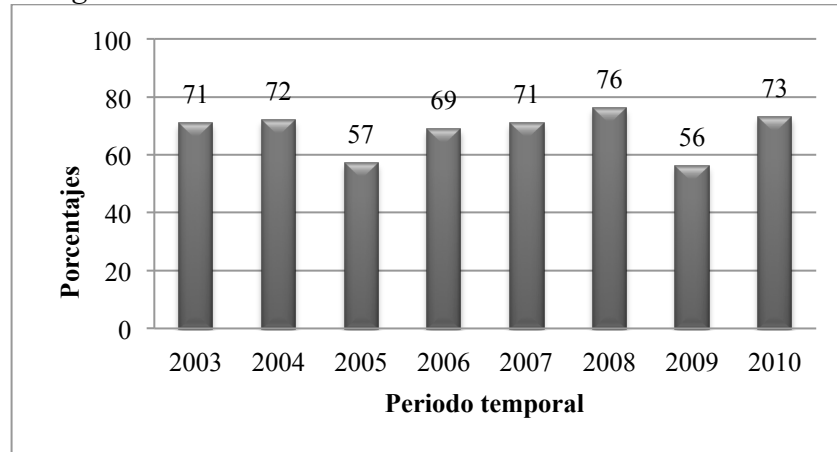
- I. **Víctimas mortales por VDG:** solamente en España desde el 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2010, el número de víctimas mortales ha sido de 545. En la secuencia mostrada en la siguiente figura, puede observarse la fluctuación del número de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja desde el año 2003 a 2010.

---

<sup>4</sup>Ley Orgánica 1/ 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art. 1.1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.



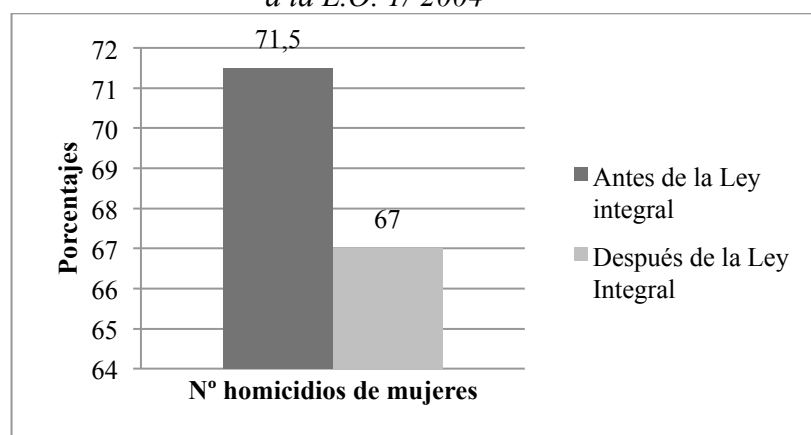
*Figura 1.2. Evolución del número de casos con resultado de muerte*



Pero los resultados indicados en la figura anterior son sólo la punta del *iceberg*, puesto que sólo se conoce y registra una pequeña parte de los abusos producidos, ya que las víctimas no informan de ello muy a menudo por diferentes causas: vergüenza, temor a que se cumplan las amenazas, dependencia económica/ emocional, o falta de recursos, entre otras. Se estima que solamente entre un 10% y un 15% de la VDG es objeto de denuncia (Cantos, 2010). La invisibilidad de la violencia hace que se tenga una falsa creencia sobre los datos o las cifras de este fenómeno y que muy frecuentemente a través de los medios de comunicación se transmita una idea del panorama de la VDG basado únicamente en las víctimas mortales, cayendo así en la equivocada equiparación entre “*impacto de la violencia de género*” igual a “*mujeres muertas*” (Cantos, 2010).

Si comparamos la media anual de homicidios por VDG en los años anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la Ley Integral, se puede observar un descenso en el número de crímenes.

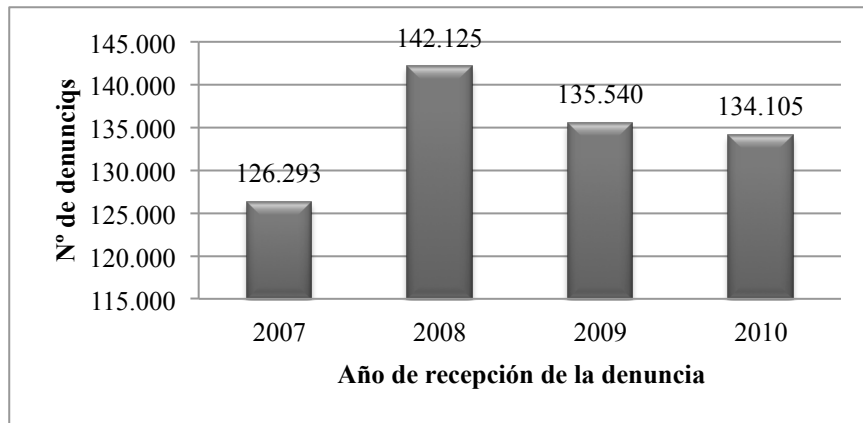
*Figura 1.3. Evolución del número de casos con resultado de muerte en relación a la L.O. 1/ 2004*



Sin embargo no se considera adecuado evaluar la eficacia de la Ley Integral en función a las cifras de víctimas mortales, puesto que no es posible determinar el volumen de mujeres que ha salvado su vida por la utilización de los recursos que la Ley Integral pone a su disposición.

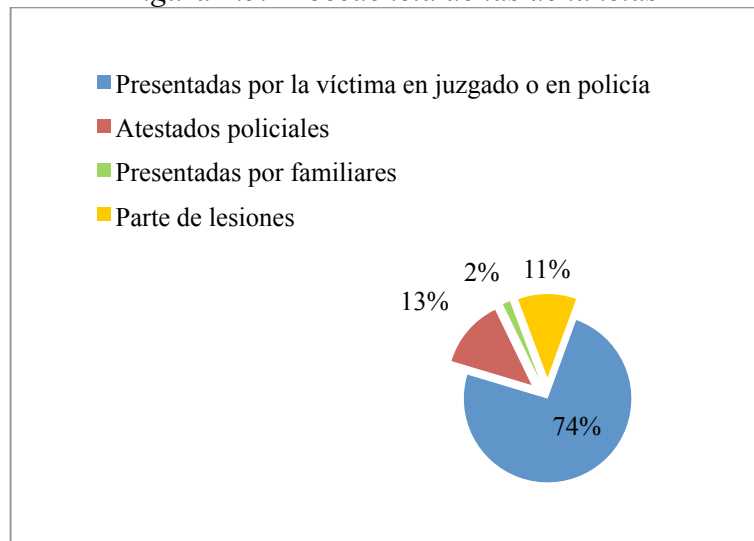
- II. **Denuncias por VDG:** el Consejo General del Poder Judicial ha publicado un total de 134.105 denuncias por VDG que durante el año 2010 llegaron a los juzgados. Esto implica una media mensual de 11.175 denuncias y una media diaria de 367. En la siguiente figura se recogen las denuncias presentadas desde 2007 a 2010.

*Figura 1.4. Evolución del número de denuncias*



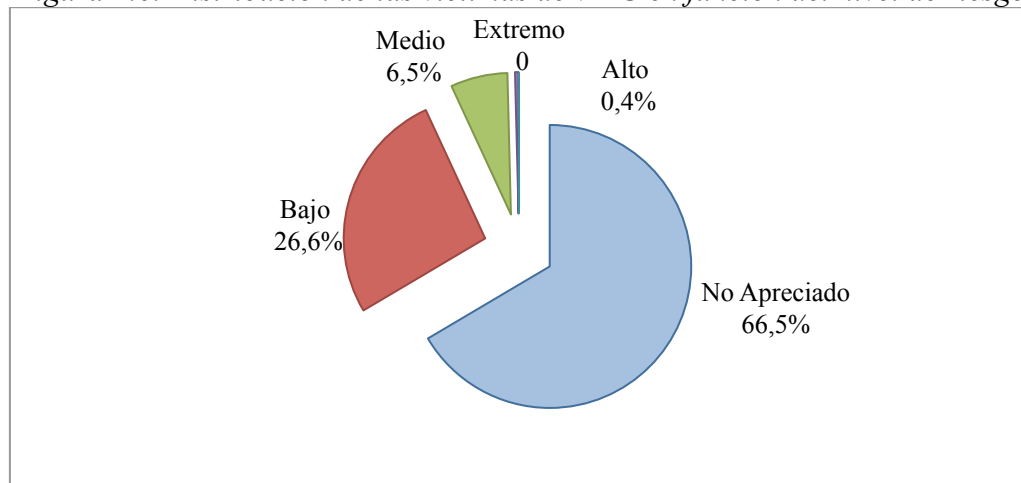
De las 538.063 denuncias presentadas desde 2007 a 2010, por su origen, 398.588 fueron interpuestas directamente por víctimas de VDG en juzgados o policía, 70.875 procedían de atestados policiales por intervención directa y servicios de asistencia y terceros en general, 60.627 derivaban de partes de lesiones, y 7.973 fueron interpuestas por familiares de la víctima.

*Figura 1.5. Procedencia de las denuncias*



III. **Mujeres víctimas de VDG con atención policial activa:** según los datos de la Delegación del Gobierno para la VDG, a 31 de diciembre de 2010, 95.601 mujeres víctimas de VDG estaban recibiendo atención policial por parte de las FCSE. En la figura 1.6 se ilustran los porcentajes de cada nivel de riesgo procedentes de la última valoración para ese conjunto muestral.

*Figura 1.6. Distribución de las víctimas de VDG en función del nivel de riesgo*



IV. **Asuntos judiciales sobre VDG:** a 31 de diciembre de 2010 habían en funcionamiento 461 Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, de los cuales 106 eran Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos y 355 Juzgados compatibles. Del mismo modo, durante el año 2010, y por lo que

respecta al territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, 7.764 mujeres fueron asesoradas por el sistema de asistencia jurídica gratuita.

- V. **Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de VDG:** en el año 2010, se atendieron 67.696 llamadas por VDG en el servicio de atención telefónico de información y asesoramiento jurídico (teléfono 016). Esta cifra implica un ligero descenso (1,2%) respecto de las llamadas atendidas en 2009 (68.542). La cifra de llamadas atendidas, referentes a VDG, desde el 3 de septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2010 fue de 226.904. Según datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno para la VDG, desde la puesta en marcha de este servicio, y por lo que se refiere a las personas que han realizado las llamadas al 016, la proporción de llamadas realizadas por usuarias respecto al total ha sido del 75,9%, mientras que la de familiares y personas allegadas fue del 21,4% y de las de profesionales del 2,7%.

### **1.3.2.- Prevalencia de la VDG en España**

La realización de estudios sobre la prevalencia y distribución de la VDG han sido muy beneficiosos para el conocimiento descriptivo de su realidad y han aportado información relevante sobre los factores de riesgo y las dinámicas propias de la VCP (Andrés-Pueyo, 2009). Según datos de las macroencuestas del maltrato contra la mujer, realizadas por encargo del Instituto de la Mujer durante los años 1999, 2002 y 2006, la prevalencia de la VDG ha ido disminuyendo. Mientras que en el año 1999 se situaba en torno al 12,4%, en los años 2002 y 2006 disminuyó hasta un 10,9% y un 9,6%, respectivamente. La última de ellas reveló que atendiendo a los indicadores técnicos del estudio, cerca de un millón ochocientas mil mujeres en España padecían maltrato, y casi el 75% de ellas a manos de su pareja. Estas son las estimaciones más recientes sobre el impacto de la VDG en España. Conviene recordar que mientras se está trabajando en esta Tesis Doctoral, el Instituto de la Mujer está preparando la elaboración de una nueva macroencuesta.

Entre las conclusiones más importantes que estas encuestas arrojan destacan, que, de las mujeres residentes en España mayores de 18 años, un 3,6% declaran haber sido víctimas de malos tratos durante el último año, y un 9% pueden ser consideradas técnicamente maltratadas por sus parejas.

Estos datos coinciden en parte con otras dos encuestas llevadas a cabo en el ámbito académico en el año 1999 (Medina-Ariza y Barberet, 2003) y en el año 2006 (Calvete, Corral y Estévez, 2007). Ambas encuestas son comparables al utilizar el mismo instrumento de evaluación: la *Conflict Tactics Scale Revisada* (CTS2) de Straus adaptada al español (Medina-Ariza y Barberet, 2005).

Otros datos de prevalencia de VDG obtenidos en estudios específicos, como el realizado por Fontanil, Ezama, Fernández, Gil, Herrero y Paz (2005), con una muestra de 421 mujeres encuestadas, siguiendo un muestreo estratificado de la población mayor de edad del Principado de Asturias según sexo y lugar de residencia, cifraron la prevalencia de la VCP en España en un 6,2% durante el último año. Dentro de este porcentaje, se encontró que el 5,5% convivía con la persona agresora y el 0,7% restante mantenía una relación de noviazgo.

Así mismo, Cano, Berrocoso, Arriba, Bernaldo de Quirós, Alamar y Cardo (2010), observaron dentro de las mujeres que acudían a centros de salud en el campo de la atención primaria, que un 30% había experimentado VDG a lo largo de la vida y un 17% en el último año. Finalmente, este estudio estima en un 20% las mujeres que consultan en los servicios sanitarios padeciendo esta situación de malos tratos.

### **Prevalencia por tipo de violencia en España**

Los estudios de Medina-Ariza y Barberet (2003) y Calvete y cols., (2007) analizaron la prevalencia por tipo de violencia. Los resultados se muestran en la tabla 3. El primer dato que llama la atención es la prevalencia de la violencia psicológica por encima de los demás tipos en ambos estudios. En la violencia psicológica no hay resultado de lesión física para la víctima, pero ésta puede tener severas consecuencias psicológicas, así como la pérdida del sentimiento de seguridad (Amor, Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 2002; Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2006; Arbach y Álvarez, 2009) El siguiente resultado que destaca, es la diferencia que existe entre los años (columna 3), sólo en la violencia psicológica podemos observar un crecimiento de un 28,48%.

*Tabla 1.2. Prevalencia de la violencia contra la mujer-pareja en España según los estudios de Medina-Ariza y Barberet (2003) y Calvete, Corral y Estévez (2007)*

Tipo de violencia	Medina-Ariza y Barberet (2003)	Calvete y cols. (2007)	Diferencia (%)
Psicológica	42,52	71	+28,48
Psicológica grave	15,21	23,6	+8,39
Física	8,05	16,2	+8,15
Física grave	4,89	6,6	+1,71
Sexual	11,48	29,4	+17,92
Sexual grave	4,7	2,8	-1,9
Lesiones	5,76	3,8	-1,96
Lesiones graves	2,23	1,6	-,063

Un análisis general de los datos de la tabla 1.2 descubre que la prevalencia ha aumentado de forma importante, y para este período temporal, en cinco modalidades. Éstas son las de violencia psicológica leve y grave, la violencia física leve y grave, y la violencia sexual leve (esta última de forma muy alarmante, un 17,92%). Por el contrario, la violencia sexual grave, las lesiones y las lesiones graves han disminuido durante el mismo periodo.

Estos datos concuerdan con los encontrados por otros autores, siendo el maltrato emocional más frecuente que el maltrato físico (Fontanil y cols., 2005). La envergadura de la violencia emocional hace que tenga igual o más fuerza que la violencia física a la hora de obstaculizar el desarrollo psicológico de las personas (Echeburúa, Corral y Amor, 2002). El maltrato emocional es también el más frecuentemente encontrado en mujeres diagnosticadas como víctimas de VCP en atención primaria (tabla 1.3; Cano y cols., 2010).

Con respecto a los tipos de violencia sexual grave, lesiones y lesiones graves nos encontramos con un descenso de la prevalencia. Este declive coincide con la dinámica de declive de la violencia grave (asesinatos y violencia física grave) que se detecta en países de nuestro entorno socio-cultural en los que se han tomado medidas explícitas y generales de lucha contra la violencia contra la mujer (Catalano, 2007).

*Tabla 1.3. Situación de abuso por alguna pareja, actual y/o pasada, detectados en atención primaria (Cano y cols., 2010).*

	Algún tipo de abuso	Abuso físico	Abuso emocional	Abuso sexual	Más de un tipo de abuso
Pareja actual	11,6%	3,9%	11,1%	1,9%	3,53%
Ex pareja	17,3%	8,0%	17,1%	6,2%	8,42%

### **1.3.3.- Comparativa Mundial**

A nivel mundial, España es uno de los países donde menos mujeres son asesinadas por sus parejas. (Echeburúa y cols., 2010). De acuerdo con los datos del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer, durante 2006 se registraron en España una media de 2,8 homicidios por cada millón de mujeres. Este dato sitúa a España en el puesto 36 de una lista de 44 países encabezada por El Salvador.

Estos datos se han contrastado con los aportados por el **III Informe Internacional de Violencia Contra la Mujer en las Relaciones de Pareja**, elaborado por el Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía (Sanmartín, Iborra, García y Martínez, 2010). La tabla 5 presenta de manera sintetizada datos de países sobre el número de feminicidios por millón de mujeres en el 2006, ofreciendo al lector un marco de contraste de las cifras españolas con el resto del Mundo.

*Tabla 1.4. Muertes por violencia violenta por millón de mujeres en el mundo.*

<b>País</b>	<b>Feminicidios</b>
<b>EUROPA</b>	19,4
Dinamarca	4,01
España	5,15
Italia	5,64
Portugal	9,52
Alemania	9,20
Chipre	10,24
Croacia	11,73
Lituania	51,32
<b>LATINOAMERICA</b>	
Bolivia	27,54
Honduras	34,17
Colombia	49,64
Guatemala	92,74
<b>OTROS PAÍSES</b>	
Canadá	9,84
Australia	8,05

Como se puede observar en la tabla 1.4, en España la tasa de feminicidios (por millón de mujeres), está por debajo de la mayoría de países analizados, no solamente latinoamericanos, sino que en el marco europeo, la media española se mantiene por debajo de países vecinos como Italia y Portugal.

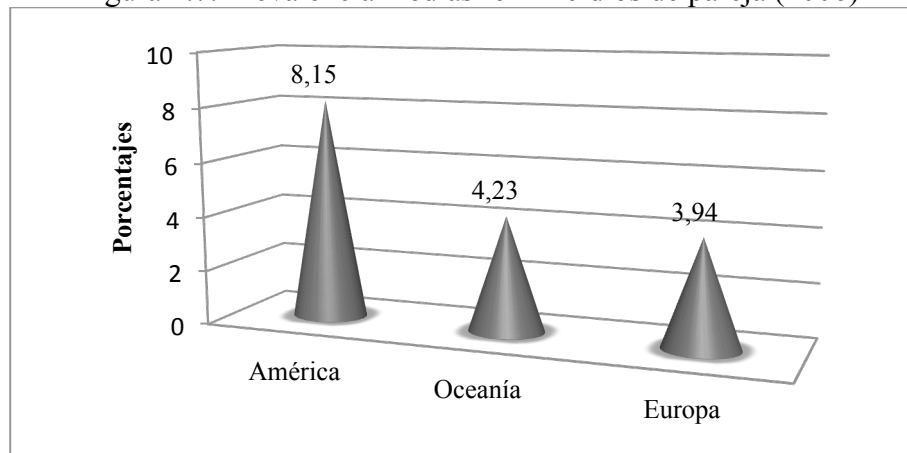
Ya que el objeto de esta investigación es la VDG, merece la pena focalizar los datos de feminicidio donde el objeto es o ha sido la pareja o la ex pareja. Siguiendo el mismo informe del centro Reina Sofía, esta práctica, como se observa en la figura 1.8, está más extendida en América que en el resto del Mundo<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Se recomienda al lector interesado en estadística y legislación en VCP internacional revisar el informe del Centro Reina Sofía (2010), ya que de manera exhaustiva trata estos temas dentro de cada país.



Figura 1.7. Prevalencia medias feminicidios de pareja (2006)



Tal como se observa en la figura anterior, la prevalencia media de feminicidios de pareja encuentra sus cifras más elevadas en el continente americano, con 8,15 mujeres asesinadas por cada millón de mujeres mayores de 14 años. En concreto, en Centroamérica y Suramérica la tasa se sitúa en 8,59 mujeres, y en Norteamérica en 6,63. Dentro de este continente, el país que presenta las mayores tasas de prevalencia ha sido Puerto Rico, con 14,10 feminicidios de pareja por millón de mujeres mayores de 14 años. Oceanía sigue a América con una tasa de 4,23 mujeres asesinadas por cada millón, y por último se sitúa Europa con 3,94 mujeres muertas por millón. En concreto, en la Unión Europea la prevalencia media es de 4,91 mujeres. España, con una prevalencia de 2,81 mujeres asesinadas por su pareja por cada millón de mujeres mayores de 14 años, se sitúa muy por debajo de la media europea, como podemos observar en la siguiente tabla (San Martín y cols., 2010).

*Tabla 1.5. Número de feminicidios de pareja por millón de mujeres mayores de 14 años en Europa (2006)*

PAÍSES	FEMINICIDIOS	PAÍSES	FEMINICIDIOS
Chipre	12,37	Eslovenia	3,39
Austria	9,40	<b>España</b>	<b>2,81</b>
Finlandia	9,35	Escocia	2,69
República Checa	8,15	Eslovaquia	2,56
Croacia	7,14	Holanda	1,62
Estonia	6,38	Irlanda	0,59
Hungría	5,95	Bulgaria	0,29
Francia	5,22	Mónaco	0,00
Luxemburgo	5,09	Malta	0,00
Inglaterra y Gales	4,20	Liechtenstein	0,00
Noruega	3,37	Islandia	0,00
Italia	3,66	Andorra	0,00

Como se desprende de la tabla 1.5 el país con más número de feminicidios de pareja es Chipre (12,37), seguido de Austria (9,40) y de Finlandia (9,35). España, con una prevalencia de 2,81 mujeres asesinadas por su pareja por cada millón de mujeres mayores de 14 años, se sitúa muy por debajo de la media (5,04).

Como conclusión general de este punto, y a tenor de estos estudios, se puede considerar que las magnitudes epidemiológicas de la VDG en España son inferiores a las de otros países de condiciones socioeconómicas y culturales análogas (Medina-Ariza y Barberet, 2003).

En definitiva, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un problema individual, recluido en el ámbito de la esfera interna de la familia o de la persona. En la actualidad es considerado un auténtico problema social, en la medida en que supone una violación de los derechos y libertades de la persona y, en consecuencia, una vulneración de los Derechos Humanos. En estos términos, las instituciones públicas, las Organizaciones Internacionales y toda la sociedad civil tienen la responsabilidad de responder actuando dentro del ámbito de las funciones que cada una de ellas tiene en la sociedad. La estadística descrita en este capítulo, refleja un cambio de mentalidad, o mejor dicho la mujer está más concienciada de la eficacia del primer paso que es la denuncia, para posteriormente conseguir el resto de medidas de protección. Sin embargo, la invisibilidad de la violencia es un dato aún preocupante, por lo que es menester emprender y fortalecer programas encaminados a disminuir este porcentaje.

## CAPÍTULO 2

### MEDIDAS DESARROLLADAS PARA HACER FRETE AL PROBLEMA DE LA VDG

#### 2.1.- INTRODUCCIÓN

El problema de la VDG no se puede enfocar desde una única perspectiva o disciplina, sus determinantes son múltiples y complejos, y, por tanto, requiere un abordaje multidisciplinario. La actuación de las administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como medios para prevenir y erradicar los episodios de violencia y los servicios sociales, entre otros, deben trabajar al unísono para proteger a las víctimas en la lucha contra este fenómeno.

Como se ha indicado en las gráficas de prevalencia e incidencia del capítulo anterior, la VDG puede decirse que ha llegado a constituirse en algo cotidiano, con altos índices de frecuencia y de habitualidad. Para dar respuesta a este fenómeno, la sociedad española ha tenido que ir avanzando de forma paralela en tres frentes principales:

- **Reformas legales**, que han ido evolucionando y experimentando grandes cambios tendentes a elevar los niveles de protección jurídica, a través de una legislación reforzada y de la creación de una estructura judicial acorde con la problemática.
- **Fuerzas policiales**. Desde el Ministerio del Interior y a través de las FCS, se ha incidido con particular firmeza en ofrecer una respuesta eficaz, resuelta y contundente a este fenómeno, que se erige como uno de los problemas de seguridad para un amplio sector de población en nuestro país (Ministerio del Interior, 2010).
- **Incremento significativo de la crítica social**, lo que se ha traducido en un aumento de la sensibilidad de la ciudadanía respecto a esta temática. Acorde con ello, la L.O. 1/ 2004 ha ido desarrollando reformas en diferentes campos, destacando, entre otras, las reformas publicitarias y los cambios introducidos en el sistema de enseñanza. Según datos ofrecidos en el último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2011), el 2,8% de las personas encuestadas (7.987) señalaron que la violencia contra la mujer es uno de los tres

principales problemas de España y el 0,8% (2.236) indicaron que era uno de sus tres principales problemas personales.

En los apartados siguientes estudiaremos algunas de las medidas que se han ido desarrollando en los últimos años, para dar respuesta a este problema social.

## **2.2.- NORMAS ESPECÍFICAS**

Actualmente la normativa en materia de VDG, aparece regulada en numerosos textos legales procedentes de distintas entidades, organizaciones y/o ámbitos institucionales. Desde regulación normativa de Naciones Unidas, hasta regulación municipal, podemos apreciar una evolución sistemática que ha ido permitiendo no sólo animar a una víctima de VDG a que denuncie el hecho, sino a ser inmediatamente protegida, informada y auxiliada.

En el presente capítulo no se pretende realizar un análisis exhaustivo de los antecedentes de la normativa existente. Debido a la extensión que supondría abordar toda esta legislación, y al no ser objeto directo de esta Tesis Doctoral, se incluyen exclusivamente, las referencias más destacables que faciliten la comprensión del contexto jurídico en el que se enmarca la VDG.

### **2.2.1.- Antecedentes en el ámbito internacional y europeo**

A nivel internacional la respuesta frente a la violencia sobre la mujer comienza a tener relevancia a partir de cuatro conferencias mundiales en esta área celebradas bajo los auspicios de Naciones Unidas. El lema inicial de estas reuniones fue “igualdad, desarrollo y paz” y se desarrollaron en diferentes sedes: la primera, en Méjico (1975); la segunda en Copenhague (1980); la tercera, en Nairobi (1985) y la cuarta, en Pekín (1995). En estas conferencias, y en las declaraciones y programas de acción a que dieron lugar, se aprecia que, si bien en principio los esfuerzos se dirigían a la consecución de igualdad ante la ley de la mujer, con posterioridad, los objetivos se centraron en la remoción de los obstáculos, en todos los órdenes, que impidiesen a la mujer alcanzar la igualdad con respecto al hombre.

Con la firma de estos instrumentos, los Estados signatarios<sup>1</sup> se comprometieron a la adopción de las medidas que se indicaban en cada uno de ellos. El objetivo final era

---

<sup>1</sup> En la última conferencia celebrada en Beijing, fueron 189 los Estados firmantes. Más información en: [www.acnur.org](http://www.acnur.org)

la erradicación de esta forma de discriminación sobre la mujer, incluyendo, de manera efectiva una dimensión de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de decisiones.

En 1998, la **Organización Mundial de la Salud** declaró la violencia doméstica (en adelante VD) una forma de violencia en la que las mujeres suelen ser las víctimas mayoritarias) como una prioridad internacional para los servicios de salud, iniciando el camino que, junto a la gravedad del problema para la salud, el bienestar y los derechos de las mujeres y su impacto económico y social, ha conducido a su progresiva incorporación como tema de agenda de las instituciones políticas (Vives-Cases, Torrubiano-Dominguez y Álvarez-Dardet, 2008).

A nivel europeo, la lucha contra este fenómeno se ha convertido en una prioridad absoluta. Uno de los objetivos de Europa, es adoptar puntos de vista comunes entre los países miembros, y para ello ha ido aprobando de manera considerable resoluciones y programas para hacer frente a esta violencia. Así se aprobó una campaña de “tolerancia cero” frente a la violencia sobre las mujeres que quedó plasmada en distintas Resoluciones de la Unión Europea. En particular, destaca la **Resolución 94/ 45**, de 4 de marzo de 1994, en la que se decidió nombrar un Relator Especial<sup>2</sup> sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; **La resolución 58/ 185**, de 22 de diciembre de 2003, titulada “estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer” y finalmente, la **Resolución 58/ 147**, de 22 de diciembre de 2003, titulada “eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar”. Esta última Resolución determinó, que la violencia doméstica ocurre dentro de la esfera de lo privado, generalmente entre un individuo que mantiene una estrecha relación afectiva o con lazos de sangre entre ellos, y que es una de las formas más visibles de violencia cuyas consecuencias se traducen en riesgos para la seguridad, salud y bienestar. Por esto es por lo que los Estados miembros se comprometen a adoptar medidas de tipo penal y de tipo legal para proteger a las víctimas contra la violencia. Así mismo el artículo 2 del

---

<sup>2</sup> El título de Relator Especial es un título otorgado a las personas que trabajan en representación de las Naciones Unidas y que cumplen con el mandato de investigar, supervisar y sugerir soluciones para los problemas de derechos humanos en países y territorios determinados (mandatos por país), o violaciones específicas a los derechos humanos en todo el mundo (mandatos temáticos). Más información [www.ediec.org](http://www.ediec.org)

tratado de la Unión Europea (1992) quedó establecido que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental.

En la misma línea de actuación, en el ámbito del Consejo de Europa, se dictó la **Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa** (2002), sobre la protección de las mujeres contra la violencia, adoptada el 30 de abril de 2002, que incluye un conjunto de recomendaciones frente a la violencia sobre la mujer y una definición de la misma de forma omnicomprendensiva de sus distintas manifestaciones

Del mismo modo, a nivel europeo, surgió el denominado **Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres** (2006-2010), con el objetivo de erradicar las diferencias existentes entre ambos sexos. Pero será a través del **Programa de Estocolmo** en Diciembre de 2009, aprobado durante la presidencia Sueca, donde se plasman cinco líneas de actuación en materias concretas, siendo la violencia contra las mujeres y niños una de las áreas más importantes.

También el **Consejo Económico y Social Europeo** elaboró en julio de 2005 un **Dictamen** sobre la “violencia doméstica contra las mujeres”, que aprobó en marzo de 2006, y que pretendía establecer los principios que originaran una normativa unificada en la Unión Europea sobre política criminal respecto a la violencia sobre la mujer.

Por su parte, el **Consejo de Ministros Europeo** reconoció en 2006 que la mayoría de los actos de violencia contra la pareja (en adelante VCP) eran cometidos por hombres y alertaron a los Estados miembros y a la Comisión Europea para combinar medidas preventivas con medidas punitivas y que se establecieran programas específicos para las víctimas y para los agresores (Ministerio del Interior, 2010).

Especial mención merecen los programas *Daphne*<sup>3</sup>. El vigente a la hora de escribir esta Tesis, es el *Daphne III*, un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre niños, jóvenes y mujeres, y proteger a las víctimas y grupos de riesgo. Está integrado en el programa general “*Derechos fundamentales y Justicia*” (2007-2013), y sustituye a los programas *Daphne I* (2000-2003) y *Daphne II* (2004-2008). El objetivo del *Daphne III* es el de contribuir a proteger a los niños, jóvenes y mujeres de todas las formas de violencia y alcanzar un elevado nivel de protección de la salud, bienestar y cohesión social (Segura, 2010).

---

<sup>3</sup>Más información disponible en:

[http://ec.europa.eu/justice\\_home/funding/daphne3/funding\\_daphne3\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm)

Las autoridades de gran parte de los Estados miembros han lanzado importantes programas con el objetivo de combatir la VDG, adaptando leyes, introduciendo programas de prevención, rehabilitación y reeducación, y estableciendo medidas policiales y sociales para proteger a las mujeres que son víctimas de esta violencia. Por ejemplo, tras la entrada en vigor de la Ley para la protección frente a la violencia en 2001, los juzgados de familia de Alemania han dictado hasta 5.563 medidas de protección jurídico-civil en casos de violencia y persecución, y 2.848 medidas de cesión del domicilio común. En Austria, en aplicación de la Ley de protección contra la violencia en el seno de la familia, la policía ha expulsado del hogar familiar hasta 8.123 agresores entre 2002 y 2003. En Rumanía, la Ley para prevenir y luchar contra la violencia doméstica (2003) arbitra medidas de intervención estatal en los casos de violencia doméstica, con independencia de los deseos o peticiones de las víctimas. En este sentido, su artículo 13 establece que los trabajadores sociales que identifiquen casos de violencia doméstica tienen que realizar un seguimiento de las familias en cuestión, manteniendo el contacto con las personas implicadas (Sanmartín y cols., 2010).

### **2.2.2.- Antecedentes en España**

Antes de la Ley Orgánica 3/ 1989, de actualización del Código Penal, de 21 de junio, que introdujo por primera vez el delito de violencia doméstica, la regulación del Código Penal hacía caso omiso a este problema. Hasta el año 1983 era objeto de sanción el uxoricidio (u homicidio de la mujer) que castigaba meramente con el destierro al hombre que matase a su esposa sorprendida en acto de adulterio, quedando exentas las lesiones causadas en igual ocasión (Fernández y Pérez, 2010). Con la Ley Orgánica 3/ 1989 se introdujo el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar (conocido desde entonces como violencia doméstica), que castigaba por igual al hombre o la mujer que habitualmente y con cualquier fin ejerciese violencia física sobre el cónyuge o persona unida a él por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos sujetos a la patria potestad, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda. El castigo, con esta Ley, se reducía a la violencia física y para considerarlo se requerían al menos tres actos de violencia. A partir de este momento, se inicia el camino de la expansión en tres direcciones: la ampliación y diversificación de las conductas castigadas, la ampliación del círculo de sujetos pasivos del delito y la agravación de las penas.

- La **Ley Orgánica 11/ 1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal**, creó para el delito de maltrato habitual, entre otros, la pena de alejamiento (la prohibición de aproximación, residencia y comunicación), posibilitando su aplicación también a las faltas así como medida cautelar.
- Con la **Ley Orgánica 14/ 1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, se introdujo la violencia psíquica junto a la física, se amplió el nuevo círculo de sujetos incluyendo relaciones matrimoniales o de hecho que hubieran existido en el pasado (es decir, ex cónyuges, y análogos) y a los hijos. Y finalmente, para apreciar el concepto de habitualidad se especificó atender al número de actos de violencia que resultasen acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se hubiera ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en el artículo 153 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)<sup>4</sup>.
- La **Ley 38/ 2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado**, introdujo los denominados “juicios rápidos” por delitos y los juicios inmediatos de faltas, para la persecución de los delitos y faltas de violencia doméstica entre otros. Con esta ley se aceleran dichos procedimientos. En rasgos generales, la tramitación debía finalizarse en el periodo de duración de la guardia de un juzgado (normalmente, de una semana, salvo en las grandes ciudades). Así, los hechos constitutivos de falta son enjuiciados y sentenciados en dicho plazo ante el órgano instructor. Igualmente, si los hechos son constitutivos de delito, todas las pruebas necesarias

---

<sup>4</sup> Art. 153. C.P. :”El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica”.



deberán recabarse por el juzgado de Instrucción en el mismo plazo, y tras ello, ante el mismo órgano y en la propia guardia (incluso en el mismo día de presentación de la denuncia en el juzgado por las fuerzas de seguridad), el sujeto puede ser sancionado por sentencia, si se conforma con la pena solicitada para él por el Ministerio Fiscal y/o la acusación. En caso de no conformarse, el juicio ante el juzgado de lo penal debe celebrarse en el plazo máximo de dos semanas.

- En el año 2003 se abre un periodo de importantes reformas legislativas en materia de violencia doméstica y de género. La **Ley 27/ 2003, de 27 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica**, creó la *orden de protección*, consistente en que, en el plazo máximo de 72 horas tras su solicitud, el juez penal, tras oír en una comparecencia a ambas partes, puede imponer la medida de alejamiento y, en dicho caso, debe proceder en la misma resolución (la orden de protección) a la regulación de los aspectos civiles de la relación de pareja afectada por la medida, esto es, la atribución del uso de la vivienda habitual; el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos; el régimen de prestación de alimentos, así como puede adoptar cualquier disposición que considere oportuna a fin de apartar a los menores de un peligro o de evitarles perjuicios (Fernández y Pérez, 2010). Esta Ley marca (en el ámbito procesal) el inicio de un proceso de cambios legislativos dirigidos a otorgar una protección integral a la víctima de malos tratos. En efecto, la Ley 27/ 2003, constituyó el antecedente más inmediato de la Ley Orgánica 1/ 2004, puesto que contempló no sólo los aspectos penales o sancionadores que merecía la violencia familiar, sino que, comprendiendo la distinta naturaleza de las dificultades que tiene la mujer que pretende romper con el maltratador, le concedió un estatuto integral de protección.
- La **Ley Orgánica 11/ 2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros**, introdujo una de las reformas más significativas. El artículo 153 del Código Penal elevó a la categoría de delito las faltas de maltrato de obra sin lesión, es decir, las lesiones no

constitutivas de delito<sup>5</sup>, y la de amenaza leve con armas, siempre en relación, no con la mujer meramente, sino con cualquiera de los familiares o personas del artículo 173.2 del Código Penal. Con esta ley, por tanto, puede hablarse de un delito de maltrato habitual y de un delito de maltrato ocasional (consistente en un única agresión, con o sin lesión) para el que ya cabría entonces un enjuiciamiento inmediato y su castigo con pena más grave que el previsto hasta entonces para la falta: prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Por otro lado, el delito de maltrato habitual pasó a ser regulado entre los delitos contra la integridad moral, y se ampliaron las personas protegidas como posibles víctimas de violencia doméstica.

Esta Ley no estuvo exenta de polémica y dio lugar a que numerosos jueces plantearan ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de los artículos 153 y 173.2 del Código Penal, en relación a la exigencia de convivencia aplicable a los sujetos que mantenían o habían mantenido una relación sentimental conyugal o análoga, o sí también afectaba a “los descendientes, ascendientes, hermanos por naturaleza, adopción o afinidad”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional resolvió dicha controversia, por Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2007 (RJ 2007, 1545) y por la consulta de la Fiscalía General del Estado 1/ 2008, en la que se estableció que el legislador obligaba a entender que en el supuesto específico de los parientes a los que hacía alusión el artículo, sí se exigía convivencia para que resultara de aplicación el citado artículo 173.2 y en consecuencia el artículo 153 del Código Penal.

- **La Ley Orgánica 13/ 2003 de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional**, reformó la prisión preventiva y permitió que fuese impuesta en los delitos de violencia doméstica, sin exigir en tales casos que el delito alcanzase el límite general de pena establecido para la prisión preventiva en los restantes delitos, de dos años, sino bastando con que estuviese castigado

---

<sup>5</sup> Una lesión es constitutiva de delito cuando requiere objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Si no precisa tratamiento, sino una mera asistencia o ni siquiera ésta, la agresión es constitutiva de falta.

con pena privativa de libertad de tres meses. Asimismo la Ley estableció, para el caso de que el inculcado hubiese incumplido una medida de alejamiento impuesta, la obligación del Juez de convocar a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia para resolver sobre la imposición inmediata de la medida de prisión o una mayor limitación de la libertad personal.

- La **Ley Orgánica 15/ 2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal**, impuso con carácter obligatorio la pena de alejamiento para los delitos de violencia doméstica (art. 57.2). Esta reforma estableció que a la víctima se le debía imponer siempre la pena de prohibición de aproximación (art. 48.2 del Código Penal<sup>6</sup>), aun cuando pudiera resultar absolutamente desproporcionado, innecesario o incluso cuando la propia víctima manifestara su oposición a la imposición de dicha pena. En este sentido debe tenerse en cuenta que este artículo del Código Penal, se mantiene vigente mientras se está escribiendo esta Tesis Doctoral, conservando la plena redacción dada por la L.O. 15/ 2003.
- En el año 2004, se dicta el **Real Decreto 355/ 2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica**, éste creó el Registro Central para las víctimas de violencia doméstica (después desarrollado y modificado por los Reales Decretos 513/ 2005, de 9 de mayo y 660/ 2007, de 25 de mayo, hasta su derogación por el Real Decreto 95/ 2009, de 6 de febrero, que lo integra en el **Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia**). Este Registro publicaba, los

---

<sup>6</sup> El artículo 48 del Código Penal dice:

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan

procedimientos de violencia doméstica habidos y las resoluciones que en ellos se habían dictado. La habilitación en los juzgados de los programas informáticos precisos para la consulta de este registro permitió que, con carácter inmediato, en el mismo momento de la entrada de la víctima en el órgano judicial, el Juez conociera su situación y pudiera promover lo antes posible su protección.

- En este contexto nacional, se aprueba la **Ley Orgánica 1/ 2004, de Medidas de Protección Integral contra la VDG**, de 28 de diciembre, que merece una atención especial en esta investigación. Por medio de esta Ley Orgánica se regulan de manera conjunta distintos mecanismos en la lucha contra este fenómeno. Anteriormente el Código Penal otorgaba el mismo tratamiento a toda lesión, con independencia de la existencia de relación de parentesco entre autor y víctima, o la sancionaba en el ámbito de la violencia doméstica. No existía un tratamiento sistemático y diferenciado de la violencia que, partiendo del hombre, recayese sobre la mujer, al margen de la violencia familiar (Fernández y Pérez, 2010). Desde este punto de vista, la Ley es novedosa, porque no se limita a la regulación de la sanción penal que la misma merece, sino que incide en muchas disciplinas, bien para prevenirla (reformas en el sistema educativo, publicitario y sanitario), bien para posibilitar que la mujer que sufre una situación de este tipo, se le puedan otorgar una serie de derechos laborales, económicos y de otra índole. Con esta Ley también se convierten en delito algunas de las faltas de amenazas y coacciones, y se modifica el delito de quebrantamiento de la condena.

Desde que se aprobó esta L.O. se han puesto en marcha todas las medidas institucionales previstas, entre las que destacan por su importancia las siguientes: creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer, la creación de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la mujer y las Fiscalías Especiales. Se han aumentado los recursos del Estado para combatir la VDG y se han creado nuevos derechos sociales y económicos para las mujeres, que garantizan

asistencia social integral, empleo y recursos económicos en caso de necesidad.

Del mismo modo, esta Ley hace especial hincapié en la necesidad de coordinación de todos los órganos encargados de la prevención, asistencia y persecución de los actos de VDG, para lo cual impone a los poderes públicos la obligación de elaborar planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones debiendo implicar a las Administraciones Sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, los Servicios Sociales y Organismos de Igualdad. En desarrollo de dichos planes, prevé la instauración de protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren la actuación global de las distintas administraciones y servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que sigan.

El articulado de la citada Ley, finaliza con 20 disposiciones adicionales, donde se contemplan las reformas legales necesarias para hacer efectivos sus mandatos. De este modo, se reforma la Ley del Derecho a la Educación, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la Ley General de Publicidad, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley del Estatuto de Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil, la Ley del Registro Civil, etc.

- El 22 de marzo de 2007 se aprobó la **Ley Orgánica 3/ 2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres**, introduciendo como mayor novedad la prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad.
- Seguidamente, el 9 de enero de 2009 se aprobó en el Consejo de Ministros, **la nueva reforma de la Ley de Extranjería** (L.O. 2/ 2009, de 11 de diciembre), que consiste en que a las mujeres extranjeras víctimas de VDG con la orden de protección en vigor se les puede conceder la residencia temporal por razones extraordinarias; mientras que hasta ahora necesitaban la orden de protección en vigor junto con sentencia firme.

- Finalmente, y en relación al Real Decreto anteriormente mencionado (Real Decreto 355/ 2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica) quedó derogado con la publicación en febrero del 2009 del **Real Decreto 95/ 2009, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia**. Mediante este sistema quedaban automáticamente integrados el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles y el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Constituye un sistema de información de carácter no público cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia de seguridad pública, y de otros órganos administrativos, en el ámbito de las competencias delimitadas en el presente Real Decreto.

### **2.3.- MEDIDAS POLICIALES**

Teniendo en cuenta que la VDG constituye un verdadero y muy grave ataque a derechos tan fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación, compete a las FCS evitar toda violencia que perjudique el ejercicio y desarrollo de tales derechos, a la vez que la investigación de aquellos actos que hayan atentado contra los mismos.

La actuación de las FCSE en el área de la VDG queda recogida en el artículo **104.1 de la Constitución Española** de 1978 cuando se les encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, siendo ésta, por otra parte, competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.29ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en base a lo que establezcan sus Estatutos o una Ley Orgánica.

Del mismo modo, en cumplimiento del artículo 104.2 de la Constitución, la **Ley Orgánica 2/ 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** determina como propios cometidos la lucha contra todo tipo de violencia que impida o menoscabe el libre ejercicio de los derechos y libertades que consagra el texto constitucional.

Con la promulgación de la **Ley Orgánica 1/ 2004, de Medidas de protección integral contra la VDG** se introducen una serie de reformas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se prevé, entre otras, la creación de unidades especializadas en la prevención de la VDG y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. Con respecto a la Policía Local y Policías Autonómicas (en aquellas Comunidades Autónomas que dispongan de ellas), la Ley establece que, a través de los convenios de colaboración, se establecerán las funciones en materia de VDG en el marco de colaboración existente con las FCSE. Más adelante se detallarán las funciones y cometidos de manera más concreta.

A raíz de la Ley Orgánica 1/ 2004, el Gobierno aprobó un conjunto de medidas urgentes con el objetivo de reforzar medidas que ya estaban en marcha. Así se aprobaron dos disposiciones gubernamentales “el **Catálogo de Medidas Urgentes Contra la Violencia de Género**” (acordado en el Consejo de Ministros del 15 de Diciembre del 2006) y “**El Protocolo de Actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para dar protección de la Violencia Doméstica y de Género**” (aprobado el 10 de junio de 2004). Siguiendo la primera de las disposiciones, como medidas urgentes destaca la elaboración y puesta en funcionamiento de un protocolo común de valoración del riesgo para FCSE y policías autonómicas. Así el 23 de julio de 2007 entró en vigor la instrucción 10/ 2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad (en adelante SES) por la que se aprobó el **Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo en Violencia Contra la Mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/ 2004, y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal**. Esta instrucción ha sido modificada en dos ocasiones (Instrucción 14/ 2007 e Instrucción 5/ 2008), con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en el proceso de revisión de las valoraciones de riesgo y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal.

El objetivo subyacente a este protocolo, es poder garantizar protección y seguridad a las víctimas, y estimar con un cierto nivel de probabilidad, el nivel de riesgo de violencia que sufre una víctima de VDG en un momento determinado. Para ello, y

como consecuencia del resultado de dicha valoración, se asignan una serie de medidas policiales de protección y seguridad. Desde el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (en adelante GESI) de la SES, junto con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se propuso el estudio y análisis de los protocolos de valoración del riesgo más representativos en el mundo y de modo paralelo, se empezó a construir tanto la plataforma como los formularios españoles que quedarán desarrollados y explicitados en el capítulo 4 de esta Tesis Doctoral.

Por parte de las FCSE, en cumplimiento de la normativa internacional y nacional, también a nivel interno, se han ido dictando distintas circulares e instrucciones, referidas de manera específica, a la asistencia policial de las mujeres que han sido objeto de malos tratos y de víctimas de VDG.

Teniendo presente el modelo policial existente en España, donde conviven diferentes cuerpos policiales, son FCSE (Ley Orgánica 2/ 1986, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) los siguientes:

- a) Las FCSE dependientes del Gobierno de la nación.
- b) Los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
- c) Los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales.

Estos cuerpos de seguridad, comparten unas disposiciones estatutarias comunes, así como un conjunto de funciones similares. Dentro de éstas, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar las funciones comunes a ambos cuerpos en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. El resto de territorio nacional y el mar territorial, es competencia de la Guardia Civil. Además de las misiones comunes, cada cuerpo tiene un conjunto de competencias exclusivas que vienen recogidas en la Ley Orgánica. Seguidamente se van a señalar brevemente las principales respuestas orgánicas y funcionales que estos han ido creando como respuesta al fenómeno de la VDG.

### **2.3.1.- Guardia Civil**

En 1995, en la especialidad de Policía Judicial, se crearon los primeros Equipos de Mujeres y Menores (EMUMES), concebidos para tener como objetivo principal mejorar la atención a las mujeres y a los menores víctimas de determinados tipos de delitos,



asegurándoles una asistencia integral, personalizada y especializada. Estas unidades actúan para que, desde el momento en que se tenga conocimiento de los hechos, y especialmente, cuando las víctimas presenten denuncias, lleguen a la investigación criminal de los hechos más graves y deriven a las víctimas hacia las instituciones específicas de protección, públicas y/o privadas.

Aparte de la VDG, el ámbito de actuación de los EMUMES, también comprende:

- La violencia en el entorno familiar, en todas sus formas (desde los malos tratos psicológicos hasta las lesiones y los homicidios) y con independencia del sexo, edad o parentesco de autores y víctimas.
- Los delitos contra la libertad sexual, como las agresiones y los abusos sexuales, fuera y dentro del ámbito familiar.
- Los delitos relacionados con la delincuencia juvenil.
- Los actos delictivos relacionados con el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, y la pornografía infantil por Internet.

En cuanto a organización, existe un EMUME central, localizado en la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) en Madrid, que se encarga de coordinar al resto de los EMUMES repartidos por todas las Comandancias de la Guardia Civil de España (54: una por provincia, excepto en Asturias y Cádiz, donde hay dos por cuestiones territoriales). El EMUME de Comandancia se encuadra orgánicamente dentro de las distintas Secciones de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJs) y tiene encomendada las actividades propias del funcionamiento de la Unidad a la que pertenece, y además, con carácter preferente pero no exclusivo, cinco tipos de misiones específicas en el área de mujer-menor:

**I. Asesorar** por vía telefónica a las Unidades Territoriales del Cuerpo (Puestos) a iniciativa propia o respondiendo consultas, sobre la problemática que sufre la mujer y el menor. Mantener informados al resto de los componentes del cuerpo de su demarcación de los procedimientos a seguir y de los recursos asistenciales disponibles en las distintas localidades de la provincia.

**II.** Cuando se produzca un **caso relevante**, hacerse cargo de todos los aspectos relativos a la **investigación criminal**, siguiendo el caso hasta su completo

esclarecimiento, realizando todas las gestiones y diligencias necesarias, y asistiendo personalmente a las víctimas.

**III.** Propiciar y **mantener contacto** tanto con instituciones de todos los niveles (administración central, autonómica y local) como con asociaciones relacionadas con este ámbito de actuación, al objeto de favorecer actuaciones de carácter preventivo y asistencial. Así mismo, participar y colaborar en la organización de reuniones de grupos de trabajo, jornadas o seminarios, como asistente y como ponente. Uno de los principales objetivos de esta tarea consiste en mantenerse al día de las novedades normativas y procedimentales en la materia, que provienen de la elaboración de protocolos de actuación suscritos por autoridades locales o autonómicas, adaptados a las peculiaridades poblacionales de cada región.

**IV.** Mantener **contacto permanente con el coordinador de violencia de género** de la Subdelegación de Gobierno de la provincia, con el objeto de informar sobre la evolución de este tipo delictivo, así como la colaboración en la confección y participación de los diferentes protocolos de colaboración con distintos organismos y entidades.

**V.** **Asesorar y cooperar** en todo lo solicitado por las autoridades judiciales, especialmente con los **juzgados de violencia de género** y demás juzgados relacionados así como con la fiscalía de menores.

El esfuerzo que se viene desarrollando, tanto en el campo de la prevención como en el de la protección de la víctima y control del agresor está siendo muy significativo. En la tabla 2.1 se puede apreciar a modo de ejemplo los servicios prestados en materia de VDG durante el año 2009 (datos proporcionados por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil).

*Tabla 2.1. Servicios prestados en VDG por cometidos (2009)*

<b>Cometido</b>	<b>2009</b>
Contra vigilancias de víctimas de violencia de género	4.615
Control esporádico de itinerarios de víctimas de violencia de género	298
Protección lejana de víctimas de violencia de género	2.245
Protección próxima de víctimas de violencia de género	1.484
Vigilancia esporádica de víctimas de violencia de género	4.146
Protección dinámica o escolta de víctimas de violencia de género	19
Seguridad inmediata (escalón próximo) para la protección de víctima de violencia de género	84
Vigilancia permanente de víctimas de violencia de género	400
Control de acceso de personas para la protección de víctimas de violencia de género	375
Seguridad inmediata (escalón inmediato) para la protección de víctima de violencia de género	18
<b>Total Servicios</b>	<b>37.305</b>

Las normas de actuación de las unidades del cuerpo de la Guardia Civil en materia de violencia doméstica y VDG se desarrollan en el **Manual de Policía Judicial**<sup>7</sup> y más detalladamente en una **Norma Técnica de funcionamiento** que desarrolla dicho Manual (Norma Técnica de la Guardia Civil 1/ 2008), donde se mantienen actualizados todos los procedimientos ante los cambios legislativos que se producen en esta materia. A partir de esta Norma Técnica y para facilitar la actuación de las unidades en el control y seguimiento de las víctimas (con o sin orden de protección) bajo su responsabilidad, se dictó el procedimiento SIGO<sup>8</sup> n° 5.423, relativo al control o seguimiento de las víctimas de VDG, permitiendo vincular directamente todos los eventos<sup>9</sup> y novedades a cada hecho ya grabado como VDG.

---

<sup>7</sup> El vigente a la hora de escribir estas páginas es la actualización de junio de 2011.

<sup>8</sup> SIGO: Sistema integrado de Gestión Operativa, creado en el año 2006. Constituye una herramienta de trabajo informatizada y estructurada en varios módulos donde se almacena toda la información operativa y de gestión interna de las diferentes unidades que integran la Guardia Civil. Dentro del ámbito de la violencia doméstica, constituye un sistema necesario para un control eficaz y seguimiento de las víctimas dentro de la demarcación.

<sup>9</sup> Un “evento” es una entidad a la que se asocian hechos en función de su origen, secuencia táctica, por decisión del mando u otros motivos que se determinen, todo ello con la finalidad de poder ser consultados y obtener información de interés de forma más sencilla que puede ser muy necesaria para el ejercicio del mando.

### **2.3.2.- Cuerpo Nacional de Policía**

La actuación directa en los casos de VDG la realizan unidades especializadas. En 1986 se creó en Barcelona el primer **Servicio de Atención a la Mujer**, (denominado SAM), cuyo ámbito de actuación era atender a las mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, así como agresiones sexuales. Posteriormente se desplegaron nuevos SAM por otras provincias y se crearon los **Grupos de Menores** (GRUMES) orientados a tratar con menores víctimas e infractores de diferentes delitos. En el año 2007, se aglutinaron ambos servicios y nacieron los SAF (Servicio de Atención a la Familia). Los agentes policiales aquí destinados están especializados en materia de VDG y dependen de Policía Judicial. Donde no existe SAF las funciones las realizan funcionarios de los grupos locales de investigación o de las Comisarías de distrito. Al igual que con los EMUMES existe un SAF Central, localizado en la Comisaría General de Policía Judicial, incardinada en la Secretaría General que realiza las siguientes funciones (Alvarado, 2008):

- I. Asesoramiento, apoyo, coordinación y centralización de los SAF provinciales y locales, del ámbito nacional, así como todos aquellos grupos de Policía Judicial con funciones en esta materia.
- II. Elaboración de las estadísticas relacionadas con violencia familiar y menores (infractores/víctimas).
- III. Control y seguimiento de los casos de violencia familiar y menores.
- IV. Valoración de la necesidad de creación de nuevos SAF, en determinadas plantillas y propuestas de creación.
- V. Formación y conferencias en el ámbito del CNP y otros organismos o instituciones a nivel nacional o internacional.
- VI. Respuestas a instituciones u organismos no policiales.
- VII. Participación en grupos de trabajo.

Ante cualquier hecho de VDG, será el SAF el que recoja la denuncia o instruya diligencias, aunque si en la dependencia policial correspondiente no existiera SAF, se encargaría la oficina de denuncias de atención al ciudadano (ODA).

Finalmente, el CNP cuenta con los **Servicios de Atención al Ciudadano Extranjero** (SACE), y con Unidades que se encargan de la **Prevención, Asistencia y**

**Protección contra los malos tratos a la mujer** (UPAP). En este sentido, las UPAP deben llevar a cabo el análisis, control y evaluación, tanto respecto de las víctimas como de los agresores, de todas las órdenes de protección o medidas interpuestas por la autoridad judicial (Jiménez, 2010). Las UPAP se crearon en 2003, y se encuentran integradas dentro de la **Unidad Central de Participación Ciudadana y Programas dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana**. Entre los cometidos esenciales que desarrollan los policías integrantes de las UPAP destacan los siguientes:

- I. Mantener contacto permanente con las mujeres que les han sido asignadas.
- II. Detectar las posibles situaciones de riesgo para la mujer protegida, realizando un seguimiento de la evolución de esa situación y transmitiendo a las unidades operativas la información necesaria que permita la mayor eficacia en la actividad preventiva a realizar.
- III. Asesorar y acompañar a la víctima con ocasión de la tramitación de procedimientos policiales, judiciales, y asistenciales que afecten a la misma.
- IV. Mantener el control de las zonas y áreas de vida cotidiana (familiar y profesional) tanto de la mujer, como de su agresor.

Para llevar a cabo todos estos cometidos y funciones, se establecen tres niveles de comunicación:

**Primer nivel.** Lo constituye el funcionario policial de la UPAP, el cual mantiene contacto permanente con las víctimas por medio de teléfono móvil. Para ello, a todas las mujeres dadas de alta, se les facilita un teléfono de marcación rápida con acceso en caso de necesidades a los tres niveles establecidos.

**Segundo nivel.** Constituido por la “sala 091” a la que la mujer podrá acudir en aquellos casos en que se precise una intervención policial inmediata o en aquellos otros en los que resulte imposible contactar con el policía que tiene encargada su labor de protección, prevención y asistencia.

**Tercer nivel.** La respuesta es dada por la sala de coordinación operativa de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con un teléfono central de carácter gratuito (Alvarado, 2008; Jiménez, 2011).

### **2.3.3.- Policías Autonómicas**

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, los Mossos D'Esquadra disponen de un servicio central de atención a las víctimas, que es el encargado de coordinar, dar instrucciones técnicas y asesorar a los grupos regionales de atención a las víctimas que existen en cada una de las nueve regiones policiales presentes en toda la Comunidad. A la vez, estos últimos son los responsables de elaborar y difundir campañas específicas de prevención, así como asesorar, homogenizar criterios y apoyar a los GAV (**Grupos de Atención a las Víctimas**), que se encuentran adscritos a las unidades de seguridad ciudadana de cada comisaría. Sus funciones son las siguientes:

Recogida y tramitación de denuncias de VDG interpuestas, así como actuación de oficio ante cualquier episodio de este tipo.

- I. Seguimiento y control de las víctimas y medidas adoptadas por los órganos judiciales.
- II. Contacto con los servicios sociales, institucionales y demás organismos relacionados con su ámbito de actuación.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, la *Ertzaintza* dispone de una brigada llamada “Brigada Asistencial”, la cual se encuadra dentro del área de investigación criminal de la División de Policía Judicial, siendo la responsable de todo lo relacionado con la VDG. Sus funciones son:

- I. Recogida de denuncias relacionadas con la VDG, así como instrucción de las correspondientes diligencias e investigación de los casos.
- II. Investigación de delitos que tengan como víctimas menores o personas de avanzada edad.
- III. Investigación de delitos contra la libertad sexual.

Esta Brigada Asistencial es apoyada por los grupos de Policía Judicial de la Comisaría correspondiente, los cuales también poseen preparación específica en VDG, dedicándose entre otras cosas, a la investigación e instrucción de diligencias por quebrantamientos de órdenes de protección.

#### **2.3.4.- Policía Local**

Lo primero que se debería mencionar con respecto a las policías locales es la heterogeneidad que las caracterizan, siendo muy variado su contexto laboral, tanto por el tamaño de las plantillas, como por los medios humanos y materiales disponibles, formatos de población, así como por otro tipo de circunstancias (Albacete, 2010). Con el tiempo, la Policía Local ha ido adquiriendo cada vez más funciones en el ámbito de la VDG. En marzo del 2006, entró en vigor el **Protocolo de colaboración y coordinación entre las FCSE y Policía Local en materia de protección de víctimas de violencia doméstica y de género**, y es a partir de este momento cuando se establecen los criterios de participación de la policía con competencia real en el ámbito de la VDG. Este protocolo obliga también al intercambio recíproco de información entre cuerpos policiales así como a la creación de unidades especializadas para la intervención.

Un año más tarde, con la firma del **Convenio Marco** de febrero de 2007, suscrito por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, se ofreció la posibilidad de incrementar el ámbito de competencias de las policías locales en los municipios que lo desearan. No obstante, la adhesión al mismo ha sido muy escasa en el caso de pequeños municipios, debido principalmente a la escasez de medios económicos (Jiménez, 2011). Por lo tanto, únicamente se puede hablar de una estructura orgánica y funcional especializada en la lucha contra la VDG en aquellos municipios de gran población.

#### **2.4.- MEDIDAS CREADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA VDG.**

La Ley 1/ 2004 recoge y contempla en el título III la coordinación institucional, mediante la creación de nuevos órganos con funciones específicas sobre la mujer, el funcionamiento de las FCS y los planes de colaboración y protocolos de actuación. Todo ello ha dado lugar a la puesta en marcha de diversos sistemas informáticos y técnicos, que tienen como objetivos comunes: reforzar los mecanismos judiciales y de protección de las víctimas, mejorar la coordinación de los profesionales que se dedican a la atención de las mujeres víctimas de violencia y de los recursos de todas las administraciones, conseguir la máxima inhibición de los maltratadores y agresores, y finalmente, proporcionar una respuesta rápida y adecuada a las víctimas. Los principales se describen seguidamente.

#### **2.4.1.- Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ).**

El 7 de febrero del año 2009, entró en vigor el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (Real Decreto, 95/ 2009). Se trata de un sistema informático gestionado por el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia, de carácter no público y ámbito nacional, que gestiona información procedente de los siguientes registros:

- Registro central de penados.
- Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica<sup>10</sup>.
- Registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.
- Registro central de rebeldes civiles.
- Registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores.

Al tratarse de un registro compartido por los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y FCSE, su finalidad es la de facilitar a los órganos implicados en la protección de las víctimas de violencia doméstica, la información precisa para la tramitación de las causas penales y civiles, así como para la adopción, modificación, ejecución y seguimiento de las medidas de protección, evitando duplicidades y el riesgo de información no coincidente. Así mismo, permite una protección integral a la víctima aunque los órganos judiciales que conozcan de los actos de violencia correspondan a partidos judiciales distintos.

#### **2.4.2.- El servicio de Teleasistencia.**

Dentro de las medidas incluidas en el “Plan de medidas urgentes” se encomendó a la **Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad** que asumiera a través del **Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)**, la cobertura del servicio de teleasistencia a las víctimas de VDG que contaran con orden de alejamiento (cautelar o firme), en el cual participaría la FEMP a través de los centros de atención a las mujeres de los ayuntamientos.

---

<sup>10</sup> Recoge las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito o falta, medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, contra personas a las que se refiere el Art. 173.2 del Código Penal, así como la inscripción de los quebrantamientos de cualquier pena, medida u orden de protección acordada en dichos procedimientos penales.



Se trata de un sistema de conexión y coordinación gratuito (mediante teléfonos móviles programados) entre las mujeres destinatarias de la protección y distintos servicios como la Guardia Civil, CNP, Policía Local, línea 016. El objetivo es proteger a las mujeres mediante una rápida localización e intervención por parte de las fuerzas policiales. Este servicio, financiado íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, tiene como finalidad la de ofrecer a las víctimas, una atención inmediata y una respuesta rápida a cualquiera de las eventualidades que se pueden producir en estos casos.

Entre los requisitos que exige este sistema se encuentra que la víctima no conviva con su pareja o ex pareja, que cuente con una orden de alejamiento en vigor y que además presente algún indicador de riesgo de los siguientes:

- Haber sufrido amenazas y/ o agresiones.
- Acoso continuado (personal o telefónico).
- Denuncias por agresiones y/ o amenazas de muerte.
- Posesión de armas por parte del agresor.
- Tener orden de alejamiento en vigor.

El sistema, funciona entregando a cada usuario un teléfono móvil con una marcación programada. Si la mujer que lo porta detecta una situación de peligro, sólo tendrá que pulsar un botón.

Estos botones tendrán memorizados los siguientes teléfonos:

1. COS (Centro de Operaciones de Servicios de la Comandancia de la GC o del CNP correspondiente). En este centro de operaciones se tiene instalado un ordenador donde se reciben todas las llamadas. Cuando la mujer pulsa en su teléfono el número 1, aparece en el ordenador de la FCSE la fecha con los datos de la mujer y su foto, así como la del agresor. Igualmente en el ordenador o sistema aparece un mapa de la zona, localizando geográficamente las llamadas.
2. Policía Local del municipio donde resida la mujer.
3. Línea telefónica gratuita 016.
4. Servicio provincial de mujeres.
5. Cualquier otro número útil.

Una vez estas llamadas son efectuadas, se inicia el protocolo de actuación consistente en la comunicación de alerta al cuerpo policial correspondiente y envío de “mensajes de alerta” a una lista autorizada de familiares y/ o amigos de la mujer. El servicio provincial de mujeres llevará un seguimiento periódico de las usuarias a las que se les asigne el teléfono móvil de protección. Su funcionamiento tiene lugar durante las 24 horas los 365 días del año.

En base a estas comunicaciones, se establecen tres niveles de comunicación:

**Nivel 1:** en este nivel se produce una respuesta verbal. Recibida la señal de la llamada, emitida desde un dispositivo móvil, el equipamiento tecnológico del Centro de Atención identifica a la usuaria, disponiendo el operador/ a de todos los datos relevantes de la víctima para poder prestar el servicio.

**Nivel 2:** en el caso en el que no se pueda solucionar la demanda mediante una respuesta verbal, se producirá la movilización de recursos mediante el desplazamiento de profesionales. Se pasará a este nivel en los casos en los que no se haya podido mantener un diálogo con la usuaria que ha emitido la señal, o bien cuando se considere necesaria una ayuda especializada.

**Nivel 3:** el Centro de Atención, junto con los profesionales desplazados, determinarán si es necesario pasar a este nivel. Dicho nivel finalizará con el ingreso de la usuaria en un centro especializado (casas de acogida, centros sociales, hospitales) o con el traslado de nuevo a su domicilio si el ingreso no procediera.

#### **2.4.3.- Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la VDG**

A través del acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de noviembre de 2008, se le encomendó al Ministerio de Igualdad y a los Ministerios de Justicia e Interior, la adopción de las medidas necesarias para la implantación de dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por VDG. Todo ello con la finalidad de garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los jueces en virtud de los dispuesto en el artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/ 2004. Debido a esto, el Ministerio de Igualdad desarrolló un protocolo de actuación para la implantación de un sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento en materia de VDG. Posteriormente, y en acuerdo de 8 de julio de 2009 entre los

Ministerios de Justicia, Interior e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, se implantó el **Protocolo de actuación para el seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de VDG**. Dicho Protocolo prevé la posibilidad de que los órganos judiciales acuerden la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para controlar el cumplimiento de sus medidas cautelares de alejamiento en VDG.

Este sistema tiene tres objetivos claros, a saber:

- Hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad.
- Documentar el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento.
- Disuadir al agresor.

Mediante resolución de la SES de 17 de julio de 2009, se acordó su publicación y se ordenó la elaboración de las normas técnicas de desarrollo del mismo para las FCSE.

Este sistema permite verificar el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento de la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por VDG en que se estime oportuno, de acuerdo con las pautas y reglas que, en su caso, haya establecido la Autoridad Judicial. Estos dispositivos pueden percibir si el atacante se aproxima a menos de 500 metros. Son similares a un teléfono móvil pero en forma de pulsera (para el agresor) que informa de su situación a un centro de control y permite la comunicación de voz y pulsar un botón de pánico. Este sistema es llevado a cabo por el centro operativo de medidas telemáticas de alejamiento “COMETA”.

#### **2.4.4.- Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género**

Con la entrada en vigor de la instrucción de la SES 10/ 2007, por la que se aprobó el **“Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la ley orgánica 1/ 2004, y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal”**, modificada posteriormente por las instrucciones 14/ 2007, de 10 de octubre, y 5/ 2008, de 18 de julio, se puso en marcha el **Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género**. Este sistema, al ser objeto directo de esta Tesis Doctoral, se explica exhaustivamente en el capítulo cuarto.

Finalmente, a lo largo de este capítulo sobre las medidas que se han ido creando para hacer frente al problema de VDG, se ha comprobado que la legislación en esta

materia cada vez está siendo más perfilada. En este sentido, destaca la existencia de órganos específicos que han ido ganando en eficacia, como los Juzgados de Violencia contra la Mujer o de sistemas donde convergen varias instituciones como el SIRAJ o el Sistema VDyG. Todas estas medidas hacen que la mujer finalmente tome la decisión de interponer una denuncia y en consecuencia obtener unas medidas de protección. El objetivo es que todos estos medios generen confianza y seguridad en la mujer que es víctima de estos delitos.

## CAPÍTULO 3

### VALORACIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA

#### 3.1.- INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX, la Criminología había propuesto la categoría legal de “peligrosidad” para referirse a la disposición estática y genérica del individuo a comportarse de manera violenta en el futuro (Arbach, 2007). Durante estos años a psiquiatras y psicólogos se les requería determinar el nivel de peligrosidad de las personas para decidir sobre la ejecución de los ingresos involuntarios u otras acciones en el ámbito forense. Las decisiones estaban basadas en juicios clínicos intuitivos. La peligrosidad, definida como la propensión de una persona a cometer actos violentos (Scott y Resnick, 2006), ha estado ligada a la enfermedad mental grave, a la historia criminal del sujeto y a su nivel de adaptación social (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Sin embargo, a raíz de dos casos ocurridos a finales del siglo XIX en Estados Unidos (casos Tarasoff y Baxstrom)<sup>1</sup> el concepto de peligrosidad empezó a debilitarse principalmente por los falsos negativos (caso Tarasoff) y los falsos positivos (caso Baxstrom). En el primero de los casos, los sujetos eran valorados como no peligrosos y, sin embargo, cometían después una conducta violenta grave, con las correspondientes repercusiones para las víctimas. En el segundo caso, se identificaba al sujeto como peligroso, con las consecuencias negativas que tenía tal calificación (reclusión en régimen cerrado, ausencia de permisos penitenciarios, etc.) y, sin embargo, no llegaba a cometer conductas violentas en el futuro (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). A raíz del caso Baxstrom, Coccozza y Steadman (1976) publicaron un artículo con el título de “*El fallo de las predicciones psiquiátricas de la peligrosidad, evidencia clara y convincente*” que sirvió de línea de referencia para ir sustituyendo el concepto de peligrosidad por el de riesgo (Arbach, 2007).

---

<sup>1</sup> CASO TARASOFF: el 27 de octubre de 1969, Prosejit Poddar mató a Tatiana Tarasoff. Dos meses antes Poddar había confesado su intención de matar a Tatiana al Doctor Lawrence Moore, psicólogo del Cowell Memorial Hospital de la Universidad De California de Berkely (Doménech, 1996).

CASO BAXSTROM: sobrestimación de la peligrosidad de ciertos presos en la prisión de Baxstrom que permanecieron reclusos en establecimientos para enfermos mentales criminales más tiempo de lo establecido. Luego se demostró que eran menos peligrosos que lo que se predecía (Doménech, 1996).

Considerar sólo la peligrosidad como la causa de la conducta violenta implica una capacidad de predicción limitada (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010), puesto que la predicción del riesgo está tanto en función de la peligrosidad del agresor, como de la vulnerabilidad de las víctimas, ambas en el marco de un contexto situacional específico.

Para valorar el riesgo de violencia es importante conocer los factores de riesgo asociados a ella, tanto de la víctima como del autor y de la situación contextual, y no tanto la averiguación de las causas de la violencia, que es lo que predominaba en las teorías de la peligrosidad. El paso siguiente es saber gestionar bien el riesgo, lo que se traduce en la adopción de medidas de seguridad y de protección a la víctima.

Son numerosos los estudios que señalan el papel fundamental de la valoración del riesgo de violencia en diferentes contextos, como puede ser el sanitario-asistencial, el jurídico y el forense (McMillan, Hastings y Coldwell, 2004). En el primero de ellos, permite estudiar entre otras, y sirviendo de ejemplo, la valoración de ingreso en hospital o el tipo de tratamiento necesario. En el ámbito jurídico, sirve también entre otros aspectos para estimar el riesgo criminal que posee un delincuente. En el ámbito penitenciario, facilita la toma de decisiones en cuanto a la urgencia y necesidad de un tratamiento, concesión de permisos penitenciarios, cambio de régimen o el ascenso a la libertad condicional (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Finalmente, en el ámbito policial, sirve para prevenir la ocurrencia de nuevos episodios violentos, administrando medidas policiales derivadas de la valoración policial de riesgo, con el objetivo de que éste disminuya.

Antes de hacer una exposición de las distintas y principales definiciones de valoración del riesgo que se han venido dando durante los últimos años, conviene recordar que, como se ha visto anteriormente, la preocupación sobre quién se comportará en el futuro de manera violenta y quién no, es una pregunta que nace de diferentes ámbitos. Prácticamente desde todos ellos, se parte de que el comportamiento violento de una persona en el futuro, puede estimarse a partir de unos determinados factores de riesgo (por ejemplo, desempleo, entorno social desestructurado, pautas de crianza inconsistentes, etc.). A lo largo del tiempo, se han ofrecido diferentes definiciones sobre la valoración de riesgo de violencia. A continuación, y con el objetivo de clarificar el uso del término, se van a ir presentando ordenadas cronológicamente aquellas consideradas más relevantes.

- Scott (1977), sugiere que, cualquier valoración del riesgo, debe especificar al menos los tres contenidos, a saber:
  - La conducta que se estima que ocurra.
  - El daño potencial que se estima como resultado de esa conducta.
  - La probabilidad de que la conducta ocurra y bajo qué circunstancias.
- En 1995 Kropp, y cols., definen la valoración del riesgo de violencia como “aquel proceso de reunión de información sobre personas, para poder tomar decisiones en materia de seguridad en función del riesgo de que se vuelva a producir violencia”.
- Kemshall (1996), entiende este término como “la probabilidad que una conducta negativa o dolorosa ocurra en un futuro, incluyendo en esa valoración la frecuencia, la probabilidad de impacto y a quién afectará”.
- En 1997, Reed destaca que el objetivo de la valoración del riesgo de violencia es “poder llegar a ser capaces de identificar, valorar y especialmente manejar el riesgo para reducir con todo ello la probabilidad de sufrir nuevas agresiones que en muchos casos pueden llegar hasta el homicidio”.
- En este mismo año, Kraemer, Kazdin, Offord, Kessler, Jensen Y Kupfer (1977) lo define como “el uso de factores de riesgo para poder estimar la probabilidad de que un resultado ocurra en una población determinada”.
- Para Monahan (1992), la valoración de riesgo, debe contemplar la **gestión** y la prevención de la conducta violenta.
- En 1998, Hart formuló una concepción general del término valoración del riesgo como “el proceso de evaluación de un individuo con el fin de caracterizar la probabilidad de que cometa actos de violencia en el futuro”, añadiendo a su definición la necesidad de desarrollar intervenciones para gestionar o reducir esa probabilidad (Hart, 2010).
- Martínez, Hilterman y Andrés-Pueyo (2005), definen la valoración del riesgo como “el proceso de identificación y estudio de los ‘peligros’ con el objetivo último de reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir”.

- Por último, la valoración del riesgo para Loinaz, Iruleta y Doménech (2010), es “el proceso de especular, de forma informada, acerca de las conductas violentas que una persona puede cometer y su probabilidad de reincidencia”.

En definitiva, y tras la exposición de las diversas acepciones sobre el término de valoración del riesgo, quedan patentes los puntos de vista comunes al considerar que para la mayoría de los autores, la evaluación del riesgo es un proceso de estimación de la conducta futura, y que para algunos de ellos, como Kraemer y cols. (1977), debe de estar basada en factores de riesgo. Del mismo modo, como asevera Monahan (1992) es necesario que vaya más allá de la pura predicción.

Uno de los aspectos más controvertidos sobre las definiciones descritas anteriormente, es el concepto de estimación o de predicción del comportamiento futuro. El futuro es incierto y, por tanto, es complicado anticipar algo que se desconoce. Resulta difícil saber cuándo se van a volver a producir hechos violentos. Sin embargo, la OMS (2002) afirmaba que la violencia se podía predecir y prevenir y es por ello que algunos autores han seguido esta línea de investigación. Ya en 1996, Monahan y Steadman, proponían la interesante analogía entre la predicción de la violencia y la predicción de la meteorología. Estos autores refirieron, que en ambos dominios, un profesional evalúa factores de riesgo, los procesa con la ayuda de modelos predictivos que pueden ser explícitos o implícitos y construye un pronóstico de ocurrencia del evento, para finalmente comunicar el riesgo a quienes deban tomar alguna decisión al respecto. Además de estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento, la predicción debe incluir información sobre la severidad del fenómeno y una indicación de cómo actuar ante el peligro. Siguiendo estos parámetros, los autores resaltan que al igual que en el campo de la meteorología, la **predicción** de la violencia debe realizarse para un **período de tiempo y un área específica**, y debe expresar el **grado de certeza sobre su ocurrencia en términos probabilísticos**. Siguiendo a estos autores, la superioridad de los meteorólogos es más aparente que real, ya que en las predicciones a largo plazo se alcanza un nivel de precisión similar en ambos casos, aunque a corto plazo los meteorólogos predicen mejor (Monahan y Steadman, 1996).

Guiado por estas aportaciones teóricas, Kropp (2008b), elaboró una teoría que abarcaba los conceptos que han de explorarse en los juicios sobre valoración del riesgo: quién, qué, dónde, y cómo. Esto resulta de suma importancia a la hora de establecer líneas de tratamiento futuras con respecto a la gestión del riesgo. Por ejemplo, en



relación con el segundo parámetro, el “qué”, se puede considerar que un agresor presenta riesgo inminente para atacar físicamente a una víctima (lesiones), a la vez que este riesgo es relativamente menor si hablamos de otro tipo de conductas, como la violencia sexual o el acoso. Del mismo modo, atendiendo al factor “dónde”, el riesgo puede cambiar según el escenario en el que se desenvuelven víctima y autor. Y así sucesivamente con el resto de parámetros.

Adicionalmente, algunos autores señalan una serie de puntos básicos en el proceso de evaluación del riesgo de la violencia. Por una parte, Monahan (1993) establece que el evaluador debe estar formado en evaluación clínica y gestión del riesgo. Por otra parte, Arbach (2007), apunta que se debe recoger la información sobre los factores de riesgo recurriendo a diversas fuentes de datos, como la historia clínica, entrevistas con el paciente y con informantes colaterales, expedientes forenses o registros de archivo. En el siguiente paso del proceso, que comprende la estimación del riesgo, existe discrepancia entre diferentes aproximaciones, que se detallarán más adelante (Webster, Douglas, Eaves y Hart 1997). Finalmente la información significativa relativa al riesgo debe ser explícita, y por escrito, comunicada a quién tome las decisiones para implementar un curso de acción o unas medidas dirigidas a minimizar los riesgos y proteger a posibles víctimas (Monahan, 1993).

La valoración del riesgo de violencia, tiene en cuenta los conocimientos actuales sobre la Psicología de la violencia y el papel que tienen los profesionales en la toma de decisiones acerca del comportamiento futuro de, por ejemplo, agresores sexuales o maltratadores de pareja. Por ello, las técnicas de valoración de riesgo de violencia entienden que no se puede predecir, en general, el riesgo de “cualquier” tipo de violencia a partir de los mismos predictores, sino que, cada uno tiene sus factores de riesgo y de protección particulares, y, por tanto, debemos adecuar los procedimientos genéricos de predicción de riesgo de violencia al tipo concreto que se pretenda predecir (Andrés-Pueyo y Redondo, 2007).

Existe un elevado consenso dentro de la comunidad científica que afirma que el primer objetivo de los instrumentos de valoración del riesgo deben ser prevenir la violencia (Douglas y Kropp, 2002). Para ello, es fundamental identificar factores de riesgo (estáticos y dinámicos; ver el siguiente apartado), manejar las estrategias de gestión del riesgo y volver a reevaluar el riesgo con cierta periodicidad.

Desde la visión actual del fenómeno de la valoración del riesgo de VDG, la estimación de este concepto trataría de responder a preguntas del siguiente tipo: ¿qué agresores tienen más probabilidad de reincidir violentamente?, ¿quiénes pueden continuar con una vida normal sin necesidad de control judicial o policial?, ¿quiénes de estos son más apropiados para un determinado programa de tratamiento? Con respecto a las víctimas, trataría de responder a algunas preguntas como las que siguen: ¿quiénes deberían tomar medidas de protección?, dentro de éstas, ¿quiénes necesitan medidas de seguridad extremas como tele-asistencia, medios telemáticos, GPS, o incluso un cambio de residencia?, ¿qué estrategias son más adecuadas para reducir la probabilidad de reincidencia? Éstas y otras preguntas son las que se tratarán de contestar en los siguientes apartados.

### **3.2.- FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA**

En los últimos 15 años ha habido un significativo progreso en la investigación en este campo y se han ido publicando revisiones de investigaciones relacionadas con los factores de riesgo no solamente en violencia doméstica (Bennett-Cattaneo y Goodman, 2005; Dutton y Kropp, 2000; Hilton y Harris, 2005; Schumarcher, Feldbau-Kohn, Slep y Heyman, 2001) sino también en VDG (Aldrige y Browne, 2003; Campbell, Sharps y Glass, 2001). Estas revisiones reflejan un considerable consenso sobre los factores de riesgo más relevantes en esta área (Kropp, Hart, Webster y Eaves, 2008a).

Cuando se habla de factores de riesgo de violencia se hace referencia a conductas, características, atributos tanto de la víctima como del agresor, así como del contexto, que aumentan la probabilidad de que se cometa un episodio violento en un momento dado. La literatura criminológica general sobre predictores de riesgo (Andrews y Bonta, 1994) ha identificado dos tipos diferentes de factores que tienden a repetirse a lo largo de los episodios violentos:

- **Predictores estáticos** o factores de riesgo personales: pertenecen al pasado del sujeto y no pueden ser modificadas (experiencias infantiles, patrones de crianza, haber tenido padres con historia criminal edad, sexo, etc...). Suelen referirse a datos demográficos o datos que en un momento dado fueron fijados o determinados de antemano.

- **Predictores dinámicos** o factores del sujeto o de su entorno que pueden ser modificados. Suelen fluctuar en el tiempo y reflejan estados internos o circunstancias temporales del individuo, como creencias, cogniciones, etc. Su mejora se asocia a una disminución de riesgo de cometer o recibir futuros incidentes violentos (pensamientos o ideas disfuncionales con respecto al papel de la mujer en la pareja, tenencia de armas, uso de alcohol para resolver conflictos, etc.).

Esta diferencia es importante a la hora de diseñar un plan de intervención o de tratamiento con el agresor, puesto que, mientras que los factores estáticos no permiten modificación o cambio, los dinámicos pueden ser corregidos o convertidos en funcionales a través de tratamientos o intervenciones apropiadas. Se ha de comentar que ambos tienen un gran efecto a la hora de condicionar el comportamiento futuro del agresor. Es por ello que instrumentos de valoración de riesgo cuyos ítems estén basados estrictamente en factores estáticos, no resultarán del todo apropiados: por un lado reflejarán probabilidades absolutas e inmodificables y por otro, no ayudarán al evaluador a diseñar una estrategia para el manejo del riesgo (Esbec, 2003).

Ya en 1995, Campbell indicaba que es preciso distinguir diferentes factores de riesgo relativos a los tipos de violencia contra la mujer en el seno de la pareja, y que, de este modo, se puede predecir diferencialmente:

- El asesinato de la pareja.
- Nuevas agresiones físicas o sexuales sobre la pareja.
- Reincidencia delictiva en violencia doméstica.

Cada uno de estos tipos de violencia tiene unos predictores particulares que se encuentran organizados en instrumentos de predicción diferentes. Así para evaluar el riesgo de asesinato se tiende a utilizar el *Danger assessment* (DA; Campbell, 1995); para valorar el riesgo de nuevos ataques sobre la pareja el SARA (Kropp, y cols., 1995); y para valorar el riesgo de reincidencia de delincuentes penados por violencia doméstica el *Kingston Screening Instrument* (K-SID; Gelles y Tolman, 1998). Cada uno de ellos tiene un conjunto de factores de riesgo comunes y específicos de la VCP según el comportamiento cuyo riesgo de aparición se quiere estimar (Andrés-Pueyo y cols., 2008).

En la tabla 3.1 se presentan los factores de riesgo identificados por Ferris, Sandercock, Hoffman, Silverman, Barkun, Carlisle, y Katz, (1997) por medio de un meta-análisis<sup>2</sup> y que han resultado ser uno de los más relevantes a lo largo de las investigaciones empíricas en la predicción del comportamiento violento hacia la pareja o ex pareja. Estos factores incluyen entre otros, trastornos mentales, actitudes, y conductas específicas, así como la propia historia personal, habilidades sociales, etc. Conocer los factores de riesgo, es uno de los mejores caminos para intentar reducir los casos de muerte por VDG. Identificar e intervenir en estos factores puede ser crucial a la hora de evitar un homicidio más. En una reciente revisión llevada a cabo por Dutton y Kropp (2000), se afirma que hay un considerable consenso en la literatura a la hora de considerar los factores más importantes de riesgo en este tema. Quedan recogidos entre estos: la historia de comportamiento violento, el abuso hacia la pareja así como el acceso a armas letales; desde el punto de vista de los factores psicológicos identificados por estos autores quedaban incluidos: actitudes antisociales, actitudes que apoyasen el uso de la violencia a la pareja, problemas en las relaciones, así como otro tipo de estresores como la resistencia al cambio.

*Tabla 3.1. Factores de riesgo de violencia identificados por Ferris y cols., ( 1997)*

<b>HISTORIA DE VIOLENCIA</b>	Historia de violencia previa (arrestos, comportamiento violento, etc.). Violencia reciente o escalada de la violencia. Víctima de abusos o testigo de abusos durante la infancia. Relaciones sexuales forzadas.
<b>FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS</b>	Sexo (hombre). Edad (adolescencia y primeras etapas adultas). Estatus socioeconómico pobre. Nivel educacional bajo.
<b>TRASTORNOS MENTALES</b>	Psicopatía. Trastorno de personalidad. Alucinaciones y delirios. Trastorno bipolar y esquizofrenia. Abuso de alcohol y otras sustancias. Trastorno de control de impulsos. Ideación suicida e intentos autolíticos y/o heterolíticos. Hostilidad e ira. Actitudes que disculpan la violencia contra las mujeres (Stith y cols., 2004). Celos.
<b>FACTORES SOCIALES Y SITUACIONALES</b>	Eventos vitales estresantes (separación conyugal, ruptura sentimental). Falta de apoyo profesional. Ausencia de red social de apoyo. Contexto vital en el que víctima y agresor viven.
<b>FACTORES BIOLÓGICOS Y NEUROLÓGICOS</b>	Anormalidades neurológicas y disfunciones orgánicas cerebrales. Déficit cognitivos. Niveles alterados de serotonina y testosterona.

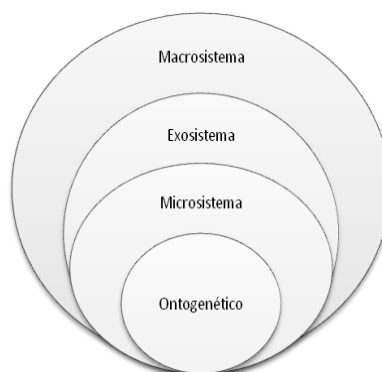
---

<sup>2</sup>Meta-análisis es un método estadístico que revisa múltiples estudios a través de la investigación en literatura relevante, y facilita un método de comparación, usando la técnica del tamaño del efecto.

Las perspectivas teóricas que tratan de explicar los factores de riesgo que hay detrás de la VDG, van desde explicaciones simples que se basan en solo un factor, hasta complejos supuestos que enfocan el tema desde puntos de vista multifactoriales (Stith, Smith, Penn, Ward y Tritt, 2004). Estas últimas, sugieren que la VDG no es simplemente una conducta derivada de un sistema de creencias patriarcales o de una disfunción psicológica del individuo en cuestión, sino el resultado de la interacción de características del sujeto junto con su medio ambiente. Dutton en 1995, desarrolló una teoría sobre VCP que dispone de cuatro niveles de riesgo de VCP, relacionados con el autor y el medio ambiente, a saber (Figura 3.1):

- El macrosistema o sistema social: es el nivel más amplio, incluye desde valores culturales hasta sistemas de creencias.
- El exosistema o sistema comunitario: incluye las estructuras sociales del individuo en cuestión, tales como amistades, lugar de trabajo, apoyo grupal, educación, empleo, arrestos previos, edad, estrés, violencia a otros miembros de la familia, salario, etc.
- El microsistema, o sistema grupal: incluye características del medio inmediato, como antecedentes de uso o abuso de drogas, historia de abusos por parte de la pareja, celos, abuso de animales, acoso, sexo forzado, maltrato a niños.
- El nivel ontogénético, o sistema individual: es específico para la historia del desarrollo del propio individuo, también recoge lo que el sujeto aporta del pasado a la vida actual (Dutton, 1995), incluyendo aspectos como uso de drogas, miedo, hostilidad, actitudes a favor de la violencia, sistema tradicional o ideología de roles, depresión, uso de alcohol, entre otros.

*Figura 3.1. Niveles de Riesgo de la VCP (Dutton, 1995)*



En este modelo, los niveles están anidados entre ellos, siendo el macrosistema el que incluye a todos los demás. El resto se van agrupando jerárquicamente uno dentro del otro. De esta manera se entienden las influencias recíprocas (que actúan a lo largo del desarrollo) que mantienen entre ellos.

En estos últimos años ha habido muchos trabajos tratando de clasificar los factores de riesgo. En concreto, encontramos tres meta-análisis que merece la pena destacar. En ellos quedan descritos los factores de riesgo que los investigadores han identificado a través de sus estudios. El primero es el realizado por Hotelling y Sugarman (1986). De los 52 casos analizados, identificaron más de 97 factores de riesgo de VCP (Andrés-Pueyo y cols., 2008). Entre estos factores de riesgo aparecían: el ser o haber sido testigo o víctima de violencia en la infancia, consumo de drogas, violencia hacia otros familiares, desempleo, bajo nivel de ingresos, bajo nivel educativo, falta de asertividad (Andrés-Pueyo y Redondo, 2007). Cuatro años más tarde Tjaden y Thoehhnes (1990), describen los factores de riesgo señalando las *odds ratio* (OR)<sup>3</sup> correspondientes para distintos tipos de violencia contra la pareja. Para violencia física: tener una pareja que realiza agresiones verbales habitualmente (OR= 7,63), tener una pareja celosa (OR= 2,69), haber sido víctima de abusos en la infancia (OR= 2,59), cohabitar con parejas sin relación administrativa formalizada (OR= 1,40) y pertenecer a una minoría o grupo de personas con discapacidad (OR= 1,40). Para la violencia sexual: la pareja realiza amenazas graves (OR= 3,53), el agresor dispone de armas (OR= 2,53), la víctima está en el rango de edad entre 18 y 25 años (OR= 2,11), el agresor es el marido (OR= 1,69) y el agresor abusa del consumo de alcohol y otras drogas (OR= 1,55; Andrés-Pueyo y cols, 2008).

El tercer meta-análisis es realizado en el año 2004 por Stith y cols. En la tabla 3.2 se enumeran los factores de riesgo relacionados con la violencia contra la pareja, que ella y su equipo identificaron a través de 85 estudios consultados. Cabe destacar que únicamente se incluyen definiciones genéricas de los factores de riesgo y si los factores pueden tener relaciones positivas o negativas con respecto a la VCP. Los factores en negrita son los predictores que más peso tuvieron en el estudio (Stith y cols., 2004).

---

<sup>3</sup> *Odds Ratio* (OR) es un parámetro que relaciona la probabilidad de que se asocien dos sucesos vinculados (suicidio y depresión; violencia y sexo, etc.). Es un cociente entre la probabilidad de que ocurra un suceso o de que no-ocurra. El valor absoluto debe ser mayor de 1 para ser indicativo de que existe riesgo (Arbach, 2007).

*Tabla 3.2. Factores de riesgo de violencia contra la pareja descritos a partir del Meta análisis de Stith y cols., (2004)*

	<b>VÍCTIMA</b>	<b>AGRESOR</b>
<b>MACROSISTEMA</b>	Cultura Valores sociales Ideología Creencias sociales	Cultura Valores sociales Ideología Creencias sociales
<b>EXOSISTEMA</b>	<b>Trabajo</b> <b>Nivel educativo</b> <b>Ingresos económicos</b> Ayuda social <b>Edad</b>	<b>Trabajo</b> <b>Nivel educativo</b> <b>Estrés laboral/ vital</b> Violencia a familiares Detenciones anteriores <b>Ingresos económicos</b> <b>Edad</b>
<b>MICROSISTEMA</b>	Satisfacción pareja Separación pareja <b>Presencia hijos</b> <b>Violencia contra la pareja</b>	Víctima infantil abusos <b>Relaciones sexuales forzadas</b> Acoso <b>Satisfacción pareja</b> Separación pareja Control sobre pareja Maltrato animales <b>Celos</b> <b>Abuso emocional y/ o verbal</b> <b>Historial de agresiones sobre la pareja</b>
<b>ONTOGENÉTICO</b>	<b>Miedo</b> Abuso drogas ilegales Odio/ hostilidad Actitudes disculpen la violencia contra las mujeres Embarazo <b>Depresión</b> <b>Abuso de alcohol</b>	<b>Abuso drogas ilegales</b> <b>Odio/ hostilidad</b> <b>Actitudes disculpen la violencia contra las mujeres</b> <b>Ideología tradicional</b> <b>Roles sexuales</b> <b>Depresión</b> <b>Abuso de alcohol</b> <b>Empatía</b>

Esta tabla es un resumen de la que presentan Stith y cols., (2004) en su trabajo. Aquí se han incluido los factores de riesgo más importantes de la VDG y se han mostrado en negrita los que tienen un tamaño del efecto medio o alto. En su publicación original constan todos los factores encontrados, mostrando sus valores probabilísticos en términos de “tamaño del efecto”<sup>4</sup>.

A pesar de todas las clasificaciones que ha habido, todavía hoy existe debate sobre si es aceptable considerar aquellos factores de riesgo que tienen un fuerte componente explicativo teórico o intuición atractiva pero limitado apoyo empírico (Douglas, Cox, y Webster, 1999; Hanson & Morton-Bourgon, 2004). Otros autores

<sup>4</sup> Tamaño del efecto: estimador estadístico que nos muestra la importancia cuantitativa que tiene una variable asociada con otra. Su suele calcular por medio de la “d” de Cohen. Los valores superiores a 0,20 se consideran débiles, los superiores 0,40 se consideran medios y por encima de 0,80 elevados.

argumentan que solamente los factores que hayan demostrado una asociación empírica confiable con la reincidencia deben ser considerados (Hilton, Harris, Rice, Lang, Cormier y Lines 2004; Quinsey, Harris, Rice y Cornier, 1998).

A modo de conclusión, merece la pena destacar que, la mayoría de las escalas de predicción de riesgo de VDG (objeto de estudio de los apartados siguientes), comparten una serie de ítems básicos que pueden ser considerados los principales factores relacionados con la violencia en la pareja y el riesgo de reincidencia. Los más comunes, compartidos por escalas como la EPV, el SARA, el B-SAFER o el ODARA son los siguientes:

- Agresiones previas a la pareja (ODARA, B-SAFER, EPV, VPR).
- Conducta delictiva (ODARA, SARA, EPV, VPR).
- Quebrantamiento de condena (ODARA, SARA, EPV, B-SAFER, VPR).
- Abuso de sustancias (ODARA, SARA, EPV, B-SAFER, VPR).
- Trastornos mentales (B-SAFER, SARA, EPV, VPR).
- Cogniciones justificadoras de la violencia (B-SAFER, EPV, VPR).
- Amenazas (ODARA, EPV, B-SAFER, VPR).

### **3.3.- ESPECIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE RIESGO**

La investigación de los últimos veinte años ha producido un número considerable de instrumentos o herramientas diseñadas para valorar el riesgo de violencia. La constante investigación, la incorporación de nuevos descubrimientos, así como los estudios de validación, hacen que algunos de ellos cuenten con más de una versión, y que cada vez haya más personal que utilice herramientas de este tipo (CEPOL, 2009). Antes de elegir el tipo de instrumento que vamos a utilizar si queremos evaluar el riesgo, debemos tener en cuenta una serie de especificaciones que resultan necesarias para no cometer errores en el pronóstico, siendo éstas las que siguen: contexto, propósito, población a la que va dirigida, parámetros y aproximación (Heilbrun, Yasuhara y Shah, 2009).

- I. **Contexto.** La primera consideración es delimitar nuestra área de valoración. El contexto influye determinantemente en la naturaleza de nuestras decisiones. Como



se ha visto en capítulos anteriores, hay áreas de aplicación o de especialización a la hora de utilizar los instrumentos de valoración del riesgo, como por ejemplo el ámbito legal, el clínico, el policial, etc. Por ejemplo, si se quiere hacer una valoración para determinar si un agresor puede ser puesto en libertad, el punto de vista es diferente de si queremos valorar la probabilidad que presenta una víctima de volver a ser agredida.

II. **Propósito.** Es necesario comprender el propósito de la valoración, puesto que ésta será diferente si, por ejemplo, está centrada en la necesidad de protección a la víctima o si por el contrario se encuentra más interesada en la probabilidad de reincidencia del agresor. Así mismo, es relevante distinguir dos metas importantes de la valoración del riesgo (Heilbrun y cols., 2009):

- a. Predicción/Clasificación.
- b. Manejo del riesgo.

Desde esta dimensión, el propósito de la valoración de riesgo es diferente si de lo que se trata es de hospitalizar involuntariamente a un acusado con problemas mentales que, por ejemplo, de gestionar el riesgo de una víctima que presenta una denuncia por violencia psicológica. En función de ello, es necesario previo a la valoración del riesgo preguntarnos antes por el propósito de ésta.

El modelo de valoración de riesgo de los canadienses Andrews y Bonta (2006), proporcionó una influencia notable en esta área, siendo uno de los principales resultados el esquema RNR (*risk-needs-responsivity*; Andrews y Bonta, 2006; Andrews y Bonta 2010). Este modelo puede arrojar luz a la hora de determinar el propósito de nuestro estudio. Incluye la necesidad de evaluar tres importantes dimensiones:

- **Riesgo:** se refiere a la probabilidad de que el examinado vuelva a cometer una conducta violenta en el futuro. Para ello, es necesario emplear factores de riesgo estáticos, los cuales no tienden a cambiar con programas de intervención.
- **Necesidades:** son variables que describen déficits que suelen estar relacionados con la probabilidad de reincidir. Pueden estar compuestos de factores de riesgo dinámicos (llamados necesidades criminogénicas en este modelo), o factores de protección que tienen potencial para cambiar a través de programas de intervención.

- **Principio de responsividad:** se refiere a la probabilidad que tiene un individuo de responder a un programa de intervención diseñado para reducir la probabilidad de reincidir. Loinaz y cols. (2010) lo define como la capacidad de respuesta de los sujetos frente al tratamiento (habilidades, aprendizaje, etc.).

III. **Población.** Un aspecto importante a tener en cuenta en la valoración, es la población a la que va dirigida. Hay diferencias notables en cuanto a cifras de violencia, factores de riesgo y de protección en función del tipo de población al que va destinada la valoración. Además, existen instrumentos especializados en áreas determinadas (violencia sexual, violencia contra la pareja, adolescentes violentos), y que no pueden ser aplicados a otras poblaciones de las que fueron diseñados. Actualmente existen cuatro consideraciones determinantes a la hora de elegir la población a la que va dirigida la valoración del riesgo, a saber:

- a. Edad:
  - Niños
  - Adolescentes
  - Adultos
- b. Sexo: Normalmente las herramientas especializadas no suelen estar validadas con los mismos criterios para hombres que para mujeres, o usan diferentes normas de aplicación y/ o corrección.
- c. Estado mental: Se refiere a si a través del instrumento se selecciona al evaluado bien para intervención, bien para establecer acciones legales, o desde un punto de vista policial, para diseñar las medidas de protección de la víctima. Existe una alta incidencia de trastorno mental en población evaluada y se considera necesario establecer de alguna manera en los instrumentos de valoración del riesgo algún apartado que filtre la posibilidad de enfermedad mental, puesto que las consecuencias penales distarán mucho en función de ello.
- d. Población: Hace referencia a la población en general para la que el instrumento fue elaborado. No es lo mismo evaluar a adolescentes para un programa de manejo de violencia que evaluar a agresores que han maltratado a su pareja y de cuya valoración depende su privación de libertad. O incluso,

atendiendo a diferencias culturales, el concepto de violencia no es igual en EE.UU. que en Latinoamérica o en países asiáticos u orientales.

**IV. Parámetros.** La consideración de parámetros en la valoración implica entre otros factores, qué es lo que pretendemos predecir, con qué frecuencia, y con qué probabilidad de riesgo; dónde, durante cuánto tiempo; y la naturaleza de los factores de riesgo y de protección implicados en la valoración. Es importante especificar al principio, qué queremos predecir y de dónde procede la información, es decir, cuáles son las fuentes. La información suele proceder de diferentes fuentes y hay que considerarlas todas:

- Del propio evaluado (*self-report*).
- De observadores colaterales o intervinientes.
- Antecedentes oficiales (policiales, hospitalizaciones, arrestos).

En los EE.UU., la fuente más sensible a la hora de extraer información tiende a ser el propio evaluado, seguido por los informadores colaterales y, finalmente y a larga distancia, por los antecedentes oficiales (Monahan, Steadman, Silver, Appelbaum, Clark y Mulvey, 2001; Steadman, Mulvey, Monahan, Clark, Appelbaum y Grisso, 1998). Sin embargo, estos parámetros pueden variar enormemente dependiendo de las jurisdicciones, los países, etc.

Otro parámetro importante a tener en cuenta es el **tratamiento de los resultados**. Actualmente existen instrumentos que se centran en estimar la probabilidad de riesgo de una manera cuantitativa, es decir, estableciendo un resultado final, mientras que otros lo hacen de una manera más cualitativa o categórica (normalmente buscan distinguir el bajo riesgo del alto riesgo) sin usar un determinado número de corte. Existe también un proceso que puede ser empleado en la evaluación del riesgo que busca sólo identificar factores de riesgo y de protección aplicables a la evaluación individual. Este último proceso, a veces denominado “anamnésico” implica recolectar exclusivamente factores de riesgo y de protección de la historia del evaluado (Heilburn y cols., 2009).

Finalmente otro parámetro relevante a determinar, es la **naturaleza** de los factores de riesgo. Estos indicadores suelen estar asociados al incremento del riesgo de violencia, mientras que los factores de protección, tienden a estar relacionados con el decremento del riesgo. Los instrumentos de valoración del riesgo especializados han ido seleccionando los factores de riesgo más relevantes y

empíricamente contrastados en la literatura al respecto. Nos encontramos con que algunos instrumentos de valoración de riesgo han sido seleccionados en base a un proceso de meta-análisis, mientras que otros se han servido de la literatura empírica para identificar los suyos.

V. **Aproximaciones en la predicción.** Uno de los mayores problemas detectados por especialistas en el área de la valoración del riesgo es la falta de un marco único sistematizado, común y estandarizado para recoger, ponderar e informar de los datos y poder así hacer juicios profesionales a la hora de hacer una valoración del riesgo (Kropp y cols., 1995). La comunidad científica habla de tres aproximaciones o tres enfoques a la hora de clasificar los instrumentos de valoración del riesgo (Douglas y Kropp 2002; Campbell, 1995):

- Juicio no estructurado.
- Toma de decisiones actuariales.
- Juicio profesional estructurado.

**El juicio profesional no estructurado** está ampliamente extendido (Kropp y Hart, 2004) y, actualmente, es uno de los procedimientos con más utilidad (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Las decisiones están basadas en el juicio profesional del experto y normalmente están justificadas de acuerdo a las calificaciones y experiencias del profesional. Los datos de las pruebas, la información de la entrevista y los antecedentes, son obtenidos y analizados por el clínico, quien combina de forma intuitiva su conocimiento y experiencia previa con la información que considera relevante sobre un caso único para hacer una predicción (Bjorklly, 2002; Mossman, 2000). Desde un punto de vista esquemático, sería como la predicción de un comportamiento de  $n=1$ , basado en el estudio del sujeto. Bajo este enfoque, no existe un procedimiento explícito de tratamiento de datos.

Clásicamente los profesionales de la salud mental han defendido la idea de que la mejor alternativa para predecir el comportamiento de alguien es apelando el juicio de un experto y a su modo particular de organizar la información y tomar decisiones en base a ella (Arbach, 2007). Como puntos fuertes de este método cabe resaltar su capacidad para considerar características raras del caso, la capacidad de utilizar sucesos infrecuentes y su énfasis en la prevención de la violencia de manera personalizada (McMillan y cols., 2004; Doland y Dolye, 2000).

Este método fue puesto a prueba en los años 70 para intentar demostrar su efectividad. Los resultados manifestaron que los clínicos frecuentemente se equivocaban en los pronósticos que hacían sobre el riesgo de violencia de los pacientes evaluados (Webster y cols., 1997). Sin embargo, unos años más tarde los defensores de este método explicaron que el método clínico no estructurado mostraba una habilidad predictiva mejor que el azar, aunque modesta, y en parte, basada en claves incorrectas (Monahan y Steadman, 1994; Mossman, 1994).

Expertos como Andrés-Pueyo y Echeburúa (2010) afirman que la estrategia clínica en este contexto es realmente muy subjetiva, presentando una fiabilidad interjueces baja y una fundamentación teórica débil. Estos autores concluyen que con este procedimiento es muy difícil reconstruir el proceso de toma de decisiones, en el caso de que se desee revisar.

Otro método de predicción ampliamente utilizado, es la **aproximación actuarial** (Campbell, 1995). Este método está basado principalmente en reglas estadísticas, es decir, en correlaciones establecidas empíricamente entre variables predictoras y una variable criterio o resultado (Borum, 1996). En concreto, permite cuantificar el riesgo de violencia por medio de un registro detallado de datos relevantes de la historia personal del sujeto. El objetivo final, es poder predecir los episodios de violencia, comparando a un individuo con un grupo de referencia, y en un sentido más absoluto, proporcionar una estimación de la probabilidad de futuros episodios violentos (Kropp y Hart, 2004).

Esta metodología mejora las propiedades psicométricas de fiabilidad y validez tan debilitadas en la aproximación no estructurada y, del mismo modo, mejora la capacidad para predecir comportamientos violentos (Gardner, Lidz, Mulvey y Shaw, 1996). Sin embargo, a mayor heterogeneidad de los individuos dentro de un grupo, puede haber más riesgo de error, y esto puede ser una limitación a la hora de comparar a un sujeto con un grupo de referencia (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Otra limitación es la insensibilidad, ya que no es sensible a eventos raros o idiosincráticos característicos en las evaluaciones cotidianas (McMillan y cols., 2004).

El éxito de los métodos actuariales radica en la posibilidad de identificar los factores de riesgo para la violencia y consecuentemente por el desarrollo de los instrumentos estandarizados para medir la probabilidad basada en esos factores identificados (Buchanan, 1999). Este sistema ha sido ampliamente utilizado por la

Policía Provincial de Ontario, quien ha desarrollado el *Ontario Domestic Assault Risk Assessment* (ODARA). También Quinsey y cols., (1998) desarrollaron el VRAG (*Violence Risk Appraisal Guide*) siguiendo la misma aproximación.

El **juicio clínico estructurado o guía clínica** está diseñado como un puente entre los métodos actuariales y los juicios profesionales no estructurados. Está orientado a la recopilación sistemática de datos basados en conocimientos científicos sólidos, incluyendo la exploración guiada de una serie explícita y fija de factores de riesgo identificados y definidos. A diferencia de los procedimientos estrictos actuariales, se anima a la toma de decisiones libre por el profesional<sup>5</sup>.

También, es comúnmente llamado “guía clínica” puesto que el evaluador debe conducir la valoración de acuerdo a una guía base que va reflejando el estado actual del conocimiento teórico, empírico y profesional. Cada guía dispone de un número de factores de riesgo que deben ser valorados en cada caso, para considerarlo más o menos peligroso. Suele incluir recomendaciones para la recolección de datos (múltiples fuentes y múltiples métodos) y recoge estrategias de prevención. La cuantificación y la estadística se combinan con el juicio clínico para producir un conjunto de predicciones elaboradas para cada caso individual (Arbach, 2007). De ser necesario, este tipo de guías están abiertas a la inclusión de nuevos factores de riesgo, al cambio en su ponderación e incluso a la combinación de ítems, los cuales son principalmente extraídos de la literatura y están relacionados con las características de los agresores, la predicción de crímenes violentos y la experiencia clínica (Hilton y cols., 2004).

Una de las ventajas de estos métodos es que la lista de ítems y la puntuación final pueden ser fácilmente generados y perfectamente informatizados dando un resultado final que suele correlacionar con la reincidencia en la conducta violenta. Como desventajas o limitaciones cabe resaltar la lentitud que puede llevar protocolizar todo el proceso de evaluación y, por otro lado, el hecho de que el profesional que puede necesitar formación en las técnicas y procedimientos que suele implicar este enfoque.

En la actualidad, la evaluación clínica estructurada es tal vez el enfoque más ampliamente utilizado y recomendado (Bjorkly, 2000). Esta aproximación fue usada profundamente por el *British Columbia Institute Against Family Violence* en el

---

<sup>5</sup> El término profesional hace referencia a aquellas personas que no siendo profesionales en el área clínica, están en constante intervención en este tema (policías, jueces, miembros de tribunales, etc.) y a menudo son requeridos para hacer la valoración del riesgo (Kropp y Hart, 2004).

desarrollo del SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*), una de las principales guías de valoración de riesgo contra la pareja, que en el próximo apartado se detallará de manera más desarrollada.

### **3.4.- PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE RIESGO**

La constante investigación en esta área ha ido produciendo la proliferación de instrumentos de valoración de riesgo de violencia desde hace aproximadamente veinte años. Principalmente, se han construido instrumentos que evalúan el tipo, magnitud, frecuencia, variedad y dinámica de las conductas violentas, así como las consecuencias de estas conductas (Andrés-Pueyo, 2009). En el año 2005, la Unidad de Apoyo a la Investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, desarrolló para el Observatorio de Salud de la Mujer un catálogo exhaustivo de todos los instrumentos disponibles en nuestro país para cribado y diagnóstico de maltrato físico, psicológico y sexual (OSM, 2005). Estos instrumentos presentan en sí una gran heterogeneidad en cuanto a finalidad, definición de violencia, extensión, formatos de los ítems y modo de administración, sin que llegue a existir un acuerdo en la comunidad científica sobre qué instrumento es el más apropiado y fiable. Siguiendo con el propósito de este apartado, la tabla 3.3 muestra un resumen de las principales herramientas existentes hoy en día a nivel mundial con relación a la violencia contra la pareja.

*Tabla 3.3. Principales instrumentos de valoración del riesgo de violencia*

<b>INSTRUMENTO</b>	<b>AUTOR/ES</b>	<b>AÑO</b>	<b>ÍTEMS</b>
<i>Danger Assessment Tool (DA)</i>	Campbell	1995	20
<i>Spousal Assault Risk Appraisal Guide (SARA)</i>	Kropp, Hart, Webster and Eaves	1995, 1999	20
<i>Brief Spousal Assault Form for The Evaluation of Risk (B-SAFER)</i>	Kropp y Hart	2004	10
EPV (Escala de Prevención de la violencia)	Echeburúa	2005	20
<i>Domestic Violence supplementary report (DVSII)</i>	William y Houghon	2004	12
<i>Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA)</i>	Hilton, Harris y Rice	2004	13

**a) *Danger Assessment (DA)***

Uno de los instrumentos pioneros, fue el ***Danger Assessment*** (DA), también conocido como *Danger Assessment Tool* (DAT), desarrollado por Jacqueline Campbell (1986, 1995). En su creación participaron víctimas de violencia doméstica, agentes policiales, trabajadores y educadores sociales de varios refugios y/o casas de acogida así como otros expertos. El DA es un test que asocia la presencia de factores de riesgo con un incremento de la posibilidad de homicidio entre parejas y ex parejas sentimentales. Consta de 20 ítems, elegidos a través del estudio retrospectivo de casos reales de homicidio y casos cercanos al homicidio (Campbell, 1995)<sup>6</sup>. Actualmente ya existe una segunda versión del instrumento (DA 2).

El instrumento consta de dos secciones principales, la primera adopta la forma de un calendario que ayuda a las víctimas a registrar la gravedad y la frecuencia de la violencia, abarcando conductas como empujones, tortas, uso de armas, lesiones, etc. Esta parte está destinada a aumentar la conciencia en la mujer y reducir así la minimización del abuso (Ferraro y Johnson, 1983; Campbell, 1995). En un estudio inicial, el 38% de las mujeres que inicialmente denunciaron que no hubo incremento en la gravedad o frecuencia cambiaron su respuesta a “Sí” después de haber rellenado esta parte (Campbell y cols., 2001). La segunda parte consiste en un listado de 15 ítems dicotómicos relacionados con los factores de riesgo asociados con el homicidio en la VCP. Esta parte puede ser completada por la mujer independientemente o con la asistencia de profesionales.

Ha habido investigación al respecto que ha evidenciado las propiedades de fiabilidad y validez del instrumento. En el año 2001, la propia autora resumió los resultados de 10 estudios llevados a cabo con el DA (Campbell y cols., 2001). En esos estudios la fiabilidad interna mostraba índices moderados ( $r = ,60$  a  $,86$ ). Esos estudios demostraron también que el DA ofrecía índices fuertes del coeficiente de fiabilidad *test-retest* ( $r = ,89$  a  $,94$ ). Respecto al grado de correlación con otros instrumentos relacionados con la violencia como la CTS<sup>7</sup> de Strauss, se encontraron correlaciones de moderadas a fuertes confirmando la validez convergente del DA (Campbell, 1995). También se han publicado estudios que obtienen correlaciones importantes ( $r = ,56$  a

---

<sup>6</sup> Es posible obtenerlo online a través de la siguiente dirección electrónica <http://www.dangerassessment.com> (Campbell, 1995).

<sup>7</sup> CTS ha referencia a las siglas en inglés: *Conflict Tactic Scale*.



,62) del DA con síntomas del estrés postraumático (Silva, MCFarlane, Soeken, Parker y Reel, 1997). Finalmente, también se ha obtenido apoyo empírico en cuanto a validez predictiva con una muestra de 499 víctimas de violencia contra la pareja (Heckert y Gondolf, 2001).

***b) Spousal Assault Risk Assessment (SARA)***

El SARA es probablemente el instrumento más internacionalmente conocido en cuanto a guías de valoración del riesgo se refiere. De éste se derivan la mayoría de los instrumentos o guías que las policías europeas han adaptado y disponen hoy en día (CEPOL, 2009). Desarrollado en 1995 por Kropp, Hart, Webster y Eaves, pertenecientes al Instituto British-Columbia contra la Violencia Familiar, localizado en Canadá. Se compone de 20 factores de riesgo que reflejan varios aspectos de la vida y conducta del agresor, relacionados con:

- La historia criminal.
- El funcionamiento social.
- La salud mental.

Este instrumento representa la tendencia actual dominante del juicio clínico estructurado en la toma de decisiones, cuyo principal objetivo es identificar con fiabilidad y precisión a pacientes con riesgo bajo, medio o alto de violencia (Arbach, 2007). Los estudios de validación del instrumento, llevados a cabo por sus creadores, han demostrado puntos altos de validez y de fiabilidad (Kropp y Hart, 2000)<sup>8</sup>. Lo que más destaca de estos estudios es que el SARA mostraba capacidad para poder discriminar entre reincidentes y no reincidentes en relación con la violencia contra la pareja ( $r = ,36$ ,  $p < 0,0001$  o  $AUC = ,70$ ; Kropp, 2008).

Esta escala es el único instrumento de valoración de riesgo de violencia contra la pareja de procedencia extranjera que ha sido validado en la población española. Este trabajo fue realizado por Andrés-Pueyo, López y Álvarez, en el año 2008<sup>9</sup>. Ha sido utilizado durante muchos años por profesionales dentro del mundo de la justicia y de la

---

<sup>8</sup> El lector interesado en conocer profundamente las propiedades psicométricas de este instrumento está invitado a leer el estudio que dos de sus autores el Dr. Kropp y el Dr. Hart publicaron en 2000.

<sup>9</sup> Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.justice.gc.ca/en/ps/rs/rep/2005/rr05fv-1/p7.html>.

policía (Kropp y cols, 2008; CEPOL, 2011). Sin embargo, para su utilización por estos colectivos se han señalado diversas limitaciones, entre ellas destacan que el instrumento es relativamente largo y que requiere de ciertos conocimientos sobre salud mental y trastornos de la personalidad a la hora de valorar algunos indicadores. Debido a esta limitación, los autores principales junto con el Henrik Belfrage, profesor e investigador de la *Mitt Sweden University*, desarrollaron el B-SAFER en estrecha colaboración con la Policía Nacional Sueca (*Rikspolisstyrelsen*) como guía especialmente diseñada para jueces y policías a la hora de valorar el riesgo de sufrir nuevas agresiones.

***c) Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)***

El B-SAFER es una versión abreviada del SARA, desarrollada por sus mismos autores junto con el profesor Henrik Belfrage. El objeto de esta guía es valorar y manejar el riesgo de violencia contra la pareja en el contexto judicial y policial. Los procedimientos y los factores de riesgo incluidos en esta guía, fueron determinados gracias a una revisión de cientos de publicaciones científicas sobre violencia contra la pareja y están basados fundamentalmente en los factores del SARA. No existen puntos de corte y la sola presencia de un indicador, puede justificar la decisión de que una víctima sea calificada de alto riesgo (Kropp, 2008b). Además, una de las ventajas que hacen posible su utilización por una población diferente a la normalmente familiarizada con estas escalas, es que el B-SAFER omite la valoración de la salud mental y de los trastornos de personalidad. Otra de las ventajas que ofrece este instrumento, es que aunque el lenguaje usado en la guía de valoración asume que el agresor es un hombre y la víctima es una mujer, el B-SAFER puede ser utilizado indistintamente.

Actualmente ya existe una segunda versión del protocolo (Kropp Y cols., 2010) que añade a los diez ítems iniciales (actos violentos, amenazas, escalada de la violencia, violación de ordenes de protección, actitudes violentas, criminalidad general, problemas en las relaciones de pareja, problemas de empleo, uso de sustancias y problemas mentales), cinco ítems relacionados con los factores de vulnerabilidad de la víctima (comportamiento o actitudes inconsistentes, miedo extremo, fuente de recursos inadecuada, situaciones de vida inadecuadas y problemas de salud).

Antes de acabar este apartado merece la pena destacar dos proyectos relacionados con la VDG actualmente en estudio para su posible implantación en España.

**a) RVD-BCN**

Consiste en un nuevo proyecto de protocolo de valoración del riesgo diseñado por la comisión para la evaluación del riesgo de violencia dentro del Circuito Barcelona<sup>10</sup>. Con su validación en 2009 y su posterior implementación proporcionará una herramienta a los profesionales que atienden a mujeres que han sufrido o sufren situaciones de violencia. Este protocolo ayudará a valorar el riesgo a corto plazo de actos violentos graves por parte de su pareja o ex pareja.

**b) Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género**

Tanto el SARA como el EPV-R, forman parte como pruebas complementarias del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de VDG, dependiente del Ministerio de Justicia y con posibilidad de implantarse en las unidades de valoración forense integral de los institutos de medicina legal de España.

### **3.5.- VALORACIÓN POLICIAL DE RIESGO**

Desde el punto de vista policial, la valoración del riesgo de que un autor vuelva a ejercer violencia (reincida) a corto o medio plazo se ha convertido en un procedimiento imprescindible no sólo en la prevención de la VDG sino también en la protección y gestión del futuro de la víctima que denuncia hechos de este tipo. En los casos de VDG, con esta valoración se trata de estimar el riesgo de que una persona pueda agredir a su pareja o expareja y en función de esa valoración se definen, las medidas policiales de protección a aplicar con la víctima y con el agresor, para prevenir, la reiteración de los comportamientos violentos. En la mayoría de los casos, son los agentes policiales los primeros en atender estos incidentes. Y es aquí, donde el rol del policía es esencial tanto

---

<sup>10</sup> Circuito Barcelona es una estructura de trabajo en red contra la violencia hacia las mujeres cuyo objetivo principal es implementar estrategias de coordinación entre diferentes ámbitos y profesionales.

para ayudar a la víctima a tomar decisiones con respecto a su futuro próximo e inmediato, como en relación con el agresor para advertir, asesorar y en muchas ocasiones, minimizar su conducta agresiva. En el primero de los casos, Barnett (2000) acentuaba la importancia del agente policial a la hora de interrumpir el ciclo de la violencia que con relativa frecuencia aparece. En este sentido, cada vez hay más investigación y publicaciones referentes a las actitudes y perfiles que deben reunir los funcionarios policiales destinados en las unidades que intervienen en VDG (Albacete, 2010). La mayoría de los estudios en esta línea han concluido que factores como la actitud hacia el rol de la mujer, la relación entre la víctima y el agresor, los rasgos o comportamientos de la víctima y del agresor, y el uso de drogas, afectan a la decisión del policía tanto para asesorar a la víctima de manera adecuada como para llevar a cabo el arresto del agresor (Buzawa, Austin y Buzawa, 1995; Finn y Stalans, 1997).

Gran parte de la investigación llevada a cabo en materia de valoración policial de riesgo de violencia contra la pareja, se ha dirigido al estudio y desarrollo de los instrumentos o protocolos de valoración del riesgo, que han ido desarrollándose e implementándose dentro de las policías de algunos países como, por ejemplo, en la *Metropolitan Police Service* del Reino Unido, la *Victoria Police* en Australia, la *Guarda Nacional Republicana* en Portugal (CEPOL, 2011), la *Rikspolisstyrelsen* en Suecia y la *Canadian Police*, entre otras (Pérez y Ross, 2008). Esta tendencia parece que continúa incrementándose paulatinamente. Sin embargo, todavía existen policías europeas que adolecen de la falta de un sistema de valoración del riesgo de este tipo. Así en cuerpos policiales vecinos, como la *Gendarmerie* en Francia o los *Carabinieri* en Italia, no se emplea ningún tipo de sistema de valoración del riesgo de VCP o expareja (CEPOL, 2011).

En general, se pone de manifiesto que los protocolos de valoración policial de riesgo actualmente en uso incluyen la medida tanto de factores de riesgo dinámicos como estáticos que han sido encontrados como predictores de futura VDG. Entre estos factores predictivos se encuentran, por ejemplo, la violencia física, la conducta antisocial, la historia criminal del agresor y el abuso de sustancias (Kropp y Hart, 2004). En este sentido, en un estudio llevado a cabo por la policía de Victoria (Australia) se demostró, con una muestra de 540 protocolos completados por agentes policiales en casos de VDG, que los predictores más importantes para el juicio policial y la toma de decisiones eran la escalada de los incidentes de menos a más y el nivel de miedo

expresado por la víctima, seguidos de la ocurrencia de antecedentes previos entre las partes y la presencia de alcohol o drogas (Pérez y Ross, 2008).

Desde el punto de vista policial, hacer una buena o mala predicción tiene muchas repercusiones, siendo la más importante y el objetivo principal de la evaluación la propia seguridad de la víctima. Una mala gestión del nivel de riesgo puede conducir, en primer lugar, a la muerte de la víctima por falta de previsión. En segundo lugar, se puede hablar de rentabilidad institucional: la aplicación de las medidas policiales una vez hecha la valoración, supone una movilización inmediata de recursos humanos (fuerzas policiales) y de recursos materiales, una inadecuada valoración del riesgo en sentido negativo (falso positivo) implicaría un mal uso de los recursos y alterar así la disponibilidad para aquellos casos donde la protección fuera más necesaria.

En definitiva, se pretende que la valoración policial trate de cuantificar el nivel de riesgo de volver a ser agredida una víctima de VDG que acude a dependencias policiales a interponer una denuncia, de modo que durante la elaboración del atestado con las diligencias necesarias, se completen los correspondientes protocolos de valoración de riesgo, que están basados en indicadores o factores de riesgo que informan sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes y su gravedad. **El objetivo último es ayudar a la toma de decisiones del funcionario policial y que a través de la información obtenida de la valoración se gestionen medios humanos y materiales y poder ofrecer así una respuesta de protección, seguridad y bienestar, no sólo de la víctima sino también de los descendientes de ésta y demás allegados.**

En el año 2005, la Asociación de Jefes de Policía de Inglaterra, Gales y el norte de Irlanda (ACPO)<sup>11</sup> dictaminó en el Reino Unido una serie de principios a la hora de valorar riesgo que sirvieron de guía para el diseño y la elaboración de los instrumentos de valoración del riesgo de VCP en nuestro país.

- **Relación probabilística entre factores de riesgo y conducta.** Los factores de riesgo incrementan las probabilidades de futuras agresiones, incluyendo dentro de éstas el homicidio. Pero se trata de una estimación probabilística basada en estos indicadores y nunca una relación causa-efecto.
- **Manejo de las situaciones.** La valoración policial de riesgo guía a la hora de tomar decisiones no sólo con la víctima y sus allegados sino también con el

---

<sup>11</sup> ACPO hace referencia a las siglas de *Association of Chief Police Officers*.

agresor. En función de los niveles resultantes, existen determinadas medidas policiales de protección a adoptar. Por tanto la valoración policial de riesgo no sólo es saber qué nivel de riesgo amenaza a una víctima, sino que también implica la gestión de la situación una vez hecha la valoración.

- **Dinamismo.** En situaciones de VDG, las circunstancias pueden cambiar muy rápidamente, por lo que la valoración debe ser algo dinámica. También, resulta necesario valorar la evolución del nivel de riesgo en función de cualquier cambio o evento que se pueda producir con el paso del tiempo.
- **Complejidad.** Se requiere una comprensión exhaustiva de los factores a evaluar, no una lectura simple de los indicadores contemplados en los protocolos.
- Los instrumentos de valoración policial de riesgo han sido creados y desarrollados en función de las **revisiones científicas nacionales e internacionales** existentes, junto a la experiencia aportada por las propias fuerzas policiales, incluyendo la contribución de las propias víctimas en momentos determinados.
- Una buena valoración no debe centrarse sólo en la **información** aportada por la víctima, o por el agresor, sino que debe también incluir información procedente de los testigos, así como de los informes técnicos que se precisen.
- La **rapidez** en la intervención debe ser un elemento fundamental en la respuesta policial, no debiendo terminar ahí, sino que los objetivos de seguridad y protección deben estar programados a corto, medio y a largo plazo.
- Con el objetivo de evitar la victimización secundaria<sup>12</sup> por parte de la víctima, ésta debe ser atendida guardando en todo momento la **confidencialidad y privacidad**.
- Todo el personal policial que tenga contacto con la víctima así como con los agresores, incluyendo el personal que en primera instancia reciba la denuncia, debe tener la **formación adecuada** así como determinadas **habilidades sociales** e interpersonales para asegurarse de la comprensión no sólo de los factores de riesgo sino de la propia situación emocional de la víctima y lograr así una intervención adecuada.

---

<sup>12</sup> Victimización secundaria hace referencia a aquella derivada de la relación y la experiencia personal de la víctima con el sistema policial y/o judicial.

- Finalmente, el proceso de valoración policial de riesgo debería alcanzar los siguientes objetivos:
  - **Cuantificar el nivel de riesgo** que presenta la víctima en un momento dado.
  - Servir de **guía para la toma de decisiones** y acciones a seguir por la policía en el contexto de la VDG.
  - Contribuir al incremento de la **satisfacción de la víctima**.
  - **Evitar o reducir** la probabilidad de nuevas agresiones.
  - **Evitar la victimización secundaria** de la víctima.
  - **Control policial del potencial agresor**.

### **Instrumentos de Valoración Policial de Riesgo**

Llegados a este punto conviene destacar que dentro de la valoración policial de riesgo, existen protocolos específicamente creados para fuerzas policiales. Entre ellos destacan los siguientes:

#### **a) Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave Contra la Pareja (EPV)**

Esta escala fue concebida y desarrollada por Enrique Echeburúa y cols. (2005), para predecir el riesgo de homicidio en las víctimas de VCP. Fue creada y conceptualizada para su uso por la Policía Autonómica Vasca, *la Ertzaintza*. Este instrumento fue elaborado en dos fases. En la primera de ellas, se consideraron aquellos componentes que estaban más relacionados con la violencia severa hacia la pareja, determinando estos criterios, la experiencia clínica de los autores así como la revisión de estudios y la literatura al respecto. En la segunda fase, se desarrolló y enriqueció por el propio conocimiento y la experiencia profesional de la *Ertzaintza* (Echeburúa y cols., 2008).

Inicialmente la escala estaba compuesta por 58 ítems, posteriormente fue refinada y simplificada para ser utilizada fácil y brevemente, con el propósito de ser un instrumento práctico y de fácil uso para la toma de decisiones no sólo de la policía, sino también de trabajadores sociales, psicólogos forenses y jueces. La escala final reducida consta de 20 ítems que fueron seleccionados por su alta capacidad a la hora de predecir violencia. Los ítems fueron agrupados en cinco secciones:

1. Datos personales.
2. Tipo de relación.
3. Tipo de violencia.
4. Perfil del agresor.
5. Vulnerabilidad de la víctima.

El tipo de violencia y el perfil del agresor agrupan la mayoría de los ítems por su alta capacidad predictiva (Echeburúa, y cols., 2009).

La EPV es una escala heteroaplicada que consta de 20 ítems. Tiene por objetivo facilitar a profesionales no clínicos (psicólogos forenses, jueces, policías, trabajadores sociales, etcétera) una predicción que permita la adopción de medidas de protección adecuadas a las necesidades específicas de las víctimas cuando se produce la primera denuncia. La puntuación total de la escala, con un rango de 0 a 20 puntos, permite estimar el riesgo de violencia como bajo (0-5), moderado (5-9) o alto (10-10) (Echeburúa y cols., 2009).

En el año 2010, los creadores de la escala desarrollaron la versión revisada (EPV-R) con el objetivo de ponderar adecuadamente los ítems en función de su capacidad discriminativa y establecer así nuevos puntos de corte. Al llevar en funcionamiento desde el año 2007, se había observado que no todos los ítems tenían la misma capacidad discriminativa y que no era fácil interpretar la puntuación total cuando había escalas incompletas (Echeburúa, Amor, Loínaz y Corral, 2010), por lo que desarrollaron la segunda versión.

La versión EPV-R muestra buenas propiedades psicométricas: una consistencia interna aceptable (alfa de Cronbach= ,7), validez discriminante para diferenciar adecuadamente entre agresores graves y menos graves ( $t = 12,4$ ;  $p < 0,01$ ) y una eficacia diagnóstica del 73,1% cuando se establece un punto de corte de 10 (rango: 0-20), con una sensibilidad de 47,96% y una especificidad del 81,4%. La curva ROC ha mostrado una capacidad discriminativa aceptable, con un valor del área bajo la curva (AUC) de ,69 (Echeburúa y cols., 2010).

Finalmente, es conveniente saber que esta escala es conocida en el extranjero como el SIVIPAS de acuerdo a sus siglas traducidas al inglés (*Severe Intimate Violence Partner Risk Prediction Scale*).



**b) Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA)**

El ODARA es un instrumento de examen de la violencia en general centrado en la reincidencia. Fue creado y desarrollado por Hilton, Harris, Rice, Lang, Cormier y Lines, en 2004 para la policía de Ontario (Australia). El formulario contiene 13 preguntas que de constatarse positivamente reciben un punto. Si una persona obtiene entre 7 a 13 puntos, se sugiere que hay un 70% de riesgo de que pueda cometer otra agresión. Este instrumento puede resultar de gran utilidad como medio de escrutinio de la violencia para alertar sobre la posibilidad de que una víctima corra el riesgo de violencia en el futuro. Este instrumento fue desarrollado utilizando datos de 600 casos y su precisión fue verificada en cientos de sucesos posteriores.

En cuanto al estudio de sus propiedades psicométricas, este instrumento correlacionaba bien con el DA y con el SARA. El ODARA también mostró buenos índices de discriminación ( $AUC = ,77$ ) entre reincidentes y no reincidentes (Kropp, 2008).

**c) Domestic violence Screening Instrument (DVSI)**

El DVSI, fue creado en el año 2004 por William y Houston con la finalidad de valorar el riesgo de reincidencia de la VD entre hombres maltratadores, y así poder estimar el riesgo de situaciones futuras de violencia. Está específicamente diseñado para ser aplicado por policías, fiscales y jueces justo después del arresto de los maltratadores. Está compuesto por 12 ítems con tres categorías de respuesta (0 a 2 ó de 0 a 3). Las puntuaciones finales derivadas de la suma de ítems oscilan de 0 a 30, indicando la severidad de la violencia doméstica y el riesgo futuro de maltrato. Está validado por los autores con una muestra de 1.465 hombres maltratadores para medir sus propiedades psicométricas. La correlación entre DVSI y SARA fue de  $,539$ . En cuanto a la validez predictiva, comparando ambos instrumentos, el SARA ofrecía un valor por debajo de la curva de  $,65$  siendo de  $,60$  el obtenido por el DVSI.

Una vez descritas las definiciones de valoración de riesgo de violencia contra la pareja a nivel internacional y visto los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se cometa un episodio violento en un momento dado, así como los diversos instrumentos que a nivel mundial existen para valorar este riesgo, en el siguiente

capítulo se abordará con precisión el sistema de seguimiento integral de los casos de VDG, así como el nacimiento y la creación de los protocolos de valoración del riesgo de VDG.



## **CAPÍTULO 4**

### **DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VDG (SISTEMA VDyG) Y DE LOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DE RIESGO CONTRA LA PAREJA (VPR Y VPER)**

#### **4.1.- INTRODUCCIÓN**

En los últimos años y especialmente a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, los esfuerzos realizados por el Gobierno de España han mostrado un compromiso indiscutible con la necesidad de hacer frente al problema de la VDG. Dentro del Gobierno, merece destacar el Ministerio del Interior y dentro de éste el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), puesto que de él emana el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de VDG (Sistema VDyG) y los protocolos de valoración de riesgo de violencia (VPR y VPER).

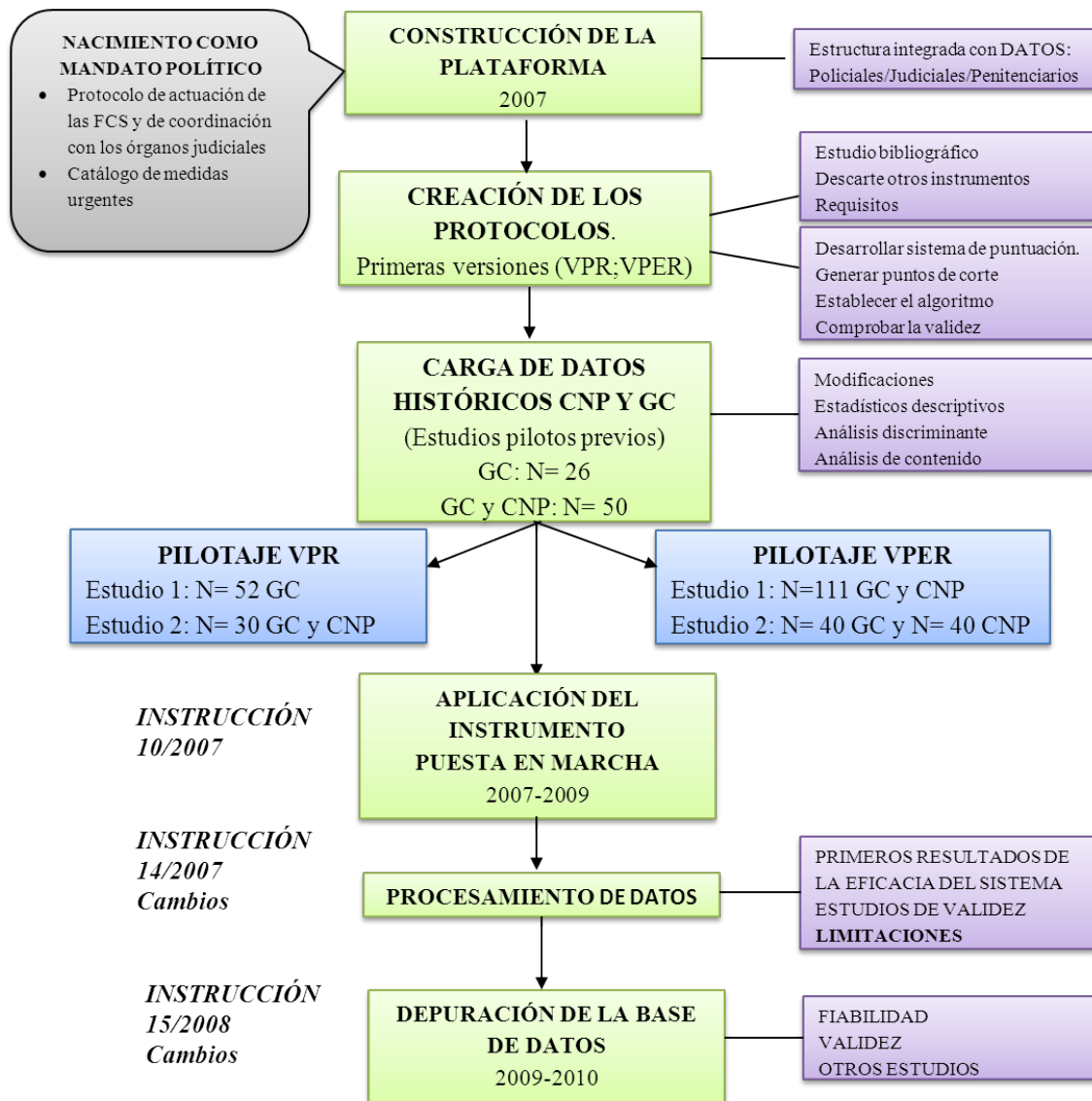
Con la entrada en vigor de la instrucción de la SES 10/ 2007, por la que se aprobó el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/ 2004, modificada posteriormente por las instrucciones de la SES 14/ 2007, de 10 de octubre, y 5/ 2008, de 18 de julio, se puso en marcha en España el Sistema VDyG, coordinando actuaciones cuatro Ministerios: Ministerio del Interior, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Igualdad y Ministerio de Educación Política Social y Deporte.

El Sistema VDyG, así como los protocolos de valoración del riesgo (objeto de estudio de esta Tesis Doctoral) han sido una iniciativa pionera a nivel mundial, y un modelo por el que se han interesado numerosos países de nuestro entorno (Ministerio del Interior, 2010). La característica principal de este sistema, es que constituye una plataforma informática diseñada para favorecer el seguimiento y coordinación de las actuaciones desarrolladas por las administraciones competentes en materia de VDG. Este sistema posibilita un control permanente de la situación en la que se encuentran las víctimas, facilitándoles protección y asistencia; intentando evitar en todo momento una nueva agresión. De manera más detallada, los objetivos que persigue este sistema son los siguientes:

- Aglutinar bajo un único sistema a todas las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de VDG en España.
- Integrar en una sola base de datos toda la información de las circunstancias que rodean a la víctima, de tal forma que se pueda explotar y distribuir adecuadamente.
- Realizar la valoración policial de riesgo para poder predecir el nivel de riesgo de la víctima de sufrir una nueva agresión adoptando las medidas de protección necesarias.
- Implantar un subsistema de alertas informativas y alarmas que permitan reaccionar a las diferentes partes implicadas de forma rápida y eficaz con la finalidad de evitar que la víctima pueda sufrir una nueva agresión.

A través de esta plataforma es posible conocer simultáneamente hechos que resultan fundamentales de cara a la protección de las víctimas de VDG, como pueden ser, por ejemplo, la salida de prisión del agresor, los cambios de domicilio, los cambios de demarcación policial, o las salidas al extranjero, entre otros.

En el siguiente cronograma se muestra el proceso mediante el cual se crearon, aplicaron y desarrollaron tanto el Sistema VDyG como los protocolos de valoración del riesgo actualmente en uso, y su aplicación por unidades policiales de toda la geografía española, bien pertenecientes a demarcación del CNP o de la GC.



#### **4.2.- CREACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA**

Dos años después de la promulgación de la Ley Orgánica 1/ 2004, se aprobaron las siguientes disposiciones gubernamentales, junto con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención (donde ya se encomendaba a las FCSE la labor de abordar la valoración de riesgo de violencia contra la pareja en casos de VDG):

- El Protocolo de Actuación de las FCS y de coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de la VD y la VDG (aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2005).

- El Catálogo de Medidas Urgentes Contra la VDG (aprobado en el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006).

La finalidad principal con la que nacieron ambas disposiciones era proteger a las mujeres que fueran objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar, y amortiguar, en la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato. De manera indirecta, ambos instrumentos potenciaron que en todas las unidades de las FCS aumentara el número de funcionarios policiales especializados en el tratamiento de la VDG.

En particular, el primero de ellos encomendaba a los propios agentes policiales a realizar diferentes actuaciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo que presentaba una víctima, y para establecer las medidas policiales que debiesen adoptarse al respecto. También obligaba a establecer mecanismos que permitiesen una comunicación fluida y permanente entre las víctimas y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, con el objeto de disponer inmediatamente de los datos necesarios para **valorar la situación de riesgo** en cada momento. A tal efecto la norma obligaba a:

- Asignar **la valoración de riesgo** al personal con formación especializada en la asistencia y protección de las víctimas de violencia doméstica.
- Facilitar a la víctima un **teléfono de contacto** directo y permanente con el/ los funcionarios asignados para su atención especializada.
- Facilitar a la víctima **mecanismos o dispositivos técnicos** que permitiesen una comunicación rápida, fluida y permanente entre la víctima y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, en los supuestos que atendidas las circunstancias del caso y de la propia víctima ello fuese necesario.
- **Proporcionar protección personal** que, según el nivel de riesgo que concurriese, podría comprender desde la información/ formación sobre medidas de autoprotección y uso de dispositivos tecnológicos de seguridad, hasta la protección permanente durante las 24 horas del día.

El proceso en sí mismo suponía un examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar de este modo las medidas policiales de protección y seguridad aplicables a las distintas situaciones que pudiesen presentarse. Para hacer un buen

diagnóstico de la situación objetiva de riesgo, los funcionarios policiales tendrían que tener en cuenta los datos y antecedentes obtenidos en la fase de investigación y elaboración de los atestados. De acuerdo a esta disposición, el procedimiento policial se convertía en un sistema articulado y homogéneo de atención donde el agente implicado supiese qué debía hacer, en qué momento y qué competencias y obligaciones tenía para hacerlo, dándose respuesta a la necesidad manifestada por el Gobierno de potenciar la presencia de funcionarios especializados en el tratamiento de este tipo de violencia.

Con la segunda disposición gubernamental, el Catálogo de **Medidas Urgentes**, el Gobierno, ofrecía una respuesta directa a las reformas introducidas por la L.O. 1/2004, creando de este modo un conjunto de medidas. En concreto fueron las siguientes:

- Creación de **nuevos juzgados** exclusivos de violencia sobre la mujer.
- Incorporación de **nuevos fiscales especializados**, fortaleciendo el turno de oficio para asegurar una asistencia inmediata de 24 horas.
- Creación de **nuevas plazas de FCS** destinadas a la prevención y lucha contra la VDG.
- Creación de un **número de teléfono único y gratuito** con atención 24 horas.
- Creación de un **protocolo de coordinación** entre diferentes administraciones que asegurase una actuación global e integral de los servicios implicados en las situaciones de violencia contra la mujer.
- Creación de varios **protocolos** para mejorar la **atención sanitaria**, con especial atención a la mujer inmigrante, a la mujer discapacitada y a menores.
- Creación de **unidades de violencia contra la mujer** en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.
- Creación de un **protocolo común de valoración de riesgo** dirigido a FCSE.
- Creación de una **base de datos común** para todos las FCSE para mejorar la eficacia en el seguimiento de las circunstancias que concurriesen en cada caso.

Atendiendo especialmente a los últimos dos puntos, surgió la necesidad de construir una plataforma informatizada que permitiese el seguimiento integral de toda la



información sobre los diferentes aspectos delictivos relacionados con la VDG. Esta aplicación debería contener datos referidos a la víctima, al agresor, al entorno de los mismos, a las valoraciones obtenidas mediante “cuestionarios normalizados para la determinación del nivel de riesgo”, “las medidas de protección y las revisiones efectuadas”, y trataría de cumplimentar lo dispuesto en las “medidas urgentes” y en la “Instrucción conjunta de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Administraciones Públicas para el seguimiento y coordinación de las actuaciones por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de violencia de género”<sup>1</sup>.

Bajo estas disposiciones gubernamentales, la Secretaría de Estado de Seguridad, dentro del Ministerio del Interior, desarrolló a través del GESI y en estrecha relación con la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, una aplicación informática con el objetivo de dar soporte a la implantación del sistema de seguimiento integral de los casos de VDG, naciendo así en marzo del 2007 el Sistema VDyG, con riguroso respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre).

En definitiva, se trata de una base de datos centralizada a la que tienen acceso en tiempo real (tanto para grabar como para consultar) todos los usuarios policiales designados para abordar esta temática, debiéndose acreditar mediante un sistema de acceso auditado.

Entre los datos que se pueden registrar y consultar, destacan los siguientes:

1. Fichas con datos sobre la víctima, el autor, la relación víctima-autor y las personas relacionadas con ambos.
2. Hechos conocidos, denuncias, órdenes y medidas de protección, y **valoraciones policiales del riesgo (VPR y VPER).**
3. Viviendas, lugares frecuentados y lugares excluidos.
4. Otros datos incluidos.
  - Notas e incidencias críticas.
  - Subsistema de seguimiento específico para unidades policiales.
  - Subsistema de seguimiento específico para instituciones penitenciarias.
  - Subsistema de gestión de alertas informativas y alarmas VDG.

---

<sup>1</sup> Por medio de esta instrucción se crean unidades de coordinación contra la violencia sobre la mujer, y se especifican las funciones, el seguimiento, y el análisis de las muertes por VDG.

- Auditorias de gestión, informes y cuadros de mando VDG.
- Subsistemas de víctimas fallecidas por VDG.
- Comunicación directa entre especialistas y con las víctimas.
- Páginas de libre acceso para facilitar información sobre la VDG.

La plataforma fue diseñada para facilitar su integración con otros sistemas de información, fundamentalmente de origen judicial, policial y penitenciario. A través de este sistema quedarían integrados automáticamente datos judiciales (denuncias, procesos judiciales, sentencias, órdenes y medidas de protección), datos policiales (antecedentes, DNI, pasaporte, situación de extranjeros, etc.) y datos penitenciarios (penados, movimientos de altas, baja y salidas/ reintegros de centros penitenciarios).

De esta forma, los usuarios de diferentes instituciones podían tener constancia de cualquier hecho constitutivo de VDG. Todo esto al objeto de posibilitar y garantizar el seguimiento y coordinación de todas las actuaciones para proteger a las mujeres víctimas, teniendo **constancia permanente** de la situación de riesgo en la que se encuentra una víctima y evitar de esta manera un nuevo episodio agresivo.

#### **4.3.- CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS / PROTOCOLOS DE VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO**

##### **4.3.1.- Génesis del protocolo de Valoración Policial de Riesgo (VPR)**

Uno de los elementos principales del Sistema VDyG era el procedimiento de valoración policial del riesgo de que una víctima de VDG volviera a sufrir violencia, cuyo diseño se encomendó en el seno del GESI a un Grupo de Trabajo Policial (GPT) constituido por los expertos de la GC y del CNP destinados en el EMUME Central, SAF Central y UPAP Central. Cuando se empezó a trabajar al respecto, lo primero que se realizó fue una revisión exhaustiva a nivel internacional de la literatura científica existente en materia de valoración del riesgo, explorándose, en primer lugar, el empleo del SARA (Kropp, Hart, Webster, y Eaves, 1995, 1999) por ser, como se ha expuesto con anterioridad, el instrumento específico más conocido y utilizado para evaluar el riesgo de violencia en la pareja. También se valoraron las posibilidades de su versión policial, el B-SAFER (Kropp y Hart, 2004) y del D.A. (Campbell, 1995).

El SARA y el B-SAFER habían resultado ser particularmente importantes en la predicción del riesgo, no solamente en los países donde se había creado y trabajado con ellos (Canadá y Suecia), sino en otros lugares, culturalmente más diferentes, como Hong Kong (Au Cheung, Kropp, Yuk-chung, Lann y Sung, 2008). Durante la revisión científica se recopilaron y estudiaron los trabajos en los que se recomendaba su empleo, especialmente los de Cairns (2004), Hilton y cols., (2004), Willian y Houghton (2004), Grann y Wedin (2002), Heckert y Gondolf (2001) y Mowat-Léger (2002). Pero a pesar de que todos estos trabajos ofrecían garantías científicas, confirmaban sus buenas propiedades psicométricas y recomendaban su uso, estos instrumentos fueron descartados para su utilización por las fuerzas policiales españolas, debido a que el GTP constató que ya se habían probado en algunas unidades (a modo de pilotaje: Cantabria los empezó a evaluar a finales del año 2006; y el Principado de Asturias a lo largo de los primeros meses del año 2007) y se habían desestimado por considerar que tal y como estaban contruidos eran de difícil implantación en las rutinas policiales.

El SARA es un instrumento útil e indicado para profesionales especializados en VCP que incorpora una terminología técnica que presupone un conocimiento psicológico amplio, y que pretende evaluar una amplia gama de factores de riesgo para así adecuar mejor las medidas de prevención y tratamiento al caso concreto, implicando un largo proceso de valoración. Estas ventajas se convierten en limitaciones cuando este instrumento es aplicado por fuerzas policiales, que no siendo psicólogos deben tomar decisiones en tiempos muy limitados y gestionar recursos para abordar y prevenir esta problemática. Para salvar estos obstáculos, se recurrió a la versión simplificada, abreviada y diseñada para cuerpos policiales y judiciales, el B-SAFER. Dicho instrumento ofrecía una serie de ventajas frente al SARA: era más corto, menos técnico en su terminología y, por tanto, no requería una experiencia tan amplia para su aplicación. El B-SAFER estaba diseñado para ayudar a los evaluadores a identificar estrategias de gestión y reducción de riesgo en cuatro campos de actividades principales: en la monitorización del riesgo, el tratamiento, la supervisión y el plan de seguridad de la víctima.

Sin embargo, el B-SAFER seguía ofreciendo las siguientes limitaciones para el objetivo policial:

- Era necesario que los **evaluadores tuviesen experiencia en evaluación individual y en el área de VCP o VDG**. Según el manual del B-SAFER, uno de

los factores del protocolo de valoración se ocupa de aspectos referentes a la salud mental del autor y la valoración de este factor puede requerir, en algunos casos, la realización de una evaluación psicológica o psiquiátrica formal del autor (Knopp y Hart, 2004). En Suecia, donde se trabajaba ampliamente con este instrumento, la valoración del riesgo era realizada por personal universitario (psicólogos, criminólogos, asesores conductuales), en apoyo del personal policial. Aquí, en España, el mandato de la Ley 1/ 2004 obligaba a los propios agentes policiales.

- La aplicación de este instrumento requería una **formación específica** previa.
- La evaluación final del protocolo **dependía del evaluador** (no se utilizaba ningún algoritmo particular que combinase las puntuaciones obtenidas en los factores para transformarla en la valoración final del caso). Esto último suponía una fuerte limitación para el proyecto que se estaba desarrollando en el GESI, puesto que en el caso de la valoración policial contemplada en España en virtud del mandato de la Ley 1/ 2004 existirían varios millares de evaluadores.

El GPT se encontró en la disyuntiva de que por una parte los instrumentos de valoración del riesgo existentes no se adaptaban a la operativa policial ni a las necesidades y recursos de las FCS, mientras que por otra parte estaba vigente el mandato urgente del Gobierno, de que los agentes policiales procedieran con inmediatez a esa valoración, con finalidad preventiva. El objetivo final del proceso era la evaluación del nivel de riesgo de volver a sufrir violencia que tendría una víctima cuando se presentaba a formular una denuncia en dependencias del CNP o de la GC, un escenario en el que concurrían los siguientes factores:

- I. El evaluador sería un **funcionario policial** no necesariamente especializado en VDG, puede que no implicado en la investigación posterior del caso, y evidentemente con nula experiencia en evaluación psicológica.
- II. El **número aproximado de agentes de policía** destinados en oficinas de atención al ciudadano en toda España que potencialmente tendrían que proceder a la valoración del riesgo sobrepasaría los 20 mil agentes.

- III. La finalidad de la evaluación del riesgo sería **estimar un nivel de riesgo al finalizar el atestado policial**, para adoptar **inmediatamente medidas de protección a la víctima** de carácter tasado y proporcionadas al nivel de riesgo, por lo que, sería muy conveniente (por no decir imprescindible) que esa valoración final fuera lo más automática posible, eliminando la subjetividad del evaluador y, a la vez, liberando de la responsabilidad de la decisión.
- IV. El principal objetivo de la evaluación policial del riesgo sería la protección policial de la víctima, quedando en un segundo plano cualquier otra cuestión relacionada con la gestión del riesgo.

Por todo ello se llegó a la conclusión de que la opción más adecuada para la valoración policial de riesgo de la violencia sería la elaboración de un procedimiento nuevo que se adaptara a las restricciones de la operativa policial de nuestro país. Para llevar a cabo este propósito, desde el GESI se recogieron los fundamentos de los instrumentos académicos de valoración del riesgo (fundamentalmente SARA y B-SAFER), y se consultó a los agentes policiales especializados en VDG: especialistas Mujer-Menor (EMUMEs) de la Policía Judicial de la GC, especialistas de los Servicios de Atención a la Mujer (SAM), y de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas (UPAP) del CNP.

Con esa información se elaboró un primer catálogo de 14 indicadores, que pronto pasaron a ser 16, la mayoría adaptados del SARA y del B-SAFER 1.0, contemplando los indicadores más importantes relacionados con la violencia (violencia física y sexual), modificando su redacción, eliminando los más difíciles de observar por los agentes policiales, como la presencia de trastornos mentales en el agresor, y añadiendo indicadores de interés. En este sentido, se consideró incluir los siguientes ítems: el empleo de armas, la violencia psíquica, los daños o violencia sobre las cosas, la conducta desafiante y los antecedentes penales y/ o policiales del agresor no relacionados con la violencia.

De este modo nació un formulario inicial que se denominó **Valoración Policial de Riesgo (VPR)**, que constaba de 20 ítems, 16 con formato de respuesta cerrado y, en caso de que el evaluador deseara introducir algún ítem u alguna observación que considerase relevante, cuatro preguntas de respuesta libre. En los primeros 16 ítems, la posibilidad de respuesta podía oscilar entre cuatro opciones, representativas del nivel en

que se daría el indicador en cada caso concreto, a juicio del valorador: 0 (“no se da” el indicador, o “no se sabe si se da”), 1 (“se da en un nivel bajo”), 2 (“nivel medio”), y 3 (“nivel alto”).

Aunque uno de los principios que se pretendía seguir era evitar lo máximo posible la subjetividad del evaluador, se constató que debido a las características del objeto a valorar era imposible eliminar esa subjetividad, por lo que se optó por minimizarla, restringiendo las opciones de respuesta a esos cuatro niveles. Cada ítem se puntuaba en función de toda la información recogida por el agente policial, debiendo para ello basarse en diferentes fuentes. En este sentido, el formulario también permitía indicar en qué fuente (o fuentes) se había basado el usuario para asignar la puntuación final a cada indicador. Se consideró que la recogida de información variada era muy importante para la valoración del riesgo de VDG, por lo que en este sentido, se instaba a los agentes a recurrir a todas las fuentes disponibles durante las investigaciones policiales: las declaraciones tanto de la víctima como del presunto agresor (ineludibles para emitir un juicio sobre su conducta), las declaraciones de posibles testigos, y los datos aportados por los informes técnicos (como los de inspección ocular, o de los documentos médicos que se acrediten en caso de lesión). Por todo ello se decidió que las fuentes fuesen las siguientes: víctima (V), agresor (A), testigos (T) o informes técnicos (I).

#### **4.3.2.- Estudios pilotos del VPR.**

Dentro de la estrategia del GTP de minimizar lo más posible la subjetividad del evaluador, otro objetivo fue conseguir un protocolo que funcionara de forma automática, de modo que en cuanto el evaluador estimara el grado de presencia de cada indicador, fuera el propio sistema el que asignara el nivel de riesgo. En este sentido, en colaboración con un equipo de investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, se hicieron 2 estudios piloto con el objetivo de desarrollar el sistema de puntuación del formulario y generar puntos de corte, así como para estudiar la validez del instrumento.

Como metodología general se aplicó un criterio de expertos, tomando como tales a algunos usuarios finales con amplia experiencia y contacto en casos de VDG. Para ello, en el primer estudio se pidió a 26 agentes especialistas en Mujer-Menor de la

GC que aportasen dos atestados policiales que hubiesen instruido en los últimos meses, de modo que uno correspondiera a un caso juzgado por ellos como “leve” y otro como “grave” y que rellenasen después el cuestionario VPR. Los 52 formularios generados fueron objeto de análisis de validación, considerando los 16 indicadores (o ítems) con formato de respuesta cerrado como las variables predictoras. Para llevar a cabo el primero de los objetivos (determinar el sistema de puntuación) se hizo un análisis de los estadísticos descriptivos, así como un análisis discriminante, para comprobar qué ítems del instrumento permitían una distinción más clara entre los casos leves y graves de VDG y así otorgarles más importancia, y, por consiguiente, un mayor peso estadístico. Se asignó un punto a cada nivel de respuesta de cada ítem, y a lo largo del estudio se encontró que los ítems que parecían tener más presencia eran el 1, el 3 y el 13, por lo que se decidió darles una importancia doble en la fórmula de puntuación (ver tabla 4.1).

*Tabla 4.1. Fórmula de puntuación inicial del protocolo VPR*

$$\text{Puntuación de riesgo} = (\text{ítem 1} \times 2) + \text{ítem 2} + (\text{ítem 3} \times 2) + \text{ítem 4} + \text{ítem 5} + \text{ítem 6} + \text{ítem 7} + \text{ítem 8} + \text{ítem 9} + \text{ítem 10} + \text{ítem 11} + \text{ítem 12} + (\text{ítem 13} \times 2) + \text{ítem 14} + \text{ítem 15} + \text{ítem 16}$$

La media de la puntuación de riesgo para los 52 casos fue de 18 puntos, con una desviación típica de 9. Considerando la mayor proporción de casos de riesgo bajo frente a los de medio y alto, se ajustaron unos puntos de corte que reprodujesen dicha distribución, mostrándose en la tabla 4.2 los intervalos de puntuación para cada nivel de riesgo.

*Tabla 4.2. Nivel de riesgo predicho, intervalo de puntuaciones y porcentaje de casos*

Nivel de riesgo predicho	Puntuación asociada	Porcentaje de casos
Bajo	$x \leq 18$	55,8 %
Medio	$18 < x \leq 27$	28,8 %
Alto	$x > 27$	15,4 %

Con respecto al segundo objetivo, estudiar la validez del instrumento se procedió a hacer un análisis mediante tablas de contingencia para comprobar si la puntuación final asignada por el instrumento en cada caso y los puntos de corte propuestos permitían una correcta predicción según la gravedad del caso. Con este análisis lo que

se pretendía mostrar era el grado de éxito que tenía el instrumento en detectar qué casos eran de nivel bajo, medio o grave, y poder dirigir así las medidas policiales.

La información descriptiva del cuestionario se ajustaba a lo esperable por el sistema de puntuación. Se realizó un análisis discriminante tomando como variable dependiente la gravedad y como variables predictoras los 16 ítems iniciales del formulario. Tras este análisis se comprobó que los ítems que más peso tenían eran el 1 el 3 y el 13, por ello se decidió darles una importancia doble en la fórmula de puntuación. Considerando estos puntos de corte, los casos fueron divididos en tres grupos según su puntuación final. Así, los casos con una puntuación igual o inferior a la media se asignaron al nivel 1 (riesgo bajo), los casos con una puntuación superior a la media e inferior a una desviación típica se asignaron al nivel 2 (riesgo medio), y los casos con puntuaciones superiores a una desviación típica se asignaron al nivel 3 (riesgo alto). En la siguiente tabla de contingencias (tabla 4.3) fueron cruzados los grupos de predicción de riesgo con el criterio de riesgo real (“gravedad”) juzgado por los expertos.



*Tabla 4.3. Tabla de contingencia cruzando el nivel de riesgo predicho por el formulario con el criterio externo de gravedad*

		Gravedad		Total
		Leve	Grave	
<b>Nivel de Riesgo Predicho</b>	<b>Bajo</b>	Número casos	20	9
		Porcentajes	83,3%	32,1%
	<b>Medio</b>	Número casos	3	12
		Porcentajes	12,5%	42,9%
	<b>Alto</b>	Número casos	1	7
		Porcentajes	4,2%	25,0%
Total		Número casos	24	28
		Porcentajes	100,0%	100,0%

Se encontró que el 83,3% de los casos leves fueron clasificados en el grupo de riesgo bajo, que ese porcentaje bajó enormemente en el nivel medio (12,5%) y que era casi inexistente en el alto, puesto que sólo un caso definido por los expertos como leve fue clasificado como de riesgo alto. Por otro lado, el 32,1% de los casos aportados como graves fueron definidos como de riesgo bajo, el 42,9% como de riesgo medio, y el 25% como de alto.

Con estos resultados se constató que el instrumento mostraba un gran porcentaje de acierto con respecto a los casos leves mientras que apareció una mayor variabilidad en relación con los graves. Un resultado positivo obtenido fue la diferencia predicha entre casos leves y graves, más de un 20%. También la mayor presencia de casos totales en el grupo de nivel bajo (55,8%), frente a los casos de riesgo medio (28,8%) y alto (15,4%) apoyaba la bondad de los puntos de corte propuestos. No obstante, se clasificaron un número excesivo de casos graves en el grupo de riesgo bajo, concretamente un 32,1%. Ese porcentaje lo podría explicar la heterogeneidad de los atestados de casos graves aportados por los expertos, así como el hecho de que no todos los casos considerados inicialmente como graves fueran susceptibles de las medidas policiales de riesgo alto. En este sentido, y por la inspección de los propios atestados, se percibió que cierta cantidad de casos graves eran más susceptibles de medidas de nivel medio que de nivel alto. Al no haberse considerado una variable criterio con tres niveles, era perfectamente asumible que ciertos casos que hubiesen sido clasificados en un grupo “medio”, al tener que ser forzosamente juzgados entre leves y graves, hubieran sido pronosticados como de riesgo bajo. En función de estos resultados se hicieron diversas consideraciones:

- El número de expertos consultados en este primer estudio piloto había sido muy reducido, y pertenecientes a un solo cuerpo policial, lo que podía suponer una restricción de la representatividad de los casos analizados sobre el universo total de posibles denuncias de violencia de pareja, recomendándose ampliar este número e incorporar a personal de otras fuerzas de seguridad.
- Relacionado con el punto anterior, el número de formularios analizados fue pequeño, especialmente para las técnicas estadísticas multivariadas consideradas y aplicadas para su estudio como el análisis discriminante. Aunque estas técnicas habían mostrado ser robustas cuando se utilizaban con un número reducido de casos, su empleo óptimo requería un número mayor de casos.
- Por otro lado, la variable criterio debería reflejar el resultado final que daría el formulario en un caso real, y por ello debería tener tres grupos (bajo, medio y alto) que se correspondiesen con los tres niveles de medidas policiales planteadas. Así también se evitarían los problemas de clasificación.
- Así mismo se planteó incorporar al instrumento un indicador que pudiese servir como criterio futuro. En ese sentido, se instó a incorporar una pregunta directa sobre **si el agente estaba de acuerdo con el nivel de riesgo predicho** y, en caso de que no fuese así, **qué nivel de riesgo aconsejaría**.

Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, se realizó un **segundo estudio piloto**, incrementando el número de expertos y diversificando su procedencia: 15 componentes de la GC y 15 del CNP. Se siguió la misma metodología, requiriéndose en este caso que aportasen ente cuatro y seis atestados instruidos recientemente, que se valoraron con el VPR. Tras los primeros análisis (GTP, 2007), se decidió dar una importancia triple a los indicadores 1, 9 y 11, y una importancia doble a los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 14, por lo que la nueva fórmula de puntuación de riesgo quedó definida tal y como muestra la siguiente tabla:

*Tabla 4.4. Fórmula de puntuación inicial del protocolo*

$$\text{Puntuación de riesgo} = (\text{ítem 1} \times 3) + (\text{ítem 2} \times 2) + (\text{ítem 3} \times 2) + (\text{ítem 4} \times 2) + (\text{ítem 5} \times 2) + (\text{ítem 6} \times 2) + \text{ítem 7} + (\text{ítem 8} \times 2) + (\text{ítem 9} \times 3) + (\text{ítem 10} \times 2) + (\text{ítem 11} \times 3) + \text{ítem 12} + \text{ítem 13} + (\text{ítem 14} \times 2) + \text{ítem 15} + \text{ítem 16}.$$

Considerando las medidas obtenidas para cada nivel de riesgo, se ajustaron unos puntos de corte que reprodujesen dicha distribución y que, además optimizasen los recursos policiales disponibles en función de la gravedad de los casos. La tabla 4.5 muestra los intervalos obtenidos para cada nivel de riesgo, en este segundo estudio.

*Tabla 4.5. Nivel de riesgo predicho por los agentes, intervalo de puntuaciones y porcentaje de casos*

Nivel de Riesgo predicho	Puntuación asociada	Porcentaje de casos
Nulo	$x \leq 5$	20,5%
Leve	$5 < x \leq 21$	53,8%
Medio	$21 < x \leq 51$	17,9%
Grave	$x > 51$	7,7%

Finalmente, se calculó de nuevo una tabla de contingencias cruzando el nivel de riesgo predicho por el agente, con el criterio externo obtenido con el formulario. En la tabla 4.6 se puede observar el cruce de los grupos de predicción con el criterio de riesgo real juzgado por los expertos.

*Tabla 4.6. Tabla de contingencia cruzando el nivel de riesgo predicho por el formulario con el criterio externo de gravedad.*

			Criterio externo de gravedad				Total
			Riesgo Nulo	Leve	Medio	Grave	
Nivel de riesgo predicho por el formulario	Nulo	Número casos	5	11	0	0	16
		% de Gravedad	83,3%	22,9%	0%	0%	20,5%
	Leve	Número casos	1	31	8	2	42
		% de Gravedad	16,7%	64,6%	57,1%	20,0%	53,8%
	Medio	Número casos	0	6	6	2	14
		% de Gravedad	0%	12,5%	42,9%	20,0%	17,9%
	Grave	Número casos	0	0	0	6	6
		% de Gravedad	0%	0%	0%	60,0%	7,7%
Total	Número casos	6	48	14	10	78	
	% de Gravedad	100%	100%	100%	100%	100%	

Se encontró que el 83,3% de los casos nulos fueron clasificados como de riesgo nulo. Por otro lado, del total de casos juzgados como graves por los expertos, el 60% fueron definidos como de riesgo grave, el 20% como medio y el 20% final como de riesgo bajo. Obsérvese que ningún caso nulo fue clasificado en los grupos medio o grave y, a la inversa, ningún caso grave fue clasificado en el grupo que no necesita medidas policiales (el nulo). También se consideró que la mayor presencia de casos totales en el grupo de nivel leve (53,8%), frente a los casos de riesgo medio (17,9%) y grave (7,7%) apoyaba la bondad de los puntos de corte propuestos. Considerando estos resultados se pudo afirmar que el instrumento presentaba una alta fiabilidad y una suficiente validez en la predicción de la gravedad de la VCP y, por tanto, en la asignación de las medidas policiales adecuadas para cada caso concreto, por lo que se decidió la puesta en práctica del VPR.

#### **4.3.3.- Génesis del VPER**

Con el VPR se podía estimar satisfactoriamente el nivel de riesgo de volver a sufrir violencia que presentaba una víctima en el momento de la denuncia. En función de ese nivel se aplicarían una serie de medidas policiales pensadas para prevenir la ocurrencia de esa violencia, eliminándola (ver más adelante). Pero era evidente que hacía falta un procedimiento para revalorar el riesgo de la víctima conforme pasara el tiempo y modificar contingentemente las medidas policiales, racionalizándolas: las medidas no se podían prolongar de modo indefinido, sino que tenían que ser incrementadas si el riesgo crecía o minimizadas en caso de disminución. Así nació el concepto de la **Valoración Policial de la Evolución del Riesgo** (VPER), al considerar la naturaleza del riesgo como algo dinámico y variable: el riesgo puede cambiar y, de hecho, cambia en función de diferentes variables o medidas que se tomen para reducirlo.

En el escenario del Sistema VDyG el riesgo debería disminuir precisamente debido a la aplicación de las medidas policiales que se hubieran establecido una vez hecha la valoración inicial del riesgo a través del VPR. La posterior evaluación del riesgo es de suma importancia bajo el punto de vista de la gestión de recursos humanos y materiales. Si no se revalúa el riesgo con cierta frecuencia, se puede estar dando protección a una víctima innecesariamente, y lo que puede ser peor, en detrimento de otra víctima que tenga más necesidad. Como afirman Echeburúa y colaboradores (2010), la valoración del riesgo en un momento dado es sólo una fotografía de la

situación en ese momento concreto y, cuando ha transcurrido un tiempo considerable o cuando las circunstancias han cambiado respecto a la valoración inicial, el valor de la predicción se va debilitando.

La literatura consultada en este sentido recomendaba la revaluación del riesgo en un periodo de tiempo desde los seis a los doce meses después del suceso (Kropp y cols., 2010), o cuando hubiese un importante cambio en el estado del caso, teniendo en cuenta que, en general, los casos más urgentes o más extremos suelen requerir revaluaciones más frecuentes. En el caso del Sistema VDyG, inicialmente se propuso que la revisión del nivel de riesgo debería seguir la secuencia que se detalla en la tabla 4.7, principalmente por razones de economía de medios humanos y materiales, buscando optimizar su gestión, aunque también se contempló que podrían ser ampliados o reducidos a solicitud expresa del órgano judicial competente (en cuyo caso se elaboraría un informe de actualización del nivel de riesgo que se comunicaría directamente al juez al objeto que resolviese lo procedente), o por la comprobación policial de una variación significativa en los elementos que en el día de la primera valoración determinaron el riesgo de la víctima y, consecuentemente, las medidas policiales de protección adoptadas.

*Tabla 4.7. Revisión periódica del nivel de riesgo*

Instrucción SES 10/ 2007	
Nivel de Riesgo	Días
Bajo	30
Medio	15
Alto	7

El proceso para hacer la evaluación de la evolución del riesgo debería ser similar al que se hacía con el VPR. Es decir, los evaluadores debían tener acceso a la máxima información posible, aunque esta segunda evaluación debería llevar menos tiempo, ya que, muchos aspectos de la víctima, autor y/ o situación ya se conocían con anterioridad, y esto debería agilizar mucho el proceso.

Para el procedimiento de construcción de los ítems de este segundo instrumento, inicialmente se propusieron los ítems extraídos de la literatura actual sobre el tema, y también de las sugerencias, comentarios y experiencia de los expertos del GPT. De hecho se constató su opinión para modificar la redacción inicial de los ítems así como para incluir otros considerados más importantes de cara a la evaluación del riesgo. A

diferencia del VPR, en el VPER a partir del ítem número 11, la redacción de los ítems adquirió un sentido inverso, de modo que a mayor presencia del indicador menor nivel de riesgo. Finalmente, y al igual que en el VPR, la información podía proceder de varias fuentes de información y las posibilidades de respuesta variaban desde “no se da/ no se sabe” a “se da poco”, “se da bastante” y “se da totalmente”.

#### **4.3.4.- Estudios Piloto del VPER**

Referente al VPER, se procedió a estudiar la validez del cuestionario siguiendo la misma metodología que con el VPR. Así se convocó a una muestra de expertos consistente en 56 agentes del CNP y 55 agentes GC en activo y, con amplia experiencia en casos de violencia de género, para que valorasen un caso cuya fecha de denuncia no fuese inferior a un mes ni superior a un año, de tal manera que hubiera dado ocasión a realizar el seguimiento de caso. Las tareas a realizar para el pilotaje del instrumento fueron las siguientes:

- I. Valorar a qué nivel de riesgo se ajustarían las medidas de protección tomadas en el momento inicial del caso (denuncia).
- II. Completar el formulario de VPER en función de la información recogida hasta el momento actual (meses después).
- III. Valorar qué medidas de protección serían apropiadas en el momento actual y, por tanto, en qué nivel de riesgo se encontraría la víctima en ese momento.

Durante la jornada de validación también se requirió de los agentes que aportasen cuantas sugerencias creyesen convenientes para mejorar la redacción e idoneidad de los indicadores. El análisis se hizo a través de 111 formularios, considerando los ítems del test como las variables predictoras. En función de las tareas a realizar se consideraron dos criterios: 1) la valoración actual que realizaba el experto sobre el nivel de riesgo del caso con el VPER; y 2) la detección del cambio entre la valoración inicial (con el VPR) y final del riesgo, que se obtendría restando la valoración actual (0 = nulo, 1 = leve, 2 = medio y 3 = grave) de la inicial (1 = leve, 2 = medio, 3 = grave) en función del juicio sobre el caso expresado por el experto. Este último punto era de especial importancia de acuerdo al objetivo final del formulario.

A través de un análisis de contenido, los expertos expresaron un alto grado de acuerdo con los indicadores del formulario así como con su idoneidad, sugiriendo tan solo pequeñas modificaciones en la redacción de algunos indicadores, ligeros cambios en el orden de presentación, y el añadido de un nuevo indicador para el futuro (ítem 17). Con respecto a la utilidad, no se presentó ninguna objeción a los ítems del VPER, expresando muchos expertos un grado de acuerdo total con la gran mayoría de ellos. En cuanto al análisis estadístico, los resultados descriptivos mostraron que el instrumento se ajustaba a lo diseñado por los expertos. Se realizaron dos análisis discriminantes tomando sucesivamente como variables dependientes el “riesgo actual” y el “cambio”, y como variables predictoras los 16 ítems del cuestionario, resultando que los 16 indicadores iniciales lograron clasificar correctamente al 54,1% de los casos en el primer análisis y al 49% en el segundo.

Tras este estudio se consideró satisfactoria la utilidad del instrumento a efectos de su contenido y adecuación a los objetivos para los que fue diseñado. Sin embargo, los resultados estadísticos no refrendaban a un nivel de significación del 100% la validez de contenido. Esto hacía que se debiera estudiar lo que había fallado, si el instrumento, el criterio o la relación entre ambos. Los análisis de contenido prácticamente descartaban que fuese el instrumento o su relación con la VCP lo que hubiese producido estos resultados, por tanto, era plausible suponer que el procedimiento de recogida del criterio no había sido el más adecuado. En este sentido, una explicación posible que diera cuenta de los resultados obtenidos era que las medidas policiales sobre las cuales se debía juzgar el experto aún no habían sido implementadas y, por ello, una vez que estuviesen activas podría cambiar mucho la valoración de cada caso. Se propusieron dos consideraciones: 1) la disponibilidad del VPER en casos reales, lo que facilitaría la disponibilidad de casos para la validación definitiva del VPER; y, 2) como segunda recomendación, e independiente de la línea de actuación decidida, se enfatizó la extremada utilidad de recoger criterios basados en medidas policiales y hechos reales cuantificables, y no solamente en valoraciones subjetivas realizadas por los agentes.

En relación a la fórmula de puntuación, ésta quedó definida como muestra la siguiente tabla:

*Tabla 4.8. Fórmula de puntuación protocolo VPER*

$\begin{aligned} \text{Puntuación de seguimiento} = & \text{ítem 1} + (\text{ítem 2} \times 3) + \text{ítem 3} + \text{ítem 4} + \text{ítem 5} \\ & + \text{ítem 6} + \text{ítem 7} + \text{ítem 8} + \text{ítem 9} + \text{ítem 10} + \text{ítem 11} + \text{ítem 12} + \text{ítem 13} \\ & + \text{ítem 14} + \text{ítem 15} + \text{ítem 16}. \end{aligned}$
---

Siguiendo este sistema de puntuación, los puntos de corte que se asignaron inicialmente fueron los siguientes:

*Tabla 4.9. Puntos de corte VPER corregidos*

Evolución del nivel de riesgo	Intervalo (Puntuación asociada)
+1	$x \leq 26$
0	$27 < x \leq 33$
-1	$34 < x \leq 36$
-2	$x > 36$

Una vez puesto en explotación este instrumento, a los tres meses, se llevó a cabo el segundo estudio piloto del VPER aprovechando 4.523 casos reales. Las conclusiones del estudio fueron las siguientes: el sistema de puntuación quedaría computarizado como muestra la tabla 4.10; fueron propuestas ligeras modificaciones (redacción y ponderación de ítems), y se introdujo un nuevo indicador: tendencia suicida del agresor.

*Tabla 4.10. Sistema de puntuación corregido VPER*

Indicadores	Valores				
	No se sabe	No se da	Se da poco	Bastante	Totalmente
Ítem 1	3	0	3	6	9
Ítems 2-10	3	0	1	2	3
Ítems 11-17	0	4	2	1	-1

#### **4.3.5.- Versiones definitivas de los protocolos de valoración del riesgo**

A los efectos de esta Tesis Doctoral el VPR y el VPER son instrumentos para la valoración del riesgo de VCP, diseñados para su uso por las fuerzas policiales. Ambos protocolos han ido sufriendo modificaciones desde el 2007, año de su creación, hasta su formato actual (Anexos I Y II) Como se ha descrito en apartados previos, el desarrollo de ambos protocolos se basó en una sistemática revisión de la investigación existente al respecto, especialmente focalizada en las principales guías para la valoración del riesgo de VCP existentes (SARA, B-SAFER y D.A.). Tanto el VPR como el VPER proporcionan al agente evaluador una *predicción* automática que permite establecer un nivel de riesgo (desde el nivel "no apreciado" al nivel "extremo"), el cual lleva aparejado a su vez un catálogo de medidas policiales pensadas para proporcionar protección a la víctima.



En el **VPR** existen 16 indicadores o ítems. Cada uno de ellos asociado a la evaluación de uno o varios factores de riesgo de la VCP recogidos en la literatura, tal y como se refleja en la tabla 4.11.

*Tabla 4.11. Factores de riesgo VPR relacionados con la literatura*

	<b>Factores de Riesgo</b>	<b>Estudios que demuestran su existencia como predictores de la violencia contra la pareja</b>
1	Violencia física	Campbell y cols., 2001; Dutton y Kropp, 2000; Fagan, Stewart y Hansen, 1983; Hilton y Harris, 2005; Hilton y cols., 2004.
2	Violencia sexual	Gondolf, 1988; Snyder y Frutchman, 1981; Goldsmith, 1990; Saunders, 1992; Stuart y Campbell, 1989; Walker, 1989.
3	Empleo de armas contra la víctima	Sonkin, Martin y Walker, 1985; Gondolf, 1988; Sonkin, 1987; Stuart y Campbell, 1989; Walker, 1989.
4	Amenazas o planes dirigidos a causar daño físico/ psíquico a la víctima	Gondolf, 1988; Sonkin, 1987; Dutton y Kropp, 2000; Hart, Dutton y Newlove, 1993; Stuart y Campbell, 1989; Walker, 1989.
5	Incremento y/ o repetición de episodios o amenazas de violencia	Sonkin, 1987; Stuart y Campbell, 1989; Campbell, 1995. Goldsmith, 1989;
6	Violencia psíquica del agresor hacia la víctima	Gondolf, 1988; Snyder y Frutchman, 1981; Kropp y cols., 1995.
7	Daños sobre la vivienda, bienes u otros objetos	Dutton y Kropp, 2000.
8	Incumplimiento de disposiciones judiciales cautelares	Hare, 1983; Harris, Rice y Quinsey, 1993.
9	Quebrantamiento de penas o medidas penales de seguridad	Harris, Rice y Quinsey, 1993.
10	Conducta desafiante y/ o menosprecio del agresor hacia la autoridad, sus agentes o hacia la víctima en presencia de éstos	Dutton, 1995; Dutton y Kropp, 2000; Hare, 1991; Saunders, 1992; Webster, Dickens y Addario, 1985.
11	Antecedentes penales/ policiales del agresor	Dutton y Kropp, 2000.
12	Abuso de sustancias tóxicas (estupefacientes), alcohol o medicamentos por parte del agresor	Monahan, 1981; Dutton y Hart y cols., 1993.
13	El autor muestra celos exagerados y/ u obsesivos por la víctima	Goldsmith, 1990; Saunders, 1992; Stuart y Campbell, 1989; Walker, 1989.
14	Problemas patentes en la relación de pareja	Campbell y cols., 2001; Dutton y Kropp, 2000; Andrews, 1991.
15	Problemas laborales y/ o financieros	Tittle, Villemez y Smith, 1978; Saunders, 1992.
16	Tendencia suicida del agresor	Goldsmith, 1990; Saunders, 1992; Stuart y Campbell, 1989.

Cada ítem o indicador tiene seis opciones de respuesta en función de la intensidad del indicador en cada caso concreto: no se sabe, no se da, bajo, medio, alto y extremo. La ponderación (puntuación asignada) en cada indicador y opción de respuesta se muestra en la tabla 4.12, resaltándose que los estudios empíricos de la presente Tesis se han basado en este sistema de puntuación. Esta tabla recoge a su vez los puntos de corte (intervalos) para cada uno de los cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo.

*Tabla 4.12. Ponderación de los ítems VPR y niveles de riesgo asignados*

Ítem	Valor ítem	No se da	No se sabe	Bajo	Medio	Alto	Extremo
1	5	0	2,5	5	10	15	20
2	3	0	1,5	3	6	9	12
3	5	0	2,5	5	10	15	20
4	4	0	2	4	8	12	16
5	4	0	2	4	8	12	16
6	2	0	1	2	4	6	8
7	1	0	0,5	1	2	3	4
8	2	0	1	2	4	6	8
9	3	0	1,5	3	6	9	12
10	2	0	1	2	4	6	8
11	2	0	2	4	8	12	16
12	2	0	1	2	4	6	8
13	1	0	2,5	5	10	16	20
14	3	0	1,5	3	6	9	12
15	1	0	0,5	1	2	3	4
16	1	0	2	4	8	12	16
		0	25	50	100	150	200
<b>Intervalos</b>			<b>X≤26</b>	<b>26&lt;x≤48,0</b>	<b>48,0&lt;x≤70</b>	<b>70&lt;x≤92,0</b>	<b>X&gt;92,0</b>
<b>Niveles de riesgo</b>			<b>No apreciado</b>	<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Extremo</b>

Cada ítem del VPR se puntúa en función de toda la información recogida por el agente policial pudiendo basarse en diferentes fuentes. En este sentido el protocolo permite indicar en qué fuente (o fuentes) se ha basado el usuario para asignar la puntuación final a cada indicador. Las fuentes posibles son Víctima (V), Agresor (A), Testigos (T) o Inspección ocular (I). Finalmente, el protocolo ofrece la posibilidad de cambiar el nivel de riesgo resultante por el sistema, mediante una pregunta abierta: “¿está usted de acuerdo con el resultado automático de la valoración?”. Si el agente no está de acuerdo puede cambiar el resultado al nivel de riesgo que estime más adecuado, razonando su respuesta.

Por su parte, el protocolo de valoración policial de la evolución del riesgo (VPER) es un instrumento compuesto por 17 ítems, que contempla indicadores

relacionados con: a) *la víctima*: goce de un entorno favorable para su seguridad, traslado de residencia habitual a un lugar con escasa posibilidad de ser conocida por el autor, realización de actos en contra de su propia seguridad, si inicia una nueva relación o empieza a convivir con otra pareja, si es especialmente vulnerable; b) *el agresor*: dificultades objetivas para agredir a la víctima, el autor se ha distanciado voluntaria y efectivamente, actitud pacífica, cumplimiento del régimen de separación, actitud cívica, arrepentimiento expreso, o por otro lado y puntuando de manera inversa, si el agresor está fugado o en paradero desconocido, si tiene dificultades para rehacer su vida, si presenta rasgos alarmantes; o, c) *con ambos*: víctima y autor tienen en su entorno personas que suponen una amenaza realista contra la integridad de la víctima.

El VPER tiene como objetivo reevaluar el riesgo y observar si han habido cambios significativos en la situación. Al igual que en el VPR la información puede provenir de una o varias fuentes (víctima, autor, testigos o informes técnicos). Respecto a las opciones de respuesta, cada ítem consta de cinco opciones cuya puntuación asignada está recogida en la tabla 4.13. Obsérvese que los indicadores 1 a 10 tienen un sentido de puntuación diferente a los del 11 al 17 mostrando la opción “totalmente” un nivel de riesgo en los primeros y uno mayor en los segundos.

*Tabla 4.13. Magnitud en las opciones de respuesta del VPER.*

<b>VPER- Magnitud</b>					
<b><i>Ítem</i></b>	<b>No se sabe</b>	<b>No se da</b>	<b>Se da poco</b>	<b>Bastante</b>	<b>Totalmente</b>
ítem 1	3	0	3	6	9
ítem 2-10	3	0	1	2	3
ítem 11-17	0	4	2	1	-1

En función de la puntuación resultante, y siempre con relación al último nivel de riesgo disponible, los resultados del VPER pueden aumentar el nivel, mantenerlo o disminuirlo. La tabla 4.14 ofrece los puntos de corte, los intervalos y la acción que se realiza. El VPER, al igual que el VPR, permite al agente policial a través de un último ítem cambiar el resultado ofrecido por el sistema en caso de no estar de acuerdo con el resultado obtenido.

***Tabla 4.14. Procedimiento de valoración del VPER en función del VPR***

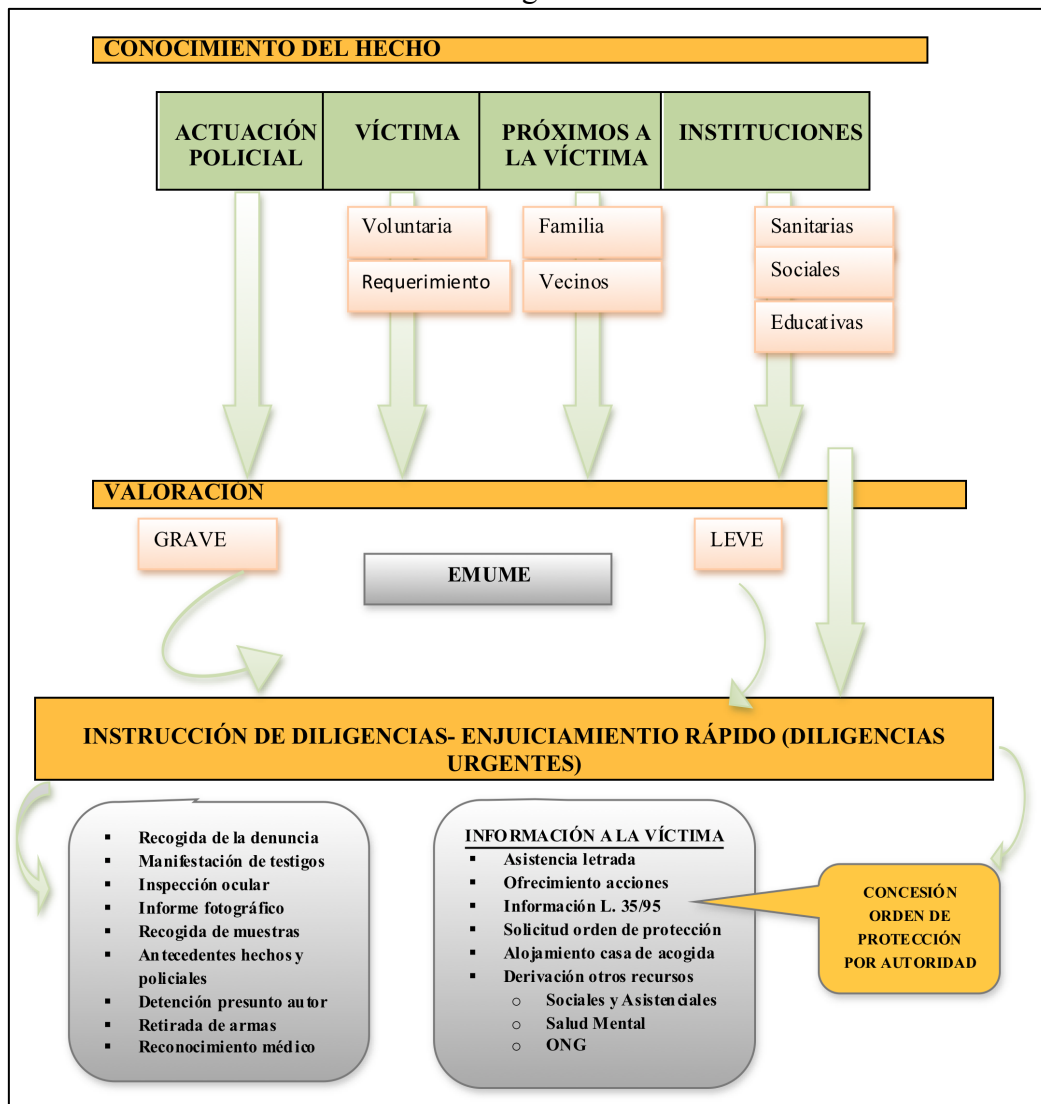
<b>La valoración anterior es una VPR</b>	<b>Acción</b>
X<29	Sube un nivel
29>=x<=35	Mantiene un nivel
36>=x<=43	Baja 1 nivel
x>43	Baja 2 niveles
<b>La valoración es una VPER con puntuación menor de 29</b>	<b>Acción</b>
X<29	Mantiene un nivel
29>=x<=35	Baja 1 nivel
36>=x<=43	Baja 2 niveles
x>43	Baja 3 niveles
<b>La valoración anterior es una VPER con puntuación entre 36 y 43</b>	<b>Acción</b>
X<29	Sube 2 niveles
29>=x<=35	Sube 1 nivel
36>=x<=43	Mantiene un nivel
X>43	Baja 1 nivel
<b>La valoración anterior es una VPER con puntuación mayor de 43</b>	<b>Acción</b>
X<29	Sube 3 niveles
29>=x<=35	Sube 2 niveles
36>=x<=43	Sube 1 nivel
x>43	Mantiene nivel

Estos dos protocolos de valoración del riesgo fueron desarrollados en un periodo de aproximadamente tres años, comenzando en el 2007 y, a fecha de redacción de esta Tesis siguen en proceso de estudio y mejora. Se diseñaron para estimar con un cierto grado de probabilidad que un individuo cometa VDG en el futuro, por lo que nunca ofrecerán datos de probabilidades absolutas o relaciones causa-efecto. Ninguno de los protocolos está diseñado para valorar el riesgo de otro tipo de violencia, como la violencia a los niños o la violencia sexual, que ocurran fueran de los ámbitos de la VDG. Del mismo modo tampoco está recomendado su uso en aquellos casos donde se sospeche o se sepa que la persona sufre un trastorno mental. Como ya se avanzó anteriormente, el evaluador va a ser un policía no especializado en VDG, con poca o nula experiencia en evaluación psicológica, por lo que, a diferencia de otras guías de valoración del riesgo (SARA, B-SAFER), los instrumentos VPR y VPER están diseñados para su uso por evaluadores que no tengan experiencia en evaluación ni en el área de la VDG. Los agentes policiales, en este caso evaluadores, no tienen por qué completar un programa de formación específica. La formación puede ser cubierta de diferentes maneras, incluyendo la autoformación a través de la intranet corporativa (del CNP o de la GC), o la asistencia a determinados cursos y talleres que cada cuerpo policial ofrece con relativa frecuencia respecto al tema.

#### 4.3.6.- Procedimiento de actuación policial

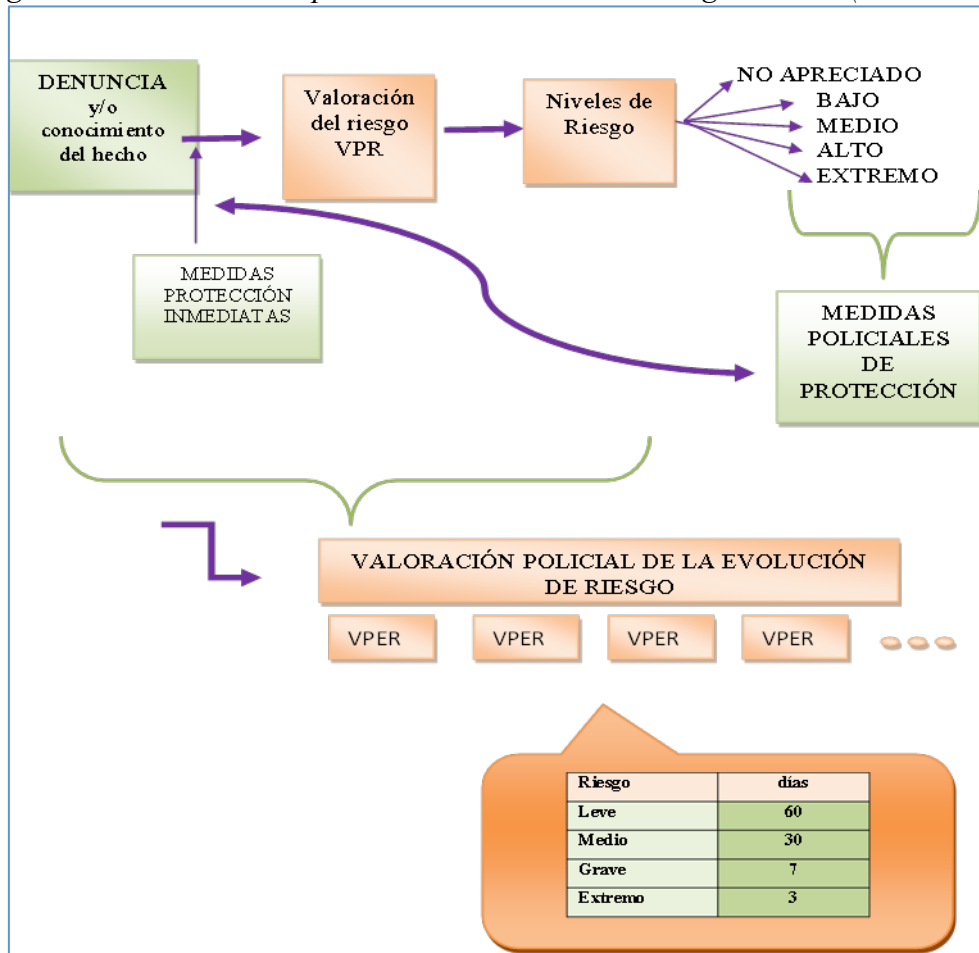
Una vez descritos los instrumentos de valoración del riesgo VPR y VPER, es conveniente explicitar el procedimiento de actuación policial en casos de VDG, para entender dónde se encuentra incardinado el proceso de valoración del riesgo de VCP. La figura 4.1 muestra el procedimiento de actuación policial en casos de VDG dentro de la GC, el cual queda recogido y desarrollado en la última Norma Técnica de la Guardia Civil (1/ 2008), reflejándose la **secuencia de actuaciones** que se debe seguir desde que se tiene conocimiento o cualquier indicio que pueda reunir las características de delito o falta por VDG. Conviene recordar que el eje sobre el que se mueve todo este sistema es el Sistema VDyG.

*Figura 4.1. Procedimiento de actuación policial de la Guardia Civil en casos de VDG asignados.*



En cuanto a la valoración del riesgo, la figura 4.2 muestra cuáles deben ser los pasos efectuados con respecto a las medidas policiales administradas y los niveles de riesgo

*Figura 4.2. Dinámica del proceso de valoración del riesgo de VCP (SES 5/2008)*



Como se aprecia en la figura anterior, el procedimiento comienza con la denuncia o conocimiento del hecho. Éste puede producirse de tres modos distintos (Circular nº 1/ 2003):

- Denuncia en dependencias policiales.
- Denuncia verbal ante una patrulla sobre la existencia del hecho.
- Comentarios o rumores indirectos sobre la existencia del hecho, (verificando su verosimilitud).

Acto seguido, y después de haber efectuado las diligencias necesarias y contrastada la información, se procede a efectuar la primera valoración del riesgo (VPR). Siguiendo la última instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (5/ 2008), se deberán cumplimentar primero los apartados del formulario cuya respuesta aparezca con

nitidez en el atestado, solicitando de los intervinientes sólo los detalles que falten. Si se prevé que la instrucción de diligencias pueda dilatarse en el tiempo, se realiza una primera valoración de riesgo tan pronto como se haya tomado declaración a la víctima, con el objetivo de adoptar las medidas policiales de protección más pertinentes. Esta actuación se realiza para posteriormente llevar a cabo otra nueva valoración, una vez recopilada nueva información y finalizadas las diligencias del atestado, siendo esta última la valoración de riesgo que determinará las medidas policiales definitivas.

El VPR se cumplimenta en el sistema informatizado, que en función del algoritmo de puntuación asigna automáticamente uno de los cinco posibles niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Dichos niveles pueden ser modificados por el policía o el guardia civil de no existir conformidad con la asignación automática, prevaleciendo entonces el nivel asignado por el agente. El resultado de dicha valoración se hace constar en la oportuna diligencia, que se incorpora al atestado. En el caso de que el riesgo sea diferente a “no apreciado” se recoge información sobre los principales factores de riesgo, y se informará de dicho nivel de riesgo a la víctima. Como se ha dicho, cada nivel de riesgo tiene asignado un catálogo de medidas policiales de aplicación inmediata (ver más adelante), así como un tiempo para realizar una nueva valoración policial de evolución del riesgo. Dichas medidas policiales son en todo caso comunicadas a la víctima y, si procede, al autor.

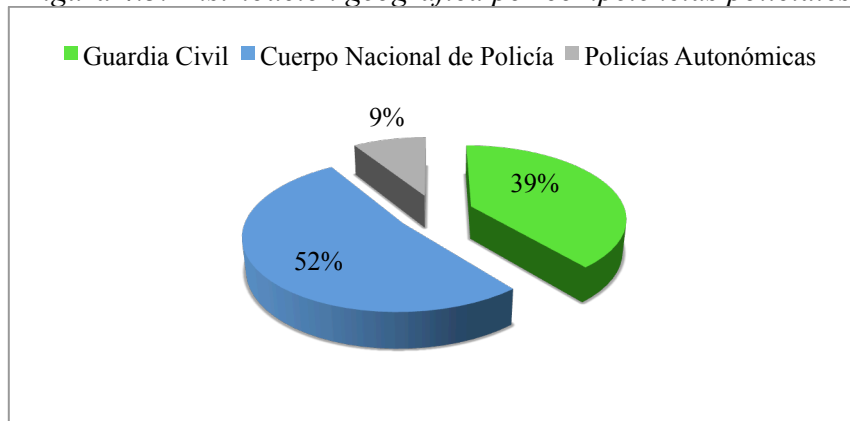
Transcurrido el plazo correspondiente, se cumplimenta el VPER, también en el sistema informático, obteniendo de modo automático una nueva valoración de riesgo (manteniendo, incrementando o disminuyendo el nivel original), lo que conlleva la revisión de las medidas policiales y la apertura de un nuevo plazo para la revisión del riesgo. Llegado ese nuevo plazo, se cumplimenta otro VPER, y así hasta que se llega al nivel de riesgo “no apreciado”, en que cesan las valoraciones, salvo que se produzcan nuevos hechos delictivos que motiven la iniciación de un nuevo ciclo de valoraciones / protección.

Este procedimiento policial se adapta a las singularidades de cada organización policial, de modo que la actuación en el ámbito de VDG en las FCS (GC y CNP) tiene algunos matices que les hacen diferentes. En primer lugar, es conveniente mencionar la distribución geográfica y el reparto de competencias que tras la Ley Orgánica 2/ 1986 quedan establecidas para ambos cuerpos policiales. La figura 4.3 refleja la distribución



geográfica atendiendo a las demarcaciones de los distintos cuerpos policiales competentes en materia de seguridad ciudadana (Ortega, 2003).

*Figura 4.3. Distribución geográfica por competencias policiales*



De acuerdo a la Ley Orgánica 2/ 1986, las demarcaciones competentes de la GC suelen ser, salvo contadas excepciones, poblaciones inferiores a 50 mil habitantes, por lo que son en su mayoría de carácter rural, correspondiendo las zonas urbanas al CNP. La VDG no se experimenta igual en zonas rurales que en zonas urbanas, puesto que las diferencias socioculturales condicionan diferencias en las relaciones de género. Es en las poblaciones de más de 50 mil habitantes donde, en general, se produce una mayor declaración de violencia (MTAS, 2006). Aspectos como el “*que dirán*” siguen primando en pequeños pueblos caracterizados por la invisibilidad de la violencia. Esto hace que los casos denunciados en demarcación de la GC sean inferiores a los presentados en zona del CNP (independientemente del censo de población). También las diferencias pueden explicarse por un desigual desarrollo de políticas, planes de igualdad y género, o por diferencias en la implantación o accesibilidad a los recursos sociosanitarios (Krug y cols., 2002).

Por otro lado, y analizando las diferencias desde un prisma más operacional, en la GC, existen componentes que se encargan casi exclusivamente de la VDG, ocupándose tanto de recibir y cumplimentar las denuncias y/ o los atestados, como de realizar las valoraciones del riesgo. En el CNP funcionan de manera diferente, puesto que el VPR es cumplimentado en la ODA (oficina de denuncias), donde cabe resaltar la sobrecarga de trabajo ajeno a VDG que existen en estas unidades; y una vez cumplimentado, es la SAF o en su defecto la UPAP las que se encargan de las

investigaciones policiales y de hacer el seguimiento con el VPER. Este hecho implica que sean funcionarios diferentes los que se encarguen de estos cometidos. En el apartado empírico de esta Tesis Doctoral se explicitarán las diferencias encontradas por los dos cuerpos policiales con respecto a diferentes conceptos de medida y evaluación.

#### **4.4.- MEDIDAS POLICIALES ASOCIADAS A LOS NIVELES DE RIESGO**

Como se avanzó en la figura 4.2, la protección a las víctimas comienza en el mismo momento en que presentan denuncia, que es cuando se recogen todos los aspectos de interés que permiten conocer la situación de maltrato, se les informa de sus derechos como víctimas de VDG, y en caso de ser necesario se las traslada a los centros sanitarios o de asistencia social. Tras la realización de la valoración y asignación de un nivel de riesgo al caso, se decide cómo protegerlas con una serie de medidas policiales concretas que se aplican de forma inmediata. En ese momento el caso es grabado en el Sistema VDyG.

Estas medidas fueron diseñadas al mismo tiempo que se iba trabajando en la validez y fiabilidad de los protocolos. Para su desarrollo, se revisaron algunas de las medidas policiales que habían sido confeccionadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria<sup>2</sup> en su intento de creación de protocolos de valoración policial de riesgo, así como las medidas adoptadas por la *Ertzaintza* en la elaboración de sus protocolos propios. Una vez consultadas estas fuentes, el GTP seleccionó las medidas que creyeron podían estar más indicadas para proporcionar protección de forma proporcionada a la valoración de riesgo previa, quedando configuradas como indica la Instrucción de la SES 10/ 2007. Esas primeras medidas fueron modificadas en dos ocasiones (Instrucción 14/ 2007 e Instrucción 5/ 2008). Las que están en vigor a la hora de redactar esta Tesis Doctoral vienen recogidas en la última Instrucción y se detallan en el Anexo III.

Fundamentalmente, en el momento en que una víctima denuncia, se mantiene un contacto permanente con ella, bien a través de contactos telefónicos o con visitas aleatorias. En ambos casos, el objetivo es recabar cualquier tipo de información o incidencia relacionada con el caso, al objeto de detectar modificaciones de las circunstancias que puedan afectar a su seguridad. Con las visitas se pretende mantener un contacto más cercano con la víctima. El objetivo también es observar directamente el

---

<sup>2</sup> La comunidad Autónoma de Cantabria confeccionó un protocolo con tres niveles de protección.

entorno más próximo al domicilio o lugar que se determine para comprobar que la persona agresora no se encuentre allí, atendiendo especialmente aquellos casos más vulnerables.

A partir del nivel medio de protección se contemplan medidas de **vigilancia**, siendo ocasional para el nivel de riesgo medio, frecuente para niveles altos de riesgo y permanente para el nivel de riesgo extremo. Este último caso consiste en la protección de la víctima por medio de la asignación de personal que, de manera exclusiva, realiza esta tarea las 24 horas del día. En este máximo nivel de protección existe también un **control intensivo de los movimientos del agresor**, con el objetivo de conocer las actividades de la persona agresora y comprobar que no invade la zona de protección establecida para la víctima. Esta tarea se realiza mediante controles no invasivos de agentes uniformados y no uniformados en las zonas o lugares de posible contacto con la víctima a los que el agresor tiene prohibido acercarse.

En el nivel de riesgo medio también se contempla la existencia del servicio de **tele-asistencia o tele-protección**, consistiendo éste en un sistema de conexión y coordinación gratuito (mediante teléfonos móviles programados) entre las mujeres destinatarias de la protección y distintos servicios como la GC, CNP, Policía Local, línea 900 71 35 35. Este servicio tiene como objetivo proteger a las mujeres mediante una rápida localización e intervención por parte de las fuerzas policiales, y corresponde con una de las medidas urgentes acordadas por el Consejo de Ministros.

#### **4.5.- PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA VDyG**

El 10 de julio de 2007, la SES dictó la Instrucción 10/ 2007 por la que se aprobó el Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de Violencia Contra la Mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/ 2004 de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal<sup>3</sup>, poniéndose en explotación los formularios VPR y VPER<sup>4</sup>, a través del Sistema VDyG, aplicándose desde entonces a los casos reales de nuevas denuncias y a los casos de víctimas que hubieran denunciado

---

<sup>3</sup> Contiene instrucciones sobre los momentos a emplear los formularios, quienes son los encargados de cumplimentarlos, los niveles de riesgo resultantes, las medidas policiales a aplicar, y los plazos de revisión.

<sup>4</sup> El VPER se puso en explotación el 9 de agosto.

antes de esa fecha pero que tuvieran medidas judiciales de protección vigentes en julio de 2007.

Previamente se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden del Ministerio del Interior 12.742, por la que se creaba el fichero de datos de carácter personal, violencia doméstica y de género. Esta Orden en el apartado “c” hacía mención a que las unidades especializadas en VDG podrían acceder a la información necesaria para el desarrollo de las actuaciones que le estuviesen encomendadas en relación con la persecución, seguimiento, control y ejecución de las medidas de protección a las víctimas, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones.

El 26 de julio comenzó a darse de alta a los primeros usuarios. Es a partir de este momento cuando se puede considerar que realmente se pone en explotación el nuevo sistema de seguimiento integral de los casos de VDG. Durante julio, agosto y septiembre de 2007 las FCSE hicieron un gran esfuerzo formativo para asegurar que los miles de agentes encargados de la valoración del riesgo adquiriesen la suficiente destreza en esta tarea. Por otro lado, y habida cuenta de que a mediados de septiembre se habían realizado 12.095 valoraciones con el VPR y 2.089 con el VPER, se habilitaron mecanismos para que llegaran al GTP las sugerencias y dificultades de los valoradores, en aras de la mejora de los formularios y del procedimiento. A tenor de ello, se comprobó que el VPR se entendía y aplicaba razonablemente bien. Sin embargo, se introdujeron ligeras modificaciones en la ponderación de algunos ítems, confeccionando una segunda versión del cuestionario que se puso en explotación a las 11:45 horas del 1 de octubre del 2007. Por otro lado el VPER planteaba algunas dificultades, lo que obligó a introducir cambios en la redacción y el orden de los ítems, incorporando incluso uno nuevo. Estas últimas versiones son las que serán objeto de la presente Tesis Doctoral. Por último, es preciso indicar, que a fecha de enero 2012, existen nuevas versiones de ambos protocolos con ligeras modificaciones respecto a las anteriores.



## CAPÍTULO 5

### INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS

#### 5.1.- INTRODUCCIÓN

Con el presente capítulo se finaliza la parte teórica de esta Tesis Doctoral y se introduce el apartado empírico. La conceptualización y el marco normativo relativo de la VDG ha permitido destacar la relevancia que presenta dicho fenómeno delictivo tanto a nivel nacional como internacional, erigiéndose como un problema importante de seguridad para un amplio sector de la población, y constituyéndose como una de las preocupaciones principales en las agendas políticas. Así mismo, se han ido exponiendo las respuestas que la sociedad española ha tenido que ir desarrollando para prevenir y proteger a las víctimas de este fenómeno. En este sentido, la valoración del riesgo de violencia de género ha mostrado ser una estrategia útil para reducir esta violencia a través de la predicción. Una conclusión relevante del uso de esta nueva técnica es que la violencia se puede predecir razonablemente valorando los factores de riesgo de que se produzca. De este modo se han ido desarrollando instrumentos de valoración del riesgo que permiten estimar la probabilidad de que se cometan nuevas agresiones. Dentro de la VDG las valoraciones precisas del riesgo son de gran ayuda para las víctimas, para las FCS encargadas de prevenir y erradicar el delito y, aunque suene paradójico, para los agresores a la hora de diseñar programas de tratamiento (Andrés-Pueyo y cols., 2008). Con este contexto de fondo, y debido a las dimensiones que a nivel nacional e internacional alcanza este atentado a los Derechos Humanos, se hace preciso realizar estudios como los que se presentan en esta investigación.

La segunda parte de esta Tesis Doctoral se va a centrar en presentar la investigación en relación con el principal objetivo: la validación del procedimiento de valoración del riesgo de VDG desarrollado por el Ministerio del Interior para las FCSE españolas. A tal efecto es conveniente comenzar señalando que en este proceso se han seguido las recomendaciones que la *American Educational Research Association* (AERA), la *American Psychological Association* (APA), y el *National Council on Measurement in Education* (NCME), efectúan sobre el proceso de validación de instrumentos, tal y como están recogidas en los *Standards for Educational and Psychological Testing* en su versión más reciente (1999). En este sentido, el siguiente

apartado tratará de contextualizar e incardinar los estándares de la evaluación psicológica. Seguidamente se presentarán los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con los estudios empíricos, y finalmente se explicará la procedencia de los datos, los procesos de depuración y filtrado que han sido efectuados, así como la metodología con la que se ha trabajado en cada estudio empírico.

## **5.2.- LOS ESTÁNDARES DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA**

Desde 1954, diversas organizaciones internacionales han desarrollado cuatro versiones de los estándares para la evaluación psicológica y educativa (APA, AERA y NCME, 1966, 1974, 1985 y 1999). Esta última versión será la que sirva de marco de referencia para la parte empírica de esta Tesis Doctoral.

El término *estándares* se refiere a una serie de reglas o bases que indican excelencia, calidad o valores aplicados a acciones, procesos o productos (Escorial, 2008). Los estándares también sirven como un medio para comunicar lo que son las prácticas comúnmente aceptadas por una comunidad profesional o académica. Los *Standards for Educational and Psychological Testing* (1999) se limitan, a un conjunto de estándares técnicos para el desarrollo, administración, interpretación y uso de los instrumentos de medición, así como para evaluar las prácticas relacionadas con el uso de estos instrumentos. Indican lo que se espera o es aceptable en la construcción, uso e interpretación de los resultados de las pruebas estandarizadas u otros instrumentos de medición (Anastasi, 1986). Se basan en la premisa de que:

*Una aplicación y evaluación efectiva mediante test requiere que todos los participantes que toman parte en el proceso de desarrollo de los mismos posean el conocimiento, las habilidades y las competencias pertinentes para desempeñar su papel en este proceso, así como que tomen conciencia de los factores personales y contextuales que pueden influir en el proceso de desarrollo del test (APA, AERA y NCME, 1999).*

La intención de publicar estos estándares por parte de la APA, la AERA y el NCME junto el propósito que persiguen estas prestigiosas instituciones con los mismos, queda explícita en el siguiente párrafo de la última edición de los mismos.

*El propósito de publicar los estándares es proporcionar criterios para la evaluación de tests psicológicos, de las prácticas que empleen la utilización de tests, y de los efectos de su uso. Aunque la evaluación de lo apropiado que es un test o su utilización y aplicación debería depender de una manera importante en el juicio del profesional, los estándares proporcionan un marco de referencia para asegurar que los aspectos relevantes son considerados (APA, AERA y NCME, 1999).*

La versión de 1999 de los estándares para las pruebas educativas y psicológicas está organizada en tres partes y 15 capítulos, que contienen un total de 264 estándares. Cada capítulo comienza con una introducción que sirve de contexto a cada grupo de estándares, y después de cada uno hay un comentario que facilita su interpretación. La primera parte está dedicada a la construcción, evaluación y documentación de un test psicológico y se compone de seis capítulos que contienen 123 estándares. Estos capítulos son: validez (24 estándares), fiabilidad y errores de medición (20), desarrollo y revisión (27), escalas, normas y comparación de puntuaciones (21), administración, asignación de puntuación e informes (16) y documentación de apoyo para los tests (15).

La segunda parte está dedicada a los asuntos de Justicia, equidad e instrumentos libres de sesgo para las personas con necesidades especiales y/ o con distintos trasfondos lingüísticos y/ o culturales. Esta parte se compone de cuatro capítulos que abarcan un total de 48 estándares. Estos capítulos son: la Justicia en el desarrollo del test y en su uso (12 estándares), los derechos y responsabilidades de las personas a las que se administran los tests (13), evaluando individuos de diverso bagaje lingüístico (11) y evaluando individuos con discapacidades (12).

Finalmente, la tercera parte, dedicada a las aplicaciones de las mediciones con tests, está compuesta por 93 estándares que se agrupan en cinco capítulos: las responsabilidades de los profesionales que emplean tests (24 estándares), tests psicológicos y evaluación (20), tests educativos y evaluación (19), los tests en contextos laborales (17) y los tests en evaluación de programas y políticas públicas (13).

La tabla 5.1 permite sintetizar la estructura de los estándares de 1999 desarrollada en los párrafos anteriores.



*Tabla 5.1. Estructura de los estándares de 1999 de la APA*

Parte	Capítulo	N Estándares
<b>Parte I</b>	1-Validez	24
	2- Fiabilidad y errores de medición	20
	3- Desarrollo y revisión	27
	4-Escalas, normas y comparación de puntuaciones	21
	5- Administración, asignación de puntuación e informes	16
	6- Documentación de apoyo para los test	15
	<b>TOTAL PARTE I</b>	<b>123</b>
<b>Parte II</b>	7 La justicia en el desarrollo del test y en su uso	12
	8- Los derechos y responsabilidades de las personas a las que se administran los test	13
	9- Evaluando individuos de diverso bagaje lingüístico	11
	10-Evaluando individuos con discapacidades	12
	<b>TOTAL PARTE II</b>	<b>48</b>
<b>Parte III</b>	11-Las responsabilidades de los profesionales que emplean test	24
	12- Test psicológicos y evaluación	20
	13- Test educativos y evaluación	19
	14-Los test en contextos laborales	17
	15- Los test en evaluación de programas y políticas públicas	13
	<b>TOTAL PARTE III</b>	<b>93</b>
	<b>TOTAL ESTÁNDARES = 264</b>	

Es importante señalar que, aunque estos estándares sean prescriptivos, no constituyen en sí mismos un mandato ni una obligación. Representan simplemente un acuerdo y un compromiso ético de todas las personas involucradas e interesadas en el desarrollo, la administración y buen uso de los resultados de los instrumentos de medición. En ellos se reconocen los derechos y responsabilidades de las personas u organizaciones que construyen los instrumentos, así como los de las personas a las que se les administran y aquellas que utilizan los resultados. Estos estándares también reflejan las expectativas de lo que constituyen instrumentos de medición con la evidencia técnica adecuada. En este sentido, no sólo deberían servir de referencia a las personas interesadas en el desarrollo de instrumentos sino también al resto de profesionales y usuarios en general para asegurarse de la calidad de los mismos, del uso e interpretación responsable de los resultados y del alcance de las consecuencias. En resumen, el contenido de los estándares de 1999 (APA, AERA y NCME, 1999) “es el referente más claro y ortodoxo para la evaluación, construcción y utilización de los test” (Elosua, 2003).

En este momento, resulta preciso indicar que los instrumentos de valoración del riesgo VPR y VPER, objeto de validación de esta Tesis Doctoral, son considerados instrumentos de medida, y por tanto, tests que tienen la finalidad de obtener información acerca de la situación de riesgo que presenta una víctima que denuncia un hecho VDG. En este sentido es importante exigirles que sean fiables y válidos. **Estas dos características, son fundamentales en todo instrumento de medida, y en particular, la validez resulta de máxima importancia en el proceso de validación de cualquier cuestionario.** Por todo ello, el procedimiento de validación que en esta investigación se presenta, se guía por los estándares de Psicología y Educación antes enunciados, por entenderse que los instrumentos VPR y VPER pueden acogerse a las recomendaciones propuestas que los estándares recogen para el proceso de construcción y validación de los tests.

### **5.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

El objetivo principal que se persigue en la parte empírica de esta Tesis Doctoral es presentar la validación del procedimiento de valoración del riesgo en los casos de VDG desarrollado por el Ministerio del Interior para las FCSE<sup>1</sup>, a través de dos instrumentos: a) la Valoración Policial del Riesgo inicial en el momento de la denuncia (VPR), y b) la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo conforme va pasando el tiempo y se aplican medidas policiales para impedir que se produzca nueva violencia (VPER). Este objetivo principal lleva implícitos una serie de objetivos subsidiarios. Es decir, para alcanzar este objetivo se desarrollarán una serie de estudios independientes, cada uno de ellos destinado a recabar evidencia empírica acerca de alguna de las fuentes de evidencia de validez consideradas en los estándares (APA, AERA y NCME, 1999). En concreto, los objetivos secundarios que guiarán los estudios de la parte empírica de la presente tesis serán:

- 1.- Analizar **descriptivamente** los elementos que forman parte de los instrumentos objeto de validación (VPR y VPER).
- 2.- Determinar la **fiabilidad** de ambos protocolos de valoración del riesgo.

---

<sup>1</sup> Es preciso indicar que en el momento de la recogida de datos de esta Tesis Doctoral, tan sólo tenían acceso al Sistema VDyG las Policías estatales (FCSE). Desde el 1-1-2011 los *Mossos D'Esquadra* (policía autonómica de la Comunidad de Cataluña) y algunas Policías Municipales también cuentan con dicho acceso.

3.- Determinar el número y naturaleza de los factores (**estructura dimensional**) subyacente a los cuestionarios VPR y VPER.

4.- Analizar la **robustez** de los cuestionarios a través de los **coeficiente de congruencia factorial** y de la **invarianza factorial** a partir de los AFC Multigrupos.

4.- Analizar la **validez externa** a partir de tres variables criterio evaluadas con posterioridad a la aplicación de los protocolos, a saber: conformidad del agente satisfacción de la víctima y porcentajes de mejora.

5.- Analizar los resultados hallados con respecto a las **muestras policiales** de donde proceden los datos.

En definitiva, la parte segunda de esta Tesis Doctoral, aglutinará un conjunto de estudios y análisis encaminados a proveer a las puntuaciones de los instrumentos de una interpretación teórica coherente con relación a un contexto de uso bien delimitado. Es importante indicar en este punto que, pese a que cada estudio será presentado de manera independiente, en aras de mantener la claridad en la exposición, los resultados de cada uno de ellos serán integrados y considerados de manera conjunta en una discusión general final. En la tabla 5.2 se presentan de manera esquemática los estudios empíricos que compondrán esta parte de la investigación, indicando en cada caso la fuente de evidencia empírica para el análisis de la validez que cada estudio pretende abarcar.

*Tabla 5.2. Estructura de la parte empírica de la tesis*

ESTUDIO	EVIDENCIA	TIPO	OBJETIVOS
1	ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS Y FIABILIDAD	CONJUNTO DE ANÁLISIS QUE VALORAN ELEMENTOS Y VARIABLES RELEVANTES	Estudio de los estadísticos descriptivos y fiabilidad de los elementos y variables de los instrumentos de valoración del riesgo VPR y VPER.
2	VALIDEZ INTERNA	ESTRUCTURA INTERNA DIMENSIONALIDAD	Determinar el número mínimo de factores necesarios para explicar la máxima varianza observada. (Estructura dimensional; Stout, 1990).
3	VALIDEZ EXTERNA	RELACIONES TEST/CRITERIO	Comprobar el grado de predicción de la/ s variable/ s consideradas en el test sobre varios criterios externos evaluados con posterioridad (Martínez Arias, 1995).

#### **5.4.- OBTENCIÓN Y DEPURACIÓN DE DATOS**

A efectos de validar el procedimiento de valoración de riesgo de violencia, desde el equipo de investigación en materia de VDG del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid (al que pertenece la autora de esta Tesis Doctoral) se formuló una solicitud de datos al Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI)<sup>2</sup>, en donde se administra el Sistema VDyG. Seleccionando una serie de variables<sup>3</sup> con el objetivo de validar los protocolos, el GESI realizó una extracción de la base de datos, conteniendo información recogida desde agosto del año 2007 (en que el Sistema VDyG se puso en explotación) hasta diciembre del año 2009, obteniéndose de este modo información sobre 119.479 casos reales. Como se ha visto en el capítulo cuarto, al Sistema VDyG tienen acceso en tiempo real (tanto para grabar como para consultar) decenas de miles de usuarios policiales designados para abordar el tema de la VDG. Las valoraciones de riesgo se realizan de modo automático a través del sistema, por lo que el Sistema VDyG contiene (entre otra mucha información) los resultados de todos los protocolos de valoración del riesgo VPR y VPER que se realizan en el día a día a nivel estatal.

La primera tarea a realizar fue el estudio y depuración de los datos extraídos, puesto que a lo largo del periodo de tiempo comprendido en la extracción se habían producido modificaciones notables en los protocolos objeto de estudio. Hay que recordar que el Sistema VDyG se puso en funcionamiento en el verano del año 2007, y que en esos momentos el procedimiento se guiaba por la Instrucción de la SES 10/ 2007, que fue modificada el 10 de octubre de ese mismo año (Instrucción 14/ 2007),

---

<sup>2</sup> El GESI era el órgano perteneciente al Ministerio del Interior encargado de dar impulso a la formación específica para la especialización de los altos cargos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, era el responsable de elaborar las estadísticas e investigaciones sobre la situación y tendencias de la seguridad en España. Esta información era transmitida a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior quienes en consecuencia elaboraban políticas de seguridad. Es preciso indicar en este momento que a fecha de 18 de febrero de 2012 se ha modificado la estructura básica del Ministerio del Interior (RRDD 400/2012, de 17 de febrero). Según este Real Decreto, queda suprimido el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, pasándose a llamar Gabinete de Coordinación y Estudios, dependiendo directamente del Secretario de Estado de Seguridad.

(<http://www.mir.es/MIR/estorganica/estructura/secestseg/secestsel.html>)

<sup>3</sup> En concreto se seleccionaron las siguientes variables: datos de identificación (número registro de valoración, fecha y hora de la valoración, número de registro víctima, número registro de autor, cuerpo policial que realizaba la valoración, número de registro valorador, versión del formulario); indicadores de los ítems (intensidad de respuesta al ítem, indicadores infrecuentes respecto al autor, indicadores infrecuentes respecto a la víctima); resultados de la valoración, conformidad profesional con el resultado; y 191 variables más en relación a datos identificativos del hecho, del autor y de la víctima.

introduciendo cambios como los plazos de revisión de las valoraciones del riesgo. En julio del año 2008, se publicó una nueva Instrucción de la SES (5/ 2008), introduciendo un nuevo valor de riesgo (riesgo extremo) a los valores iniciales, y modificándose de nuevo los plazos de revisión del riesgo. Igualmente, durante una primera inspección de los datos de la extracción original, se comprobó la existencia de diversas deficiencias, especialmente en los casos correspondientes a los primeros meses de su aplicación (no se daba el cumplimiento de los plazos que dictaba la Instrucción para la realización de VPRs y VPERs; se detectaron 8.375 repeticiones de casos; existían casos con varios VPR separados por meses; y, en fin, existían casos que estaban configurados en varias filas del archivo). Del mismo modo, se detectó que existía una gran heterogeneidad en la formación de los agentes con respecto al empleo del Sistema VDyG y que existían también muchas diferencias territoriales en relación con los accesos de los agentes al propio sistema en las distintas Unidades policiales. Todo ello desaconsejaba trabajar con los datos correspondientes a los primeros meses de explotación del sistema. Debido a estas circunstancias, y sobre todo a que se habían sucedido en el tiempo diferentes versiones de los protocolos, con modificaciones tanto en el número de ítems como en su redacción y en los niveles de riesgo resultantes (tal y como se ha explicado en capítulos anteriores), fue imprescindible adoptar un criterio muy restrictivo respecto a qué datos de la extracción servirían claramente para proceder a los estudios de validación del sistema.

Teniendo en cuenta todos los factores enunciados, se acordó utilizar los datos correspondientes a las versiones más recientes de los protocolos, ya que el volumen de datos con los que se contaba parecía suficientemente amplio y representativo, puesto que ofrecía datos procedentes de toda la geografía española y de los dos cuerpos de policía estatales. De este modo, en un primer proceso de depuración, la base inicial se redujo a 20.824 casos en los que se había empleado la versión más reciente de VPR. En la tabla 5.3 se muestran los datos con los que contaba la primera extracción y cómo estaban distribuidos en función de las versiones del primer cuestionario.

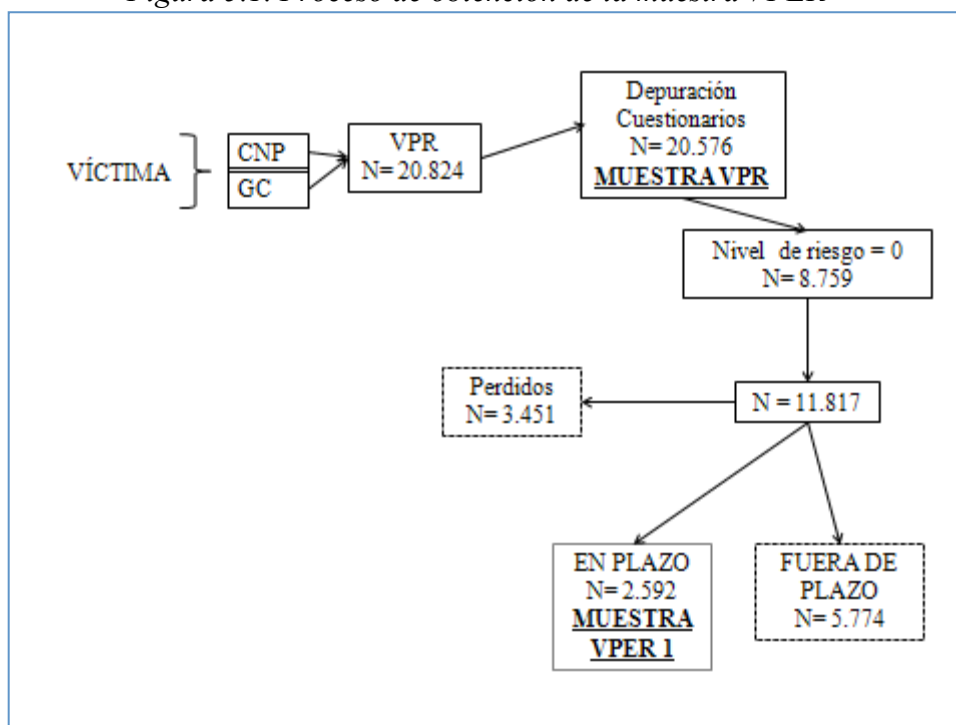
*Tabla 5.3. Distribución de la muestra en función de las versiones del VPR*

Versión VPR	Frecuencias	Porcentajes
1	15.601	13,1
2	83.061	69,5
3	20.824	17,4

Finalmente, la muestra VPR quedó reducida a **20.576 casos**, ya que se adoptó un criterio muy estricto con respecto a los valores perdidos que se habían hallado en la base de datos original: todos los casos que presentaban algún valor perdido en un ítem fueron automáticamente eliminados.

En relación al segundo de los protocolos, el VPER, la muestra sobre la que se han llevado a cabo los estudios empíricos ha sufrido también diversos procesos de depuración. La figura 5.1 trata de reflejar cómo ésta se ha ido reduciendo, debido tanto a causas internas como a causas externas del propio proceso de valoración policial.

*Figura 5.1. Proceso de obtención de la muestra VPER*



Del total de 20.576 casos valorados con la versión 3 del VPR (procedentes tanto del CNP como de la GC), se encontró que, respetando los plazos de revisión de la última Instrucción de la SES (5/ 2008), 8.759 casos “salían” obligatoriamente del Sistema VDyG por obtener un nivel de riesgo no apreciado, que implicaba que no se tuviera que realizar el VPER. De los 11.817 casos restantes, se observó que había 3.451 casos perdidos, quedando por tanto un total de 8.366 susceptibles de ser revaluados con el VPER. Entre las principales razones por las que el número de valores perdidos es tan elevado se encuentran las siguientes:

- La víctima cambia de paradero en el momento de realizar la siguiente valoración del riesgo: existe un porcentaje de víctimas que tras denunciar el hecho, y acudir a la demarcación geográfica correspondiente, cambian de residencia, de comunidad autónoma e incluso de país. En estos casos, muchas veces resulta complicado realizar el seguimiento a una víctima (especialmente cuando es extranjera). En otras ocasiones, son las propias víctimas las que no permiten el seguimiento policial posterior. La dependencia económica, emocional o frecuentemente ambas, a veces es tan elevada, que les impide separarse de su agresor, evadiendo cualquier tipo de seguimiento policial. Por este motivo, entre otros, muchas veces los agentes se encuentran ante casos de las que no logran noticia alguna de las víctimas.
- Otra razón que explica la existencia de esos valores perdidos es que a algunas víctimas no se les concede orden de protección por parte de la Autoridad Judicial, por entender que no existe peligro para ellas, por lo que a nivel policial no se les hace el seguimiento correspondiente, y pasan a ser no activas en el Sistema VDyG. En estos casos los agentes no se ponen en contacto con ellas para cumplimentar el segundo de los formularios aunque estén en el Sistema VDyG.

Seguidamente, tras una ligera inspección de los 8.366 casos en los que sí se contaba con VPERs, se observó cierta variabilidad en el cumplimiento de los plazos, por lo que se acordó utilizar en los estudios de validación exclusivamente aquellos que respetaban y cumplían los plazos que dictaba la Instrucción 5/ 2008, adoptando un criterio flexible en cuanto al intervalo de días que dictaba la Instrucción, ampliando los plazos de manera moderada como se puede observar en la siguiente tabla.

*Tabla 5.4. Distribución de la muestra VPER en función de los protocolos completados en plazo*

Plazos que dictaba la Instrucción 5/ 2008		Criterio flexible
Bajo	60 días	50-70 días
Medio	30 días	20-40 días
Alto	7 días	3-20 días
Extremo	72 horas	3-7 días

Por consiguiente, para los objetivos de esta Tesis Doctoral se decidió estudiar exclusivamente los datos que se ajustaban a la Instrucción arriba mencionada,

correspondiendo estos a todos los cuestionarios completados “en plazo” por cada nivel de riesgo.

Por todo ello, la muestra con la se van a efectuar los estudios que se presentan en los capítulos siguientes está compuesta por **20.576** casos valorados con el VPR y **2.592** casos valorados con el VPER. Debido a que en el capítulo octavo existen varios análisis realizados con la muestra procedente de los diez primeros protocolos de valoración de la evolución de riesgo, en la siguiente tabla se recoge el tamaño correspondiente a cada protocolo VPER para los dos cuerpos policiales. Se puede observar que debido al proceso interno de valoración de la evolución del riesgo la muestra va reduciéndose progresivamente.

*Tabla 5.5 Tamaño muestral de cada protocolo VPR y VPER, en función del cuerpo policial de procedencia*

	<b>VPR</b>	<b>VPER (N)</b>									
	<b>(N)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
CNP	12.561	1.675	879	531	352	232	158	103	72	49	38
GC	8.015	917	553	365	230	152	97	57	38	26	21
Total	20.576	2.592	1.432	896	582	384	255	160	110	75	59

Estas valoraciones proceden de casos de VDG denunciados en el CNP y en la GC desde agosto de 2008 hasta diciembre de 2009. Los formularios fueron completados por funcionarios policiales destinados en las oficinas de recepción de denuncias, Seguridad Ciudadana (Guardia Civil) y ODA (Cuerpo Nacional de Policía). En la base de datos original, no consta ningún tipo de información sociodemográfica del personal que completa los protocolos, tan solo su número de identificación policial. Conviene recordar que los formularios son rellenados por el agente policial, una vez se ha completado la denuncia y se cuenta con información suficiente sobre el caso.

## **5.5.- ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO**

Cuando un investigador se propone estudiar las propiedades psicométricas de un instrumento de evaluación, lo primero que debe plantearse es cuáles van a ser los



objetivos de dicho instrumento. Para ello es necesario dar respuesta a tres preguntas esenciales (Escorial, 2008): ¿qué se va a medir con el test?, ¿a quién se va a medir?, y ¿para qué se va a utilizar el test? La primera pregunta exige que el investigador defina con claridad cuáles son las variables que se pretenden evaluar con esa prueba: en este caso, con los protocolos VPR y VPER se quiere medir el riesgo de que se repita violencia intencionada y deliberada hacia la pareja o ex pareja. La segunda de las preguntas pretende determinar cuál es la población diana a la que va dirigida el cuestionario, una formulación relevante puesto que en función de las características de la población se definirán las características del test. En este sentido tanto el VPR como el VPER se dirigen a víctimas de violencia de género que acuden a dependencias policiales a interponer una denuncia contra su pareja o ex pareja, tratándose mayoritariamente de mujeres adultas. Finalmente, la última pregunta trata de definir cuál será el uso o utilización de la prueba de evaluación, puesto que son muchas las funciones de los test, así como múltiples los contextos en los que se utilizan para tomar decisiones sobre el futuro de las personas (Navas, 2001). Por todo ello, en la tabla 5.6 se recogen cuáles son las principales funciones que pueden llegar a cumplir ambos instrumentos.

*Tabla 5.6. Principales funciones de los instrumentos VPR y VPER*

<b>Funciones</b>	<b>VPR y VPER</b>
<b>Valoración del Riesgo</b>	Proceso de evaluación de un individuo con el fin de caracterizar la probabilidad de que cometa actos de violencia en el futuro (Hart, 2010).
<b>Toma de Decisiones</b>	Los instrumentos de valoración del riesgo deben ser la guía para la toma de decisiones y acciones a seguir por la policía en el contexto de la violencia de género.
<b>Gestión del riesgo</b>	Aplicación de los conocimientos disponibles generados en los estudios de valoración del riesgo para minimizar la frecuencia actual de las conductas violentas y delictivas así como sus efectos (Douglas, Cox y Webster, 1999).

Todo análisis practicado para la obtención de un resultado que avale de manera científica la validación de un instrumento, debe ser contextualizado, y debe recoger tanto las recomendaciones dadas por la comunidad científica como el camino seguido para la consecución de tales objetivos. Por este motivo en los apartados siguientes se van a exponer los pasos que se han ido dando así como la metodología empleada en

cada caso, lo que finalmente constituye el hilo conductor de los estudios empíricos de los capítulos posteriores.

A continuación se describirá cada uno de los estudios elaborados en la parte empírica de esta Tesis Doctoral, de acuerdo a los objetivos mencionados. En el primero de ellos se procederá a estudiar las propiedades generales del VPR, el análisis de la fiabilidad y el estudio de la validez. En el segundo se efectuarán los mismos análisis pero correspondiendo con el protocolo de valoración de la evolución del riesgo (VPER). Finalmente, en el último estudio se alcanzará el análisis de la validez externa a través de tres variables consideradas como variables criterio.

### **5.5.1.- Análisis descriptivos**

En los capítulos 6 y 7 se van a analizar, en primer lugar, las muestras utilizadas en el proceso de validación de ambos instrumentos. En este apartado se resaltarán que ambas muestras son amplias y representativas de la población objeto de estudio. Seguidamente se estudiará empíricamente los elementos que forman los test puesto que constituyen las unidades de análisis donde se realizan las evaluaciones. Un test es la suma de las mediciones hechas por sus elementos, por lo que sus características determinarán las propiedades generales del mismo (Navas, 2001), y para poder analizar bien las puntuaciones totales de un test es conveniente saber cómo funciona al nivel de sus elementos constituyentes (Santamaría, Pereña, Arriba y Seisdedos, 2005).

### **5.5.2.- Análisis de la fiabilidad**

Con este estudio lo que se trata de demostrar es que los instrumentos son fiables, es decir, que son capaces de medir de una forma consistente y reproducible aquello para lo que fueron contruidos. De esta manera, lo que se pretende es estimar la cantidad de error aleatorio cometido al medir la variable objeto de estudio (Navas, 2001). La aparición en menor o mayor proporción de este error, en el proceso de validación de un instrumento de medida es inevitable, máxime cuando se trata del cálculo de atributos psicológicos (Muñiz, 1996). Existen varios métodos para obtener la fiabilidad, siendo uno de los más utilizados el de la consistencia interna. En este estudio se va a calcular el grado de consistencia interna a partir del coeficiente **alfa de Cronbach**, el cual queda reflejado en la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^n S_i^2}{S_x^2} \right)$$

Donde:

- $n$  es el número de ítems.
- $\sum S_i^2$  es la suma de las varianzas de los ítems.
- $S_x^2$  es la varianza que muestran las puntuaciones totales en el test.

Esta fórmula reproduce el coeficiente de fiabilidad del test si todos los ítems son paralelos<sup>4</sup>. En la práctica es muy difícil que esto se produzca, pero tiene sentido su aplicación para establecer el grado en que los diferentes ítems están midiendo una única dimensión o rasgo (Navas, 2001). Alfa tendrá un valor alto (cercano a 1) cuando los ítems covarían fuertemente entre sí y asumirá valores cercanos a cero si los ítems son linealmente independientes (si covarían de forma escasa). Un criterio bastante extendido para interpretar el coeficiente alfa es que éste ha de ser igual o superior a ,70 (Nunnally, 1978), entonces puede afirmarse que el test tiene una fiabilidad suficiente. Para George y Mallery (1995), un alfa de Cronbach por debajo de ,5 mostraría un nivel de fiabilidad no aceptable; si tomara un valor entre ,5 y ,6 se podría considerar como un nivel pobre; si se situara entre ,6 y ,7 se estaría ante un nivel débil; entre ,7 y ,8 haría referencia a un nivel aceptable; en el intervalo ,8 y ,9 se podría calificar como de un nivel bueno, y si tomara un valor superior a ,9 sería excelente. Por otro lado, el coeficiente de alfa de Cronbach mide siempre la fiabilidad del test en función de dos términos: la proporción de varianza total de la prueba debida a la covarianza entre sus partes (ítems), y el número de ítems (o longitud de la prueba). Con respecto al segundo concepto, la relación es bastante sencilla: cuantos más ítems compongan un test, menores errores se cometerán y el test será más fiable (Santesteban, 1990, Navas, 2001, Muñiz, 1996, Martínez Arias, 1996, Del Val 2005). La fórmula Sperman-Brown es la que permite estimar el coeficiente de fiabilidad en función del aumento de la longitud de éste, y pronostica su valor al variar el número de ítems. Siguiendo esta fórmula se estima que a mayor longitud se obtiene mayor fiabilidad. El coeficiente aumenta siempre que se añaden ítems, tendiendo a 1, y llegaría a este límite en el caso de que se añadiesen

---

<sup>4</sup> Un ítem paralelo es un ítem similar (cuando no idéntico) a otro ítem de otra prueba o test y que comparte las mismas características físicas (nivel de dificultad, redacción similar, forma de presentación, tipo de material), y requisitos aplicables al test al que pertenecen, por lo que supone que miden la misma variable.

infinitos ítems. Las consecuencias que se derivan son importantes en la validación de los test, pues permiten tener en cuenta los siguientes aspectos (Navas, 2001):

- A partir de un test con escasa fiabilidad no se puede conseguir un test con fiabilidad apreciable o moderadamente alta, pues implicaría un gran aumento de la longitud del test inicial.
- Los test escasamente fiables deben ser despreciados en su forma original.

Por todo ello, se debe ser muy riguroso en el cálculo de la fiabilidad y ponderar de manera muy racional si para aumentar la fiabilidad del test o cuestionario, se debe aumentar la longitud del test, o por otro lado, se debe desechar la forma original e invertir esfuerzos en construir un nuevo instrumento de evaluación.

### **5.5.3.- Análisis de la validez**

En el apartado anterior se ha visto que la fiabilidad es una propiedad indispensable en cualquier instrumento de medida. Junto a ésta, la validez es la otra gran cualidad fundamental sobre las garantías de los instrumentos objeto de estudio. En concreto, a través del estudio de la validez se pretende conocer hasta qué punto son válidas las interpretaciones que vamos a realizar de las puntuaciones obtenidas (Cronbach, 1990). La validez se refiere a la cantidad de confianza establecida sobre la veracidad de las puntuaciones obtenidas en una determinada investigación (Echevarría, 2005). Es un aspecto básico y fundamental en cualquier diseño de investigación, tanto a la hora de generalizar los resultados por los sujetos, como a la hora de garantizar que las variables extrañas han sido controladas. En los estándares para la evaluación psicológica y educativa (APA, AERA y NCME, 1999), descritos en este capítulo, se defiende que la validez hace referencia al grado en que la evidencia empírica obtenida y los conocimientos aportados por las teorías apoyan las inferencias que se hagan a partir de las puntuaciones obtenidas en el test cuando éste se utiliza para un objetivo concreto.

La comprobación de la validez como característica métrica fundamental para el correcto uso de todo test, escala o cuestionario, es la que permitirá realizar las inferencias e interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan al aplicar el test y establecer así una relación con el constructo o variable que se trata de medir (Meltzoff, 2000). Establecer la validez de un test implica obtener evidencia de que el instrumento con el que se trabaja está libre de sesgo (Navas, 2001), es decir, que los

ítems del test funcionan del mismo modo para distintos grupos en función de variables sociodemográficas, cognitivas o de cualquier otro tipo que pueda constituir una fuente sistemática de variación ajena al constructo medido por el test (Muñiz, 1996). La validez se puede calcular por distintas vías y, fundamentalmente, todos los procedimientos para determinarla se basan en las relaciones entre los resultados de los sujetos en el test que actúan como predictor y otros hechos relativos al rasgo que se está considerando, que son observables independientemente. Bajo esta situación, en este análisis se va a tratar de comprobar empíricamente que tanto el VPR como el VPER son instrumentos que realmente miden lo que pretenden medir, en este caso, el riesgo que tiene una víctima de volver a sufrir nuevos episodios de violencia contra la pareja después de haber recibido una serie de medidas policiales de protección y de seguridad. Llegados a este punto, se analizarán las características métricas de ambos protocolos, de acuerdo a la validez de constructo y será ésta la cuestión básica para decidir el uso o no de los mismos para el contexto policial para que el fueron diseñados.

#### **5.5.3.1.- Validez de Constructo**

Dentro de los tipos de validez, ésta es la que ofrece significado a las puntuaciones de los test. Los resultados de una investigación tienen que ser interpretados haciendo referencia a la teoría con la que se extrajeron las variables. Cook y Campbell (1979) la definen como “el grado de correspondencia entre la medida de la variable dependiente y la manipulación de la variable independiente con el constructo teórico que se está midiendo o manipulando”. Siguiendo a Messick (1980), este tipo de validez corresponde con el concepto unificador que integra las consideraciones de validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones teóricamente relevantes. En este mismo sentido, Cronbach (1984) señala que la meta final, es la explicación y comprensión de los ítems que conforman un instrumento. Desde un punto de vista psicométrico, la validación de constructo de un test o cuestionario o, en general, de cualquier instrumento de evaluación psicológica puede abordarse desde dos puntos de vista (Escorial, 2008): uno externo (las relaciones de un test con otras medidas; que se desarrollará en el capítulo octavo) y otro interno (relaciones entre los ítems de un test). Este último punto de vista será el objeto de estudio de los capítulos sexto y séptimo: analizar a través de la validez de constructo el

grado en que las relaciones entre los ítems de los cuestionarios reproducen la estructura hipotetizada.

La génesis de la validez de constructo como un concepto integrador de validez hay que situarla en la primera versión de los estándares para la evaluación psicológica y educativa (APA, 1954) y en la publicación del trabajo de Cronbach y Meehl (1955). Según estos autores, este tipo de validez consiste en un análisis de la significación de las puntuaciones de los instrumentos de medida expresada en términos de los conceptos psicológicos asumidos en su medición. Como señala Martínez Arias (1995), la validez de constructo se empieza a percibir como un concepto fundamental y básico y, aún más importante, como integrador de los anteriores enfoques de validez, heredados de las tradiciones empirista (validez criterial) y racionalista (validez de contenido). En este mismo sentido Moss (1992), defiende el papel central desempeñado por la validez de constructo por encima de los otros conceptos de validez. Desde un punto de vista más práctico, puede ser conceptualizada en términos de un proceso científico de contraste de hipótesis, donde entraría tanto lo empírico como los juicios racionales; las hipótesis serían las inferencias realizadas a partir de las puntuaciones de los tests; y la validación, el proceso de acumulación de evidencias que apoyen dichas inferencias, usos o interpretaciones de las puntuaciones del test (Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 2000).

El análisis factorial es una de las vías habituales para acercarse al análisis de la validez de constructo. Éste se realiza para identificar las dimensiones subyacentes o contenidas en la medición de otras variables observadas de manera directa. Estas dimensiones son factores que no pueden ser medidos por medio de una entidad mensurable simple. Se puede decir, por tanto, que es una técnica estadística que se usa para identificar un número relativamente pequeño de factores, cada uno de los cuales puede ser utilizado para representar la relación entre un conjunto de variables interrelacionadas. En general, se puede decir que es la técnica por excelencia utilizada para la validación de constructo (De Frutos, Ruiz y San Martín, 1998).

Conceptualmente, el AF presenta dos tipos o modalidades diferentes, que en este estudio se van a combinar: Análisis Factorial Exploratorio (en adelante AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio (en adelante AFC). Las diferencias entre ambos son numerosas, tanto desde una perspectiva teórica como matemática. La diferencia más importante se refiere a que el AFC se conduce principalmente por teorías sustantivas y por expectativas, mientras que AFE, como su nombre implica, principalmente es una

técnica que, basada en los datos, intenta descubrir la estructura subyacente que estos poseen (Bollen, 1989). En general, podemos establecer que ambos tipos de procedimientos se corresponden con las dos grandes aproximaciones que se suelen llevar a cabo para la definición de los constructos: la aproximación inductiva o exploratoria y la deductiva o confirmatoria (Pérez-Gil y cols., 2000).

- La **aproximación inductiva o exploratoria** supone delimitar un número amplio de indicadores que supuestamente miden el constructo. Seguidamente estos indicadores son analizados mediante AFE para buscar patrones de relación entre los indicadores, y, finalmente, *a posteriori*, “se pone nombre...” a esos patrones de relación, definiendo de esta forma el constructo. Esta aproximación trabaja desde las mediciones empíricas de los indicadores hacia la definición del constructo. Para Meltzoff (2000), bajo el epígrafe de AFE, se incluyen una serie de técnicas estadísticas que tienen por objetivo representar y explicar un conjunto de variables observables (ítems de un test, conjunto de test, escalas, etc.) mediante un menor número de variables latentes o inobservables llamadas “factores”.

El procedimiento que sigue el AFE supone extraer automáticamente, con criterios estadísticos, los factores subyacentes y, entonces, rotar la solución inicial para obtener la estructura factorial más simple desde el punto de vista de su interpretación más significativa, siguiendo los criterios de parsimonia establecidos por Thurstone<sup>5</sup> (1931). Siguiendo a Paz (1996), en un análisis factorial, se parte de un conjunto de medidas tomadas a la misma muestra de sujetos en el conjunto de variables observables (supongamos que son las puntuaciones obtenidas por una muestra de  $n$  sujetos en los  $n$  ítems de un test) y a partir de ellas, se obtiene una matriz con todas las interacciones. A partir de esta matriz, gracias al análisis factorial, se intenta identificar un número más reducido de variables latentes o factores.

Se han propuesto varios métodos para la extracción de factores y diversas reglas para determinar cuántos retener (Paz, 1996; Navas, 2001;

---

<sup>5</sup> El principio de parsimonia establece que “todo modelo debe ser más simple que los datos en los que se basa” (Thurstone, 1931).

Echevarría, 2005). Uno de los procedimientos de extracción más sencillos es el de ejes principales y una de las reglas más usadas es la regla de káiser (regla KI), en la que el número de factores a retener viene determinado por el número de factores con varianza mayor que uno. Con la rotación se intenta que la solución factorial se aproxime a la denominada estructura simple, en la cual cada ítem tiene una saturación igual a 1 en un factor y 0 en los demás pero, en la realidad, mediante las rotaciones nunca se encuentra una estructura simple sino una solución lo más parecida posible a la estructura simple (Navas, 2001).

- En la **aproximación deductiva o confirmatoria** el constructo no se mide en el vacío, sino que está insertado en una teoría que dirige la propia definición, y va señalando los comportamientos que pueden considerarse sus indicadores (Pérez-Gil y cols., 2000). El contraste de las hipótesis estructurales que pone de manifiesto la teoría determinará la validez del mismo. Esta aproximación va desde la teoría hacia los hechos. Si el AFE trata de descubrir dimensiones significativas subyacentes a los datos empíricos de covarianza entre los ítems (Navas, 2001), en el AFC se especifican previamente las interrelaciones entre los ítems (indicadores) y los constructos subyacentes, y se pone a prueba el ajuste de lo empírico al modelo teórico preestablecido (Santamaría y cols., 2005).

En los procedimientos de AFC, se comienza con un modelo teóricamente plausible asumido para describir y/ o explicar los datos empíricos. La construcción del modelo está basada o bien en una información a priori sobre la naturaleza de la estructura de los datos, o bien en una teoría sustantiva en el campo de trabajo del que se trate. El procedimiento permite una valoración de la correspondencia de semejanza entre las características del concepto planteado, y los datos obtenidos sobre dicho concepto a través de sus indicadores, es decir, evaluar la correspondencia teórica entre el constructo y el dato (Schmitt, 1995) y, de este modo poder hacer inferencias sobre los constructos delimitados a partir de las muestras particulares de indicadores. En este sentido AFC se ajusta a los criterios señalados por Messick (1989)



respecto a la validez de constructo y, por tanto, se puede considerar, que el AFC permite una aproximación fuerte a la definición y/ o validación de un constructo.

Con el concepto de **dimensionalidad**, se tratará de determinar el mínimo número de estructuras necesario para explicar la máxima varianza observada. Siguiendo a Stout (1990), con este concepto lo que se pretende es definir un modelo linealmente independiente a través de un número reducido de factores. El estudio de la dimensionalidad resulta de vital importancia y, desgraciadamente, no siempre se le ha dado el lugar de privilegio que le correspondería en el ámbito de la psicometría (Escorial, 2008). Stout (1987) resume las razones de su importancia en dos grandes líneas:

- a) Es vital que un test que pretende medir el nivel en una variable no esté contaminado por los niveles que los sujetos a los que se les administra el test posean en otra u otras variables.
- b) Es esencial que un test diseñado con el fin de ser empleado para establecer diferencias individuales mida un único rasgo.

La asunción de dimensionalidad debe ser (al menos aproximadamente) satisfecha para que la metodología de la teoría de la respuesta al ítem sea válida y sus técnicas y procedimiento puedan ser interpretados correctamente.

En concreto, la aproximación que se ha seguido para el estudio de la estructura interna (validez de constructo) en los estudios de esta Tesis Doctoral, es la siguiente:

1. **Determinación de un modelo estructural** para los protocolos de valoración de riesgo VPR y VPER a través de la **validación cruzada**. En este sentido se dividirán las muestras en dos mitades, efectuando sobre la primera de ellas el AFE, para confirmarlo sobre la segunda muestra a través del AFC.
2. **Robustez** del modelo estructural. Con estos estudios se pretende demostrar hasta que punto el modelo encontrado no depende de otras variables externas como puede ser el cuerpo policial de procedencia. En este análisis se empleará el coeficiente de congruencia factorial y la invarianza factorial del modelo utilizando para ello un AFC Multigrupo.

Todo estos estudios permitirán decidir la conveniencia o no de seguir utilizando los instrumentos de medida.

#### **5.5.3.2.- Validez externa**

El último de los estudios empíricos persigue la obtención de evidencia empírica desde el punto de vista de la validez externa, en el proceso de validación del procedimiento de valoración del riesgo de los casos de VDG del Ministerio del Interior de España. Así, en ese estudio se van a analizar las relaciones entre las puntuaciones obtenidas con el instrumento de evaluación, y otras variables externas delimitadas como importantes para el constructo evaluado. Es importante señalar aquí, que ese capítulo centra su objetivo en la validación general del sistema, y no se reduce a cada uno de los protocolos por separado.

Como se ha desarrollado en el capítulo cuarto de esta Tesis Doctoral, los instrumentos de evaluación VPR y VPER fueron definidos cuidadosamente en las primeras etapas, y aunque la definición de sus constructos se pueda ver respaldada empíricamente a través de unos ítems concretos y de los estudios realizados en los capítulos siguientes, ha de demostrarse que las puntuaciones obtenidas son indicativas de dichos constructos, o que pueden usarse para el objetivo inicialmente planteado. Para poder llegar a esta conclusión es necesario obtener las pertinentes evidencias externas de validez. De esta forma, el capítulo octavo, a través los tres estudios de los que se compone, supondrá el soporte a partir del cual poder interpretar las puntuaciones de las herramientas de evaluación y, por tanto, el modo de otorgar significado psicológico a datos numéricos (Paz, 1996). Así, el análisis de la validez externa de las puntuaciones de un test no es ni más ni menos que el intento de “ubicar” al constructo en un entramado teórico significativo, dándole “coherencia psicológica” (Carretero-Dios y Pérez, 2005).

Este tipo de validez, conocida como el aspecto externo de la validez por Loevinger (1957), o como aptitud nomotética por Embrestom (1983), tal vez sea el tipo de evidencia más utilizado en el proceso de validación de tests. Sin embargo, debido en parte a la naturaleza de los instrumentos que se pretenden validar (y del sistema en el que están incardinados), el tipo de evidencia empírica que se recabará en el presente estudio no es demasiado frecuente en el ámbito de las Ciencias Sociales. A este hecho contribuyen también las variables externas que se considerarán, y que en su mayoría

están derivadas de la propia estructura interna del Sistema de Seguimiento Integral de las Víctimas de VDG (Sistema VDyG).

Como indica la literatura al respecto (Elosua, 2003), a la hora de estudiar la validez externa se comparan las puntuaciones de un instrumento (variable independiente) con una o más variables externas (variable dependiente). En el estudio A, esta variable dependiente será la conformidad del agente policial con el nivel de riesgo obtenido; en el estudio B, la variable será la satisfacción de las víctimas con las medidas policiales recibidas; y, finalmente, en el estudio C, la evolución de los diferentes niveles de riesgo que tiene una víctima de volver a ser agredida por su pareja o ex pareja será la variable a analizar. Se asume que estos criterios están teórica y lógicamente relacionados con el rasgo representado bajo el objeto de estudio.

Seguidamente, se van a describir cada uno de los estudios elaborados conforme a los objetivos previamente mencionados. En primer lugar, tras una breve introducción a cada uno de ellos, se procederá a la especificación de la metodología (muestra, procedimiento e instrumentos y análisis de datos). A continuación, se detallarán los resultados alcanzados para, finalmente, comentarlos vinculándolos con la teoría expuesta previamente.

PARTE II

ESTUDIOS EMPRÍRICOS



## CAPÍTULO 6

### ESTUDIO 1: ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES GENERALES DEL VPR

#### 1.- INTRODUCCIÓN

En el capítulo quinto de esta Tesis Doctoral se avanzaba cuáles eran los objetivos de los estudios empíricos que componen la presente investigación. Todos ellos se centran en el proceso de validación del sistema de valoración del riesgo implantado por el Ministerio del Interior. En el estudio que se presenta en este capítulo, se analizarán las propiedades psicométricas del protocolo de Valoración Policial de Riesgo (VPR). Para ello, se establecen tres objetivos principales. En primer lugar, se **analizarán los elementos** que componen los instrumentos, pues estos son los átomos de medida, la unidad esencial donde se va a realizar la evaluación (Santamaría, Arribas, Pereza y Seisdedos, 2005). Seguidamente, se presentarán los **estudios de fiabilidad** de la prueba. Estos cálculos expresan la precisión y exactitud de las puntuaciones obtenidas. Busca responder a las siguientes preguntas: ¿con qué precisión evalúa el VPR a una víctima que denuncia un hecho de VDG?, ¿la eliminación de algún ítem contribuiría al aumento de fiabilidad? Para una adecuada interpretación de las puntuaciones del test resultará esencial conocer los coeficientes de fiabilidad. En tercer y último lugar, se hallarán los **estudios de validez**. Estos informan del grado de confianza sobre si el VPR mide lo que pretende medir. En esencia busca establecer, a partir de los resultados obtenidos en la prueba, qué inferencias se pueden extraer que estén apoyadas empírica y teóricamente. Los resultados ofrecidos determinarán qué conclusiones son oportunas extraer del test y cuáles no. Dentro de los estudios de validez se realizarán **tres análisis** diferenciados: primeramente, a través de la **validación cruzada** se determinará el número de factores que componen el cuestionario, para lo cual se empleará la técnica de AFE porque se tiene como hipótesis que existirá una correlación positiva entre los ítems de los distintos factores que obedecen a motivaciones similares (p. e. todos aquellos que tienen que ver con la violencia deberían correlacionar positivamente entre sí), y, posteriormente, se llevará a cabo un AFC, con el objetivo de corroborar los factores hallados previamente. En segundo lugar para dotar de robustez al modelo hallado a través de los análisis factoriales, se estudiarán por un lado los **coeficientes de congruencia factoriales** entre los diferentes cuerpos policiales de donde procede la muestra y seguidamente en esta

misma línea, se estudiará la robustez del sistema a través de la invarianza factorial, utilizando para ello el AFC multigrupo. Finalmente, el objetivo que se persigue con estos estudios es la obtención de evidencia empírica basada en la estructura interna del instrumento, lo que tradicionalmente se ha englobado dentro de la validez de constructo (Paz, 1996). En resumidas cuentas, con todos estos análisis se pretende demostrar que el test objeto de análisis (VPR), es un instrumento adecuado para medir el constructo que se pretende medir, que es fiable y que no existen diferencias en los análisis efectuados en función del cuerpo policial de donde proceden los datos.

## **2.- MÉTODO**

### **2.1.- Participantes**

La muestra de sujetos cuyos datos se van a analizar en este estudio se obtuvo una vez realizado el proceso de depuración explicado en el capítulo anterior, y presenta dos particularidades. La primera, que se trata de una muestra de gran tamaño y representatividad; en concreto, se analizarán los datos de 20.576 víctimas de VDG, comprendiendo datos de toda la geografía española (nivel nacional) y procediendo la muestra de las dos FCSE (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía), donde se ha denunciado un hecho por violencia de género en el intervalo de tiempo comprendido entre agosto de 2008 y diciembre de 2009. En este sentido la tabla 6.1 recoge las frecuencias y porcentajes correspondientes a la procedencia de la muestra por cuerpo policial, observándose que el 61% de las valoraciones policiales de riesgo provienen del CNP, mientras que el 39% restante proceden de la GC. La segunda particularidad hace referencia a que, debido a la propia definición de VDG asumida en esta Tesis, la muestra recoge exclusivamente datos de víctimas femeninas, sin que exista ningún caso de víctimas masculinas.

*Tabla 6.1. Distribución de la muestra en función del cuerpo policial de procedencia (N= 20.576)*

Institución	N	%
CNP	12.561	61
GC	8.015	39

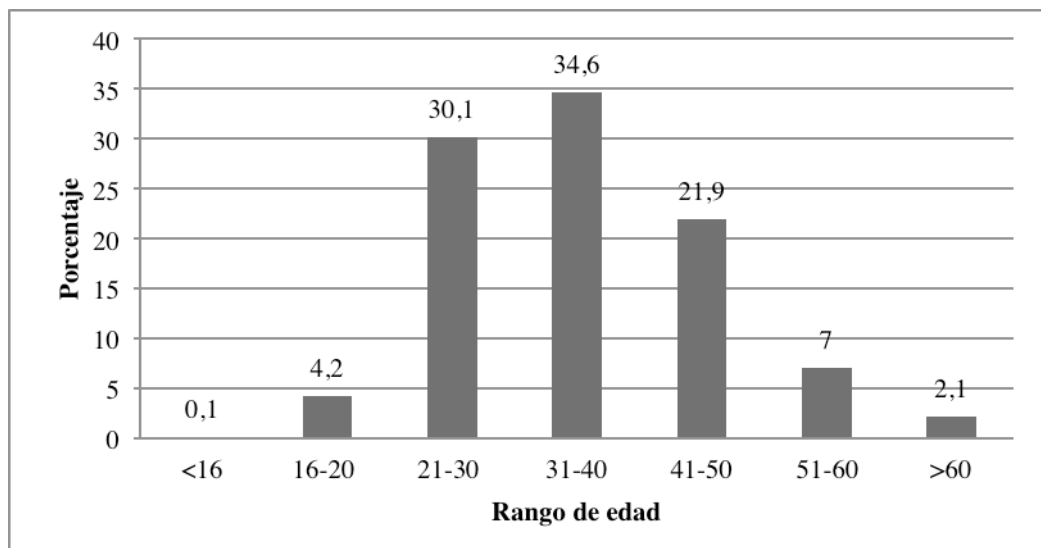
Seguidamente se van a presentar datos descriptivos acerca de variables sociodemográficas (edad, nacionalidad, nivel académico y relación de pareja),

advirtiéndolo la existencia de una elevada cantidad de valores perdidos en algunas variables, debido especialmente a la no obligatoriedad de completar estos campos en el Sistema VDyG.

### **Edad**

En la figura 6.1 se recogen los datos con respecto a los grupos de edad de las víctimas. Para el estudio de esta variable se ha dispuesto del dato del 98,3% de la muestra total (N= 20.226). En términos generales, la edad media de este conjunto de personas es de 35,79 años con una desviación típica de 10,3. El valor mínimo de esta variable es de 15 años y el máximo es de 69 años.

*Figura 6.1. Distribución de la edad de las víctimas de la muestra (N=20.226)*



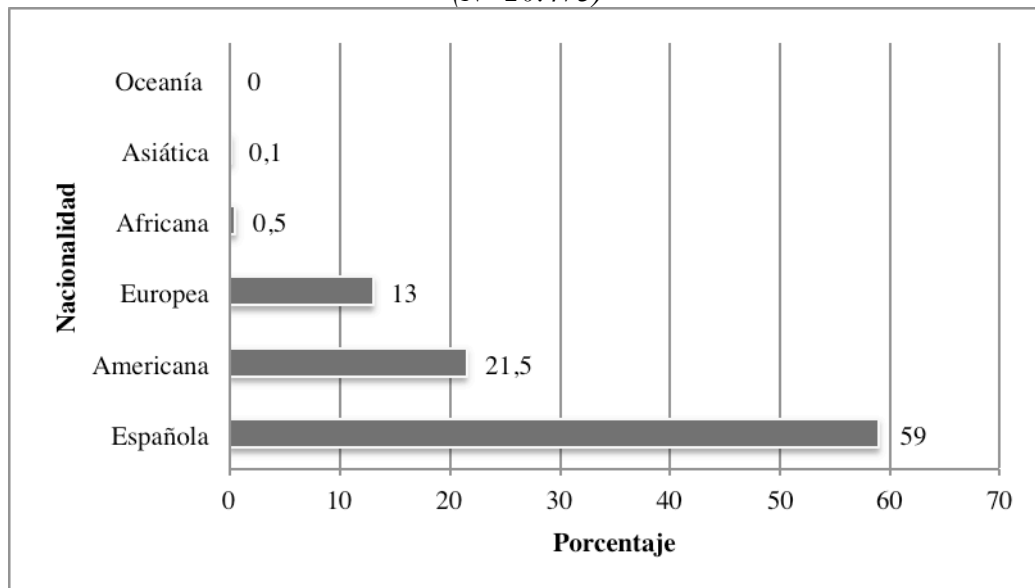
Se puede observar que cerca del 65 % de las víctimas se encuentran entre los 21 y los 40 años de edad, siendo la franja más relevante la de la treintena, sin que sorprenda que, en los extremos (menores de edad y mayores de 60 años), aparezcan las menores proporciones de víctimas. Estos datos concuerdan con los informados en el estudio de Echeburúa y cols., (2010) sobre víctimas que han presentado denuncia en el País Vasco por VDG, y, a nivel nacional, con los datos ofrecidos en el informe sobre víctimas mortales del Consejo General del Poder Judicial (2010), donde el porcentaje más voluminoso de víctimas que denuncian eran las comprendidas entre los 20 y los 30 años.



## **Nacionalidad**

En la figura 6.2 se muestra la distribución de la variable nacionalidad, comparando por continentes, contando en este caso con información sobre el 99,5% de la muestra total (N=20.473).

*Figura 6.2. Distribución de las víctimas de VDG en función de la nacionalidad (N=20.473)*



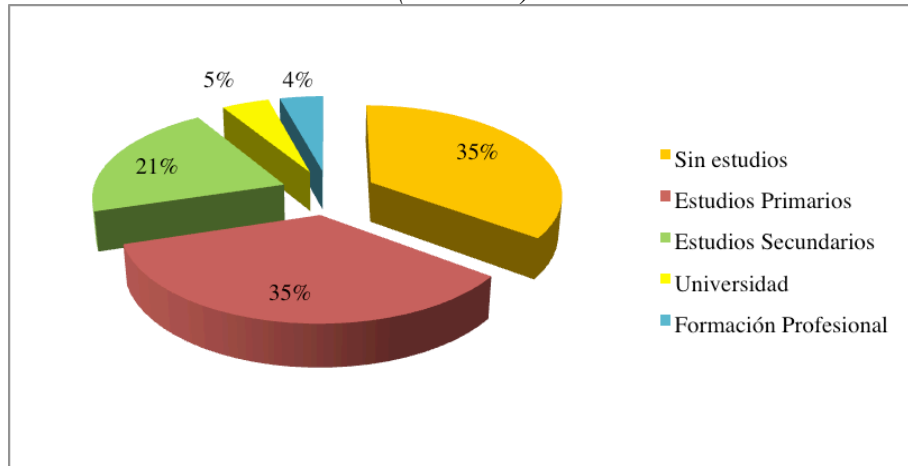
Se encuentra que el porcentaje más preponderante (59%) procede de víctimas españolas. A continuación, la población procedente de países latinoamericanos, siendo la República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Colombia los países que presentan mayores contribuciones (5,5%, 3,5 %, 3,4% y 1,3%, respectivamente). En relación con Europa, Rumanía es la nación que presenta el porcentaje más alto de víctimas (6,0%). Y, con respecto a África, el país con más número de víctimas denunciante es Marruecos (3,9%).

## **Nivel académico**

Otra variable de interés para este tipo de estudios es la información acerca del nivel de estudios de las víctimas que presentan denuncia, puesto que se tiende a pensar que es un problema restringido a las capas más desfavorecidas de la sociedad. A pesar de la dificultad para la obtención de esta información personal, dado que, como se comentó previamente, no es obligatorio en el Sistema VDyG incorporar estos datos, se encontró que se grabaron un total de 1.345 casos (el 6,4% del total), por lo que en la figura 6.3 se

muestra la distribución de resultados, comprobándose que, tal y como ya se viene informando en numerosos estudios, la VDG se da en todo tipo de entornos.

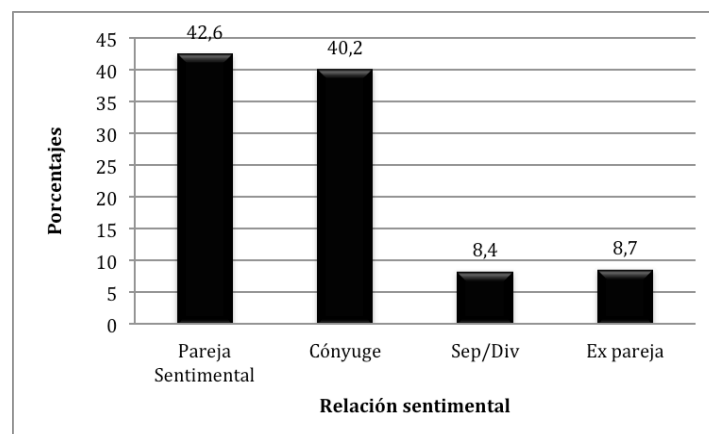
*Figura 6.3. Distribución de las víctimas de VDG en función del nivel académico (N=1.108)*



### Relación de pareja

Otro dato también interesante vinculado a la dinámica de la violencia contra la pareja es el tipo de relación que la víctima posee con el autor. La figura 6.4 muestra cuál es la situación afectiva de las víctimas denunciantes, contándose para este análisis con datos sobre 16.755 víctimas (el 80% de la muestra total). En concreto, se encontró que la gran mayoría de las denuncias correspondieron a mujeres que mantenían una relación con la pareja que denunciaron, frente a aquellas parejas donde ya se había producido la separación.

*Figura 6.4. Distribución del estado civil de las víctimas de VDG (N=16.755)*



## ***2.2- Procedimiento e instrumento de medida***

Los protocolos VPR fueron completados en dependencias policiales por los propios agentes una vez se había recolectado información exhaustiva sobre cada caso en cuestión. El test consta de 16 ítems basado en una escala Likert de seis opciones (no se da, no se sabe, bajo, medio, alto y extremo), mediante las cuales el agente puede expresar en qué grado se presenta el ítem. Se rellenan de manera informatizada, y ofrecen finalmente una puntuación o resultado (índice global), en función de la cual se administran las medidas policiales de protección y seguridad. En el anexo I queda reflejado el VPR donde se pueden observar los 16 ítems de los que se compone.

## ***2.3.- Análisis de datos***

La información recopilada a través del VPR, se graba automáticamente en el Sistema VDyG. De este sistema se obtuvo una extracción que fue volcada en una base de datos general, que incluía también información sobre variables sociodemográficas pertenecientes a las víctimas que habían presentado denuncia. Esta base de datos fue diseñada, completada y analizada mediante el paquete estadístico SPSS (versión 17.0). A continuación, se calcularon los porcentajes y las frecuencias de las variables más importantes en relación con ambos protocolos para comprobar que los resultados obtenidos se ajustaban al sistema de puntuación propuesto. Se analizaron los estadísticos descriptivos más relevantes en relación a los ítems (rango, media, desviación típica, asimetría y curtosis), así como los porcentajes de respuesta, para obtener información de cómo los agentes puntuaban cada indicador, todo ello en función de la información que se podía obtener a través de los datos de cada caso en particular. Estos resultados se mostraron de manera diferenciada por cuerpo policial de procedencia. Esta distinción es importante a la hora de probar cómo funcionan los protocolos por separado; estudiar si existen diferencias significativas entre ambos en diferentes variables, así como para establecer diferencias en función del grado de cumplimiento de las Instrucciones de la SES, o inclusive para estudiar el modo de procedimiento policial a la hora de realizar las valoraciones de riesgo. Seguidamente se calculó la fiabilidad a partir del índice de consistencia interna alfa de Cronbach. Y, por último, se hizo un estudio de la validez de constructo (estructura interna), en el que se siguieron los siguientes pasos.

**a) Determinación de un modelo estructural para el VPR:**

Para el estudio de la dimensionalidad, se adoptó una estrategia basada en las teorías del rasgo latente. Este tipo concibe la dimensionalidad como la existencia de un único rasgo subyaciendo a las respuestas de los sujetos a un ítem (García-Cueto, 1993). En concreto, en este estudio se optó por un procedimiento de **validación cruzada**, dividiendo la muestra aleatoriamente en dos partes para validar los resultados. Así, la Muestra 1 sirvió como muestra de calibración, evaluándose el modelo inicialmente mediante AFE, y la validez de esta estructura se sometió a prueba en la Muestra 2 mediante AFC. Esta manera de proceder es acorde a los principios básicos del método científico. Así, Hartwig y Dearing (1979) argumentan que un investigador debe aprender todo lo posible acerca de una variable o conjunto de variables antes de utilizar los datos para probar hipótesis o teorías acerca de las relaciones entre variables. Es por ello por lo que se empieza siempre con la exploración para pasar seguidamente a la confirmación de factores detectados previamente. La validación cruzada existe en varios grados (Bentler, 1980, MacCallum, Roznowski y Reit, 1994). Bentler (1980) propuso una aproximación, denominada validación cruzada moderada, que consiste en re-estimar todos los parámetros de un modelo en una muestra independiente. MacCallum y cols. (1994) consideraron que esta aproximación puede resultar tremendamente interesante para valorar la replicabilidad y estabilidad de un modelo en términos de bondad de ajuste. Por esta razón se optó por esta estrategia de validación cruzada en ambos instrumentos por separado.

Como se ha indicado, sobre la Muestra 1 se procedió a realizar un AFE mediante el programa informático SPSS 17.0. Para la extracción de factores se empleó el método de ejes principales, con una rotación oblicua Promax, con el objetivo de no forzar la independencia de los factores identificados en la solución factorial. Llegados a este punto conviene recordar que dada la naturaleza del diseño del cuestionario, las fuentes de variabilidad pueden ser muy diversas y provenir de circunstancias relacionadas tanto con el autor como con la víctima. Por tanto, es esperable que mediante un análisis factorial se identifiquen distintas dimensiones a partir de los ítems de los protocolos que den cuenta de un mayor o menor porcentaje de varianza. Una vez identificada una estructura factorial parsimoniosa mediante el AFE, se procedió a contrastar el ajuste de los datos a dicho modelo mediante el AFC sobre los datos de la Muestra 2. Para realizar

el AFC se empleó el programa AMOS (Arbuckle, 1997; y Arbuckle y Wothke, 1999). Para la evaluación de los datos al modelo, de entre todos los índices de ajuste que aparecen en la literatura se consideraron los siguientes para este estudio:

- $\chi^2$ : Estadístico de contraste que evalúa la discrepancia entre los datos muestrales y los reproducidos a partir del modelo. Se suele emplear un estadístico derivado de él que el valor del  $\chi^2$  dividido entre los grados de libertad. Valores inferiores a 3 indicarían un ajuste aceptable y por debajo de 1.5 un buen ajuste.
- GFI (*Goodness of fit index*): propuesto por Jöreskog y Sörbom en 1986, cuantifica la cantidad de varianza y covarianza contenida en la matriz. Los valores del estadístico GFI son habitualmente muy elevados y se suele exigir que al menos alcancen un valor superior a ,90 para ser indicativos de un buen ajuste (Ruíz, 2000). Este índice tiene la ventaja de ser insensible al tamaño muestral, sus valores como se ha comentado oscilan entre 0 y 1, y los valores superiores a ,90 pueden considerarse aceptables.
- AGFI (*Adjusted goodness of fit index*): corrige el estadístico GFI por los grados de libertad del modelo y por el número de variables contenidas en el mismo. Este estadístico busca corregir la excesiva benignidad del estadístico GFI. Al igual que el índice anterior sus valores oscilan entre 0 y 1, y valores superiores a ,80 pueden considerarse buenos ajustes del modelo a los datos.
- RMSEA (*Root mean square error of approximation*): valores inferiores a ,08 indican un grado de error razonable, y los inferiores a ,05 son tomados como prueba de un buen ajuste del modelo. Valores del estadístico RMSEA superiores a ,10 indicarían un pobre ajuste del modelo (De Frutos, Ruíz y San Martín, 1998).
- CFI (*Comparative fit index*): valores superiores a ,95 muestran que el modelo es aceptable (Bentler, 1980).

Antes de pasar al siguiente apartado es preciso indicar que el estadístico *chi-cuadrado* es muy sensible al tamaño muestral, por ello, en este estudio se atenderá preferiblemente a los índices de bondad de ajuste (índices AGFI y GFI)

**b) Robustez del modelo estructural identificado para el VPR**

Para el estudio de la robustez se procedió mediante dos aproximaciones diferentes. La primera estaba basada en los **coeficientes de congruencias factoriales** y la segunda en la **invarianza factorial del modelo** sustentada en un AFC Multigrupo. En ambos casos se empleó para delimitar los grupos de comparación el cuerpo de procedencia del agente que realiza la valoración: Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil.

Antes de poder comparar la identidad de cualquier factor en diferentes grupos hay que garantizar que estamos extrayendo en ambos grupos el mismo factor (McArdle, 1996), es decir, que la misma dimensión (del VPR) está siendo evaluada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La forma de obtener esta información es a través del coeficiente de congruencia ( $r_c$ ; Cattell, 1978; Jensen, 1998). El coeficiente de congruencia es un índice de similitud interfactorial que, al igual que la correlación de Pearson, presenta valores entre -1 y +1. No tiene distribución muestral conocida, pero se asume que un valor superior a ,90 indica un alto grado de similaridad entre los factores comparados, mientras que un valor de ,95 o mayor es interpretado como identidad (Jensen, 1998). Por su parte, Cattell (1978) ha ofrecido los valores que debe alcanzar el coeficiente de congruencia para ser considerado significativo (es decir, que un factor es comparable con dos grupos) con una determinada probabilidad y para un número concreto de variables (Tabla 6.2). Cattell no ofrece valores para un número intermedio de variables entre 10 y 20, como es el caso de las baterías empleadas en el primer y segundo estudio. No obstante, en los juicios sobre similaridad factorial se ha utilizado los coeficientes de congruencia asociados a  $N=10$  debido a que son los más restrictivos y los valores son más conservadores. El coeficiente de congruencia es preferible al empleo de la correlación de Pearson porque estima la relación entre los mismos factores, mientras que este último calcula sólo la correlación entre los vectores de saturaciones de cada factor (Jensen, 1998). El coeficiente de congruencia se calcula según la siguiente fórmula:

$$r_c = \Sigma XY / (\Sigma X^2 \Sigma Y^2)^{1/2}$$

Donde X representa el vector de saturaciones del primer factor, e Y el del segundo.

*Tabla 6.2 Valor mínimo que debe alcanzar el coeficiente de congruencia para considerar un factor comparable en dos grupos con una determinada probabilidad asociada y un número de variables comunes (Adaptada de Cattell, 1978)*

N	Rc	P
10	,91	,001
	,78	,01
	,70	,025
	,63	,05
	,53	,10
	,82	,001
20	,68	,01
	,57	,025
	,50	,05
	,41	,10

(a) n = Número de variables comunes. rc = Coeficiente de congruencia.

(b) p = Probabilidad asociada a rc.

Por otra parte, en el AFC multigrupo se utilizó un procedimiento de varios pasos mediante el test jerárquico de modelos anidados empleando el programa AMOS. En primer lugar (paso 1), se establece un modelo base (en nuestro caso el modelo derivado de la validación cruzada del VPR), en el que la hipótesis a contrastar es que el patrón de cargas factoriales sea el mismo en los dos grupos (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), lo que se denomina en la literatura **invarianza de configuración** (Horn, McArdle y Mason, 1983). Después (paso 2) se comprueba la **invarianza métrica** entre grupos. Para ello, se ejecuta nuevamente el programa con la restricción de igualdad de parámetros lambdas (cargas factoriales) en los dos grupos. Para comparar el modelo resultante con el modelo obtenido en el paso 1 (modelo base) se halla la diferencia entre los  $\chi^2$  de los pasos 1 y 2 ( $\Delta\chi^2$ ). La significación estadística de esta diferencia se determina utilizando la diferencia en grados de libertad. Si no se encuentran diferencias significativas, esto indica que un modelo en el que los factores de carga se fuerzan a ser iguales en los dos grupos se ajusta a los datos tan bien como un modelo en el que los factores de carga se estiman de forma libre. Por tanto, los factores de carga son invariantes en los grupos, lo que apoyaría la hipótesis de equivalencia métrica. Si se encuentran diferencias significativas, hay que localizar qué variables provocan la falta de equivalencia, en el marco de la equivalencia parcial de medida (Byrne, 1989),

dejando libres de restricción, uno a uno, las variables cuyo desajuste sea mayor según los índices de modificación.

### **3.- RESULTADOS**

#### **3.1.- Análisis de los elementos el VPR**

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados, las tablas que se presentan a continuación recogen información sobre los elementos que componen el primero de los protocolos de valoración del riesgo: el VPR. La tabla 6.3 recoge un resumen de los estadísticos descriptivos con respecto a los ítems que conforman el cuestionario. Cabe destacar en primer lugar que esta tabla refleja como el valor mínimo y el máximo se ajustan a lo esperable por el sistema de puntuación descrito en el capítulo cuarto (intervalo entre 0 y 4). Los ítems 4, 5, 6, 12 y 14 obtienen las medias más altas, mientras que el resto de indicadores tienen un grado de representación más bajo. Finalmente el índice de asimetría indica que para la mayoría de los ítems existe una asimetría positiva, es decir, existe una tendencia en la forma de responder de manera afirmativa a los indicadores del cuestionario.

*Tabla 6.3. Estadísticos descriptivos de los elementos que forman el VPR (N=20.576)*

<b>Ítems</b>	<b>N</b>	<b>Mín</b>	<b>Máx</b>	<b>Media</b>	<b>DT</b>	<b>Asim.</b>	<b>Curt.</b>
1	20.576	0	4	0,89	0,92	0,88	0,22
2	20.576	0	4	0,20	0,61	3,62	13,94
3	20.576	0	4	0,27	0,68	2,92	8,61
4	20.576	0	4	1,13	1,07	0,63	0,71
5	20.576	0	4	1,06	1,02	0,65	0,46
6	20.576	0	4	1,46	1,07	0,35	0,67
7	20.576	0	4	0,56	0,89	1,61	1,85
8	20.576	0	4	0,22	0,63	3,50	12,81
9	20.576	0	4	0,14	0,47	4,71	25,56
10	20.576	0	4	0,34	0,74	0,74	6,07
11	20.576	0	4	0,47	0,82	0,82	3,07
12	20.576	0	4	1,13	1,4	1,14	0,70
13	20.576	0	4	0,93	1,09	1,09	0,14
14	20.576	0	4	1,03	1,01	1,01	0,41
15	20.576	0	4	0,75	0,99	0,99	0,63
16	20.576	0	4	0,25	0,64	0,64	10,53



Al analizar los ítems del instrumento con respecto a las opciones de respuesta (tabla 6.4), se observa que los porcentajes de respuesta más elevados corresponden a las categorías “el ítem no se da” y “se da” con baja frecuencia. Existen determinados indicadores como el ítem número 4 (amenazas), el ítem número 6 (violencia psíquica), el ítem número 12 (abuso de sustancias) y el ítem número 13 (celos exagerados) que presentan los valores más elevados dentro de los porcentajes de respuesta de las categorías riesgo alto y riesgo extremo. Seguidamente el ítem que menor frecuencia de aparición tiene corresponde al número 8 (incumplimiento de disposiciones cautelares). Por último, es del ítem número 16 (tendencia suicida del agresor) del que menos información se obtiene.

*Tabla 6.4. Análisis de elementos VPR en función de las opciones de respuesta (N=20.576)*

Ítems	No se da	No se sabe	Bajo	Medio	Alto	Extremo
1	40.5	0.9	35.4	16.8	5.5	0.8
2	85.8	3.1	5.9	3.0	1.7	0.5
3	82.2	2.1	8.5	4.5	2.2	0.5
4	34.4	1.6	30.0	21.1	11.0	1.9
5	36.5	1,7	29.8	21.5	9,2	1,2
6	20.8	1.6	32.4	<b>26.8</b>	<b>15.3</b>	<b>3.1</b>
7	64.0	2.6	17.8	10.3	4.5	0.8
8	<b>89.3</b>	4.8	5.8	2.9	2.1	0.5
9	<b>87.9</b>	5.4	3.8	1.7	0.9	0.3
10	76.1	4.7	10.2	5.6	2.8	0.6
11	67.8	5,0	14.5	8.7	3,4	0,6
12	37,4	5,8	21.2	19.8	13,4	2,4
13	46,0	4,3	21.7	16.4	9,6	2,0
14	36,9	3,0	29.1	21.2	8,7	1,1
15	52,2	6,2	20,1	13,3	6,8	1,1
16	<b>80,6</b>	6,3	6,9	3,8	1,9	0,5

A continuación, en la tabla 6.5 se examina si los elementos del VPR muestran un funcionamiento diferencial según el cuerpo policial de procedencia.

Tabla 6.5. Estadísticos descriptivos de los ítems del VPER en función del cuerpo policial de procedencia (N=20.576)

	CUERPO NACIONAL DE POLICIA N= 12.561				GUARDIA CIVIL N= 8.015						
Ítems	M	DT	Asim.	Curt.	Media	DT	Asim	Curt.	T	Sig	d
1	0,99	0,95	0,75	,03	0,74	0,85	1,09	0,78	19,737	,000	,2722
2	0,25	0,67	3,21	10,58	0,14	0,48	4,56	23,48	13,797	,000	,1801
3	0,30	0,73	2,75	7,44	0,22	0,61	3,21	10,90	8,188	,000	,1163
4	1,25	1,11	0,50	-,72	0,95	0,97	0,82	-,06	20,530	,000	,2819
5	1,23	1,05	0,45	-,70	0,80	0,92	1,00	0,29	3,847	,000	,427
6	1,62	1,09	0,19	-,78	1,18	0,99	0,59	,27	29,437	,000	,4158
7	0,67	0,97	1,37	0,97	0,40	0,73	2,03	3,93	22,730	,000	,304
8	0,25	0,67	3,33	11,37	0,19	0,58	3,74	14,96	6,031	,000	,0935
9	0,16	0,51	4,41	22,05	0,10	0,41	5,25	31,88	8,455	,000	,1255
10	0,40	0,80	2,29	4,81	0,26	0,63	2,87	8,64	13,433	,000	,1876
11	0,52	0,85	1,74	2,37	0,39	0,76	2,17	4,42	11,172	,000	,1578
12	1,23	1,18	0,54	-,90	0,98	1,06	0,83	,34	15,768	,000	,2188
13	1,13	1,15	0,69	-,61	0,63	0,91	1,43	1,26	34,995	,000	,4699
14	1,15	1,04	0,55	-,62	0,86	0,94	0,90	0,05	20,335	,000	,2876
15	0,85	1,04	1,05	0,09	0,58	0,87	1,56	1,86	20,358	,000	,2752
16	0,30	0,69	2,87	8,40	0,19	0,55	3,76	15,68	12,658	,000	,1703

Empleando un contraste de diferencias de medias, utilizando para tal efecto el estadístico *t de Student* estableciendo un nivel de significación de 0,05, en la tabla anterior se puede comprobar que existen diferencias significativas para todas las puntuaciones de los 16 ítems del protocolo VPR. Según estos datos, el CNP parece que tiende a puntuar más alto que la GC en todos y cada uno de los ítems. No obstante, al calcular el “tamaño del efecto” a través de la “*d*” de Cohen (columna *d* en la Tabla 6.5; un estimador estadístico que sirve para cuantificar la relevancia de las diferencias encontradas), se encuentra que los ítems 2, 3, 9, 10, 11 y 16 presentan valores muy débiles ( ,18; ,11; ,12; ,15; ,17, respectivamente) especialmente despreciables para el ítem 8 ( ,09), lo que se interpreta en el sentido de que las diferencias encontradas pueden ser perfectamente atribuibles al gran tamaño muestral y no a una auténtica diferencia debida al cuerpo policial.

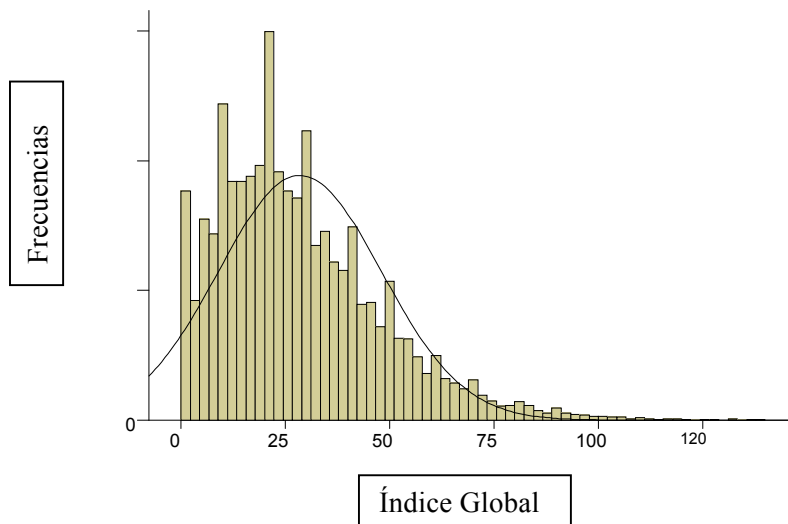
Una vez estudiados los ítems que componen los formularios, ahora se va a analizar profusamente la variable índice global, y acto seguido los niveles de riesgo obtenidos como consecuencia del análisis de aquella variable. Con el término índice global se hace referencia a la puntuación final del protocolo VPR. Se recuerda que este instrumento está diseñado de tal manera que a más puntuación en esta variable más riesgo tiene la víctima de ser agredida nuevamente. En función del índice global se

establecen los niveles de riesgo comentados en el capítulo cuarto, las medidas policiales de protección y los plazos de revisión. Del mismo modo que en apartados anteriores, se van a ir estableciendo las diferencias que puedan aparecer en función del cuerpo policial de procedencia (CNP y GC).

### **Índice global**

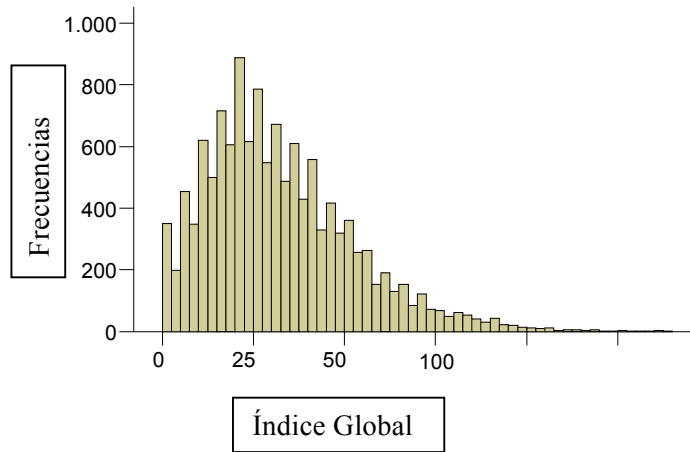
En primer lugar, se presenta el análisis de la muestra global, con los resultados referidos tanto a los datos correspondientes al CNP como a los de la GC. En segundo lugar, y como se avanzó anteriormente se establecerán las diferencias encontradas en función del cuerpo policial de procedencia. La figura 6.5 muestra la distribución a través de un histograma de los resultados totales en el índice global del VPR, para lo cual se ha dispuesto de 20.576 casos, es decir el 100% de la muestra total. En términos generales, la media se sitúa en 28,47 puntos, con una desviación típica de 19,58, en un rango comprendido entre 0 y 138 puntos.

*Figura 6.5. Distribución de la variable índice global VPR (N= 20.576)*

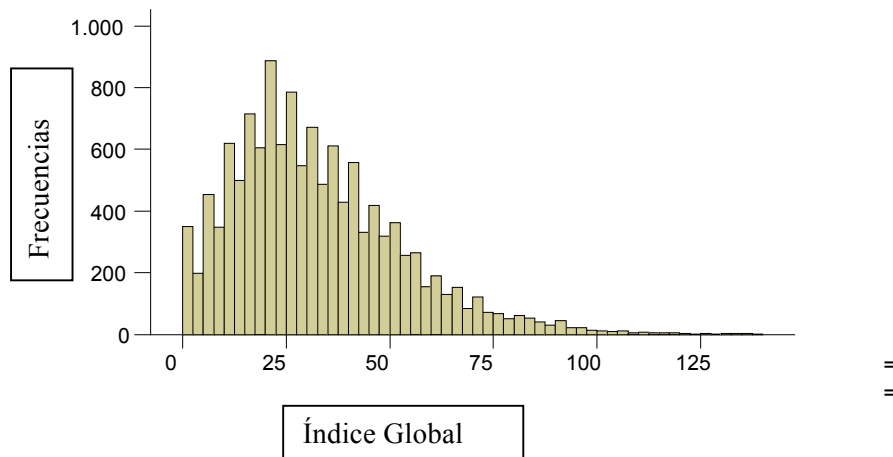


Las siguientes figuras reflejan la distribución de las frecuencias del índice global, bien perteneciendo a la GC o al CNP.

*Figura 6.6. Distribución de la variable índice global de las puntuaciones obtenidas por el CNP (N=12.561)*



*Figura 6.7. Distribución de la variable índice global según las puntuaciones obtenidas por la GC (N=8.097)*



La conclusión general ofrecida por las figuras anteriores, es que el CNP tiende a puntuar por encima de la GC en la variable índice global. En el CNP la media para esta variable se sitúa en 32,03 puntos (DT= 20,226) mientras que para la Guardia Civil, la media es de 22,92 puntos (DT= 17,13). Esto quiere decir que las víctimas que presentan denuncia en demarcación del CNP tienden a tener una puntuación mayor en esta

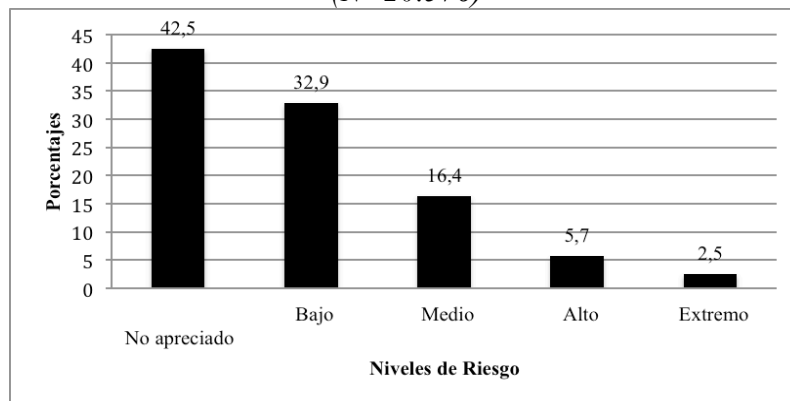
variable que las víctimas que lo hacen en demarcación GC. La tabla 6.6 muestra las características de los estadísticos descriptivos más importantes (tanto de tendencia central como de dispersión) con respecto al índice global, en función del cuerpo policial de procedencia, observándose que existen diferencias estadísticamente significativas entre los cuerpos policiales ( $p<0,005$ ). La puntuación del índice global del VPR calculada para el CNP es estadísticamente superior a la puntuación calculada para el cuerpo de la GC; el tamaño del efecto, calculado a partir del estadístico  $d$  de cohen indica que hay homogeneidad a la hora de completar el VPR, pero que el CNP tiende a puntuar más alto.

Tabla 6.6. Comparación de la variable índice global en función del cuerpo policial de procedencia

Puntuación VPR										T	d
CUERPO NACIONAL DE POLICIA					GUARDIA CIVIL						
N	M	DT	Asimetría	Curtosis	N	Media	DT	Asimetría	Curtosis		
12.701	32.028	20.22	0,975	1.275	8.097	22.924	17.13	1.246	2.432	0,000	0,47

En la figura 6.6 quedan recogidos los porcentajes obtenidos para cada nivel de riesgo en el VPR. Para el conjunto de la muestra, observamos que a medida que el nivel de riesgo aumenta la proporción de la muestra disminuye. En esta dirección, los niveles de riesgo más representados son el nivel de riesgo no apreciado (42,5%) y el nivel de riesgo bajo (32,9%), constituyendo el riesgo extremo el menos representado con un 2,5%, seguido del nivel de riesgo alto con un 5,7%.

Figura 6.8. Distribución de los casos de VDG en función del nivel de riesgo (N=20.576)



Al dividir la muestra total por cuerpos policiales, en la tabla 6.7 se muestran los niveles de riesgo para cada cuerpo policial, encontrándose que las valoraciones policiales de riesgo procedentes del Cuerpo Nacional de Policía ofrecen resultados más elevados para cada nivel de riesgo a excepción del nivel de riesgo no apreciado. En conjunto, y al igual que se observaba en el análisis anterior, se puede concluir que los agentes del CNP tienden a valorar con más riesgo a las víctimas que presentan denuncia, que los agentes pertenecientes al cuerpo de la GC.

*Tabla 6.7. Distribución de los casos de VDG en función de los niveles de riesgo y del cuerpo policial de procedencia (N=20.576)*

		NIVEL RIESGO VPR										Total
C. Policial		No Apreciado (N)	%	Bajo (N)	%	Medio (N)	%	Alto (N)	%	Extremo (N)	%	
	CNP	4.354	34,7	4.381	34,9	2.479	19,7	898	7,1	443	3,5	12.561
	GC	4.405	55	2.387	29,8	887	11,1	259	3,2	83	0,9	8.015
Total		8.759	42,6	6.768	32,9	3.366	16,4	1.157	5,6	526	2,5	20.576

### 3.2.- Análisis de la fiabilidad

El siguiente objetivo que compone el estudio 1 se centra en conocer el grado de fiabilidad del protocolo VPR. Este análisis ofrece una información muy útil sobre el funcionamiento de los indicadores en relación al formulario completo. Al igual que en los anteriores resultados, primero se va a obtener el estadístico alfa de Cronbach para la muestra total, y seguidamente, se analizará en función del cuerpo policial de donde procede la muestra, con el objetivo de determinar si existe alguna diferencia entre ellos. En la tabla 6.8 se indica el índice de fiabilidad total para toda la muestra (N= 20.576), así como el desglose por cuerpos policiales. El valor alcanzado del estadístico para la muestra total ( $\alpha = ,855$ ) informa de un alta consistencia interna entre los ítems. Del mismo modo, los resultados indican también una alta correlación entre ellos cuando se desglosa la muestra por cuerpo policial, obteniéndose un índice de fiabilidad de ,814 para el CNP y de ,807 para la GC.

*Tabla 6.8. Índice de fiabilidad obtenido a través del alpha de Cronbach en el VPR  
(N=20.576)*

N	Nº de elementos del instrumento	Alfa de Cronbach	Total	CNP	GC
20.824	16	$\alpha$	,855	,814	,807

Profundizando aún más en el estudio de la fiabilidad, se puede comprobar la influencia de cada ítem sobre ella. Una vía para hacerlo es suprimir ítem a ítem, viendo la influencia de la eliminación de cada uno sobre la totalidad del instrumento. Así, al controlar un indicador mediante su supresión, si el índice de fiabilidad disminuye, entonces quiere decir que dicho ítem es relevante para la totalidad de la escala; al contrario, si el coeficiente de fiabilidad es alto una vez eliminado el ítem, entonces su influencia en la sensibilidad del protocolo VPR será bajo. Además conviene tener en cuenta el coeficiente de correlación del ítem con la puntuación total de la escala: si dicho coeficiente es extremadamente bajo indicaría la posibilidad de que el funcionamiento de un ítem fuese independiente del resto de ítems y, por tanto, señalaría un potencial fuente de error. La tabla 6.9 recoge los resultados de estos análisis para la totalidad de la muestra, y las tablas 6.10 y 6.11 ofrecen el mismo análisis pero en función del cuerpo policial de origen, observándose que en todos los casos disminuye el valor del alfa de Cronbach con respecto al alfa total, indicativo de que todos los ítems son relevantes. Además, en la cuarta columna de las tablas se muestra el coeficiente de correlación de cada ítem con la puntuación total de la escala, observándose buenas correlaciones. Musitu, García y Gutiérrez (1995, 1999), propusieron una serie de indicaciones a la hora de interpretar los valores de las correlaciones entre el ítem y la puntuación total obtenidas en los análisis anteriores:

- Si la correlación es mayor a ,40, el ítem tiene un funcionamiento satisfactorio. Éste sería el caso de los ítems: 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14 del CNP; y 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 16 de la GC.
- Si la correlación está entre ,30 y ,39 se considera que el ítem no requiere revisión, pero que su funcionamiento puede ser descrito meramente como adecuado. Sería la circunstancia en la que se encuentran las cuestiones número 1, 3, 10, 11 y 15 (CNP), y 1, 3, 10, 11 y 16 (GC).
- Si la correlación se encuentra entre ,20 y ,29 el ítem necesita ser revisado si no hay otros indicadores estadísticos de peso que desaconsejen lo contrario. En esta

situación hallamos los ítems 2, 8, 9 para ambos cuerpos. Todos con valores próximos al límite superior ( ,29), salvo el ítem número 8 con la correlación ítem-total más baja de toda la prueba ( ,250 CNP; ,270 GC). Sin embargo, su eliminación del cuestionario no beneficia a la fiabilidad de la prueba.

- Por último, si la correlación es menor o igual a ,19 el ítem debe ser eliminado o revisado completamente. En el VPR no hay ningún ítem con este valor.

*Tabla 6.9. Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPR (N=20.576)*

Ítems	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
1	9,94	49,254	,382	,212	,814
2	10,63	52,134	,292	,112	,819
3	10,56	51,176	,348	,162	,816
4	9,70	45,564	,578	,425	,800
5	9,78	45,119	,646	,511	,795
6	9,39	45,156	,606	,463	,798
7	10,27	48,439	,467	,236	,809
8	10,62	52,313	,258	,312	,820
9	10,70	53,009	,270	,327	,820
10	10,49	50,308	,397	,196	,813
11	10,37	50,660	,319	,175	,818
12	9,71	46,766	,446	,233	,811
13	9,90	45,900	,540	,330	,803
14	9,80	47,836	,442	,253	,811
15	10,09	48,391	,415	,204	,812
16	10,58	51,779	,310	,116	,818

*Tabla 6.10. Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPR en el CNP (N=12.561)*

Ítems	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
1	11,26	52,517	,373	,211	,807
2	12,01	55,204	,293	,115	,811
3	11,95	54,234	,356	,170	,808
4	11,01	48,463	,572	,431	,792
5	11,03	48,195	,635	,511	,788
6	10,64	48,427	,590	,445	,791
7	11,59	51,276	,458	,231	,801
8	12,02	55,680	,250	,305	,813
9	12,10	56,403	,256	,322	,813
10	11,86	53,350	,391	,192	,806
11	11,74	54,003	,307	,175	,811
12	11,03	49,863	,437	,226	,803
13	11,13	48,822	,526	,318	,796
14	11,11	51,132	,425	,241	,804
15	11,40	51,616	,392	,190	,806
16	11,96	55,058	,295	,110	,811



*Tabla 6.11. Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPR en la GC (N=8.015)*

Ítems	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
1	7,88	37,242	,345	,177	,802
2	8,48	39,802	,248	,088	,806
3	8,39	38,718	,324	,141	,802
4	7,66	34,273	,555	,387	,785
5	7,82	34,072	,617	,459	,780
6	7,43	33,811	,584	,445	,783
7	8,22	37,132	,433	,203	,795
8	8,43	39,265	,270	,326	,805
9	8,51	39,925	,284	,340	,805
10	8,36	38,120	,387	,188	,799
11	8,23	37,965	,321	,165	,803
12	7,64	34,964	,434	,224	,796
13	7,99	35,387	,493	,275	,791
14	7,75	35,860	,429	,239	,796
15	8,04	36,499	,410	,197	,797
16	8,43	39,116	,311	,117	,803

A continuación, se ofrece una propuesta a la hora de interpretar los valores obtenidos cuando los grupos se establecen considerando como criterio la puntuación total del test, siguiendo las propuestas de Musitu y cols., 1995, 1999):

- Si la correlación es mayor a ,40, el ítem tiene un funcionamiento satisfactorio. Éste sería el caso de los ítems: 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14 del CNP; y 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 16 de la GC.
- Si la correlación está entre ,30 y ,39 se considera que el ítem no requiere revisión, pero que su funcionamiento puede ser descrito meramente como adecuado. Sería la circunstancia en la que se encuentran las cuestiones número 1, 3, 10, 11 y 15 (CNP), y 1, 3, 10, 11 y 16 (GC).
- Si la correlación se encuentra entre ,20 y ,29 el ítem necesita ser revisado si no hay otros indicadores estadísticos de peso que desaconsejen lo contrario. En esta situación hallamos los ítems 2, 8, 9 para ambos cuerpos. Todos con valores próximos al límite superior ( ,29), salvo el ítem número 8 con la correlación ítem-total más baja de toda la prueba ( ,250 CNP; ,270 GC). Sin embargo, su eliminación del cuestionario no beneficia a la fiabilidad de la prueba.
- Por último, si la correlación es menor o igual a ,19 el ítem debe ser eliminado o revisado completamente. En el VPR no hay ningún ítem con este valor.

Consecuentemente con este criterio y a la vista de los análisis realizados, se considera oportuno el mantenimiento de los 16 ítems.

### **3.3. Validez de constructo**

#### **3.3.1.- Validación cruzada: Determinación y Validación de un modelo estructural**

##### **3.3.1.1.- Análisis Factorial Exploratorio (Muestra 1 N= 10.247)**

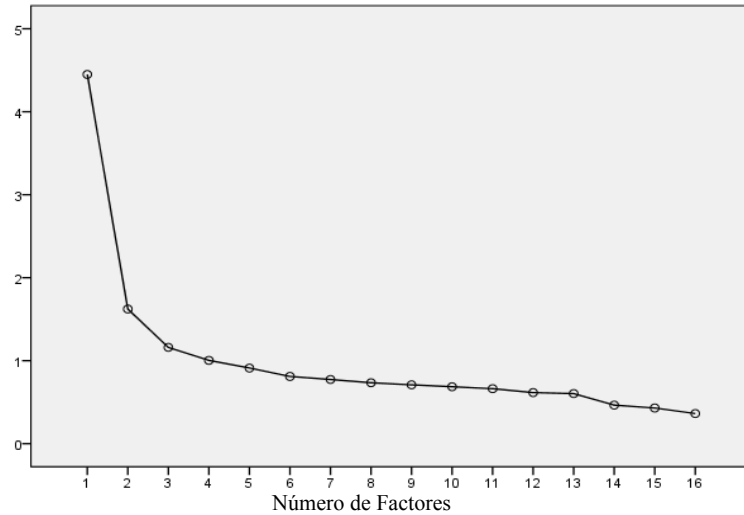
Lo primero que se realizó fue un AFE sobre la muestra 1 del protocolo VPER, la tabla 6.12 recoge los resultados obtenidos acerca de las varianzas total explicada por cada factor y a continuación (figura 6.7) el gráfico de sedimentación según el número de componentes.

*Tabla 6.12. Distribución de la varianza total explicada para cada factor*

Factores	Autovalores iniciales			Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción			Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación
	Total	% de la varianza	% acumulado	Total	% de la varianza	% acumulado	Total
1	4,449	27,809	27,809	3,861	24,130	24,130	3,297
2	1,622	10,139	37,948	1,107	6,918	31,048	2,902
3	1,160	7,251	45,199	,472	2,952	34,000	2,630
4	1,004	6,275	51,474	,366	2,287	36,287	1,496

La tabla anterior muestra una estructura de cuatro factores que tras la extracción explican un 36% del total de la varianza. Hay cuatro autovalores mayores que 1 (regla de Kaiser), por lo que el procedimiento extrae cuatro factores que consiguen explicar más del 36% de la varianza de los datos originales. La figura 6.7 muestra la representación de los factores detectados en el análisis anterior. Este formato de ilustración suele ser empleado para decidir, a primera vista, el número de factores a utilizar, tomando como referencia el punto en el que la pendiente de la recta empieza a ser paralela al eje de abscisas.

Figura 6.9. Factores identificados a través del AFE correspondientes al VPR representados a través del gráfico de sedimentación



Se puede observar cómo a partir del cuarto factor aparece un punto de inflexión desde el cual la pendiente de la recta descendente empieza a ser mínima. Más allá de este factor no hay otro componente que aporte una cantidad significativa o importante de varianza explicada (Cattell, 1966). Esta técnica es conocida como *scree-plot*, y se observa cómo la asíntota comienza claramente a partir del quinto factor, ofreciendo los cuatro primeros una pendiente diferente de la ofrecida para el resto de componentes.

A continuación, la tabla 6.13 recoge los resultados obtenidos acerca de las comunalidades obtenidas, que informan del porcentaje de varianza del que dan cuenta los factores que componen el VPR. Este término expresa la parte de cada ítem (su variabilidad) que puede ser explicada por los factores hallados.

*Tabla 6.13. Comunalidades de los ítems del VPR*

Ítems	Inicial	Extracción
1	,216	,297
2	,113	,150
3	,167	,258
4	,437	,490
5	,521	,630
6	,472	,618
7	,243	,279
8	,302	,526
9	,311	,542
10	,198	,275
11	,173	,239
12	,232	,335
13	,330	,389
14	,265	,334
15	,207	,299
16	,119	,143

Desde este punto de vista se puede observar como el ítem 2 y el ítem 16 son los peor explicados por el modelo, que sólo es capaz de reproducir entre el 14% y el 15% de cada uno de ellos.

El siguiente paso del AFE es conocer la composición de dicha estructura factorial, así como los pesos que cada uno de los ítems del protocolo tienen en cada una de las cuatro dimensiones obtenidas (factores). La tabla 6.14 muestra la solución factorial propiamente dicha (matriz de configuración), que informa de las correlaciones entre las variables originales (o saturaciones) y cada uno de los factores.

*Tabla 6.14. Estructura factorial de la escala VPR.  
Matriz de configuración*

ÍTEMs	Factor			
	1	2	3	4
1	-,017	<b>,575</b>	-,018	-,041
2	,048	<b>,372</b>	-,054	,031
3	-,166	<b>,563</b>	,103	-,031
4	,414	,364	-,044	,032
5	,489	,412	-,070	,012
6	<b>,807</b>	-,041	,015	-,002
7	,169	,184	,280	-,042
8	,115	-,092	-,022	<b>,737</b>
9	-,057	,049	,018	<b>,724</b>
10	-,060	,115	<b>,440</b>	,101
11	-,144	,096	,398	,183
12	,090	,008	<b>,543</b>	-,073
13	<b>,514</b>	,004	,165	-,005
14	<b>,625</b>	-,129	,053	,035
15	,218	-,148	<b>,494</b>	-,032
16	,123	-,026	,318	-,015

La tabla 6.15 recoge la distribución de los ítems que mayor carga factorial presentan en cada una de estas dimensiones. De este modo, se observa que el primer factor podría definirse fundamentalmente por la carga de los ítems 6, 13 y 14, y podría ser interpretado como la dimensión de “aspectos psicológicos” de la violencia (violencia psicológica, celos exagerados y/ o problemas en las relaciones de pareja). En el segundo factor saturan los tres primeros ítems, por lo que el factor puede ser denominado “violencia”, puesto que incluye la violencia física (ítem 1), la violencia sexual (ítem 2) y el uso de objetos u armas contra la víctima (ítem 3). El tercer factor recoge el grupo de las variables más relacionadas con el comportamiento del autor hacia la justicia, por lo que se podría denominar “comportamiento desadaptativo”; está constituido por los ítems 10 (conducta desafiante), 12 (abuso de sustancias tóxicas) y 15 (problemas laborales y/ o financieros del agresor). El cuarto factor está formado exclusivamente por dos ítems que resultan ser independientes de todos los demás, el ítem 8 (no cumplimiento de las disposiciones judiciales cautelares) y el ítem 9 (quebrantamiento de penas o medidas de seguridad), por lo que se le puede denominar “relación con la justicia”. Por último, ha resultado que los ítems 4 (amenazas o planes dirigidos a causar daño físico/ psíquico a la víctima) y 5 (incremento y/ o repetición de episodios o amenazas de violencia) presentan cargas cruzadas, al saturar de manera similar en los

dos primeros factores identificados, por ello se decidió que no se agrupasen en ningún factor, ya que cada variable debe pesar solo en un conjunto pequeño de factores que no deben solaparse entre ellos (Macía, 2010).

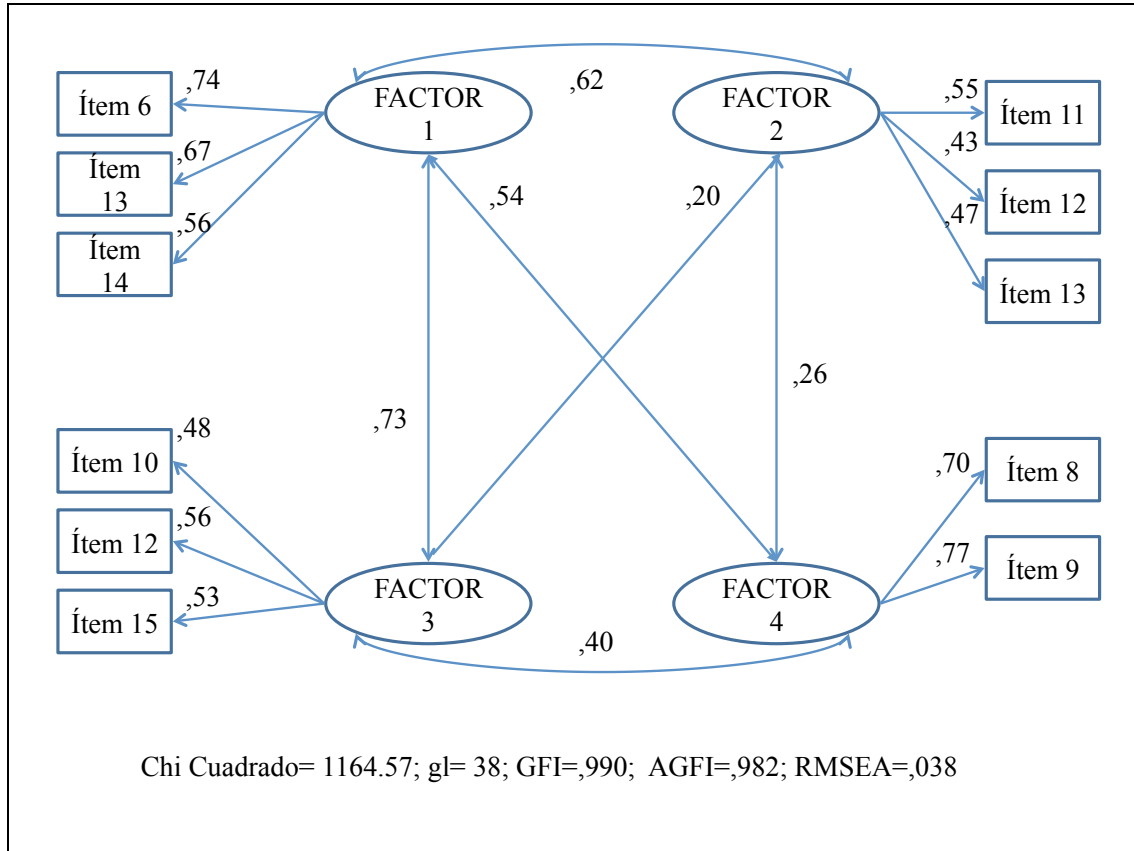
*Tabla 6.15. Principales marcadores identificados mediante AFE*

<b>FACTOR I Aspectos psicológicos</b>	<b>FACTOR II Violencia</b>	<b>FACTOR III Comportamiento desadaptativo</b>	<b>FACTOR IV Relación con la justicia</b>
<i>Ítem 6</i> Violencia Psicológica	<i>Ítem 1</i> Violencia Física	<i>Ítem 10</i> Conducta desafiante	<i>Ítem 8</i> No cumplimiento medidas cautelares
<i>Ítem 13</i> Celos exagerados	<i>Ítem 2</i> Violencia sexual	<i>Ítem 12</i> Abuso de sustancias	<i>Ítem 9</i> Trasgresión medidas de seguridad
<i>Ítem 14</i> Problemas en relaciones de pareja	<i>Ítem 3</i> Violencia Instrumental	<i>Ítem 15</i> Problemas laborales o financieros	

### **3.3.1.2.- Análisis Factorial Confirmatorio (Muestra 2, N= 10.329)**

Mediante un Análisis Factorial Confirmatorio se definió el modelo de medida, que comprendía los cuatro factores latentes descritos anteriormente y libremente correlacionados. Cada factor fue definido por los principales marcadores que aparecen listados en la tabla 6.15. En la figura 6.10 aparecen los pesos estandarizados de los principales parámetros del modelo. Por otra parte, se informa también de los índices de bondad de ajuste del modelo. Como se puede observar, el modelo presenta un buen ajuste, ya que el GFI y AGFI obtienen valores por encima de 0,9 y el RMSEA está por debajo de 0,5.

Figura 6.10. Modelo de medida contrastado mediante AFC



Las correlaciones encontradas en este modelo entre los factores latentes oscilan en un rango entre ,20 y ,73 siendo todas ellas positivas. En ese sentido, es preciso indicar que la correlación más elevada ( ,73) corresponde a la hallada entre el factor 1 (aspectos psicológicos) y el factor 3 (comportamiento desadaptativo), la más baja ( ,20) corresponde a la correlación entre el factor 2 (violencia) y el factor 3. El resto de relaciones se plantean del siguiente modo: el factor 1 obtiene una correlación alta con el factor 2 ( ,62), y moderada con el factor 4 ( ,54). La relación del factor 2 con el factor 3 es pequeña ( ,20), y un poco más elevada con el factor 4 ( ,26). Por último, el factor 3 con el factor 4 presenta una correlación media ( ,40). De este análisis se concluye que los factores propuestos son suficientemente diferentes entre sí. Las correlaciones entre ellos no son tan altas como para hacer sospechar que dos de ellos constituyan un único factor.

### **3.3.2.- Robustez del modelo estructural**

#### **3.3.2.1- Coeficientes de congruencia factorial**

Antes de comparar la identidad de cualquier factor en diferentes grupos hay que garantizar que se está extrayendo en ambos grupos el mismo factor (McArdle, 1996). Es decir, que la misma dimensión está siendo evaluada por los agentes del CNP y de la GC. La forma de obtener esta información es a través del coeficiente de congruencia ( $r_c$ ) (Cattell, 1978; Jensen, 1998), un índice de similitud interfactorial que, al igual que la correlación de Pearson, presenta valores entre -1 y +1. No tiene distribución muestral conocida, pero se asume que un valor superior a ,90 indica un alto grado de similaridad entre los factores comparados, mientras que un valor superior a ,95 es interpretado como identidad (Jensen, 1998). En el caso del VPR, los coeficientes de congruencia factorial fueron superiores a ,95 para los cuatro factores que componen la estructura del instrumento. Por lo que se puede afirmar, que estos cuatro factores son idénticos en la solución factorial obtenida con los casos del CNP (N= 12.561) y con los casos de la GC (N= 8.015). En la tabla 6.16 se presentan los coeficientes de congruencia factorial obtenidos para cada factor al comparar la semejanza factorial en ambos grupos.

*Tabla 6.16. Coeficientes de congruencia factorial del VPR*

<b>FACTOR</b>	<b><math>r_c</math></b>
<b>FACTOR I Violencia Psicológica</b>	,978
<b>FACTOR II Violencia</b>	,989
<b>FACTOR III Comportamiento desadaptativo</b>	,962
<b>FACTOR IV Relación con la justicia</b>	,957

#### **3.3.2.2- Invarianza Factorial mediante AFC Multigrupo**

Los resultados obtenidos mediante la validación cruzada de la muestra son satisfactorios, lo que permite utilizar el total de los sujetos para los estudios de equivalencia. Para probar la equivalencia de medida entre los casos pertenecientes al



CNP y los casos pertenecientes a la GC, se parte de un primer modelo (modelo base), donde las cargas factoriales y las varianzas fueron estimadas libremente en ambos grupos. En el modelo de invarianza métrica total se fuerza la igualdad de las cargas factoriales entre ambos grupos, comparando el ajuste de los modelos mediante el incremento en  $X^2$  y en CFI. En el caso de encontrar diferencias significativas entre el ajuste de ambos modelos, se buscan las variables que causan ese desajuste, poniendo a prueba el modelo de equivalencia métrica parcial. El valor  $\chi^2$  para el modelo base fue de 1.199,94 con 76 grados de libertad. El valor del CFI fue de ,966 y el RMSEA de ,027. Estos índices de bondad de ajuste, entre otros, pueden verse en la tabla 6.19 e indican que el modelo base representa de una manera adecuada los casos del VPR que vienen del CNP y los que vienen de la GC. Además de comprobar el ajuste global del modelo se examinaron los valores estimados para las cargas factoriales en ambos grupos, que como se muestra en la tabla 6.17 presentan valores similares y razonables en ambos grupos.

*Tabla 6.17. Cargas factoriales estimadas para ambos grupos en el modelo base (AFC)*

	F1		F2		F3		F4	
	CNP	GC	CNP	GC	CNP	GC	CNP	GC
Ítem 6	,73	,73						
Ítem 13	,67	,62						
Ítem 14	,54	,55						
Ítem 1			,55	,52				
Ítem 2			,44	,43				
Ítem 3			,49	,47				
Ítem 10					,51	,53		
Ítem 11					,56	,55		
Ítem 15					,47	,47		
Ítem 8							,76	,77
Ítem 9							,70	,71

Por su parte, las cargas factoriales estimadas para el modelo de invarianza métrica se muestran en la tabla 6.18.

Tabla 6.18. Cargas factoriales estimadas para el modelo de equivalencia total (AFC)

	F1	F2	F3	F4
Ítem 6	,72			
Ítem 13	,66			
Ítem 14	,53			
Ítem 1		,50		
Ítem 2		,43		
Ítem 3		,48		
Ítem 10			,53	
Ítem 11			,54	
Ítem 15			,49	
Ítem 8				,79
Ítem 9				,70

El valor del  $\chi^2$  para el modelo de equivalencia métrica fue de 1.208,03 con 83 grados de libertad. El valor del CFI es de ,964 y el RMSEA de ,027 (ver tabla 6.19). Los valores de estos índices indican que el modelo se ajusta de manera apropiada. Además, el incremento en el  $\chi^2$  del modelo base al modelo de invarianza métrica total fue de 8,09 con 7 grados de libertad, cambio que no es estadísticamente significativo ( $p = ,325$ ). Asimismo, la diferencia en el CFI es ,002, muy inferior al criterio de ,01 establecido por Cheung y Rensvold (2002), por lo que ambos índices apuntarían a la existencia de invarianza métrica total en la estructura del VPR en función del cuerpo al que pertenecen los agentes que cumplimentan el protocolo. La tabla 6.19 recoge algunos de los principales índices de bondad de ajuste, tanto para el modelo base (MODELO 1), como para el modelo de equivalencia métrica (MODELO 2).

Tabla 6.19. Índices de bondad de ajuste del modelo base y del modelo forzado a mantener la igualdad en las cargas factoriales

MODELO BASE (MODELO 1)	MODELO DE EQUIVALENCIA (MODELO 2)
$\chi^2$ (76) = 1.199,94	$\chi^2$ (83) = 1.208,03
GFI = ,989	GFI = ,989
AGFI = ,982	AGFI = ,982
NNFI = ,964	NNFI = ,961
CFI = ,966	CFI = ,964
IFI = ,966	IFI = ,964
RMSEA = ,027	RMSEA = ,027

Por tanto, se puede afirmar que el modelo de equivalencia, al que se le impusieron restricciones en los parámetros de cargas factoriales (forzándolos a ser iguales en ambos grupos), ajusta de la misma manera que el modelo base (modelo libre), por lo que la hipótesis de equivalencia métrica se mantiene para el VPR.

#### **4.- DISCUSIÓN**

El primer objetivo que se persigue en el presente estudio es el análisis de las propiedades generales de los elementos que componen el instrumento de valoración de riesgo de violencia VPR. Junto a ello, se recaba evidencia empírica sobre los índices globales obtenidos para cada cuestionario por separado, primero en la muestra global y seguidamente por cuerpo policial. A continuación, se analiza la fiabilidad del test y la validez de constructo del instrumento. Finalmente, se pretende establecer un marco de referencia que justifique las diferencias encontradas en las variables donde se han encontrado diferentes resultados en función del cuerpo policial de donde proceden los datos (CNP – GC).

En primer lugar, es imprescindible comentar que la muestra con la que se ha realizado este estudio es representativa de la población objeto analizada, puesto que comprende datos procedentes de toda la geografía española, perteneciendo a los dos cuerpos policiales estatales. Entre las conclusiones principales con respecto a las víctimas que presentan denuncia, figuran las siguientes: las víctimas tienden a ser más bien jóvenes con una edad media en torno a los 36 años, y entre ellas el grupo más frecuente que presenta denuncia se encuentra comprendido en el intervalo entre los 30 y los 40 años. Se observamos en este estudio, al igual que en otras investigaciones similares (Echeburúa y cols., 2008; Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2006), que la VDG se centra en víctimas jóvenes. Aunque la mayor parte de los casos estudiados (59%, en la primera muestra y 63,1%, en la segunda) tienen nacionalidad española, se observan altos porcentajes de población extranjera, un dato que concuerda con los datos ofrecidos en el informe sobre víctimas mortales de la VDG y de la VD en el ámbito de la pareja y ex pareja en el año 2010 (CGPJ), donde se informa sobre la existencia de la sobrerrepresentación de víctimas denunciantes extranjeras.

Con relación al nivel académico, los resultados ponen en evidencia que la VDG afecta de manera asistemática a todos los niveles educativos. Sin embargo, es preciso

destacar algunos matices encontrados. Se observa que el porcentaje más elevado de víctimas que denuncian corresponde con las víctimas que tienen estudios primarios, seguido de las que no tienen estudios. En ambas muestras se comprueba que también existen víctimas con estudios universitarios, pero el porcentaje no llega a superar el 5%. Es preciso indicar que en el estudio de esta variable, se ha contado con una muestra muy pequeña (N= 1.345), por ello se recomienda ser cauteloso a la hora de generalizar los resultados.

Con respecto a las relaciones de pareja, las víctimas que acuden a dependencias policiales son, en su mayoría, víctimas que todavía mantienen una relación de afectividad (parejas sentimentales o cónyuges). Estos resultados corroboran la información vertida por Echeburúa y cols. (2008), acerca de que las denuncias de violencia surgen en parejas que mantienen una convivencia. Esto es de gran importancia de cara a la actuación policial, puesto que muchas veces la víctima denuncia cuando ya no puede soportar más la relación y decide separarse. En estos casos aumentan las probabilidades de que la víctima sea agredida (Daly y Wilson, 1988). En este sentido, el CGPJ informa de un 50% de víctimas que han terminado su relación en el momento de poner la denuncia, lo que indica que la separación no es garantía para finalizar la violencia pero sí supone un primer paso en el proceso de enfrentarse al fenómeno de la VDG.

En relación con el siguiente objetivo, estudiar los elementos que forman los instrumentos de valoración del riesgo, se ha encontrado que ambos protocolos se ajustan perfectamente al sistema de puntuación diseñado. Del análisis de los valores medios de las puntuaciones de los 16 indicadores del VPR, se comprobó que las medias de los ítems 4, 5 y 6 eran las más altas. Esos indicadores evalúan de manera indirecta (ítem número 4) y directa (ítems número 5 y 6) la violencia psicológica. Una hipótesis que puede explicar por qué estos ítems obtienen las medias más elevadas es que, a raíz de la Ley Orgánica 1/ 2004, ha habido un incremento significativo de la crítica social, lo que se ha traducido en que muchas de las conductas que anteriormente estaban tipificadas en el Código Penal como faltas, se convirtieran con esta Ley en delitos (ej.: amenazas de muerte). En este sentido, tanto la víctima como el policía que recoge la denuncia están más sensibilizados a detectar este tipo de violencia. No es de extrañar que el ítem 6 (violencia psíquica del agresor hacia la víctima) constituya el ítem con las puntuaciones

más elevadas. La violencia física suele aparecer más frecuentemente cuando los agresores han hecho uso anteriormente de una violencia psicológica (Echeburúa y cols., 2008), y los primeros eslabones en la escalada de la violencia lo suelen constituir este tipo de violencia que no deja marcas físicas. Este ítem es, por tanto, muy importante, especialmente de cara a la reevaluación del riesgo de violencia, puesto que diferentes estudios han encontrado que actitudes como la posesión de la pareja, la misoginia, o el uso de la violencia para resolver conflictos, están asociados a un incremento del riesgo de reincidencia en VDG (Sonkin, 1987; Hanson y Wallace-Capretta, 2000; Schummacher y cols., 2001; Campbel y cols., 2001). Por todo ello parece lógico que este ítem sea el que más alto puntúe.

Por su parte, el ítem 5 (incremento y/ o repetición de episodios o amenazas de violencia) refleja algunas de las características propias de las relaciones de abuso dentro de la pareja (escalada de la violencia, amenazas, etc.). En este sentido tampoco resulta extraño que la media sea elevada. Esta forma de comportamientos se observa con frecuencia en las personas que denuncian hechos de este tipo, al referirse al agresor. De cara a la actuación policial, es importante revistar todos los sucesos violentos que se hayan dado en la historia del agresor (Rice y Harris, 1992), puesto que la existencia de ciclos de violencia (Walker, 1989) o de incrementos paulatinos de violencia, está fuertemente asociado a un aumento del riesgo de reincidencia violenta (Sonkin, 1987). Si se controlan estos indicadores, se podrá predecir con más precisión el comportamiento futuro del agresor.

Seguidamente, el ítem 14 (problemas patentes en las relaciones de pareja) presenta también una de las medias más elevadas. En general, los agresores que tienen relaciones afectivas de pareja inestables suelen tener historias delictivas más largas, un comportamiento delictivo más frecuente y una proporción de reincidencia general y violenta más elevada que aquellos agresores que tienen relaciones de pareja estables (Snyder y Fruchtman, 1981). Algunos expertos han observado que el riesgo de violencia suele ser más alto cuando los problemas en las relaciones de pareja son evidentes. En este estudio se ha comprobado que este ítem presenta puntuaciones elevadas por la frecuencia con que las víctimas refirieron determinadas dificultades relacionadas con los problemas patentes en su relación de pareja (víctimas viviendo con la pareja pero que quieren acabar la relación; cuando la pareja está separada, pero el agresor quiere

reanudar la relación; o cuando ha habido una reciente separación entre ellos). Estos hallazgos concuerdan con los encontrados por otros investigadores en relación con los problemas de pareja que manifiestan las víctimas (Dutton y Kropp, 2000; Campbell y cols., 2001; William y Houghton, 2004).

El último de los ítems con las medias más altas es el ítem 12 (abuso de sustancias tóxicas). El consumo abusivo de drogas es algo muy observado en los agresores de este estudio, y este ítem se relaciona de forma muy contrastada con la reincidencia de VDG (Monahan, 1981; Harris y cols, 1993). Este indicador es importante de cara a los programas de tratamiento futuros con respecto al agresor, puesto que se ha observado que el abuso de drogas está considerado un factor de riesgo muy relevante para la reincidencia entre los agresores de pareja (Gondolf, 1988; Walker, 1989). En este sentido, Kropp, Hart y Belfrage (2010) asocian el uso de sustancias con la inminencia futura de violencia contra la pareja.

En cuanto a los indicadores que presentan las medias más bajas, se encontraron los siguientes: el ítem 9 (quebrantamiento de penas o medidas de seguridad), el 2 (violencia sexual) y el 16 (tendencia suicida del agresor). Respecto al ítem 9, si se recuerda el procedimiento de valoración del riesgo, el VPR es el primer protocolo de valoración administrado tan pronto como se tiene conocimiento de un hecho de esta naturaleza y en función de su resultado se establecen las medidas policiales. La mayoría de los agresores, cuando se hace el VPR, aún no se encuentran sometidos a medidas que puedan quebrantar, por lo que es esperable que este ítem puntúe menos que el resto. Sin embargo, este ítem está incluido en el protocolo, puesto que siguiendo la última Instrucción de la SES, en el momento en que ocurran nuevos hechos relacionados con el delito denunciado, existe una obligación expresa de volver a cumplimentar un VPR sobre el caso.

El siguiente ítem con la media más baja es el número 2 (violencia sexual). Quizá este ítem sea difícil de tipificar debido a que la codificación de la información sexual en muchas ocasiones reviste complejidad. Tal y cómo está redactado, resulta difícil de catalogar el comportamiento sexual de un agresor de pareja, y muchas veces es complicado hasta para la propia víctima explicar cuándo es una relación sexual

consentida y cuándo empieza a ser agresión o abuso sexual. Todo ello puede fortalecer la explicación de por qué este ítem arroja una de las puntuaciones más bajas.

Finalmente, el ítem 16 (tendencia suicida del agresor) obtiene la tercera media más baja. La tendencia al suicidio es un indicador de una situación de crisis desesperada que sufre el presunto agresor o de presencia de problemas psicológicos o psiquiátricos, y por este motivo habitualmente se considera un factor de riesgo de violencia (Stuart y Campbell, 1989; Goldmith, 1990; Saunders, 1992). En otros países, como Canadá, cuando la ideación suicida se asocia a un trastorno mental, se considera el fundamento suficiente para el internamiento psiquiátrico involuntario (Kropp y cols., 2008). Una de las particularidades de los protocolos de valoración del riesgo que se presentan en esta Tesis Doctoral, es que a diferencia de otras guías de valoración del riesgo (SARA, B-SAFER), los protocolos VPR y VPER son cumplimentados por agentes policiales, no necesariamente expertos en la evaluación de la conducta, que valoran la tendencia suicida del agresor a través de la información que obtienen por la víctima en el momento de interponer la denuncia. Por este motivo, no es de extrañar que este indicador obtenga una de las medias más pequeñas, debido fundamentalmente a que no se cuente con información suficiente como para valorarlo, aunque también podría ser que realmente los autores no presenten ideación suicida. En este sentido sería interesante preguntar directamente al agente policial su opinión sobre este indicador, a la vez que se cuantifica el porcentaje de maltratadores que después se llegan a suicidar. El cruce de estas dos variables podría arrojar información muy interesante a la hora de decidir sobre la pertinencia de eliminar o modificar este ítem.

El siguiente de los resultados analizados es el estudio de la variable índice global. En el capítulo cuarto de esta Tesis Doctoral, se avanzaba que la dinámica a la hora de interpretar esta variable era diferente para ambos protocolos de valoración del riesgo. Si para el primero de los formularios, la mayor puntuación en el índice global significaba mayor riesgo, en el segundo de los protocolos, mayor puntuación significaba mayor nivel de protección (menos riesgo). Al analizar este dato en función del cuerpo policial, se puede concluir que las víctimas que presentan denuncia en el CNP obtienen un índice global de riesgo más elevado que las víctimas que presentan denuncia en la GC.

Los resultados obtenidos en relación con la variable niveles de riesgo informan que el porcentaje más elevado de casos denunciados, son casos con resultado de riesgo “no apreciado” y “bajo”. Estos resultados son comparables con otros estudios llevados a cabo por la policía en Canadá y en Suecia en un estudio realizado con el B-SAFER (Kropp, 2008). En ese estudio se informó que los porcentajes más elevados de denuncias, tanto en riesgo inminente como a largo plazo, habían sido calificados como riesgo alto en Canadá y riesgo moderado en Suecia. Cuando se analizaba el riesgo de sufrir una agresión seria, los resultados más voluminosos en ambos países eran los casos que habían obtenido un nivel de riesgo moderado. Este mismo resultado ha sido obtenido en nuestro país en un estudio desarrollado por Echeburúa y cols., (2010), donde la mayor proporción de casos se sitúa en un nivel de riesgo moderado (45,8%), seguidos de los casos con riesgo bajo (36%) y existiendo un 18,2% de casos evaluados como de riesgo alto.

En relación al **coeficiente de fiabilidad**, la consistencia interna del VPR puede ser considerada satisfactoria, con un alfa de Cronbach de ,855. En este sentido, el formulario ofrece un índice de consistencia interna más elevado que la escala EPV, utilizada por la *Ertzaintza* ( ,722). El análisis de la fiabilidad en el caso de que se elimine un ítem, indica que en principio es recomendable mantener todos los elementos que conforman el VPR, puesto que todos los ítems muestran un funcionamiento psicométrico razonablemente bueno. Los ítems que muestran una menor consistencia interna, es decir, con relación al total del cuestionario, son el número 8 (no cumplimiento de las medidas cautelares) y el 9 (trasgresión de medidas de seguridad). No obstante, la eliminación de estos ítems no se traduciría en incrementos en la fiabilidad total del cuestionario, por lo que se considera que se deben mantener.

Para el estudio de la **estructura interna** del cuestionario se estudió la validación cruzada a través del Análisis Factorial Exploratorio como técnica de reducción de datos, utilizada en la primera muestra. En este sentido y en relación con el objeto de esta Tesis Doctoral, Kropp (2008) utilizó el AFE para explorar que el instrumento diseñado y desarrollado para valorar el riesgo de violencia contra la pareja (SARA) podía definirse en torno a siete factores: *historia de violencia contra la pareja, amenazas de muerte, escalada de la violencia, actitudes que soportan violencia contra la pareja, conducta antisocial, fallo en obedecer órdenes de protección y trastornos mentales,*



*comprendiendo cada factor múltiples ítems.* Por su parte el B-SAFER a través de esta técnica quedaba definido en dos factores principales: la primera sección denominada “*asalto a la pareja*”, quedaba comprendida con cinco ítems, y la segunda definida como “*ajuste psicosocial*”, comprendía el resto de los ítems.

El estudio del VPR mediante análisis factorial exploratorio demostró que la solución factorial más clara explicaba un 36% de la varianza a través de cuatro factores identificados: *el factor 1* (aspectos psicológicos) formado por los ítems 6, 13 y 14, con pesos factoriales comprendidos entre ,515 y ,800; *el factor 2* (violencia) formado por los ítems 1, 2 y 3, con pesos factoriales comprendidos entre ,375 y ,604; *el factor 3* (comportamiento desadaptativo) formado por los ítem 10, 11 y 12 y pesos factoriales entre ,426 y ,568; y finalmente *el factor 4* (relación con la justicia) formado por los ítems 8 y 9, cuyos pesos factoriales son ,734 y ,735 respectivamente. Acto seguido a través del AFC se verificó el ajuste de los datos al modelo teórico, corroborando la existencia de esos cuatro factores dentro del protocolo. Habiendo obtenido unos índices de bondad de ajuste superiores a ,98 en ambos indicadores (GFI y AGFI), se puede considerar un ajuste excelente del modelo. Obsérvese, por otra parte, que el índice RMSEA presenta un resultado de ,38, en cualquier caso, superior al considerado como punto de corte por Hu y Bentler (1995) para corresponder con un resultado óptimo.

Con respecto a los resultados encontrados en este estudio, es preciso indicar que el modelo propuesto se encuentra compuesto por parámetros que fueron estimados adecuadamente, puesto que la solución factorial usando AFE se confirmó usando el AFC. Los valores obtenidos son coherentes y las soluciones son técnica y conceptualmente correctas. Aunque en la solución factorial se encontraron comunalidades pequeñas, es relevante comentar que su aportación es importante por la información sustantiva que aportan los ítems, que hacen que aumente en nivel métrico.

Para evaluar el ajuste del modelo se siguieron las recomendaciones de Hu y Bentler (1995), quienes sugirieron la conveniencia de emplear múltiples indicadores de ajuste. Específicamente se utilizaron el estadístico *chi-cuadrado*, el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice de bondad de ajuste corregido (AGFI) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA).

La escasez de estudios en esta línea en nuestro país hace difícilmente comparable y contrastable los datos obtenidos. A fecha de hoy, el estudio realizado por Echeburúa, Amor, Loínaz y De Corral (2010), es el único publicado que describe y revisa las propiedades psicométricas de la Escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja (EPV). Esta escala (descrita en el capítulo tercero de esta Tesis Doctoral), al ser un instrumento diseñado para la valoración del riesgo por parte de la Policía Autonómica Vasca, comparte con los protocolos del Ministerio del Interior ciertas similitudes; sin embargo, en la actualidad no hay ningún estudio que de cuenta de la estructura factorial de dicho instrumento.

Con respecto a la robustez del modelo, los índices de congruencia así como los estudios de la invarianza métrica indicaron que no existían diferencias en el modelo en relación a los dos cuerpos de procedencia de la muestra (CNP – GC), lo que quiere decir que la existencia de dos muestras diferenciadas no amenazan la validez de constructo. No obstante, a lo largo de este estudio se han ido observando diferencias en los resultados en función de la procedencia de los datos (CNP o GC). En este sentido se encontró que todos los ítems del VPR ofrecían puntuaciones superiores en el CNP en comparación con la GC. Igualmente la variable índice global era significativamente más elevada en el CNP que en la GC. Por último, se pudo comprobar la existencia de diferencias en la variable niveles de riesgo, siendo de nuevo el CNP el que arrojaba puntuaciones más elevadas en todos los niveles, a excepción del nivel de riesgo “no apreciado”. Por todo ello, resulta preciso hacer algún comentario para explicar las diferencias observadas entre los dos cuerpos policiales y que sirva de marco de referencia para justificar estos resultados. En primer lugar, una de las cuestiones a considerar son los factores que caracterizan el medio de trabajo para cada cuerpo policial, y que hacen que estos influyan de manera significativa en el fenómeno de la VDG. Tal y como están estructuradas las demarcaciones policiales según la L.O. 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponden al CNP las capitales de provincia, y otros términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine, mientras que se le adjudica a la GC el resto del territorio nacional y el mar territorial. La demarcación de la GC ocupa, por tanto, mucho más territorio en superficie que el CNP, aunque ambos cuerpos policiales tienen a su cargo porcentajes similares de población. Bajo estas condiciones, resulta que se han recogido más denuncias en el medio urbano

competencia del CNP (64,7%) que en el medio rural a cargo de la GC (36,3%), lo que implica que seguramente haya diferencias en el modo de percibir la VDG en función del contexto de procedencia. En este sentido, es importante tener en cuenta la estructura social de la geografía rural. Las formas en que se manifiesta la violencia están determinadas por las normas sociales, culturales y por la dinámica de cada sistema social, económico y político. Según datos del Observatorio Estatal De Violencia Sobre la Mujer (2011), los contextos rurales que fueron analizados en su último estudio, mostraban una sociedad culturalmente tradicional, manifestando que en muchos casos, se continúa educando de forma diferente a mujeres y a hombres, por lo que los roles de género siguen estando muy marcados incluso entre la población más joven, que es curiosamente la que más volumen de denuncias presenta. Una de las mujeres entrevistadas en dicho estudio, perteneciente a un municipio de entre 501 y 1.000 habitantes, refería lo siguiente: *“aquí en los pueblos seguimos educando de manera separada, y somos las madres las que tenemos la culpa de que se perpetúen las desigualdades”*. Por otro lado, también en el medio rural normalmente existen menos recursos e infraestructuras, implicando con esto una menor accesibilidad a recursos básicos de salud, educación, ocio, cultura y especialmente de información (Observatorio, 2011). Todo esto constituyen factores negativos, que actúan como barrera frente a la visibilidad de la violencia. En pueblos pequeños muchas veces los recursos para romper el aislamiento de la víctima son escasos, a la vez que existen menos oportunidades de extender redes sociales, y porque además, las víctimas tienen menos oportunidades de acceder a la información. Como consecuencia de todo ello, en el medio rural se observa con más frecuencia que las víctimas no se atreven a denunciar con tanta libertad, y que cuando lo hacen se sientan más coartadas o reticentes a comunicar ciertos datos, por cuestiones tales como “el que dirán”.

En suma, el protocolo de Valoración Policial de Riesgo presenta una calidad métrica satisfactoria. Tal y como se ha expuesto los resultados indican que el VPR está bien construido, porque presenta una buena fiabilidad, una adecuada validez de constructo y robustez, sin que se haya encontrado ningún resultado que lo descalifique. Con respecto a la fiabilidad los resultados están más cercanos a la excelencia que a la mera adecuación. Sobre su validez de constructo se puede concluir, a la vista de los

resultados obtenidos en los análisis, que en principio es recomendable mantener todos los elementos que lo conforman. Ninguno tiene claramente un funcionamiento psicométrico negativo que justifique su eliminación del cuestionario, y finalmente la robustez indica que las diferentes muestras no atentan de ningún modo a la validez.



## CAPÍTULO 7

### ESTUDIO 2: ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES GENERALES DEL VPER

#### 1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se llevará a cabo el mismo procedimiento de análisis de datos que en el capítulo anterior pero en relación con el protocolo de valoración de la evolución de riesgo una vez establecidas las medidas policiales de protección (VPER). De tal forma, el presente capítulo tiene por objetivos los siguientes: en primer lugar se **analizarán los elementos** de los que se compone el instrumento. Como avanzábamos en el capítulo anterior, para saber cómo funciona un test, es conveniente analizar las partes de las que se compone (Santamaría, Pereña, Arriba y Seisdedos, 2005). Seguidamente, se procederá a analizar **la fiabilidad** del test a partir del coeficiente alfa de Cronbach. Para ello, primero lo examinaremos en la muestra total, para desglosarlo después por cuerpos policiales. Mediante este análisis también se estudiará si el coeficiente de fiabilidad aumenta considerando la eliminación de algún ítem. Por último, y a través de un análisis de validación cruzada se llegará a estimar la **validez de constructo**, para ello se empleará un AFE para identificar las dimensiones subyacentes contenidas que representan la relación de varios ítems interrelacionados para, posteriormente, ser confirmarlas a través del AFC. Dentro de la validez de constructo se estudiará igualmente la **robustez** del sistema a través de los **coeficientes de congruencia factoriales** del modelo hallado entre los diferentes cuerpos policiales, y de la **invarianza factorial**, utilizando para ello el AFC Multigrupo. Finalmente, se argumentarán las diferencias más relevantes en los resultados hallados en este estudio, en relación a los dos cuerpos policiales de donde proceden las muestras. El objetivo final de este estudio es obtener evidencias empíricas acerca de las propiedades psicométricas del cuestionario de evolución de valoración del riesgo (VPER).

#### 2.- MÉTODO

##### 2.1.- *Participantes*

La muestra sobre la que se lleva a cabo este estudio está compuesta por 2.592 casos. Tal y como se explicó en la capítulo 5, estos casos corresponden exclusivamente con

aquellos en los que habiéndose aplicado las medidas policiales de protección de acuerdo con el nivel de riesgo obtenido a partir del VPR, los agentes policiales volvieron a revisar el riesgo en función del plazo establecido para cada nivel, siguiendo así la última Instrucción de la SES (5/ 2008). Los datos descriptivos relativos a las variables sociodemográficas analizadas (edad, nacionalidad, nivel académico, relación sentimental) revelan que los resultados son muy semejantes a los obtenidos con la muestra analizada en el capítulo anterior, tal y como se presenta a continuación. Nuevamente se advierte de la existencia de valores perdidos en relación con estas variables, por el mismo motivo que se comentó previamente (la no obligatoriedad de rellenar estos campos). La tabla 7.1 recoge las valoraciones de riesgo efectuadas con el VPER procedentes de cada cuerpo policial por separado. Se puede observar que de nuevo el CNP ofrece un porcentaje mayor que la Guardia Civil en cuanto a número de cuestionarios completados

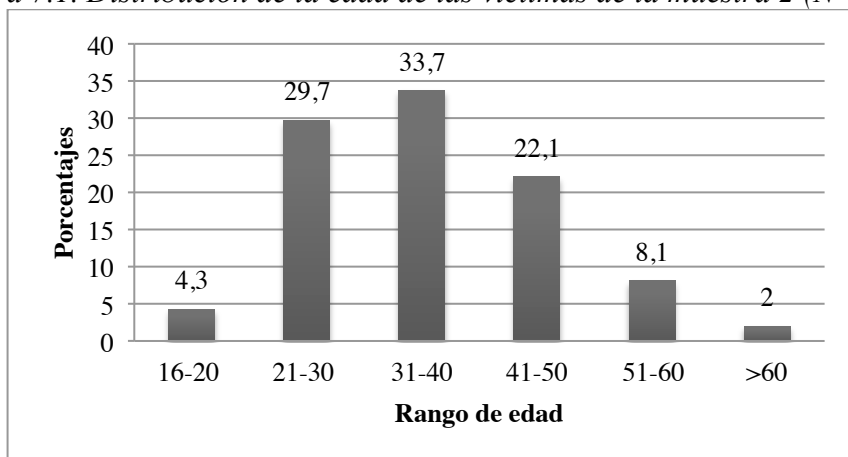
*Tabla 7.1. Distribución de la muestra en función del cuerpo policial de procedencia (N=2.592)*

Institución	N	%
CNP	1.677	64,7
GC	915	35,3

### **Edad**

La media de edad se ha obtenido del 98,4% de la muestra (N= 2.556) y el resultado es de 36,08 años (DT= 10,52). Se puede observar en la figura 7.1 que el porcentaje de edad más elevado se sitúa en el rango que oscila entre los 31 y 40 años (33,7%), seguido de las víctimas con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años (29,7%).

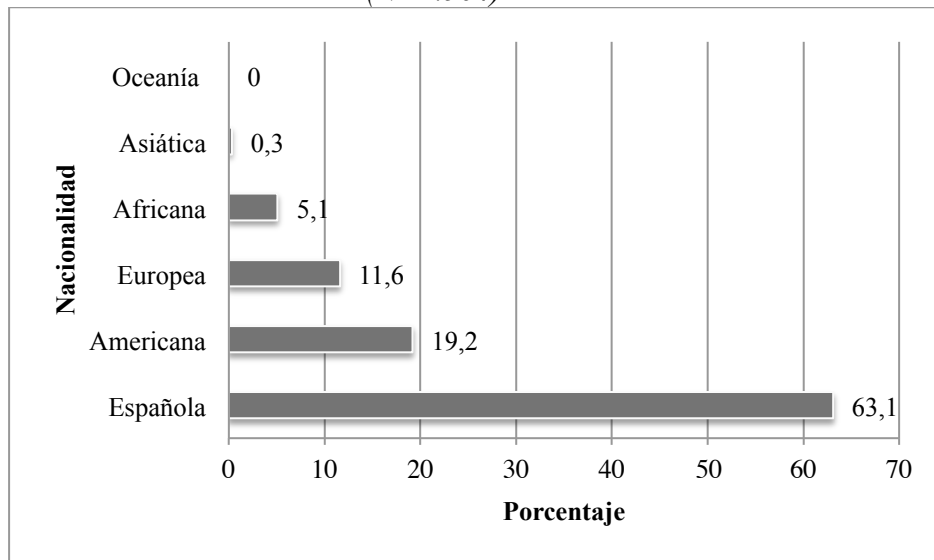
*Figura 7.1. Distribución de la edad de las víctimas de la muestra 2 (N=2.556)*



### **Nacionalidad**

En relación con la nacionalidad de las víctimas, se ha conseguido información del 96,6% de la muestra (N= 2.504). En la figura 7.2 aparecen ilustrados los resultados obtenidos en esta variable.

*Figura 7.2. Distribución de la víctimas de la muestra 2 en función de la nacionalidad (N=2.504)*

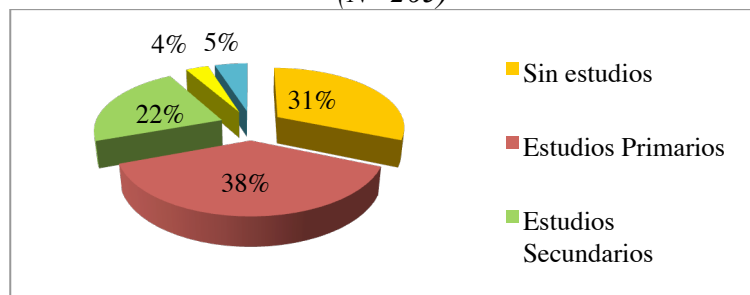


Las víctimas españolas corresponden de nuevo el porcentaje más elevado de víctimas que presentan denuncia dentro de nuestro país. Seguidamente, el 19,2% de las víctimas de VDG eran nacionales del continente americano.

### **Nivel académico**

En el estudio de esta variable se ha obtenido información tan sólo de 265 casos, lo que supone un 10,22% de la muestra total. En la figura siguiente se ilustran los resultados obtenidos de este análisis.

*Figura 7.3. Distribución de las víctimas de VDG en función del nivel cultural (N=265)*

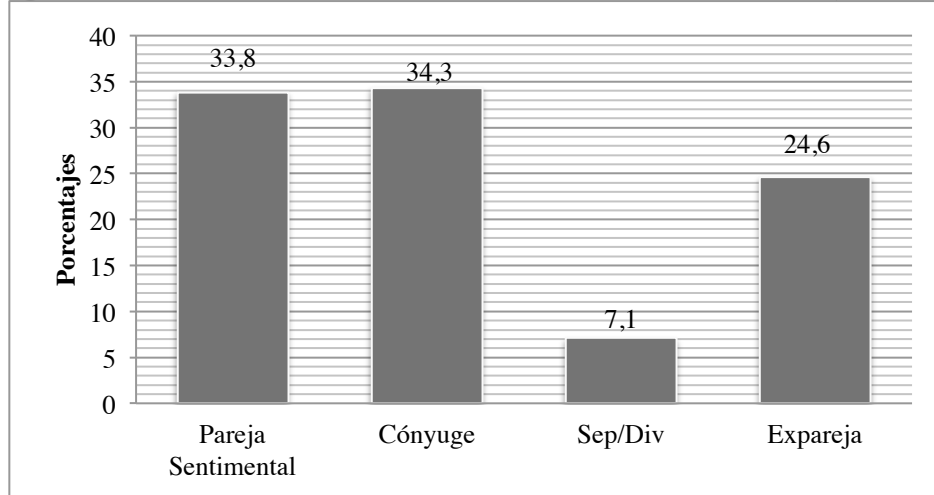




### Relación de pareja

Finalmente, y en relación con la situación de afectividad mantenida entre las víctimas de la segunda muestra y el autor de los hechos denunciados, la figura 7.4 informa de los porcentajes de las relaciones de afectividad entre víctima y agresor, teniendo en cuenta que para este análisis se ha contado con 2.589 casos (un 99,88% de la muestra total).

Figura 7.4. Distribución del estado civil de las víctimas de VDG (N=2.589)



En la figura anterior, se comprueba que las víctimas son mayoritariamente personas que mantienen una relación sentimental con su ex pareja, en cuanto que el 34,3% está unido matrimonialmente al agresor, y el 33,8% lo califica como pareja sentimental en el momento de presentar la denuncia.

### 2.2- Procedimiento e instrumento de medida

El protocolo VPER es completado siempre en dependencias policiales por los propios agentes una vez se recolecta información exhaustiva sobre cada caso en cuestión. Se trata de un test heteroaplicado que consta de 17 ítems, está basado en una escala Likert de seis opciones (no se da, no se sabe, bajo, medio, alto y extremo), mediante las cuales el agente puede expresar en qué grado se presenta el ítem. Al igual que el protocolo anterior, se rellena de manera informatizada y ofrece una puntuación final (índice global), en función de la cual se administran las medidas policiales de protección y seguridad y se establecen los plazos de revisión del nivel de riesgo.

### 2.3.- Análisis de datos

Los datos procedentes de este protocolo son grabados automáticamente en el Sistema VDiG. Como se expuso en el capítulo 5, se obtuvo una extracción de datos de este sistema y se volcaron en una base de datos en SPSS (versión 17.0) creada al efecto. Con el objetivo de determinar que se ajustaban al sistema de puntuación diseñado se calcularon los estadísticos descriptivos de los elementos del test (rango, media, desviación típica, asimetría y curtosis). Del mismo modo se analizaron los porcentajes de respuesta a los ítems para obtener información del comportamiento de estos indicadores. Seguidamente, se calculó la fiabilidad a partir del índice de consistencia interna alfa de Cronbach. En este caso, dado que hay ítems con diferente sistema métrico se calculó el alfa de Cronbach por bloques de ítems (bloque 1: ítems comprendidos del 2 al 10 y bloque 2: ítems comprendidos del 11 al 17). En este análisis se excluyó al ítem 1, ya que no es posible calcular la fiabilidad para un único ítem. Conviene recordar en este momento que el sistema de puntuación quedaba ponderado de la siguiente manera:

Tabla 7.2. Sistema de puntuación VPER

Indicadores	Valores				
	No se sabe	No se da	Se da poco	Bastante	Totalmente
Ítem 1	3	0	3	6	9
Ítems 2-10	3	0	1	2	3
Ítems 11-17	0	4	2	1	-1

Para dotar de estabilidad a este resultado, el índice de fiabilidad se calculó en los dos primeros cuestionarios VPER. Finalmente, con el objetivo de analizar la validez de constructo se analizó la estructura interna del protocolo a partir del estudio de la dimensionalidad bajo el paradigma de la teoría del rasgo latente. Al igual que hicimos con el VPR, dividimos las muestras aleatoriamente en dos partes para validar los resultados (validez cruzada), de esta manera la primera muestra sirvió para calibrar, y se efectuó sobre ella el AFE. A través del programa SPSS, se extrajeron los factores utilizando el método de ejes principales, y la matriz resultante se rotó a través del procedimiento Promax. El resultado de este análisis se puso a prueba en la muestra 2 mediante un AFC, utilizando el programa AMOS (Arbuckle, 1997; Arbuckle y Wothke, 1999). Los índices empleados para evaluar que los datos se ajustaban al modelo fueron los mismos que se utilizaron con el VPR:  $\chi^2$ , GFI, AGFI, RMSEA.

Para probar si el VPER ofrecía estabilidad a través de los dos cuerpos policiales de donde procedía la muestra se estudió la robustez del modelo a través de dos aproximaciones diferentes: **coeficientes de congruencia y la invarianza factorial** basada en el **AFC Multigrupo**. Ambos análisis pretenden garantizar que el instrumento analizado es independiente de la muestra donde se aplica. Como vimos en el capítulo anterior, el coeficiente de congruencia presenta valores entre -1 y +1, asumiendo que un valor de +,90 indica un alto grado de similaridad entre los factores comparados, mientras que un valor de +,95 o mayor es interpretado como identidad (Jensen, 1998). En este sentido, Cattell (1978) estableció los valores que debe alcanzar en el coeficiente de congruencia para ser considerado significativo, mostrando una determinada probabilidad. Estos valores se mostraron en la tabla 6.2 del capítulo anterior.

Finalmente, para el AFC Multigrupos se realizó un procedimiento de varios pasos a través del test jerárquico de modelos anidados mediante el AMOS. Se estableció primeramente un modelo base (el modelo derivado de la validación cruzada del VPER) en el que la hipótesis a contrastar era que el patrón de cargas factoriales era el mismo en los dos grupos policiales, lo que se denominó anteriormente “invarianza de configuración” (Horn, McArdle y Mason, 1983). Posteriormente, se comprobó la invarianza métrica entre grupos ejecutando el programa pero con la restricción de igualdad de parámetros lambdas (cargas factoriales) en los dos grupos. Por último, para comprobar el modelo resultante con el modelo obtenido previamente, se halló la diferencia entre los  $\chi^2$  de los pasos 1 y 2 ( $\Delta\chi^2$ ). La significación estadística de esta diferencia se determinó utilizando la diferencia en grados de libertad. De no existir diferencias significativas, indicaría que un modelo donde se fuerzan los factores de carga para ser iguales en ambos grupos, se ajusta a los datos tan bien como un modelo en el que los factores de carga se estiman de forma libre. Por tanto, los factores de carga serían invariantes en los grupos, lo que apoyaría la hipótesis de equivalencia métrica. Sin embargo, si se encuentran diferencias significativas, hay que localizar qué variables provocan la falta de equivalencia, en el marco de la equivalencia parcial de medida (Byrne, 1989), dejando libres de restricción, uno a uno, las variables cuyo desajuste sea mayor según los índices de modificación.

Por último, es preciso indicar que en los resultados de estos análisis se mostrarán las diferencias halladas más relevantes en función del cuerpo policial de procedencia de la muestra.

### **3.- RESULTADOS**

#### **3.1.- Análisis de los elementos el VPER**

Siguiendo el mismo orden que con el protocolo anterior, se comenzó el análisis del VPER con la información aportada de los estudios descriptivos de las puntuaciones de los diferentes ítems del protocolo. Así, en la tabla 7.3 quedan reflejados los estadísticos descriptivos de los 17 ítems del instrumento (mínimo, máximo, media, desviación típica, asimetría y curtosis). Se puede apreciar que los datos informan de una adecuada distribución de los ítems atendiendo a sus valores máximos, mínimos y de dispersión.

En el capítulo cuarto se especificaron los algoritmos de puntuación para los diferentes ítems del VPER, de modo que los indicadores se podían dividir en dos bloques según el sistema de puntuación. El ítem 1 no se incluyó en ningún bloque puesto que su sistema de puntuación era exclusivo, ofreciendo un rango de respuesta entre 0 y 9. Con respecto al segundo bloque, los ítems seleccionados se encontraban en un rango desde el número 2 al 10 (a.i.) y su intervalo de respuesta oscilaba entre las puntuaciones de 0 a 3; y, a partir del ítem 11 y hasta el 17, las respuestas podían oscilar entre -1 y 4. De este modo, se puede afirmar que dentro de cada bloque, los 2.592 casos completados con el VPER se ajustan al sistema de puntuación diseñado. En el primer bloque, la media no es muy elevada (1,68; DT= 2,81). Dentro del bloque 2 los ítems cuya puntuación media es más elevada son el ítem 10 (avance en el tiempo sin incidencias) y el ítem 3 (autor muestra una actitud pacífica). Seguidamente, dentro del bloque 3, todos los ítems ofrecen puntuaciones altas, por encima de 3 puntos, exceptuando el ítem 12 (dificultades del agresor para rehacer la vida). Finalmente y con respecto a los tipos de respuesta, la tabla 7.4 ilustra los porcentajes en función de las opciones de respuesta obtenidas a los 17 ítems del VPER (no se sabe, no se da, se da poco, se da bastante y se da totalmente).

*Tabla 7.3. Estadísticos descriptivos de los elementos que forman el VPER(N=2.592)*

Ítems	N	Min.	Máx.	Media	DT	Asimetría	Curtosis
1	2.592	0	9	1,68	2,81	1,52	1,05
2	2.592	0	3	1,76	1,06	-0,45	-1,01
3	2.592	0	3	2,00	0,90	-0,66	-0,30
4	2.592	0	3	1,53	1,19	-0,94	-1,52
5	2.592	0	3	1,86	1,07	-0,55	-0,94
6	2.592	0	3	1,88	1,05	-0,53	-0,95
7	2.592	0	3	1,67	1,24	-0,79	-1,57
8	2.592	0	3	2,16	0,76	1,80	0,53
9	2.592	0	3	0,47	0,94		1,76
10	2.592	0	3	2,15	0,98	-0,97	-0,14
11	2.592	-1	4	3,75	0,93	-3,77	13,10
12	2.592	-1	4	2,74	1,67	-0,77	-1,11
13	2.592	-1	4	3,11	1,49	-1,32	0,19
14	2.592	-1	4	3,61	1,08	-2,87	7,56
15	2.592	-1	4	3,46	1,30	-2,17	3,11
16	2.592	-1	4	3,56	1,02	-2,32	4,67
17	2.592	-1	4	3,66	0,98	-2,89	7,54

Tabla 7.4. Análisis de elementos VPER en función de las opciones de respuesta  
(N=2.592)

Ítems	PORCENTAJES				
	No se sabe	Se da poco	No se da	Se da bastante	Se da totalmente
1		15,1	68,3	9,1	7,5
	No se sabe	Totalmente	No se da	Se da bastante	Se da poco
2		28,5	18,1	37,8	15,0
3		32,7	8,1	42,8	16,4
4		29,1	30,2	25,2	15,5
5		34,4	17,0	34,6	13,9
6		35,5	15,2	32,3	17,0
7		38,7	27,7	17,6	17,6
8		34,5	4,0	<b>50,5</b>	11,0
9		8,3	<b>76,9</b>	7,5	7,3
10		46,5	10,8	32,6	10,1
	No se sabe	Se da poco	No se da	Se da bastante	Se da totalmente
11	3,0	1,5	<b>92,9</b>	1,5	1,0
12	19,9	13,4	60,7	5,2	0,8
13	10,6	11,1	71,2	5,7	1,4
14	2,2	6,4	86,9	2,7	<b>2,2</b>
15	8,1	3,7	84,3	2,7	1,2
16	2,0	11,0	82,8	3,4	0,7
17	3,1	6,4	87,8	2,0	0,6

Los resultados de la tabla anterior indican que el ítem 1 no se presenta en la mayoría de los casos (68,3%). Dentro del bloque 1, el ítem que aparece mayoritariamente es el número 8 (la víctima goza de un entorno favorable para su seguridad); el ítem que se presenta en menor medida es el ítem número 9 (la víctima ha trasladado su residencia habitual a un lugar con escasas posibilidades de ser conocida por el autor); Dentro del bloque 2, el ítem del que menos se da es el número 11 (el agresor esta fugado y/ o en paradero desconocido); el ítem que más puntúa dentro de los que literalmente “se dan” o que se observan de manera “totalmente” es el ítem 14 (la víctima realiza actos que van en contra de su propia seguridad). Finalmente y al igual que se procedió con el VPR, la tabla 7.5 ofrece los resultados correspondientes a los 17 ítems del VPER en función del cuerpo policial de procedencia. Se observa que a diferencia de lo que sucedía con el VPR, en el VPER la mayoría de las puntuaciones a los ítems tienden a ser más elevadas para el cuerpo de la GC que para el CNP, habiéndose encontrado diferencias significativas en los ítems 1, 3, 4, 10, 14 y 16 ( $p < 0,005$ ). Sin embargo, el análisis del estadístico  $d$  de cohen indica que, exceptuando el ítem 2 ( ,27) y el 10 ( ,18), las diferencias encontradas son muy débiles, apenas

perceptibles, no superando en ningún caso el ,3, con lo cual se puede asumir que esas diferencias se deben al tamaño muestral.

*Tabla 7.5. Estadísticos descriptivos de los ítems del VPER en función del cuerpo policial de procedencia*

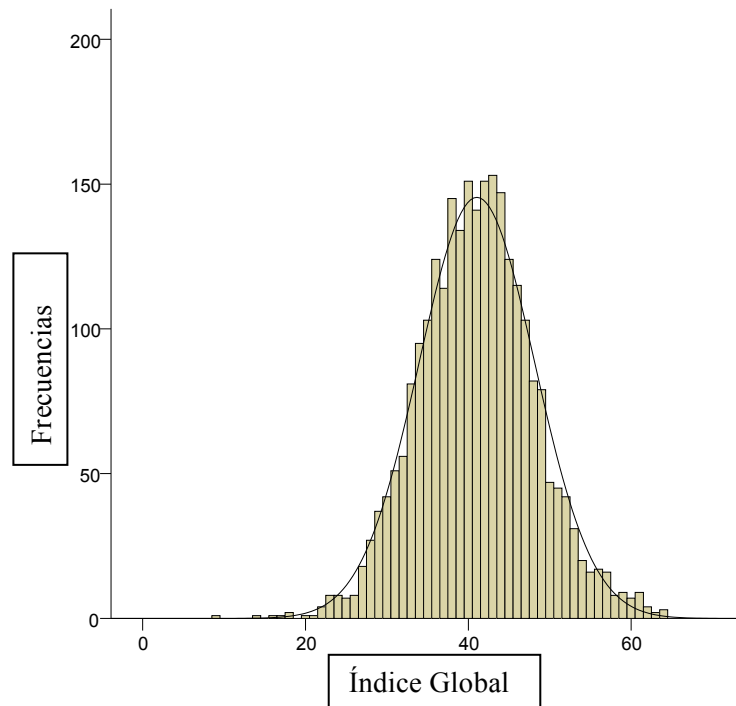
Ítems	CUERPO NACIONAL DE POLICIA N= 1.677				GUARDIA CIVIL N= 915						
	M	DT	Asim.	Curt.	Media	DT	Asim	Curt.	T	Sig	d
1	<b>1,40</b>	2,64	1,79	1,97	<b>2,19</b>	3,04	1,14	,00	-6,604	,000	<b>,283</b>
2	<b>1,74</b>	1,07	-,42	-1,07	<b>1,81</b>	1,03	-,50	-,89	-1,601	,109	<b>,0659</b>
3	<b>1,96</b>	,92	-,61	-,47	<b>2,07</b>	,85	-,74	0,02	-3,150	,002	<b>,122</b>
4	<b>1,46</b>	1,20	,00	-1,55	<b>1,67</b>	1,17	-,28	-1,40	-4,303	,000	<b>,1759</b>
5	<b>1,82</b>	1,10	-,49	-1,09	<b>1,93</b>	1,00	-,67	-,60	-2,571	,010	<b>,1027</b>
6	<b>1,86</b>	1,05	-,49	-,99	<b>1,92</b>	1,05	-,61	-,86	-1,291	,197	<b>,0567</b>
7	<b>1,67</b>	1,24	-,22	-1,57	<b>1,68</b>	1,24	-,23	-1,58	-0,236	,814	<b>,008</b>
8	<b>2,18</b>	,74	-,78	0,58	2,11	,80	-,79	0,41	2,152	,031	<b>,0912</b>
9	<b>,45</b>	,93	1,86	1,93	<b>,51</b>	,96	1,70	1,46	-1,595	,111	<b>,0632</b>
10	<b>2,08</b>	1,03	-,86	-,46	<b>2,28</b>	,88	-1,17	,62	-5,334	,000	<b>,2036</b>
11	<b>3,75</b>	,93	-3,74	12,88	<b>3,76</b>	,92	-3,82	13,50	-0,159	,873	<b>,0107</b>
12	<b>2,77</b>	1,67	-,81	-1,04	2,68	1,68	-,69	-1,21	1,295	,196	<b>,0537</b>
13	<b>3,10</b>	1,49	-1,28	,05	<b>3,13</b>	1,49	-1,38	,44	-0,420	,675	<b>,0201</b>
14	<b>3,68</b>	1,00	-3,21	9,62	3,49	1,21	-2,44	5,14	3,959	,000	<b>,1754</b>
15	<b>3,46</b>	1,30	-2,19	3,18	3,45	1,30	-2,13	2,96	0,215	,830	<b>,0077</b>
16	<b>3,61</b>	,97	-2,51	5,60	3,47	1,11	-2,03	3,40	3,386	,001	<b>,1366</b>
17	<b>3,68</b>	,93	<b>-2,95</b>	<b>7,79</b>	<b>3,61</b>	<b>1,06</b>	<b>-2,76</b>	<b>6,84</b>	<b>1,841</b>	<b>,066</b>	<b>,0713</b>

Una vez estudiados los ítems que componen los formularios, ahora se va desarrollar el análisis de la variable índice global y seguidamente los niveles de riesgo obtenidos como consecuencia del análisis de aquella variable. Del mismo modo que en apartados anteriores, se establecerán las diferencias que puedan aparecer en función del cuerpo policial de procedencia (CNP y GC).

### Índice Global VPER

La variable índice global del VPER ofrece unas puntuaciones comprendidas en el intervalo que oscila de 9 a 64 puntos. A diferencia del primero de los protocolos, el VPER está diseñado de manera que a más puntuación en la variable final habrá más protección, y la víctima tendrá menos riesgo de sufrir nuevos incidentes de violencia. En función de este índice global, se distribuyen los diferentes niveles de riesgo y las medidas policiales de protección aplicadas al efecto. La figura 7.5 muestra cómo se comporta esta variable para el conjunto de puntuaciones.

*Figura 7.5. Distribución de la variable índice global VPER (N=2.592)*



Para este conjunto de datos, las puntuaciones adoptan la forma de una distribución normal con media 41,05 y desviación típica igual a 7,11.

Con respecto al índice global en el protocolo VPER, las figuras 7.6 y 7.7 muestran cómo se comporta dicha variable para cada cuerpo policial. La primera de las figuras refleja al CNP y la segunda de ellas a la GC. Se puede observar cómo ambas figuras adoptan la forma de una distribución normal con media 40,69 (DT= 6,8) para el CNP y 41,77 (DT= 7,49) para la GC.



Figura 7.6. Distribución de la variable índice global en el VPER, (CNP; N=1.677)

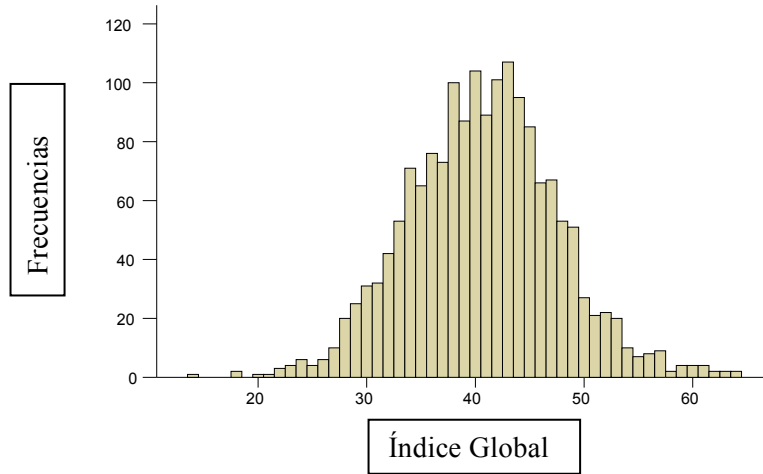
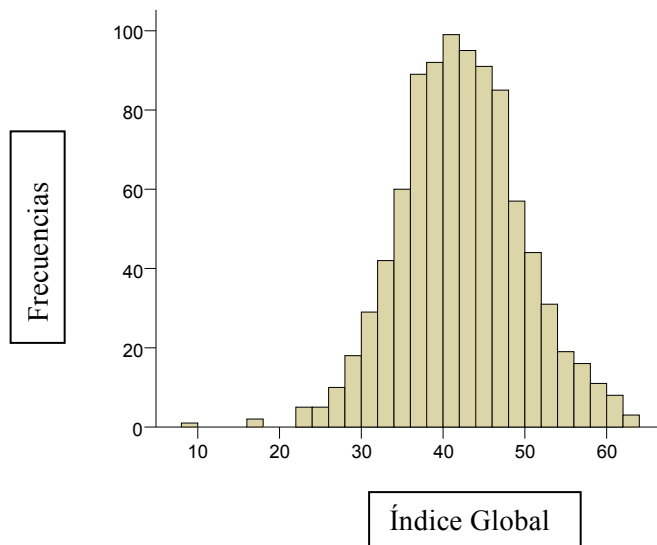


Figura 7.7. Distribución de la variable índice global en el VPER, (GC; N=915)



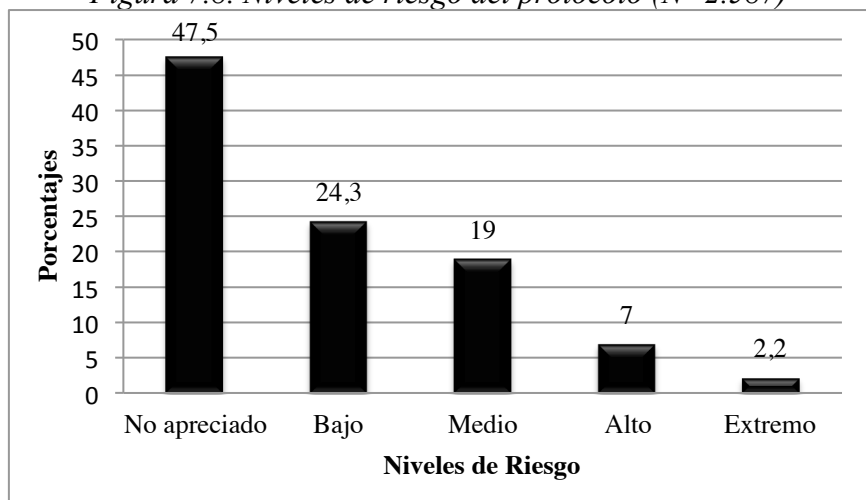
La tabla 7.6 ofrece los estadísticos descriptivos tanto de tendencia central como de asimetría más importantes para ver el comportamiento de esta variable por cuerpos policiales. Se puede observar que la GC, con una media de 41 puntos, supera a la puntuación arrojada por el CNP, cuya media se sitúa en 40,89. Esta diferencia es estadísticamente significativa ( $p < 001$ ), pero el indicador  $d$  de Cohen indica que es muy débil y, por tanto, puede se puede interpretar nuevamente al tamaño muestral.

Tabla 7.6. Comparativa de la variable índice global entre cuerpos policiales

Puntuación VPER										T	d
CUERPO NACIONAL DE POLICIA					GUARDIA CIVIL						
N 1.677	M 40,69	DT 6,885	Asimetría 0.81	Curtosis 0,392	N 912	Media 41,77	DT 7,459	Asimetría 0,13	Curtosis 0,426	<b>0.000</b>	,15

Al igual que el VPR, en función de la variable índice global, se producen cinco niveles de riesgo: desde nivel de riesgo no apreciado hasta extremo. La figura 7.8 ofrece la distribución de los casos evaluados con el VPER en función de esos niveles de riesgo.

Figura 7.8. Niveles de riesgo del protocolo (N=2.587)



Los resultados obtenidos en esta variable, indican que los niveles de riesgo más representados son los niveles no apreciado (47,5%) y bajo (24,3%). Estos niveles van seguidos y de manera decreciente por el nivel de riesgo medio (19%), alto (7%) y finalmente el nivel de riesgo más peligroso, el riesgo extremo (2,2%).

Por último, la tabla 7.7 recoge las frecuencias y porcentajes que dentro de cada nivel de riesgo se han obtenido en función del cuerpo policial de procedencia, observándose que existe una proporción superior de víctimas con nivel de riesgo extremo dentro del CNP que dentro de la GC (3% frente a 0,9% respectivamente), y observándose también cómo los porcentajes son superiores para el CNP, a excepción del nivel de riesgo no apreciado, donde el porcentaje GC (58,4%,) es superior al CNP (41,6%).

*Tabla 7.7. Distribución de los casos de VDG en función del nivel de riesgo (N=2.587)*

		NIVEL RIESGO VPR									Total
Cuerpo policial		No Apreciado (N)	%	Bajo (N)	%	Medio (N)	%	Alto (N)	%	Extremo (N)	%
	<b>CNP</b>	696	41,6	405	24,2%	365	21,8%	159	9,5%	50	3,0
	<b>GC</b>	533	58,4	222	24,3%	127	13,9%	22	2,4%	8	9
	<b>Total</b>	1.229	100	627	48,5%	492	35,7%	181	11,9%	58	3,9

### 3.2.- Análisis de la fiabilidad VPER

Tal y como se avanzó anteriormente, el cálculo de fiabilidad en el protocolo VPER se realizó en dos partes diferenciadas, correspondiendo cada parte al conjunto de ítems que formaban los bloques del cuestionario. En este sentido, se analizó en primer lugar la consistencia interna para los ítems comprendidos entre el ítem 2 y el ítem 10, y en segundo lugar se analizó para los ítems comprendidos entre el ítem 11 y el ítem 17. Este análisis se hizo en los dos primeros protocolos VPER.

*Tabla 7.8. Resumen de los índices de fiabilidad en el VPER (N=2.592)*

<b>VPER 1</b>	<b><math>\alpha</math></b>	<b><math>\alpha</math></b>		<b>VPER 2</b>	<b><math>\alpha</math></b>	<b><math>\alpha</math></b>	
Ítems 2 al 10	,713	CNP	,703	Ítems 2 al 10	,722	CNP	,706
		GC	,728			GC	,744
Ítems 11 al 17	,559	CNP	,555	Ítems 11 al 17	,479	CNP	,436
		GC	,564			GC	,436

Los resultados indican que el índice de fiabilidad en el primer bloque de ítems presenta valores aceptables, sin embargo, en el segundo grupo de ítems la fiabilidad es relativamente baja tanto en el protocolo VPER1 como en el VPER2. La tabla 7.8 indica los coeficientes de fiabilidad obtenidos admitiendo la posibilidad de eliminar cada uno de los ítems..

*Tabla 7.9. Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPER (N=2.592)*

Ítems	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
BLOQUE 1					
2	13,72	21,022	,435	,210	<b>,679</b>
3	13,48	21,214	,524	,318	<b>,666</b>
4	13,95	20,842	,376	,164	<b>,692</b>
5	13,62	20,414	,498	,281	<b>,666</b>
6	13,60	21,578	,375	,145	<b>,690</b>
7	13,81	20,250	,410	,187	<b>,685</b>
8	13,33	23,821	,340	,128	<b>,697</b>
9	15,01	24,246	<u>,133</u>	,035	<b><u>,730</u></b>
10	13,34	21,542	,422	,217	<b>,682</b>
BLOQUE 2					
11	20,14	17,979	,237	,072	<b>,537</b>
12	21,15	14,177	,297	,136	<b>,523</b>
13	20,78	14,114	,392	,176	<b>,471</b>
14	20,28	18,000	,167	,086	<b>,559</b>
15	20,43	16,659	,223	,052	<b><u>,544</u></b>
16	20,33	16,779	,344	,168	<b>,503</b>
17	20,23	16,741	,377	,171	<b>,495</b>

En la tabla anterior, puede observarse que para el bloque primero, a excepción del ítem número 9, no hay ningún otro indicador que aconseje su eliminación. Si este ítem fuese eliminado el coeficiente de fiabilidad del instrumento pasaría de ,713 a ,730. Cuando hacemos este análisis en función del cuerpo policial, se halla que dentro del CNP (tabla 7.10) a excepción del ítem 9, todos los ítems son relevantes puesto que correlacionan positivamente con la puntuación total. Solo suprimiendo el ítem 9, mejoraría el coeficiente de fiabilidad del VPER. Con respecto a la GC (tabla 7.11), los resultados muestran el mismo efecto, es decir, suprimiendo el ítem 9 mejoraría la fiabilidad.

*Tabla 7.10. Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPER en el CNP (N=1.677)*

	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
BLOQUE 1					
2	13,49	20,786	,441	,222	<b>,664</b>
3	13,26	21,023	,514	,304	<b>,654</b>
4	13,76	20,682	,377	,165	<b>,678</b>
5	13,40	20,159	,492	,263	<b>,653</b>
6	13,36	21,550	,367	,142	<b>,679</b>
7	13,55	20,424	,383	,169	<b>,677</b>
8	13,04	23,342	,327	,115	<b>,687</b>
9	14,77	24,554	,090	,019	<b>,725</b>
10	13,15	21,221	,418	,218	<b>,669</b>
BLOQUE 2					
11	20,31	16,944	,265	,078	<b>,525</b>
12	21,29	13,333	,307	,127	<b>,514</b>
13	20,96	13,456	,383	,173	<b>,470</b>
14	20,38	17,621	,149	,055	<b>,559</b>
15	20,60	15,824	,227	,052	<b>,539</b>
16	20,45	16,379	,325	,152	<b>,506</b>
17	20,38	16,246	,368	,165	<b>,495</b>

*Tabla 7.11. Coeficiente de fiabilidad si se elimina algún ítem del VPER en la GC (N= 915)*

	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
BLOQUE 1					
2	14,19	21,054	,420	,190	<b>,701</b>
3	13,92	21,177	,540	,361	<b>,684</b>
4	14,33	20,842	,365	,162	<b>,713</b>
5	14,06	20,510	,505	,329	<b>,686</b>
6	14,08	21,263	,384	,151	<b>,707</b>
7	14,31	19,460	,464	,240	<b>,693</b>
8	13,88	22,661	,371	,166	<b>,710</b>
9	15,48	23,273	,205	,086	<b>,736</b>
10	13,71	21,871	,421	,210	<b>,702</b>
BLOQUE 2					
11	19,82	19,813	<u>,191</u>	,079	<b>,556</b>
12	20,90	15,675	,281	,161	<b>,536</b>
13	20,45	15,218	,413	,189	<b>,469</b>
14	20,09	18,737	<u>,192</u>	,139	<b>,559</b>
15	20,13	18,131	,216	,060	<b>,552</b>
16	20,11	17,532	,370	,189	<b>,499</b>
17	19,97	17,635	,388	,183	<b>,495</b>

Siguiendo las indicaciones propuestas por Musitu y cols., (1995, 1999) a la hora de interpretar los resultados obtenidos, podemos ofrecer las siguientes conclusiones:

- Dentro del CNP, los ítems 2, 3, 5 y 10, presentan un funcionamiento satisfactorio, puesto que su correlación es mayor a ,40. El funcionamiento de los

ítems 4, 6, 7, 8, 13, 16 y 17 puede ser descrito como adecuado. En tercer lugar la correlación obtenida para los ítems 11 y 15 indica que estos ítems necesitarían ser revisados, aunque la última columna revela que su eliminación no beneficiaría la fiabilidad de la prueba. Por último el ítem 9 y el 14 presentan una correlación inferior a ,19, lo que indica que debieran ser eliminados, y precisamente la eliminación del ítem 9 incrementaría la fiabilidad del total de la prueba.

- En la Guardia Civil, los ítems 2, 3, 5, 7, 10 y 14 correlacionan de manera adecuada con el test total. En segundo lugar los ítems 4, 6, 8, 16 y 17, muestran una correlación adecuada y no requieren de revisión. Seguidamente la correlación de los ítems 9, 12 y 15, es muy pequeña y se sugiere que debieran ser revisados. Finalmente los ítems 9 y 14 ofrecen una correlación con la puntuación total en el límite y la supresión del primero de ellos se traduciría en incrementos de fiabilidad del conjunto de la prueba.

### **3.3.- Validez de Constructo**

#### **3.3.1.- Validación cruzada: determinación y validación de un modelo estructural**

##### **3.3.1.1.- Análisis factorial exploratorio (Muestra 1; N=1.314)**

Siguiendo el mismo esquema que el efectuado con el VPR, el primer análisis en el marco de la validación cruzada, se procedió a realizar un Análisis Factorial sobre la muestra 1 de protocolos VPER recogidos. En primer lugar, la tabla 7.12 muestra el resultado del AFE recogiendo el total de la varianza explicada por cada factor, así como el gráfico de sedimentación (figura 7.9) según el número de componentes detectados.

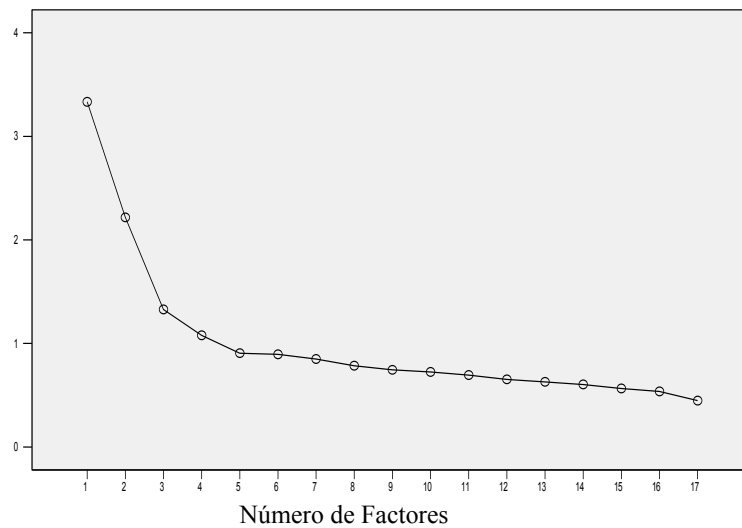
*Tabla 7.12. Distribución de la varianza total explicada para cada factor (VPER)*

Factor	Autovalores iniciales			Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción			Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación(a)
	Total	% de la varianza	% acumulado	Total	% de la varianza	% acumulado	Total
1	3,334	19,609	19,609	2,691	15,829	15,829	2,642
2	2,218	13,045	32,654	1,519	8,935	24,764	1,315
3	1,329	7,816	40,471	,661	3,888	28,652	1,143
4	1,079	6,348	46,818	,380	2,233	30,885	1,316

Al igual que observamos en el VPR, a partir de la tabla anterior se plantea una estructura de cuatro factores para el VPER, obtenidos a partir de todos los ítems que componen la prueba. De este modo, se puede observar la existencia de cuatro autovalores mayores que uno, por lo que el procedimiento automáticamente extrae cuatro factores que consiguen explicar cerca del 30% de la varianza.

La figura 7.9, reproduce el gráfico de sedimentación del análisis factorial en cuestión. Al igual que ocurría con el VPR, a partir del cuarto factor aparece un punto de inflexión desde el cual la pendiente de la recta descendente es mínima. Se puede observar cómo la asíntota comienza claramente a ser más horizontal a partir de ahí, ofreciendo los cuatro primeros factores una pendiente distinta de la ofrecida por el resto de componentes.

*Figura 7.9. Factores identificados a través del AFE correspondientes al VPER representados a través del gráfico de sedimentación*



A continuación, la tabla 7.13 recoge los resultados de las comunalidades extraídas utilizando el método de extracción de ejes principales. Éstas informan del porcentaje de varianza que explican los factores que componen el VPER.

*Tabla 7.13. Comunalidades de los ítems del VPER*

Ítems	Inicial	Extracción
<i>1</i>	,109	,173
<i>2</i>	,308	,364
<i>3</i>	,416	,528
<i>4</i>	,216	,275
<i>5</i>	,342	,430
<i>6</i>	,189	,224
<i>7</i>	,249	,304
<i>8</i>	,193	,262
<i>9</i>	,149	,340
<i>10</i>	,306	,354
<i>11</i>	,123	,167
<i>12</i>	,179	,392
<i>13</i>	,194	,323
<i>14</i>	,171	,372
<i>15</i>	,103	,134
<i>16</i>	,201	,326
<i>17</i>	,186	,283

En la tabla anterior se puede observar que a excepción de los ítems 1, 11 y 15, las comunalidades son en general razonablemente altas. El siguiente paso del AFE es conocer la composición de dicha estructura factorial, así como los pesos que cada una de las dimensiones (factores) tienen en cada uno de los ítems del protocolo. La tabla 7.14 muestra la solución factorial propiamente dicha. Contiene las correlaciones (o saturaciones) entre las variables originales y cada uno de los factores identificados a través del AFE.



Tabla 7.14. Estructura factorial de la escala VPER.  
Matriz de configuración

Ítems	Factor			
	1	2	3	4
1	-,009	-,010	,047	<b>,417</b>
2	,488	-,076	,169	,145
3	<b>,740</b>	,069	-,063	-,022
4	,547	,009	-,129	-,066
5	<b>,677</b>	,007	-,030	-,052
6	,488	-,057	-,011	-,053
7	<b>,554</b>	-,143	-,051	-,060
8	,314	,007	,213	,239
9	-,032	,057	-,091	<b>,603</b>
10	,523	,101	,009	,074
11	-,078	,336	,052	-,071
12	-,050	<b>,692</b>	-,090	,104
13	,064	<b>,555</b>	,039	,008
14	-,110	-,110	<b>,646</b>	,097
15	-,056	,163	,180	-,142
16	,023	,103	<b>,505</b>	-,081
17	,070	,163	,370	-,187

Al comparar las saturaciones relativas de cada variable en cada uno de los factores se puede observar que el primer factor está constituido fundamentalmente por los ítems 5, 3 y 7, saturando estos ítems básicamente en un único factor que se ha denominado **comportamiento prosocial** del autor de los hechos. Con respecto al segundo factor, quedaría definido fundamentalmente por los ítems 12 y 13, y se ha definido como **dificultades del autor** encontradas en su nueva vida después del incidente. El tercer factor recoge el grupo de las variables más relacionadas con el comportamiento posterior de la víctima y, podríamos denominarlo **vulnerabilidad de la víctima**, saturando en él de manera intensa los ítems 14 y 16. Finalmente, el cuarto factor está formado casi exclusivamente por los ítems 1 y 9, y se ha denominado **obstáculos físicos**, puesto que ambos ítems denotan la imposibilidad del autor de acercarse a la víctima, tratándose de dificultades físicas que sin duda obstaculizan el acercamiento a la misma. En la tabla siguiente se muestra la redacción y significado de cada factor compuesto por los ítems que saturan en cada uno de ellos.

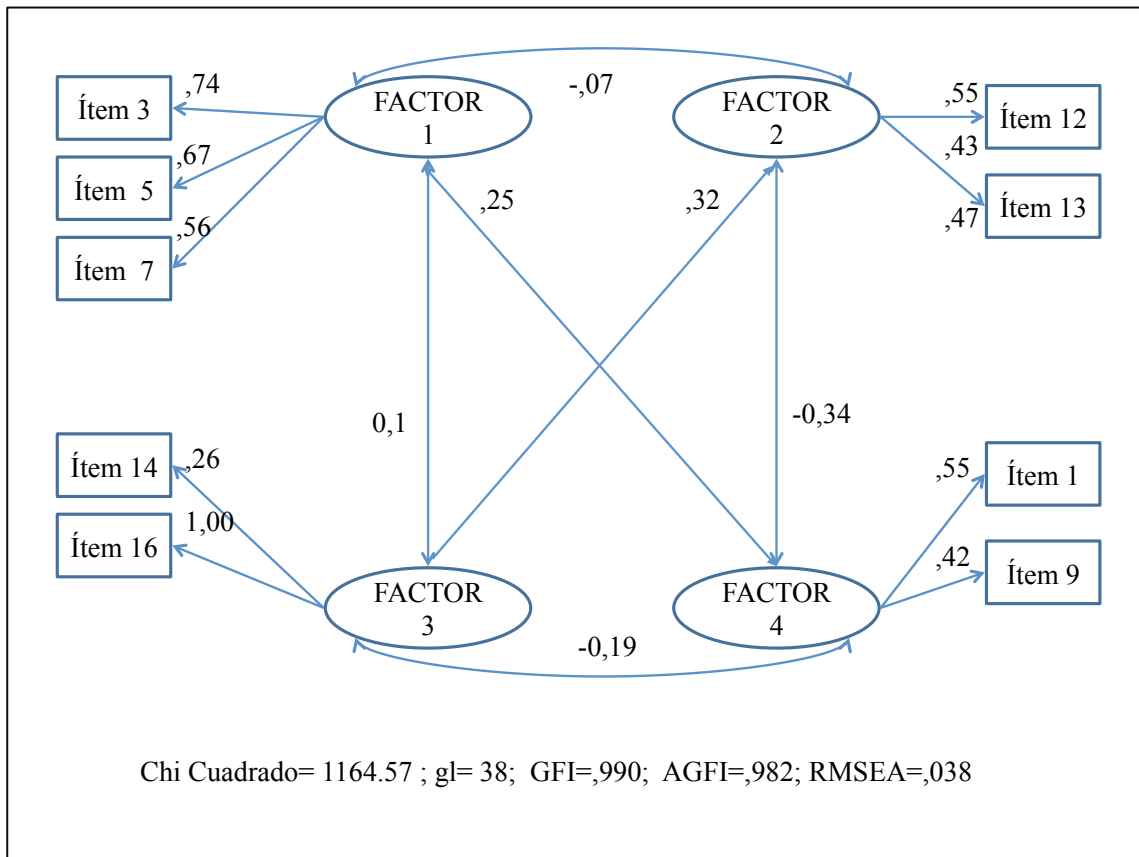
*Tabla 7.15. Principales marcadores identificados mediante AFE*

<b>Factores</b>	<b>Ítems</b>	<b>Definición del ítem</b>
Factor 1	<i>Ítem 3</i>	El autor muestra una actitud pacífica.
	<i>Ítem 5</i>	El autor exterioriza una actitud cívica y respetuosa con la ley.
	<i>Ítem 7</i>	El autor muestra un arrepentimiento expreso o se acoge voluntariamente a programas de ayuda.
Factor 2	<i>Ítem 12</i>	El agresor tiene dificultades para rehacer su vida tras haberse visto afectado por circunstancias importantes.
	<i>Ítem 13</i>	El agresor presenta rasgos alarmantes.
Factor 3	<i>Ítem 14</i>	La víctima realiza actos que van en contra de su propia seguridad.
	<i>Ítem 16</i>	La víctima es especialmente vulnerable. Por ejemplo se encuentra bajo a dependencia de sustancias o presenta evidentes problemas de tipo psicológico/psiquiátrico; o tiene problemas de integración social (todo ello sin que cuente con suficiente apoyo sociofamiliar).
Factor 4	<i>Ítem 1</i>	El autor tiene dificultades objetivas para agredir a la víctima.
	<i>Ítem 9</i>	La víctima ha trasladado su residencia habitual a un lugar con escasas posibilidades de ser conocido por el autor.

### **3.3.1.2.- Análisis Factorial Confirmatorio (Muestra 2; N= 1.278)**

De la misma manera que se procedió con el primer protocolo, y como segunda fase dentro de la validación cruzada, mediante un Análisis Factorial Confirmatorio se definió el modelo de medida, que comprendía los cuatro factores latentes descritos anteriormente (obtenidos en el análisis de la Muestra 1) y libremente correlacionados. Cada factor fue definido por los principales marcadores que aparecen listados en la tabla 7.14. En la siguiente figura aparecen los pesos estandarizados de los principales parámetros del modelo. Por otra parte, se informa también de los índices de bondad de ajuste del modelo. En este sentido se puede observar el modelo presenta un buen ajuste, ya que el GFI y AGFI obtienen valores por encima de ,9 y el RMSEA está por debajo de ,5.

Figura 7.10. Modelo de medida contrastado mediante AFC



La figura anterior muestra la estimación de los parámetros para el VPER. Se puede observar en comparación con el VPR, que las saturaciones tienden a ser más pequeñas que las observadas en el protocolo anterior así como la existencia de un ligero descenso en los índices de bondad de ajuste.

La relación entre los cuatro factores se plantea del siguiente modo: no existe correlación entre el factor 1 y el factor el factor 2 ( $r = -0,07$ ) es decir se puede decir que ambos factores son relativamente independientes, al igual que entre el factor 1 y el factor 3 ( $r = .1$ ). En relación al factor 1 con el factor 4 ( $r = ,25$ ), se puede afirmar que ambos factores mantienen una relación moderada, al igual que el factor 3 con el factor 2 ( $r = ,32$ ). Finalmente, el factor 3 con el factor 4 presenta una correlación baja y negativa ( $r = -0,19$ ).

### **3.3.1.3.- Robustez del modelo estructural**

#### **3.3.1.3.1- Coeficientes de congruencia factorial**

Antes de comparar la identidad de cualquier factor en diferentes grupos hay que garantizar que estamos extrayendo en ambos grupos el mismo factor (McCardle, 1996), es decir, que la misma dimensión está siendo evaluada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La forma de obtener esta información es a través del coeficiente de congruencia ( $r_c$ ; Cattell, 1978; Jensen, 1998). El coeficiente de congruencia es un índice de similitud interfactorial que, al igual que la correlación de Pearson, presenta valores entre -1 y +1. No tiene distribución muestral conocida, pero se asume que un valor de +.90 indica un alto grado de similaridad entre los factores comparados, mientras que un valor de +.95 o mayor es interpretado como identidad (Jensen, 1998).

En el caso del VPER, los coeficientes de congruencia factorial fueron superiores a +.90 para los cuatro factores que componen la estructura del instrumento. Por lo que se puede afirmar que estos cuatro factores son muy similares en la solución factorial obtenida con los casos del CNP (N= 1.649) y con los casos de la GC (N= 941). En la Tabla 7.16, se presentan los coeficientes de congruencia factorial obtenidos para cada factor al comparar la semejanza factorial en ambos grupos.

*Tabla 7.16. Coeficientes de congruencia factorial del VPER*

<b>FACTOR</b>	<b><math>r_c</math></b>
<b>FACTOR I Comportamiento prosocial del autor</b>	,908
<b>FACTOR II Dificultades del autor en su nueva vida</b>	,917
<b>FACTOR III Vulnerabilidad de la víctima</b>	,922
<b>FACTOR IV Obstáculos físicos</b>	,904

#### **3.3.1.3.2.-Invarianza Factorial mediante AFC Multigrupo**

Los resultados obtenidos mediante la validación cruzada de la muestra fueron satisfactorios, lo que permite utilizar el total de los sujetos para los estudios de equivalencia. Para probar la equivalencia de medida entre los casos del VPER pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y los casos pertenecientes a la Guardia Civil, se parte de un primer modelo (modelo base), en el que las cargas factoriales y las varianzas fueron estimadas libremente en ambos grupos. En el modelo de invarianza

métrica total se forzó la igualdad de las cargas factoriales entre ambos grupos, comparando el ajuste de los modelos mediante el incremento en  $\chi^2$  y en CFI. Este paso se hizo para buscar diferencias significativas entre el ajuste de ambos modelos, en ese caso, el objetivo era determinar qué variables era las que causan ese desajuste, poniendo a prueba el modelo de equivalencia métrica parcial. El valor  $\chi^2$  para el modelo base fue de 149.901 con 42 grados de libertad. El valor del CFI fue de ,943 y el RMSEA de ,032. Estos índices de bondad de ajuste, entre otros, pueden verse en la tabla 7.17 e indican que el modelo base representa de una manera adecuada los casos del VPER que vienen del Cuerpo Nacional de Policía y los que vienen de la Guardia Civil. Además de comprobar el ajuste global del modelo se examinan los valores estimados para las cargas factoriales en ambos grupos, que como se muestra en la tabla 7.17 presentan valores similares y razonables en ambos grupos.

Tabla 7.17. Cargas factoriales estimadas para ambos grupos en el modelo base (AFC)

	F1		F2		F3		F4	
	CNP	GC	CNP	GC	CNP	GC	CNP	GC
Ítem 3	,62	,66						
Ítem 5	,64	,70						
Ítem 7	,52	,54						
Ítem 12			,46	,44				
Ítem 13			,69	,74				
Ítem 14					,98	,99		
Ítem 16					,21	,30		
Ítem 1							,47	,55
Ítem 9							,61	,63

Por su parte, las cargas factoriales estimadas para el modelo de invarianza métrica se muestran en la tabla 7.18.

Tabla 7.18. Cargas factoriales estimadas para el modelo de equivalencia total (AFC)

	F1	F2	F3	F3
Ítem 3	,65			
Ítem 5	,71			
Ítem 7	,53			
Ítem 12		,47		
Ítem 13		,71		
Ítem 14			,99	
Ítem 16			,25	
Ítem 1				,54
Ítem 9				,65

El valor del  $\chi^2$  para el modelo de equivalencia métrica fue de 150.845 con 47 grados de libertad. El valor del CFI fue de ,945 y el RMSEA de ,029 (ver tabla 7.17). Los valores de estos índices indican que el modelo que el modelo ajusta de manera apropiada. Además, el incremento en el  $\chi^2$  del modelo base al modelo de invarianza métrica total fue de ,94 con 5 grados de libertad, cambio que no es estadísticamente significativo ( $p = ,967$ ). Asimismo, la diferencia en el CFI es ,002, muy inferior al criterio de ,01 establecido por Cheung y Rensvold (2002), por lo que ambos índices apuntarían a la existencia de invarianza métrica total en la estructura del VPER en función del cuerpo al que pertenecen los agentes que cumplimentan el protocolo. La tabla 7.19 recoge algunos de los principales índices de bondad de ajuste, tanto para el modelo base (MODELO 1), como para el modelo de equivalencia métrica (MODELO 2).

*Tabla 7.19. Índices de bondad de ajuste del modelo base y del modelo forzado a mantener la igualdad en las cargas factoriales*

<b>MODELO BASE (MODELO 1)</b>	<b>MODELO DE EQUIVALENCIA (MODELO 2)</b>
$\chi^2$ (42) = 149.901	$\chi^2$ (47) = 150.845
GFI = ,987	GFI = ,987
AGFI = ,973	AGFI = ,976
NNFI = ,924	NNFI = ,923
CFI = ,943	CFI = ,945
IFI = ,944	IFI = ,946
RMSEA = ,032	RMSEA = ,029

En definitiva, se puede afirmar que el modelo de equivalencia, modelo al que se le impusieron restricciones en los parámetros de cargas factoriales, forzándolos a ser iguales en ambos grupos, ajusta igual de bien que el modelo base (modelo libre), por lo que la hipótesis de equivalencia métrica se mantiene para el VPER.

#### **4. DISCUSIÓN**

Antes de comenzar con el análisis de los resultados, se hace preciso indicar que la muestra con la que se ha realizado este segundo estudio presenta similares características que la utilizada con el VPR. Este resultado no es de extrañar, puesto que como se explicó en el capítulo quinto, la muestra del VPER corresponde con aquellas víctimas que una vez que se les ha evaluado el riesgo y administrado las medidas policiales, se las revalúa el riesgo de acuerdo a los plazos contemplados en la

Instrucción 5/ 2008. Con respecto a las variables evaluadas, se han encontrado que la edad media se encuentra en torno a los 34 años, entre ellas el grupo más frecuente a las que se revalúa el riesgo se encuentra comprendido en el intervalo de los 30 y los 40 años. Las víctimas españolas representan nuevamente el porcentaje más elevado de víctimas a las que se les hace el seguimiento de su nivel de riesgo. Entre éstas la mayoría tienen estudios primarios, y el porcentaje más elevado corresponde con aquellas que mantienen una relación sentimental o aún son cónyuges con respecto al agresor.

La primera conclusión en relación a los objetivos de este estudio, hace referencia al análisis realizado para comprobar el grado de correspondencia entre los resultados obtenidos de los elementos que componen el cuestionario, en relación al sistema con el que fue diseñado. En este sentido, se puede afirmar que los resultados se ajustan a lo esperable por el sistema. Del análisis de los valores medios de las puntuaciones de los 17 ítems, se comprobó con respecto al primer bloque (ítems del 2 al 10), que los ítems puntuaron de manera elevada en su gran mayoría, lo que atendiendo a su contenido indica que están diseñados para evaluar la nueva situación tanto de la víctima como del agresor, y en este sentido al puntuar de manera elevada quiere decir que las medidas policiales se están dando adecuadamente, máxime cuando tres de los ítems que más puntúan reflejan que el autor muestra una actitud pacífica (ítem 3), que la víctima goza de un entorno favorable para su seguridad (ítem 8), y que hay un avance en el tiempo sin ningún tipo de incidencias (ítem 10). Estos resultados van en la línea de los objetivos que conducen las medidas policiales diseñadas para dar seguridad a la víctima, con lo cual se puede asumir que a través del Sistema SVyG, y las consecuentes medidas de seguridad, se puede comprobar como el autor cumple con su nueva situación, lo que directamente se traduce en un entorno de seguridad para la víctima. Por otra parte dentro del segundo bloque (ítems del 11 al 17) todos los ítems ofrecen resultados muy elevados. Se ha de recordar en este momento, que el sistema métrico de estos ítems estaba diseñado de manera inversa al primer bloque, es decir resultados próximos a la puntuación máxima (4) indicarían que el ítem o se da poco o no se da. En este sentido prácticamente todos los ítems a excepción del 12, puntúan por encima de 3. concretamente el ítem 11 (el agresor está fugado o en paradero desconocido) y el ítem 17 (la víctima o el autor tienen en su entorno personas que suponen una amenaza

realista contra la integridad de la víctima), ofrecen los resultados más elevados, obteniéndose porcentajes por encima del 87% en la categoría de respuesta “no se da”.

En segundo lugar, al analizar la distribución de la variable índice global, se observa que la GC obtiene una media más elevada que el CNP. Esto significaría que el Instituto Benemérito tiende a evaluar con menos riesgo, es decir con más protección los seguimientos. Sin embargo, analizando la magnitud de estas diferencias a través del estadístico *d* de Cohen, se informó que estas diferencias eran muy pequeñas y podían interpretarse con respecto al tamaño muestral, con lo cual en este segundo cuestionario no se puede decir que existan diferencias en esta variable en función del cuerpo policial de donde procede la muestra.

En tercer lugar, y en relación con los niveles de riesgo, cuando se revalúa el riesgo con el VPER, los resultados arrojan una distribución descendiente desde el nivel más bajo de riesgo (no apreciado) hasta el nivel de riesgo más alto (extremo). Este resultado en sí mismo indica del ajuste de los datos con el sistema. Sería inviable si el porcentaje de casos altos o extremos fuese muy elevado. Se ha de recordar que el Sistema VDyG está diseñado para detectar los casos con riesgo, administrar una serie de medidas policiales e ir saliendo de este sistema una vez se administra la protección y el riesgo disminuye, con lo cual, esta variable también refuerza el Sistema VDyG en términos generales.

Seguidamente y en relación con el coeficiente de fiabilidad, en el VPER se pueden estudiar dos resultados bien diferenciados en función de los dos bloques de ítems de los que se compone. En los primeros ítems (2 al 10), la escala muestra una fiabilidad aceptable ( ,713), pero este índice muestra debilidad en relación al segundo bloque de ítems (11 al 17), obteniendo un coeficiente de fiabilidad moderado ( ,559), que en este caso podría ser explicado por la limitada longitud del test, aspecto que afecta directamente al coeficiente de fiabilidad (Santesteban, 1990, Navas, 2001, Muñiz, 1996, Martínez Arias, 1996, Del Val 2005). En este sentido, al proporcionar los ítems una información valiosa y al correlacionar todos ellos con el total del test se considera útil su mantenimiento, sin embargo, sería interesante analizar profundamente el contenido de los ítems y la forma de redacción de los mismos.

En relación a la validez de constructo, lo primero que se realizó con el fin de estimar el número de factores y el porcentaje de varianza explicado, fue un análisis



factorial exploratorio de ejes principales y rotación Promax, encontrando una estructura de cuatro factores; el primero de ellos “**comportamiento prosocial**” quedó conformado con tres ítems; el resto de factores “**dificultades del autor**”, “**vulnerabilidad de la víctima**” y “**obstáculos físicos**”, quedaron configurados con dos ítems cada uno. En la segunda fase de la validación cruzada se realizó el análisis factorial confirmatorio corroborando de esta manera los factores hallados previamente. Del mismo modo, los índices de bondad de ajuste empleados (GFI, AGFI y RMSEA), ofrecieron resultados satisfactorios que hacen del VPER un cuestionario válido.

Seguidamente, los estudios realizados con el objetivo de estudiar la robustez del VPER, analizando la invarianza factorial así como los coeficientes de congruencia factoriales, indicaron que no existían diferencias en el modelo en relación a la procedencia de muestras, lo que es un signo de fortaleza ya que el modelo no se vio modificado cuando se estudiaron las muestras por cuerpos policiales.

Por último, se hace preciso hacer un inciso en relación al ítem 9 (la víctima ha trasladado su residencia habitual a un lugar con escasas posibilidades de ser conocido por el autor), puesto que se ha ido observando en los diferentes apartados como este ítem mostraba un comportamiento diferenciado. En primer lugar, es el ítem con la media más baja no solamente con respecto al bloque al que pertenece (bloque 1) sino con respecto a todo el cuestionario en general. En segundo lugar, es el ítem que menos se da dentro del primer bloque de ítems. Seguidamente, cuando se hacen los análisis factoriales, es el indicador que presenta una correlación más baja con el total del cuestionario, siendo ésta muy pequeña ( $r = .133$ ). Por último, la eliminación de este indicador tanto dentro de la GC como dentro del CNP, supondría un aumento de fiabilidad del cuestionario VPER en su totalidad. Por todos estos motivos, en el apartado correspondiente a futuras líneas de investigación se propondrá una nueva aproximación con el objetivo de estudiar si modificaciones en su contenido fortalecen el cuestionario en su totalidad.

En definitiva, el cuestionario de Evolución de la Valoración Policial de Riesgo (VPER) ofrece una calidad métrica adecuada. En este sentido se han ido mostrando diferentes análisis que indican como el test ofrece una buena validez de constructo y adecuadas propiedades en relación a la robustez, sin que se hayan encontrado resultados que lo desacrediten. Solamente el coeficiente de fiabilidad con respecto al segundo bloque de ítems, ha ofrecido resultados por debajo de lo esperable, aspecto que podría

ser reparado con la inclusión de nuevos ítems para hacerlo más largo. Finalmente, se recomienda una revisión del ítem 9, puesto que ha sido el único ítem que ha ido arrojando información acerca de su poca cohesión con el conjunto de ítems y al considerar su eliminación se incrementaría la fiabilidad total del cuestionario.



## **CAPÍTULO 8**

### **ESTUDIO 3: VALIDEZ EXTERNA**

#### **8.1.- INTRODUCCIÓN**

Como se avanzó en el capítulo quinto de esta Tesis Doctoral, este último estudio tratará de recopilar evidencias que avalen de forma empírica los instrumentos de valoración del riesgo VPR y VPER desde el punto de vista de la validez externa. En este sentido, se van a analizar las relaciones entre las puntuaciones obtenidas con los instrumentos de evaluación y otras variables externas delimitadas como importantes para el constructo evaluado.

Anteriormente, se comentó que a la hora de estudiar la validez externa se comparan las puntuaciones de un instrumento (variable independiente) con una o más variables externas (variable dependiente). En el estudio A, la variable dependiente será la conformidad del agente policial con el nivel de riesgo obtenido; en el estudio B, esta variable corresponderá a la satisfacción de las víctimas con las medidas policiales recibidas; y, finalmente, en el estudio C, la evolución de los diferentes niveles de riesgo que tienen una víctima con probabilidad de volver a ser agredida por su pareja o ex pareja, será la variable a analizar. Se asume que estos criterios están teórica y lógicamente relacionados con el rasgo representado bajo el objeto de estudio.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y dado que el objetivo principal es estudiar en profundidad la validez externa de los instrumentos de valoración de riesgo VPR y VPER, no se podría concluir este análisis sin tener en cuenta la dinámica interna del procedimiento policial de esta valoración. En este sentido, conviene recordar que en el momento que se interpone una denuncia por VDG, comienza la secuencia de valoración del riesgo tal y como está planteada en la Instrucción de la SES 5/ 2008; una vez realizada la primera valoración con el VPR, se adoptan las medidas policiales de protección, y en función de los plazos de revisión, se vuelve a reevaluar el riesgo con el VPER.

## **8.2.- ESTUDIO A: CONFORMIDAD DEL AGENTE CON EL RESULTADO OBTENIDO EN LOS TESTS**

### **8.2.1.- INTRODUCCIÓN**

Los instrumentos de valoración del riesgo de violencia VPR y VPER permiten cuantificar en un resultado final el riesgo que sufre una víctima de volver a ser agredida por su pareja o ex pareja. Por medio del Sistema VDyG explicado en el capítulo 4 de esta Tesis Doctoral, quedan establecidos una serie de niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo), que a su vez llevan aparejadas un conjunto de medidas policiales (anexo III). Este sistema evita lo máximo posible la subjetividad del evaluador, puesto que a través de los factores de riesgo (definidos en ítems) concreta los aspectos a observar y proporciona una predicción matemática del nivel de riesgo.

Llegados a este punto, surge una nueva pregunta, ¿qué sucede si el usuario (el agente policial) no está de acuerdo con el resultado obtenido por el sistema de valoración? En determinadas ocasiones, los agentes policiales disponen de información que les hace cuestionar el resultado automático de la valoración en dos posibles direcciones: por un lado, elevando el nivel de riesgo, y por otro disminuyéndolo. En el primer caso, se ha observado que, en ocasiones, el agente policial tiene en cuenta ciertos indicios difícilmente categorizables que le hace pensar que la probabilidad de que suceda algún incidente violento es mayor que el resultado ofrecido por el test (por ejemplo, detectan incongruencias en la información que aporta la víctima, detectan que la víctima está en fase de luna de miel de la violencia<sup>1</sup>, o muchas veces, simplemente consideran oportuno ofrecer más seguridad a la víctima que la que ofrece el sistema), por lo que en estos casos consideran conveniente aumentar el nivel de riesgo. En el segundo supuesto, se ha observado que a veces el resultado automático de la valoración del riesgo ofrece un nivel de riesgo más elevado de lo que debería ser a juicio del agente, y en aras de optimización de los recursos humanos de su unidad, éste considera que debería ser disminuido.

Debido a estas dos circunstancias, en el diseño original de los protocolos se planteó la posibilidad de incorporar en ambos instrumentos la posibilidad de cambiar el resultado obtenido. Este elemento (no computable) se diseñó para dar flexibilidad al

---

<sup>1</sup> Es una de las fases del ciclo de la violencia definido por Walker (1979). En concreto, está investigadora indicó que existían tres fases: tensión, agresión y calma o luna de miel. Esta última se caracteriza por el arrepentimiento del agresor y la búsqueda de reconciliación.

sistema de valoración de riesgo y, del mismo modo, se pensó que también se podría utilizar como criterio a la hora de estudiar la validez externa de los protocolos. En caso de que el agente no estuviese de acuerdo con el resultado ofrecido por el Sistema VDyG, podría cambiarlo, justificando y proponiendo qué nivel de medidas policiales aconsejaría. Esta información resulta muy valiosa puesto que procede de la experiencia de los propios funcionarios policiales, que son los que diariamente aplican los protocolos, trabajan con las víctimas, establecen las medidas policiales de protección y, en muchos casos, detienen al agresor. La “conformidad” del agente en este caso podría ser definida como el grado en el que el funcionario policial está de acuerdo con el resultado obtenido en la valoración del riesgo ofrecida por el Sistema VDyG. El objetivo último que persigue este indicador es que el agente pueda adaptar el caso policial a las circunstancias del momento, con la finalidad de conseguir la máxima seguridad de la víctima, evitando invertir esfuerzos innecesarios en la protección de víctimas con menos riesgo, y focalizando estos donde fuesen más necesarios, teniendo en cuenta que, muchas veces, las posibilidades reales de las unidades policiales son limitadas.

Por todo ello, este estudio tratará de analizar el grado de conformidad del agente policial con respecto al sistema informatizado de valoración de riesgo, observando si el sistema está ajustado a la realidad de la valoración de riesgo en los casos de VDG; o si por el contrario, el índice de disconformidad del agente policial es significativamente elevado, lo que proporcionaría información externa relevante a la hora de considerar que los instrumentos de valoración del riesgo no contemplan los indicadores más relacionados con este tipo de violencia, y por tanto, no reflejarían la situación actual que estuviese vivenciando una víctima de VDG.

Del mismo modo, tal y como se procedió en los estudios anteriores, se analizará esta circunstancia con respecto al cuerpo policial de procedencia, analizando si existen diferencias en el grado de conformidad agente-sistema en función del cuerpo policial (CNP-GC). Por último, se analizará de manera pormenorizada aquellos niveles de riesgo en los que existe más grado de conformidad y en los que menos, tratando de determinar qué información subyacente puede estar explicando estas diferencias.

### 8.2.2.- MÉTODO

#### *Participantes*

La muestra de este estudio está compuesta por 20.576 casos valorados con el VPR y 2.592 casos valorados con el VPER1. Con respecto a la muestra con que se hicieron los análisis para el resto de protocolos VPER, corresponde con el tamaño muestral descrito en el capítulo quinto. En concreto, la distribución es la siguiente:

*Tabla 8.1. Tamaño muestral en función del protocolo VPER*

VPER2	VPER3	VPER4	VPER5	VPER6	VPER7	VPER8	VPER9	VPER10
1.431	895	582	384	255	160	110	75	60

Teniendo en cuenta que a partir del décimo protocolo VPER, la muestra no sobrepasaba los 40 cuestionarios, se decidió trabajar solamente con los diez primeros, ya que el tamaño muestral con el que se contaba era suficientemente grande como para poder extraer conclusiones.

#### *Procedimiento e instrumento de medida*

Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios VPR y VPER. Tal y como se indicó en el capítulo quinto, al final de los indicadores principales (16 en el VPR y 17 en el VPER), y una vez computado el nivel de riesgo que sufre una víctima, los cuestionarios permiten modificar el resultado por el propio agente policial, a través del siguiente ítem: “¿Está usted de acuerdo con el resultado automático de dicha valoración? SI – NO; si no está de acuerdo ¿Qué resultado le parece a usted más adecuado? Por favor márquelo (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo)”.

El procedimiento para poder llevar a cabo este estudio, corresponde con aquél empleado en los estudios anteriores. En general, los datos obtenidos con los instrumentos se grabaron en el Sistema VDyG; de este sistema se hizo una extracción general que fue volcada en una base de datos global creada al efecto. Después de varios procesos de depuración, se extrajeron aquellas variables relevantes, creándose de esta manera una nueva base de datos con información exclusiva para su estudio. Seguidamente, se analizó, salvaguardando la identidad de las víctimas, agresores, así como la de los agentes policiales.

### ***Análisis de datos***

Los análisis se realizaron mediante el programa estadístico SPSS (versión 17.0). Para la obtención de los resultados se ha realizado un procesamiento y análisis descriptivo a través de dicho programa, gracias al cual se han obtenido las frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones típicas. Con el objetivo de estudiar los porcentajes de conformidad con el nivel de riesgo obtenido, se realizó el análisis de datos por muestra total, y luego por muestras policiales, de modo que fue posible averiguar si existían diferencias entre ambos cuerpos. Para el análisis estadístico se optó por llevar a cabo tablas de contingencia de los niveles de riesgo con la conformidad de los agentes, y para estudiar la existencia de relación entre dichas variables se empleó el estadístico *chi cuadrado*, un índice que permite determinar exclusivamente la existencia de relación entre variables, pero no indica el grado o tipo de relación. Debido a esta limitación y puesto que este estadístico es muy sensible al tamaño muestral se empleó el coeficiente de contingencia “*c*”, con el objetivo de poder cuantificar la magnitud de relación hallada. Los resultados de este indicador oscilan entre +1 y -1, pasando por el cero, donde este último significaría no correlación entre las variables estudiadas.

Como en los estudios anteriores, el análisis de datos será el mismo para ambos protocolos VPR y VPER, pero los resultados se ofrecerán de manera diferenciada para cada uno de ellos.

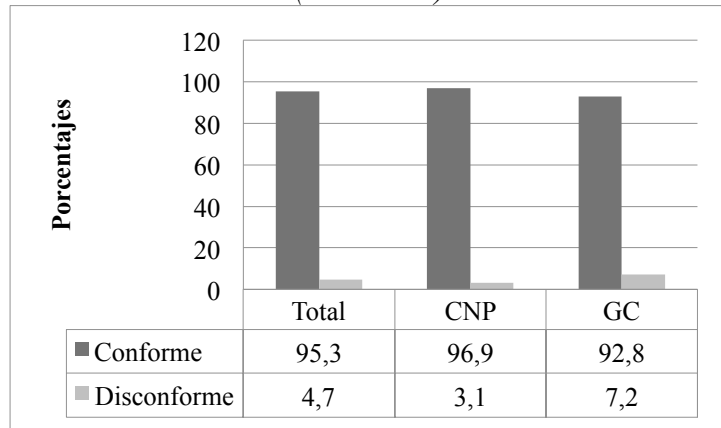
### **8.2.3.- RESULTADOS**

#### **VPR**

En primer lugar, la figura 8.1 recoge la información descriptiva relativa al grado de conformidad con respecto al nivel de riesgo de los agentes policiales que han completado el primero de los protocolos de valoración del riesgo. Para el estudio de esta variable se ha contado con 20.576 casos (100%).



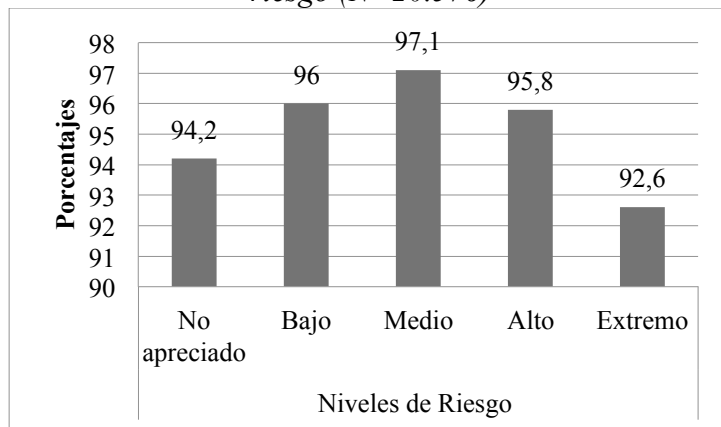
Figura 8.1. Porcentajes de conformidad del agente con el resultado del VPR  
(N=20.576)



Tal y como se puede observar en la figura anterior, el grado de conformidad en el conjunto de la muestra es muy elevado (95,3%). Al analizar los dos cuerpos policiales por separado, se encuentra que dentro del Cuerpo Nacional de Policía los porcentajes de conformidad son ligeramente más elevados (96,9%) que dentro de la Guardia Civil (92,8%). El estadístico *chi-cuadrado de Pearson* permite conocer la relación entre variables, y en este caso indica que las diferencias entre ambos cuerpos policiales con respecto al grado de conformidad no son independientes, sino que ambas variables se encuentran relacionadas ( $X^2 [5, N=20.798] = 228,404, p < 0,005$ ). Un análisis minucioso de la relación informó que existían diferencias significativas entre ambos cuerpos con respecto al grado de disconformidad ( $p < 0,005$ ).

En la figura siguiente, se ilustran los grados de conformidad más altos y más bajos relativos a los niveles de riesgo de la muestra total

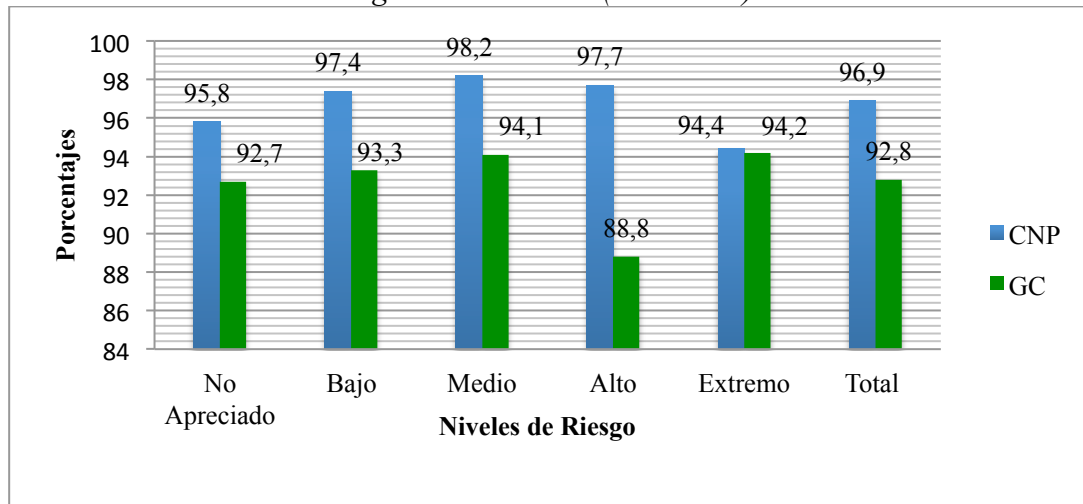
Figura 8.2. Porcentajes de conformidad del agente con el VPR en función del nivel de riesgo (N=20.576)



A primera vista se comprueba cómo la figura adopta la interesante forma de una pirámide, informando que los niveles de riesgo donde menos conformidad existe son el nivel de riesgo no apreciado (94,2%) y el nivel de riesgo extremo (92,6%). El nivel de riesgo donde hay más conformidad es el nivel de riesgo medio (97,1%), seguido de manera próxima por el nivel de riesgo bajo (96%) y el nivel de riesgo alto (95,8%). El estadístico *chi-cuadrado de Pearson* obtenido para comprobar la hipótesis de independencia entre las variables conformidad del agente y niveles de riesgo ( $\chi^2[4, N=20.790]= 1026.58, p< 0,005$ ) indica que tales variables están relacionadas. Para conocer la intensidad de esta covariación, se utilizó nuevamente el coeficiente de contingencia *c*, lo que informó que a pesar de haberse detectado efectos significativos a través del *chi cuadrado*, el nivel de covariación fue muy débil ( ,217) y podría ser debido al gran tamaño de la muestra.

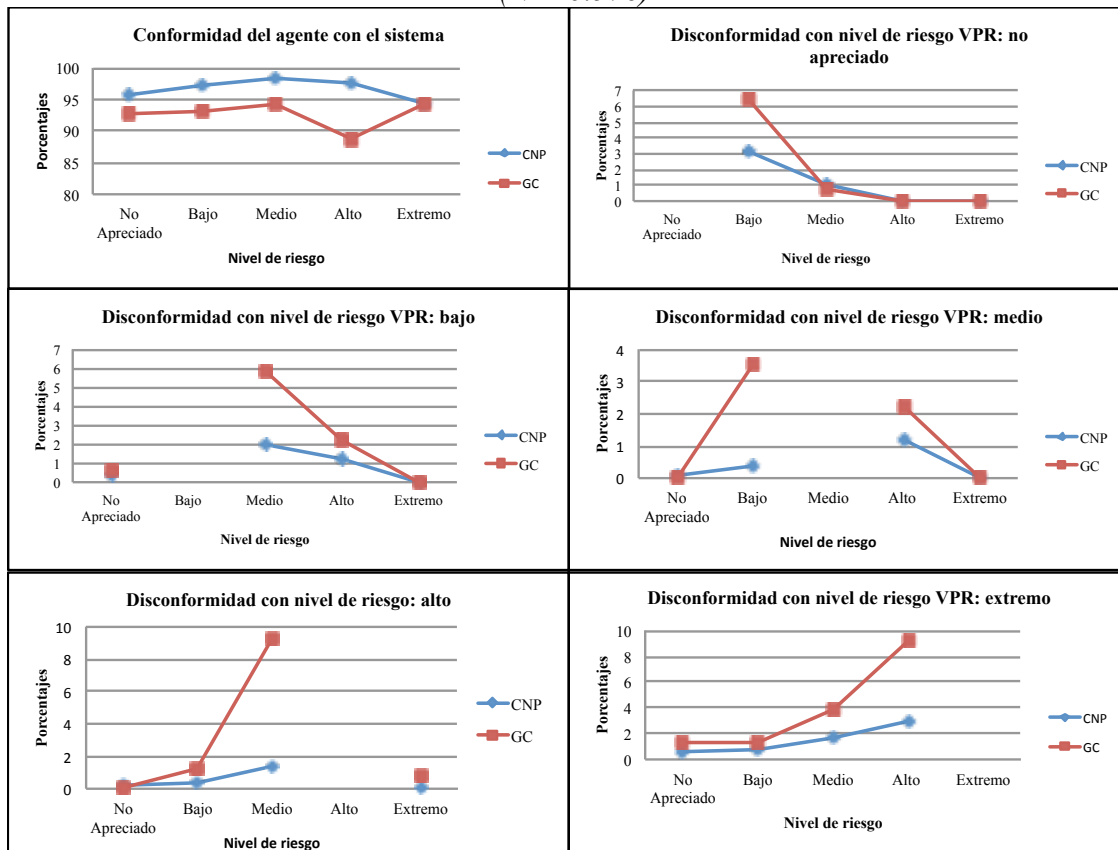
Al desglosar el análisis anterior por cuerpos policiales, se encontró que dentro del CNP los porcentajes de conformidad tendían a ser más elevados que en la GC.

Figura 8.3. Distribución de los porcentajes de conformidad y disconformidad del agente con el VPR (N=20.576)



Con respecto a los índices de disconformidad, es decir los cambios manuales que efectuaron los agentes policiales cuando no estaban de acuerdo con los porcentajes que ofrecía el Sistema VDyG, los más voluminosos fueron los siguientes:

Figura 8.4 .Porcentajes de conformidad- disconformidad del agente con el sistema VPR (N=20.576)



En el CNP, los cambios que más sobresalen efectuados por el agente, fueron los siguientes:

- No apreciado: el 3,1% de los casos fueron modificados a nivel de riesgo bajo y un 1,1% a nivel de riesgo medio.
- Bajo: el 2% de los casos fueron cambiados a nivel de riesgo medio.
- Medio: el 1,2% de los casos aumentaron a nivel de riesgo alto.
- Alto: el 1,4% de los casos cambiaron su nivel a riesgo medio.
- Extremo: el 2,9% de los casos disminuyeron a nivel de riesgo alto y el 1,6% a nivel de riesgo medio.

En la GC, los cambios más destacados efectuados por los agentes fueron los siguientes:

- No apreciado: el 6,5% de casos aumentaron a nivel bajo.
- Bajo: el 5,8% de casos aumentaron a nivel de riesgo medio.
- Medio: el 2,2% de casos aumentaron a nivel de riesgo alto.
- Alto: el 9,2% de casos disminuyeron a nivel de riesgo medio.

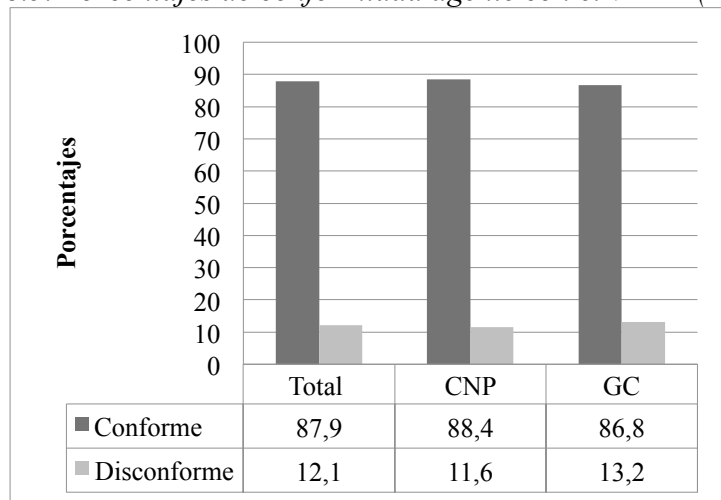
- Extremo: el 9,2% de casos bajaron a nivel de riesgo alto; y el 3,9% de casos a nivel de riesgo medio. Es interesante también destacar que el 1,3% de los casos fueron calificados con grado bajo y el mismo porcentaje con nivel no apreciado.

En conclusión, el CNP muestra índices de conformidad más elevados que la GC habiéndose encontrado diferencias significativas entre ambos cuerpos ( $p < 0,005$ ). Igualmente se hallado este tipo de diferencias al compararse los niveles de riesgo “no apreciado” y “bajo”, encontrándose que los los agentes procedentes de la GC tienden a efectuar cambios más voluminosos ( $p < 0,005$ ).

### VPER

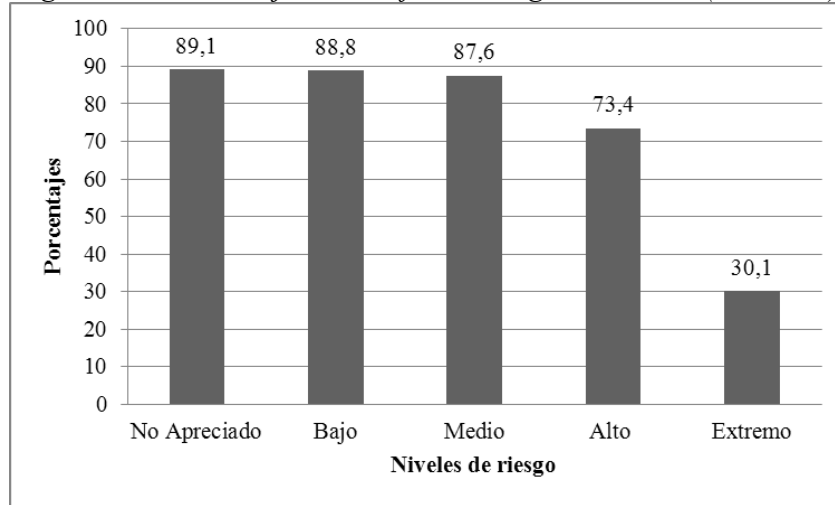
En el VPER, los resultados de conformidad de los agentes son ligeramente inferiores a los hallados con el VPR. Existe un 87,9% de grado de acuerdo entre el agente y el resultado obtenido por el Sistema VDyG. La figura 8.5 recoge estos resultados, pudiendo observar también los datos en función del cuerpo policial de procedencia. Nótese que la tendencia de los resultados es similar al caso del VPR, ofreciendo el CNP índices de conformidad más altos (88,4%) que la GC (86,8%); aunque en este caso, el estadístico *chi-cuadrado de Pearson* ( $X^2[4, N=2.587] = 15,791, p > 0,000$ ) indica que las variables conformidad del agente y cuerpo policial de procedencia no están relacionadas ( $p > \alpha$ ).

Figura 8.5. Porcentajes de conformidad agente con el VPER (N=2.592)



Al desglosar el resultado total de esta variable en niveles de riesgo, se obtienen los resultados que muestra la figura siguiente.

*Figura 8.6 Porcentajes de conformidad global VPER (N=2.592)*



La distribución de esta variable muestra porcentajes de conformidad más bajos que con respecto al cuestionario VPR. En este sentido, llama la atención que el porcentaje de conformidad en el nivel de riesgo extremo es casi tres veces más pequeño que el obtenido en el VPR. Con esta información, se puede afirmar que de cada 100 funcionarios policiales que al hacer la valoración de la evolución del riesgo obtienen un resultado de riesgo extremo, tan sólo están conformes con ese resultado 30 de ellos. El resto de resultados por niveles de riesgo, ofrecen resultados de conformidad por encima del 87%, a excepción del nivel de riesgo alto, cuyo porcentaje de conformidad no supera el 75% (73,4%).

Las figuras 8.7 y 8.8 informan sobre la distribución de los porcentajes de conformidad y disconformidad del agente policial con respecto al nivel de riesgo ofrecido por el Sistema VDyG. Se observa que los porcentajes ahora son más cuantiosos que con respecto al cuestionario VPR anteriormente analizado.

Figura 8.7. Distribución de los porcentajes de conformidad y disconformidad del agente con el VPER (N=2.592)

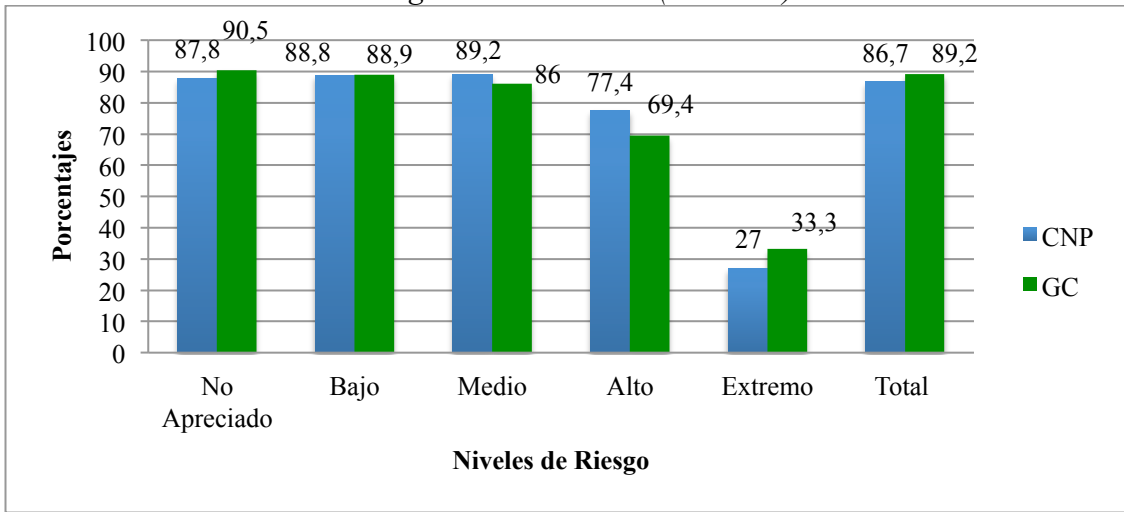
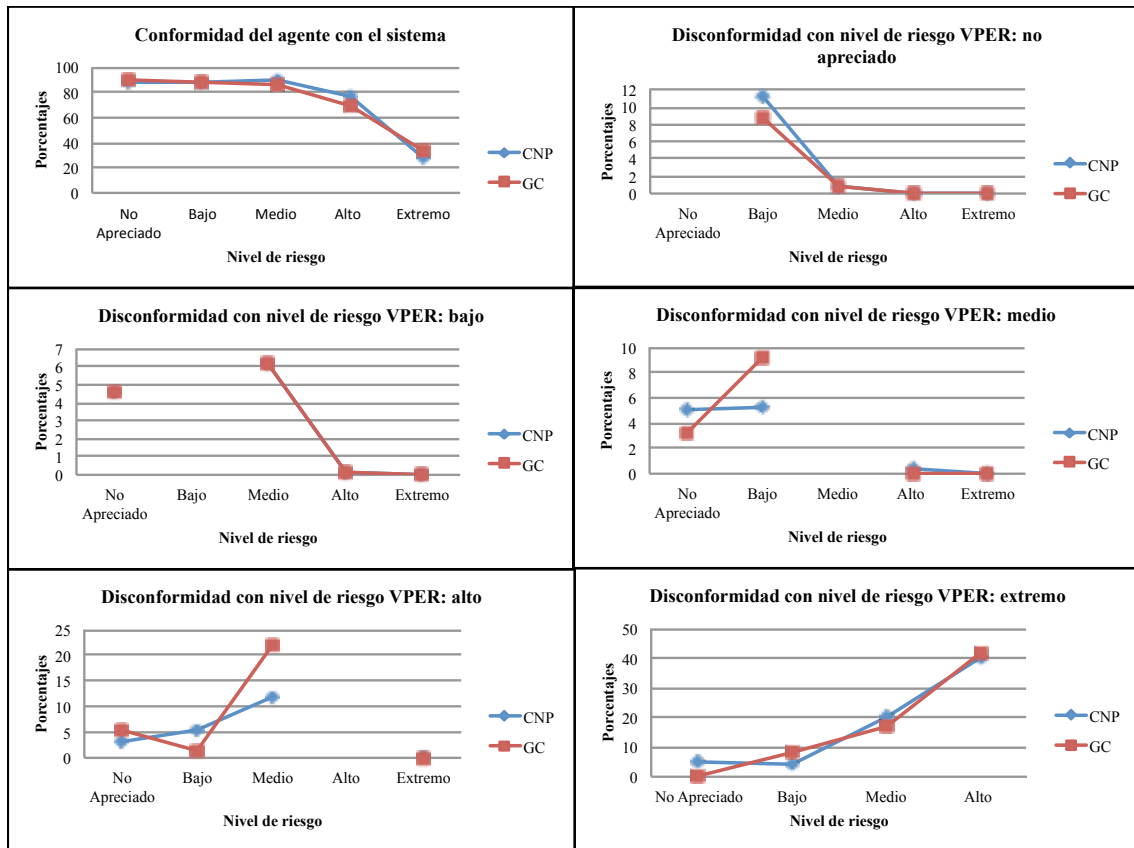


Figura 8.8. Porcentajes de conformidad- disconformidad del agente con el sistema VPER



En el CNP, los cambios más destacados efectuados por los agentes son los siguientes:

- No apreciado: el 11,3% de los casos aumentaron a nivel de riesgo bajo.
- Bajo: el 6,1% de los casos aumentaron a nivel alto y el 4,6% disminuyeron a nivel bajo.
- Medio: el 5,2% de los casos se modificaron a nivel de riesgo bajo.
- Alto: el 3,1% de los casos fueron bajados a nivel no apreciado; el 5,4% a nivel de riesgo bajo, y el 12,1% a nivel de riesgo medio.
- Extremo: el 5,4% de los casos fueron valorados con nivel de riesgo no apreciado; el 4,1% con nivel de riesgo bajo; el 20,3% con nivel de riesgo medio, y el 40,5% fueron valorados con nivel de riesgo alto.

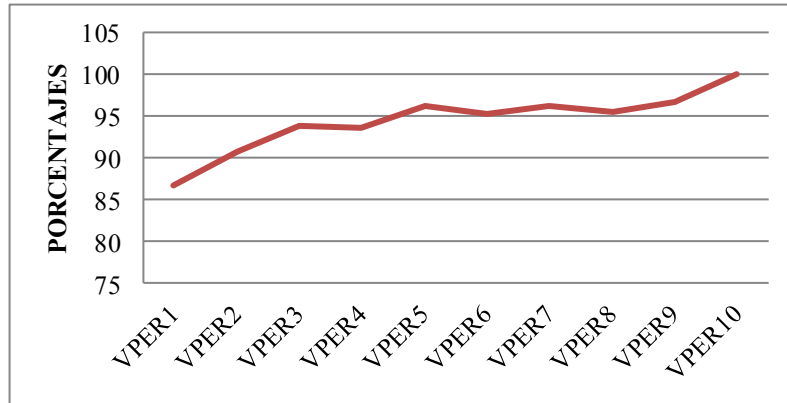
En la GC, los cambios más destacados efectuados por el agente fueron los siguientes:

- No apreciado: el 8,7% de los casos subieron a nivel bajo.
- Bajo: el 4,6% bajaron a nivel de riesgo no apreciado y el 6,1% subieron a nivel de riesgo medio.
- Medio: el 3,2% bajó a nivel de riesgo no apreciado y el 9,2% a nivel de riesgo bajo.
- Alto: el 5,6% fue considerado con nivel de riesgo no apreciado, y el 22,2% con nivel de riesgo medio.
- Extremo: el 8,3% bajó a nivel bajo, el 16,7% a nivel de riesgo medio y el 41,7% a nivel de riesgo alto.

En resumen, se encontró que los cambios más llamativos eran efectuados en ambos cuerpos policiales, desde niveles de riesgo extremos a niveles de riesgo más bajos, especialmente a niveles de riesgo altos y medios. Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas entre ambos cuerpos policiales en relación a los índices de conformidad y disconformidad. Finalmente, se observó una tendencia a aumentar el riesgo de los niveles de riesgo no apreciados y bajos, también en ambos cuerpos policiales.

A continuación, la figura 8.9 recoge la evolución del grado de conformidad entre el agente policial con el VPER a lo largo de 10 protocolos VPER administrados

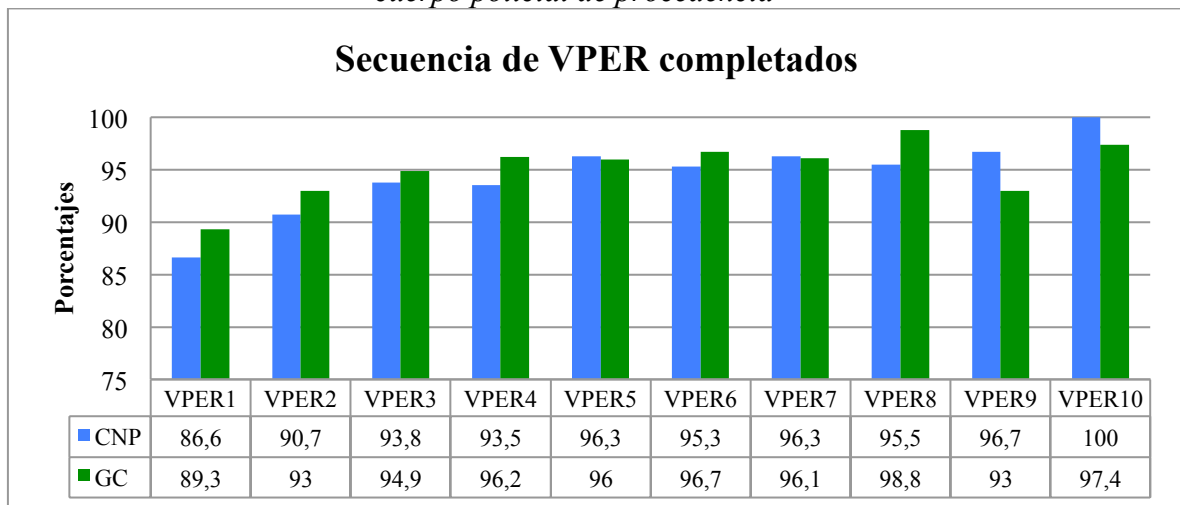
Figura 8.9. Grado de conformidad del agente a través de los protocolos VPER



Los resultados muestran que, a medida que se van rellenando los protocolos de valoración policial de la evolución del riesgo, el grado de conformidad también va elevándose y adquiriendo cierta estabilidad a lo largo del tiempo.

Por último, con el objetivo de conocer qué cuerpo policial había modificado más su respuesta a lo largo de los sucesivos protocolos de valoración de la evolución del riesgo, se segmentó la muestra por cuerpos policiales, obteniéndose los resultados que se muestran a continuación.

Figura 8.10. Distribución de la variable conformidad con el resultado VPR según el cuerpo policial de procedencia





La primera observación al respecto es que ambos cuerpos policiales mantienen niveles prácticamente similares a lo largo del tiempo, obteniéndose porcentajes de conformidad entre el 87% y el 100%. Se puede observar cómo los agentes procedentes de la GC tienden a estar más conformes con el resultado de la valoración que los agentes procedentes del CNP, puesto que en más de la mitad de los cuestionarios analizados, la GC sobresale con respecto al CNP. Igualmente se puede comprobar que existe un crecimiento paulatino del índice de conformidad en ambos cuerpos: en la GC crece hasta llegar al quinto VPER, donde se mantienen para seguir a continuación creciendo, alcanzando las puntuaciones más altas en el octavo VPER. Finalmente, se observa un descenso en el noveno VPER, que luego se remonta en el último protocolo con un índice de conformidad de más del 97%. Con respecto al CNP, se corrobora también un incremento paulatino, que baja ligeramente en el cuarto protocolo, y luego tiende a crecer lentamente, hasta alcanzar el 100% en el último cuestionario.

Estos resultados pueden explicarse a que conforme se van administrando y cumplimentando los cuestionarios, los agentes conocen más profundamente el caso, en este sentido cuentan con más información sobre la víctima, el autor, así como de las circunstancias que rodean el suceso. Todo ello hace que la valoración por el Sistema VDiG sea más precisa y consecuentemente los índices de conformidad concuerden con él.

#### **8.2.4.- DISCUSIÓN**

Al igual que en los estudios anteriores, el análisis comienza con los resultados obtenidos con el protocolo VPR. En este sentido, se observa que en general los grados de conformidad con el Sistema VDiG son muy elevados, llegando ofrecer resultados superiores al 95%.

Al estudiar la muestra en función del cuerpo policial de procedencia, observamos que el CNP tiende a puntuar ligeramente más alto que la GC, es decir, tiende a estar más conforme con el resultado obtenido por el Sistema. Una vez se analizó la magnitud de esta diferencia, se comprobó que existían diferencias significativas entre ambos cuerpos policiales. La evidencia lograda en la variable niveles de riesgo indicó que donde más conformidad existió fue en los niveles de riesgo medio (medio, alto y bajo), siendo los niveles de riesgo no apreciado y extremo donde los porcentajes de conformidad fueron más pequeños. Estos datos son muy interesantes puesto que reflejan dos efectos observados por la autora de esta Tesis Doctoral en las

unidades policiales donde se han recogido datos para hacer el estudio. Por una parte, cuando un agente cambia el nivel de riesgo no apreciado, elevándolo, puede estar actuando bajo una leve presión interna (típico comportamiento observado de “por si acaso”): adopta una posición conservadora y prefiere incrementar ligeramente la seguridad de la víctima. Por otro lado, cuando el sistema ofrece un resultado de riesgo alto o extremo (lo que demanda más protección y más efectivos para dar seguridad), los agentes pueden cambiar y de hecho cambian el resultado hacia niveles inferiores, evitando así invertir todos los recursos materiales y personales que estos casos requerirían. El hecho de que las vigilancias, entrevistas, contactos con las víctimas, patrullas de servicios, denuncias, diligencias, grabación en las correspondientes bases de datos (Sistema VDyG y SIGO) y cuestionarios de valoración policial de riesgo sean efectuados por los mismos agentes que se dedican al resto de tareas de seguridad ciudadana, supone un problema importante que tiene que ver con las plantillas de personal de las Unidades; un fenómeno que se agrava conforme la plantilla de la Unidad sea más reducida, como ocurre en el caso de la Guardia Civil, cuyo personal está más diseminado que el del Cuerpo Nacional de Policía, por razones de demarcación territorial a su cargo (el 90% de la extensión del territorio nacional).

En este sentido, si se observan los catálogos de los equipos destinados en estas unidades, encontramos plantillas compuestas entre cinco y seis componentes. Teniendo en cuenta que tienen bajo su responsabilidad un ámbito territorial que puede agrupar diferentes localidades, se puede observar fácilmente que existe una gran carga de trabajo por la cantidad de apoyos que deben prestar, ya que la mayoría de las veces deben atender igualmente a otras muchas incidencias (otros delitos, faltas, incidencias operativas, órdenes internas, pautas de trabajo, etc.). Con esta sobrecarga de trabajo que algunas unidades policiales presentan, y dado que las medidas de protección derivan del nivel de riesgo resultante de dicha valoración, y que los que deben hacer cumplir esas medidas de protección son los mismos agentes encargados de todo lo anterior, los funcionarios policiales se ven en ocasiones presionados para intentar no elevar en la medida de lo posible los resultados de riesgo de los cuestionarios. Todo ello con la finalidad de que las medidas de protección que se deban aplicar no impliquen el destinar la mayor parte del potencial de servicio a esta tarea, y no a otros cometidos relacionados con la seguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que si el resultado de la valoración del riesgo es extremo, se debe realizar una vigilancia permanente de la víctima y del

agresor hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza para la víctima (Instrucción 5/2008).

Con respecto al primer VPER, los resultados de conformidad son ligeramente inferiores que con respecto al VPR. Esto podría ser explicado porque en el segundo cuestionario los agentes ya conocen mucho mejor el caso, a la víctima, y posiblemente al autor; y, por ello, quizás confíen más en su propio criterio que en el del Sistema VDyG, especialmente si además se da alguna de las dos circunstancias comentadas con anterioridad: disminución del nivel de riesgo en función de los recursos operativos de la Unidad; así como el temor a responsabilidades en el caso de que la víctima sea agredida.

También se ha observado que el CNP ofreció porcentajes de conformidad más elevados que la GC, aunque esta diferencia fue mínima (1.6). Como se explicó en capítulos anteriores, cuando la muestra es muy grande (como en nuestros estudios), los estadísticos de contraste van a detectar valores muy pequeños como diferencias estadísticamente significativas, por ello se suelen utilizar otros índices (en este caso el coeficiente de contingencia “c”) para valorar la magnitud de estas relaciones. En este sentido, este indicador informó que las diferencias detectadas eran muy débiles y debidas precisamente a la potencia de la prueba o del tamaño muestral. Posteriormente quedó reflejado que a lo largo de las secuencias evaluadas que los funcionarios de la Benemérita tendían a mostrar índices de conformidad más elevados que los agentes del CNP, en más de la mitad de las diez secuencias evaluadas (VPER 1 – VPER 10).

Con respecto a los niveles de riesgo donde más conformidad existieron en el segundo cuestionario, fueron los niveles bajos (no apreciado y bajo) y también el nivel medio. Por el contrario, cuando se trataron los niveles altos (alto y extremo) los índices de conformidad fueron disminuyendo paulatinamente, observando en el nivel de riesgo extremo tan sólo un 30,1% de conformidad agente-sistema. Que el agente policial conozca más el caso, puede explicar en cierta manera estos cambios, puesto que hay que recordar que cuando se rellenan los protocolos VPER, los funcionarios policiales cuentan con información más precisa y exhaustiva del caso. Probablemente por este motivo, deciden cambiar y en estos casos disminuir el nivel de riesgo, en aras de la optimización de los recursos de su Unidad. El resto de protocolos administrados VPER ofreció porcentajes de conformidad superiores al 85% en ambos cuerpos, lo que dota de confianza al sistema VDyG, puesto que esto indica que de cada 100 cuestionarios, sólo han sido modificado 15 de ellos por el agente policial.

Por último, y a modo de conclusión general, se puede afirmar que la variable analizada **conformidad del agente** demuestra sin lugar a dudas la validez externa del Sistema VDyG. Esta variable es similar a la información que se obtiene cuando se efectúa “un juicio de expertos” puesto que se está obteniendo información directa de los propios usuarios que trabajan diariamente con el Sistema y con los protocolos. Es por ello que desde el punto de vista de la validez externa, este estudio avala de forma empírica el funcionamiento del Sistema VDyG, ya que los índices de conformidad son en general muy elevados, manteniéndose el grado de conformidad más o menos estable con unos porcentajes que oscilan entre el 88% y el 98% a lo largo de las secuencias analizadas.

Antes de finalizar, es preciso aclarar que en la fecha de escribir esta Tesis, ya no es posible el cambio manual de este ítem por el agente policial, exclusivamente a la hora de bajar o disminuir el riesgo. En este sentido, cuando exista discrepancia entre lo que dicte el Sistema VDyG y el juicio del evaluador, tan sólo se debe adoptar la estimación del agente cuando ésta **suponga el aumento** de la estimación del riesgo para la víctima.

### **8.3. ESTUDIO B: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS CON LAS MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN**

#### **8.3.1.- INTRODUCCIÓN**

La opinión de la ciudadanía es importante para crecer en cualquier ámbito profesional, por lo que es conveniente escuchar directamente la opinión de los usuarios con respecto a los servicios que han recibido. Por este motivo, a través de este estudio se trabajó para conocer el grado de satisfacción de las víctimas que presentaron denuncias por VDG, en relación con las medidas de seguridad y de protección que recibieron por parte de las fuerzas de seguridad. De esta manera, se pretendía conocer si los esfuerzos para mejorar la protección y seguridad ciudadana que se habían desarrollado a raíz de la Ley 1/ 2004 y las Instrucciones de la SES, estaban llegando de manera eficaz a las víctimas de VDG que habían denunciado, y conocer de esta manera el grado de satisfacción de las víctimas de VDG con respecto a estas medidas. Es importante destacar que cualquier estudio sobre la percepción que tienen las víctimas de los servicios recibidos por las FCS, debe ser un instrumento valioso para la toma de decisiones en política de seguridad. Por todo ello, y para llevar a cabo este estudio se diseñó un cuestionario de satisfacción, con el objetivo de ser administrado cada vez que fuese cumplimentado el formulario de valoración policial de evolución del riesgo (VPER), aprovechando de esta manera el contacto con la víctima y el consecuente *rapport* establecido con ella.

#### **8.3.2.- MÉTODO**

##### ***Participantes***

La muestra inicial estuvo compuesta por 198 casos denunciados por VDG y que, por tanto, formaban parte del Sistema VDyG implantado por el Ministerio del Interior, y descrito en el capítulo cuarto de esta Tesis Doctoral. La muestra se obtuvo en diversas dependencias policiales que accedieron a colaborar en este estudio, concretamente unos Puestos de la GC de Madrid (Arroyomolinos y Tres Cantos), de Almería (Níjar, San José, Tabernas, Gador, Huercal de Almería y Cabo de Gata) y una Comisaría del CNP (la de Fuenlabrada, en Madrid).

Conviene resaltar que debido a la sensibilidad de los datos fue imposible acceder a información de variables sociodemográficas, y que de los mil cuestionarios que se difundieron para ser cumplimentados, tan sólo se recibieron 221. De la misma manera, de las Comisarías a las que se tuvo acceso para hacer el estudio, tan sólo se obtuvieron

datos de una de ellas. Dentro de la GC, los puestos con mayor número de cuestionarios recibidos fueron: Níjar (53,5%), Huercal de Almería (10,1%), Tres Cantos (7,7%) y Arroyomolinos (6,6%). Del CNP únicamente se recibieron cinco cuestionarios completados (2,5%).

### ***Procedimiento e instrumentos***

Para llevar a cabo este estudio se reformuló el cuestionario de satisfacción de Larsen, Atkinson, Hargreaves y Nyuyen (1979), adaptado a la versión Española (Echeburúa y Corral, 1998). Como se puede observar en el Anexo IV se trata de un cuestionario basado en una escala tipo Likert, donde se evalúa el grado de satisfacción de la víctima con respecto al conjunto de medidas recibidas. Es un cuestionario totalmente anónimo y voluntario compuesto por 9 ítems. Todo ello redactado con un lenguaje sencillo y comprensible para ser completado en pocos minutos por la propia víctima. Este cuestionario ofrece cuatro posibilidades de respuesta, y todos los ítems están formulados de manera positiva. El último ítem es dicotómico (SÍ/ NO) y pregunta si el usuario cambiaría algo sobre la atención y / o servicios recibidos por los agentes policiales, ofreciendo en tal caso posibilidades de mejora u otras sugerencias mediante una pregunta abierta final, donde la víctima puede dejar constancia de lo que modificaría. La recogida de la información se llevó a cabo en tres meses (del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2009). Los agentes policiales (que habían recibido instrucciones de la autora de esta Tesis) explicaban a las víctimas cómo debía rellenarse, señalando reiteradamente que se trataba de un cuestionario anónimo, totalmente confidencial y voluntario. Como se ha dicho, de los mil cuestionarios administrados tan sólo se recibieron 221, y de ellos, se eliminaron un total de 23 por haber sido entregados en blanco o solamente con la fecha. Aquellos cuestionarios a los que le faltaba alguna pregunta por contestar, fueron incluidos en el estudio quedando dichas preguntas constatadas como valores perdidos.

### ***Análisis de datos***

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis para determinar las propiedades psicométricas del cuestionario de satisfacción, estudiando su estructura interna con la hipótesis de encontrar solamente una dimensión o la existencia de un único factor que diese cuenta de buena parte de la varianza del conjunto de ítems que formaban el

formulario; para ello se utilizó la técnica del Análisis Factorial Exploratorio (AFE), como procedimiento de reducción de datos. Para lograr la estructura más simple y fácilmente interpretable se utilizó el método de máxima verosimilitud para la extracción inicial de factores, y finalmente se rotó la matriz de datos con el método Promax. Por último, a través del coeficiente alfa de Cronbach se estudió la fiabilidad del cuestionario.

Toda la información conseguida a través del instrumento arriba descrito, fue volcada en una base de datos creada al efecto con la versión 17.0 del programa estadístico SPSS. El análisis de los datos se hizo atendiendo en todo momento a los objetivos e hipótesis planteadas, concluyendo con un análisis descriptivo de los ítems que formaban el cuestionario, basado de manera particular en frecuencias y porcentajes además de medias y desviaciones típicas.

### **8.3.3.- RESULTADOS**

A continuación se van a presentar los resultados obtenidos siguiendo los apartados mencionados en el análisis de datos. En primer lugar, se presentará el AFE; en segundo lugar, se analizará la fiabilidad del instrumento; y, por último, se analizarán los datos del análisis descriptivo de los ítems.

#### **Análisis Factorial Exploratorio**

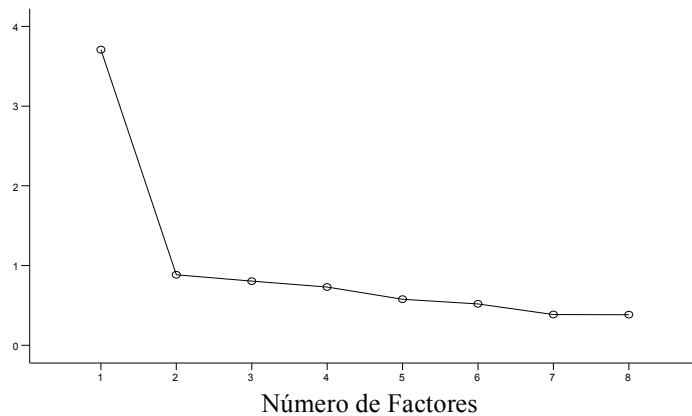
El estudio de la dimensionalidad del cuestionario se llevó a cabo a través del AFE con los ocho primeros ítems del cuestionario (puesto que el último ítem se trataba de una pregunta dicotómica externa al contenido de los ocho ítems principales). Se empezó analizando si la matriz de correlaciones de las variables del cuestionario era apropiada para realizar dicho cálculo. La prueba de esfericidad de Barlett y el coeficiente de Kaiser – Meyer - Olkin mostraron la adecuación de los datos para poder realizar el análisis factorial. El factor extraído mediante el método de máxima verosimilitud explicó el 46,34% de la varianza. Por último y puesto que sólo se encontró con un factor (tabla 8.2) la solución final no pudo ser rotada. Esta tabla contiene las correlaciones entre la variable original y el factor detectado. Se puede observar que todos los ítems saturan en este único factor, constituyendo así una única categoría, que se ha denominado “**satisfacción con el sistema de protección policial**”.

*Tabla 8.2 Matriz factorial*

Ítems	Factor 1
1	,568
2	,519
3	,389
4	,646
5	,714
6	,752
7	,630
8	,712

La figura 8.11 refleja el factor detectado, apreciándose que a partir de éste, la inclinación va disminuyendo hasta constituirse casi al completo en una línea horizontal, significando esto la existencia de un único factor.

*Figura 8.11. Número de factores observados a través del gráfico de sedimentación (N=198)*



### **Fiabilidad**

Para llevar a cabo el estudio de la fiabilidad del cuestionario se trabajó con el conjunto de datos y con el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, obteniéndose un resultado de ,831. La cercanía de este resultado a la unidad indicó que existía una alta consistencia interna entre los ítems, lo que indica que el instrumento presenta un resultado bastante aceptable, por lo que los datos ofrecidos con este cuestionario pueden ser calificados como fiables.

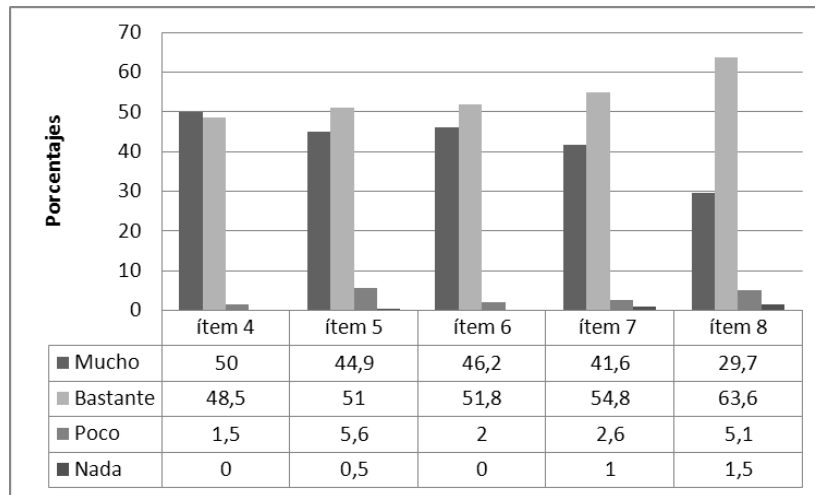


### *Análisis descriptivo de los ítems*

Con el propósito de analizar el grado de satisfacción de las víctimas con las medidas policiales, se llevó a cabo un análisis descriptivo de los 9 ítems del cuestionario, obteniéndose buenos grados de satisfacción con las medidas policiales recibidas. Con respecto al ítem 1 **¿Cómo calificaría la calidad del servicio que ha recibido?**, el 38% de las víctimas lo califican como excelente, el 60% como bueno y el 2% como regular. No hay ningún caso que califique la calidad del servicio como malo. El ítem 2 trata de evaluar **en qué medida el programa de medidas policiales ha satisfecho las necesidades de las víctimas**, a lo que un 52% contestó que en general, un 41% totalmente, un 6% parcialmente y un 1% contestó que en nada. El ítem número 3 preguntaba **sí la víctima recomendaría las medidas policiales a una amiga en caso de necesitar una ayuda similar**; el 89% de la muestra contestó que sí, el 8% probablemente sí, el 2% respondió que probablemente no y un 1% contestó que no.

Las respuestas al resto de ítems, al tener el mismo formato de respuesta, quedan reflejadas en la figura 8.12. Se puede comprobar que los resultados son muy positivos, puesto que las dos barras de mayor frecuencia en cada ítem corresponden con los resultados de grado de satisfacción mucho y bastante. En el ítem 4, **“¿en qué grado está satisfecho con el tipo de atención recibida?”**, tan sólo un 1,5% de las víctimas refieren estar poco satisfechas. En el ítem 5, un 5,6% de los casos afirma que las **ayudas policiales les han ayudado** poco y un 0,5% refieren que nada. Con respecto al ítem 6, únicamente un 2% de los casos afirman estar **poco satisfechas con el servicio recibido en conjunto**, distribuyéndose el resto de la muestra entre bastante satisfecha (51,8%) y muy satisfechas (46,2%). Existe un 2,6% de víctimas que refieren que se **han sentido poco protegidas**, y un 1% que se han sentido nada protegidas (Ítem 7). Con respecto al ítem 8, el 5,1% de las víctimas indican que los **servicios policiales le ayudan poco a encontrar una solución al problema**, y un 1,5% de los casos dicen que nada. El resto refiere que los servicios policiales le han ayudado mucho (29,7%) y bastante (63,6%) a encontrar una solución.

Figura 8.12. Grado de satisfacción de las víctimas de VDG (N=198)



Finalmente, el ítem 9 preguntaba a las víctimas **sí cambiarían algo sobre la atención y servicios recibidos por los servicios policiales**, a lo que el 89% afirmó no querer cambiar nada. El estudio cualitativo de la pregunta abierta inmediatamente posterior al ítem 9, indagaba sobre los aspectos que cambiarían con respecto a la atención y protección recibida. Tan sólo el 11% de la muestra cumplimentó este ítem, y entre los comentarios más frecuentes destacaban los siguientes: que los funcionarios policiales fuesen siempre los mismos en atender estos casos; existencia de más profesionales y entre ellos más psicólogos en las unidades especializadas de VDG; visitas policiales realizadas sin el uniforme policial; trato más personalizado; y, finalmente, mayor información sobre los movimientos del agresor.

### 8.3.4.- DISCUSIÓN

El objetivo que se persigue en el presente estudio es la obtención de evidencia empírica acerca del *grado de satisfacción* de las víctimas de VDG que han presentado denuncia en dependencias policiales y que, por tanto, pertenecen al Sistema Integral de los casos de VDG (Sistema VDyG) implantado por el Ministerio del Interior. Para ello se elaboró un cuestionario de satisfacción que, una vez sometido a un análisis factorial para comprobar su estructura interna, resultó que todos los ítems iban en la misma dirección, existiendo una dimensión u objeto de medida: la satisfacción de las víctimas con las medidas policiales de protección recibidas. También se comprobó que el cuestionario presentaba una adecuada consistencia interna, encontrándose una fiabilidad total dentro

de lo deseable (Kline, 2000) o dentro de lo adecuado (Cicchetti, 1994). De esta manera, los resultados del cuestionario indicaron que las víctimas parecían estar muy satisfechas con la atención y las medidas policiales recibidas. Más del 98% califica la calidad del servicio entre excelente y bueno; a un 95% de las víctimas este sistema de protección ha satisfecho sus necesidades, y el 89% de la muestra probablemente recomendaría este sistema de protección a una amiga que estuviera pasando por una situación similar. Por último, el 93,3% de las víctimas refieren que los servicios policiales les ayudan a encontrar una solución a sus problemas de VDG.

Los escasos estudios publicados en esta temática (satisfacción con las medidas de protección policial) dificultan la comparación entre la información conseguida. Recientemente, se han dado a conocer los resultados obtenidos en una encuesta telefónica referentes a la satisfacción generada por la respuesta de la *Ertzaintza* hacia las víctimas en actos de violencia doméstica y / o género durante el primer cuatrimestre de 2010<sup>2</sup>. Esta herramienta forma parte del proceso de seguimiento y control, análisis y mejora de la *Ertzaintza*, consistiendo en un método de encuesta telefónica por el que a través de 20 preguntas (tratándose de dos cuestionarios diferenciados) puntuables de 0 a 10 por la víctima, se conoce su grado de satisfacción. En ambos cuestionarios los grados de satisfacción adquieren niveles muy altos; sin embargo, en la escala procedente de la Policía Autonómica, los ítems de satisfacción aluden a aspectos más concretos de la actuación policial (rapidez con la cual la *Ertzaintza* llegó durante el episodio de violencia, claridad de la información que le suministraron sobre los pasos que debía de seguir para solucionar el episodio de violencia, solución ofrecida a personas menores bajo su custodia, intimidad que ha tenido en Comisaría a la hora de hacer la denuncia, etc...). Por todo ello, se hace difícilmente comparable a nivel cuantitativo los resultados de nuestro cuestionario con los de la *Ertzaintza*. No obstante, a nivel descriptivo, se puede avanzar que ambos cuestionarios arrojan cifras de satisfacción por encima del 90%. De los 20 ítems que contempla la encuesta de la *Ertzaintza*, puntuables en un intervalo entre 0 y 10, el mínimo obtenido fue 8,88 y el máximo 9,80 (Media= 9,43; DT= 0,21). Por tanto, parece que ambas escalas ofrecen resultados de satisfacción muy elevados.

Dentro de las limitaciones de este estudio, la primera observación al respecto es el tamaño de la muestra, y la representatividad. En este sentido se hace preciso comentar

---

<sup>2</sup> Más información en: [www.ertzaintza.net](http://www.ertzaintza.net).

que únicamente se han analizado 198 cuestionarios y que estos proceden exclusivamente de dos provincias de toda España (Madrid y Almería), con lo cual dificulta la extrapolación al resto de provincias españolas. Del mismo modo, no se cuenta con muestra suficiente para comprobar la distribución de la satisfacción en función del cuerpo policial de procedencia (GC y el CNP), ni para poder establecer diferencias entre variables sociodemográficas que hubiesen arrojado información relevante, por lo que cabe proponer como futura línea de investigación que se implante un nuevo cuestionario en toda la geografía española a fin de relacionar determinadas variables (entre otras: nivel de riesgo de la víctima, nacionalidad, edad, localidad de procedencia) con el grado de satisfacción, puesto que se espera que el cruce de estos datos ofrezca resultados interesantes.

Otro aspecto a resaltar y que puede actuar como contaminación, es que la recogida de datos se llevó a cabo por los propios policías y guardias civiles, práctica que es cuestionable de cara a garantizar la validez interna por el posible sesgo de información<sup>3</sup>. En este sentido sería recomendable que la recogida de información se llevara a cabo de una manera anónima, bien a través de buzones o por medio de personal ajeno al mundo policial.

Finalmente, es preciso indicar que la información extraída a través de este estudio apoya la validez externa del Sistema VDG de manera global, debido a que es un sistema diseñado y gestionado para las víctimas de VDG, con lo cual su opinión es fundamental para avalar de manera externa todo el procedimiento de manera general.

Con los índices de satisfacción que se han obtenido, se puede decir que de cara a la validez externa, las víctimas se han mostrado **muy satisfechas** en relación al sistema de protección policial, lo cual fortalece y refuerza el Sistema VDyG.

---

<sup>3</sup> El sesgo de información se refiere a los errores que se introducen durante la medición de variables en la población de estudio, que se presentan de manera diferencial entre los grupos que se comparan, y que ocasionan una conclusión errónea con respecto de la hipótesis que se investiga. Una posible fuente de sesgo de medición puede ser cualquier factor que influya de manera diferencial sobre la calidad de las mediciones que se realizan en los grupos expuesto y no expuesto en el contexto de los estudios de cohorte o entre los casos y controles en el contexto de los estudios de casos y controles (Hernández-Ávila, Garrido y Salazar-Martínez, 2000).

## **8.4. ESTUDIO C: EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS POLICIALES**

### **8.4.1.-INTRODUCCIÓN**

Este estudio tratará de arrojar evidencia empírica a la validez externa, a través del análisis de la evolución de los niveles de riesgo, una vez que se han implantado las medidas policiales. Recordemos que el objetivo principal por el que fue creado el Sistema VDyG era erradicar o en su defecto disminuir el riesgo que tenía una víctima de ser agredida nuevamente por su pareja o expareja. En este sentido, la hipótesis que guía este estudio es comprobar si el riesgo, evaluado por el VPER, una vez se han aplicado las medidas policiales de protección, es inferior con respecto al riesgo evaluado previamente por el VPR, lo que arrojaría luz sobre la eficacia del procedimiento policial en su totalidad. El análisis aquí efectuado también se llevará a acabo en relación al VPER 2 con respecto al VPER 1, y así sucesivamente hasta llegar a la última secuencia correspondiente a los protocolos VPER noveno y décimo.

En este momento conviene recordar que el proceso de protección a las víctimas es algo dinámico y constante, que empieza en el mismo momento en que una víctima acude a una dependencia policial e interpone una denuncia. Acto seguido y después de haber efectuado las diligencias<sup>4</sup> necesarias, se procede a efectuar la primera valoración del riesgo (VPR). A la hora de completar el cuestionario, se rellenan primero los apartados cuya respuesta ya aparezca con nitidez en las primeras diligencias del atestado, solicitando de los intervinientes sólo los detalles que falten (Instrucción de la SES 5/ 2008). Si el funcionario policial prevé que la instrucción de diligencias puede dilatarse en el tiempo, se realiza una primera valoración de riesgo tan pronto como se haya tomado declaración a la víctima, con el objetivo de tomar medidas policiales de protección inmediatas, y otra nueva valoración una vez recopilada toda la información y finalizadas las diligencias, siendo esta última valoración la que luego debe ser revisada.

Como se explicó en el capítulo cuarto de esta Tesis Doctoral, el Sistema VDyG asigna automáticamente uno de los cinco siguientes niveles de riesgo: “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”. Si una vez obtenida la valoración del riesgo se obtiene un resultado de “no apreciado”, el caso debe salir del Sistema VDyG. Cualquier resultado distinto a éste, lleva aparejado unas medidas policiales de aplicación

---

<sup>4</sup> El término diligencia hace referencia a todos los actos de investigación necesarios para esclarecer unos hechos delictivos.

inmediata, así como un tiempo estimado para realizar una nueva valoración policial de riesgo, es decir, cumplimentar un nuevo VPER. El resultado obtenido de dicha valoración debe ser siempre comunicado a la víctima, y debe constar en diligencia policial. A continuación, se debe rellenar el protocolo de valoración policial de la evolución de riesgo (VPER), siendo los niveles de riesgo y los tiempos para nuevas valoraciones los mismos que en el VPR. Siempre que las Autoridades Judiciales o el Ministerio Fiscal lo aconsejen, o cuando se conozcan cambios significativos en las circunstancias y/ o condiciones de la víctima o del agresor, se deben realizar nuevas valoraciones del riesgo, es decir, nuevos VPR (Instrucción 5/ 2008). Del mismo modo, cuando se estime que han desaparecido o que han remitido las circunstancias que ponían en riesgo a la víctima y, por tanto, el nivel obtenido en dicha valoración sea el de “no apreciado” se comunicará por diligencia a la Autoridad Judicial, informando sobre los factores determinantes de tal valoración.

Se ha de recordar también que el VPER es un instrumento flexible que modula las puntuaciones asignadas por el VPR. Con respecto a su naturaleza, es preciso recordar que ésta es dinámica, y que su razón de ser es la de reflejar los “**cambios**” que se producen en los niveles de riesgo en función de los previamente establecidos. Con todo ello, se puede apreciar que este protocolo está diseñado para medir diferentes aspectos de la situación, tanto de la víctima como del autor, que pueden introducir cambios en la dinámica del riesgo. En resumen, se puede decir que el objetivo de este estudio va más allá de la validación de los protocolos en sí, puesto que contempla, además, el proceso de validación del propio funcionamiento del Sistema VDyG. El objeto último a analizar es la evolución de los niveles de riesgo entre un protocolo y el siguiente, habida cuenta de que se han aplicado unas medidas policiales de protección entre ambos, que de ser eficaces, deberían ayudar a disminuir el riesgo, hasta que el caso obtuviese un nivel de riesgo “no apreciado” y por tanto salir del sistema.

#### **8.4.2.- MÉTODO**

##### ***Participantes***

Para el desarrollo del presente estudio, se cuenta con información de 2.592 protocolos VPR que fueron seguidos de sus correspondientes VPERs en plazo<sup>5</sup>, y que a su vez

---

<sup>5</sup> Se perdieron para estos análisis los VPERs1 de los otros 17.984 VPRs (recuérdese que inicialmente se contaba con 20.576), por no haberse cumplimentado o por haberse hecho fuera de los plazos establecidos.

fueron seguidos de otros VPERs, utilizándose para este estudio tan sólo los que también se cumplimentaron en los plazos previstos en la Instrucción de la SES. Debido a que a partir del décimo protocolo VPER los casos son inferiores a 60, se decidió trabajar solamente con los 10 primeros VPER, considerando que la muestra era suficientemente amplia como para poder extraer conclusiones. La tabla 8.3 recoge el tamaño muestral (6.533 valoraciones de la evolución del riesgo), en la que puede observarse el porcentaje de casos que se iban perdiendo en cada paso.

*Tabla 8.3. Tamaño muestral de cada protocolo de valoración de riesgo*

Cuestionarios	VPR VPER1	VPER1 VPER2	VPER2 VPER3	VPER3 VPER4	VPER4 VPER5	VPER5 VPER6	VPER6 VPER7	VPER7 VPER8	VPER8 VPER9	VPER9 VPER10
Válidos	2.592	1.414	898	585	384	255	160	110	75	60
Perdidos	17.984	1.178	516	313	201	129	95	50	35	15
% perdidos	87,40	45,45	36,49	34,86	34,36	33,59	37,25	31,25	31,82	20,00

### *Procedimiento e instrumentos*

En la elaboración del estudio C, el procedimiento y los instrumentos empleados corresponden a los mencionados en los anteriores estudios (capítulo 6, capítulo 7, y estudio A del capítulo 8), al pertenecer la muestra con la que se hace este estudio a la extracción general de la base de datos global, comentada en el capítulo quinto de esta Tesis. Sin embargo, la particularidad del presente estudio radica en el procedimiento que se ha seguido para analizar la muestra. En este sentido, es preciso indicar que, una vez que se habían implantado y administrado las medidas policiales, se establecieron tres categorías en función del nivel de riesgo obtenido en el protocolo anterior: *disminuye, aumenta y se mantiene*. De esta manera, si un caso alcanzó un nivel de riesgo medio en la primera valoración, y en el siguiente protocolo obtuvo un nivel de riesgo de no apreciado o bajo, el caso quedaría dentro de la categoría “disminuye”; si logró el mismo nivel de riesgo, quedaría incluido en la categoría “se mantiene”; y, finalmente, si obtuvo un nivel de riesgo alto o extremo, automáticamente quedaría definido en la categoría de “aumenta”. Esta operación se realizó de este modo con el resto de los niveles de riesgo.

### *Análisis de datos*

Al igual que en los estudios empíricos precedentes, para la obtención de los resultados se recurrió al tratamiento estadístico de la información mediante el programa estadístico

SPSS en su versión 17.0. Así mismo, se continuó con un análisis de carácter descriptivo de cada una de las variables consideradas, logrando las frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones típicas de las mismas. A continuación, se obtuvieron las tablas y figuras que permitían una mejor comprensión de la información relevante para los objetivos del estudio C, de manera que, a través de los datos descriptivos se pudieran categorizar entre los casos que mejoraban, los casos que se mantenían y los casos que empeoraban con respecto al nivel de riesgo obtenido en el protocolo anterior, y una vez se habían aplicado las medidas policiales entre ambos.

#### 8.4.3.- RESULTADOS

A continuación se ofrecen los resultados de manera secuencial, esto quiere decir que a partir de las tablas de contingencia, se van a ir mostrando los protocolos emparejados: el protocolo VPR con el primero de los VPER; el primer VPER con el segundo VPER; y así hasta llegar al emparejamiento del noveno VPER con el décimo VPER. La tabla 8.4 recoge el primero de estos emparejamientos, y los resultados se exponen por columnas, en función de si los casos mejoran, se mantienen o empeoran con respecto al nivel de riesgo anterior.

*Tabla 8.4 Evolución de los casos VPER1 con respecto al VPR (N= 2.592)*

		VPER1					
VPR	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantienen		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Bajo	940	80,8	191	16,4	32	2,8
	Medio	618	73,4	203	24,1	21	2,5
	Alto	315	74,8	84	20,0	22	5,2
	Extremo	130	78,3	36	21,7	-----	-----
	TOTAL	2003	77,21	514	19,83	75	2,89

El primer dato a ilustrar es que de 2.592 casos analizados con el VPR, el 77,21%, ha mejorado su situación cuando se le administra el VPER, y por tanto, el nivel de riesgo ha descendido. Dentro de estos casos, los porcentajes más elevados se presentan para los niveles de riesgo bajo y extremo (80,8 % y 78,3%, respectivamente). En relación con los casos que se mantienen, hay 514 víctimas (19,83%) cuyo nivel de riesgo no mejoró, pero tampoco empeoró, es decir, se mantuvo constante. Dentro de éstas, el porcentaje más elevado, correspondió con las víctimas con niveles de riesgo



medio en el VPR, y que se mantuvieron en ese nivel de riesgo. Finalmente, y relativo a los casos que empeoraron, existieron 75 casos (2,89%) donde el nivel de riesgo aumentó. Dentro de este grupo el porcentaje más elevado correspondió con aquellas víctimas que obtuvieron un nivel de riesgo alto en el VPR y, seguidamente con el VPER obtuvieron un nivel de riesgo extremo (5,2%).

Con respecto a la evolución de los casos VPER1-VPER2, la tabla siguiente ilustra los resultados obtenidos para esta secuencia de protocolos de valoración de la evolución del riesgo.

*Tabla 8.5. Evolución de los casos VPER1 con respecto al VPER2 (N=1.414)*

	Niveles de Riesgo	VPER 2					
		Casos mejoran		Casos que se mantienen		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
<b>VPER1 1414</b>	No apreciado	-----	-----	232	70,5	97	29,5
	Bajo	184	38,0	272	56,2	28	5,8
	Medio	169	46,2	209	51,1	11	2,7
	Alto	100	59,9	65	38,9	2	1,2
	Extremo	41	91,1	4	8,9	0	
	TOTAL	494	34,93	782	55,3	138	9,7

Siguiendo la misma metodología que en el apartado anterior, en este segundo estudio de evolución VPER1 y VPER2 se encontró que el resultado más voluminoso correspondía con los casos que se mantenían en el mismo nivel de riesgo (782; el 55,3%), seguidos de los resultados que mejoraron (494; el 34,93%), y finalmente existieron 138 casos en los que su nivel de riesgo empeoró (9,7%). Al fijarse en la última columna de la tabla (% de casos que empeoran), se comprueba que es el nivel de riesgo no apreciado el que muestra más porcentaje de casos que empeoran, apreciándose una caída desde este nivel hasta el nivel de riesgo alto, en el que sólo existe un pequeño porcentaje de casos para los que su nivel de riesgo aumenta a extremo.

Por último se van a mostrar los mismos análisis realizados con la secuencia de protocolos VPER2 - VPER 3, señalándose que para el lector interesado, en el anexo V de esta Tesis, se encuentran todos los análisis efectuados para el resto de emparejamientos de los protocolos de evolución de la valoración del riesgo (VPER).

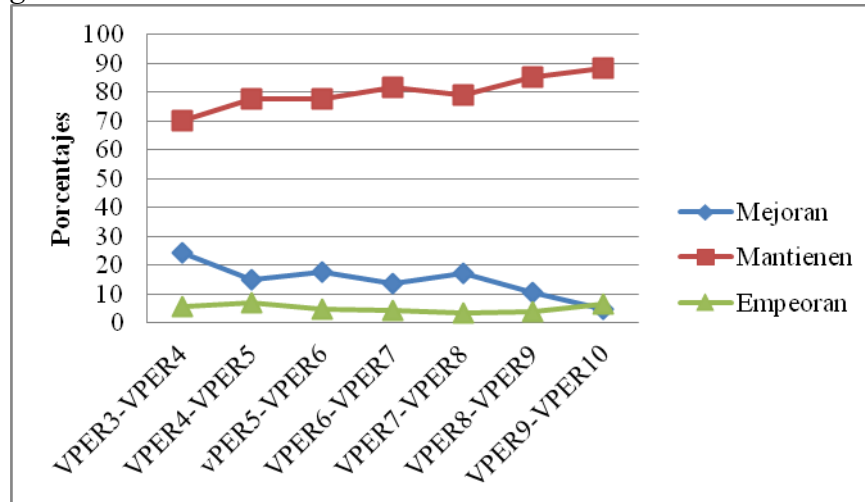
Tabla 8.6. Evolución de los casos VPER2 con respecto al VPER3 (N=898)

VPER2	Niveles de Riesgo	VPER3					
		Casos mejoran		Casos que se mantienen		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
VPER2	No apreciado	-----	-----	153	81,0	36	19
	Bajo	104	29,3	239	67,3	12	3,4
	Medio	86	33,5	165	64,2	6	2,3
	Alto	38	41,3	54	58,7	0	
	Extremo	4	80	1	20	0	
TOTAL		232	25,8	612	68,15	54	6,01

Al igual que en la secuencia anterior, los datos más altos proceden de los casos que se mantienen en el mismo nivel de riesgo (612; el 68,15%). Existen un total de 232 casos que mejoran (25,8%) y un total de 54 casos (6,01%) cuyo nivel de riesgo empeora o sube de nivel. Respecto a los casos que empeoran, nuevamente se observa que el nivel de riesgo con más porcentaje de casos que empeoran, es el nivel de riesgo “no apreciado” (el 66,66% de ellos), seguido del nivel de riesgo “bajo” (22,22%), y que existe un 11,11% de casos procedentes de nivel de riesgo medio que después de las medidas policiales de aplicación, han incrementado su nivel de riesgo.

En relación con el resto de secuencias, la figura siguiente resume las tendencias observadas con respecto a los porcentajes de evolución.

Figura 8.13. Tendencias observadas de la variable evolución del riesgo



En esta figura se puede observar, que a lo largo del tiempo, se va obteniendo una cierta tendencia para cada categoría, siendo los patrones más destacados los siguientes: los casos más voluminosos son los niveles de riesgo que se mantienen en el mismo

nivel, siendo estos porcentajes altos, la puntuación mínima fue de 70,25% y la máxima 88,33%, con una media de 79,9 (DT = 1,19). Seguidamente, y a larga distancia, los porcentajes más elevados correspondían a los casos que mejoraron y, finalmente, los casos que empeoraron representaron los resultados más bajos, no llegando en ningún caso a superar el 10%. Es interesante destacar que a partir de la secuencia VPER4 - VPER5, los casos que mejoran no superan el 20%, y que en la última secuencia, el porcentaje de casos que empeora es mayor que el porcentaje de los casos que mejoran.

#### **8.4.4.- DISCUSIÓN**

El objetivo que se persigue con este estudio es la comprobación de la validez externa de los protocolos de valoración del riesgo, a partir de la variable evolución de los niveles de riesgo. Recordemos que existe un conjunto de medidas de protección (tanto obligatorias como opcionales) entre un protocolo de valoración y el siguiente, cuya función es la de proteger a las víctimas que han denunciado un hecho de naturaleza de VDG, con lo que lo esperable (y deseable) sería la disminución del nivel de riesgo conforme pasara el tiempo, llegándose a un nivel de riesgo “no apreciado” en el menor tiempo posible.

Los resultados logrados en relación con la primera secuencia VPR – VPER, informan con claridad que el porcentaje de los casos que mejoran es superior con respecto a los que se mantienen o empeoran. Sin embargo, hay un porcentaje muy elevado de los casos que se mantienen en el mismo nivel de riesgo. En este sentido es preciso indicar una particularidad del sistema de valoración de riesgo. Según la última instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad (5/ 2008), cuando una víctima obtiene un nivel de riesgo extremo (72 horas) o un nivel de riesgo alto (7 días) hay que realizar la siguiente valoración, y muchas veces en estos intervalos temporales no hay suficiente tiempo para detener al agresor, especialmente cuando éste se encuentra fugado o en paradero desconocido, una situación que se agrava si hay un cambio de residencia de la víctima y las diligencias pasan a corresponder a otro cuerpo policial (aunque se intente agilizar, siempre hay algún tiempo de demora). En estas situaciones, en ocasiones, no ha habido tiempo material para dar con el agresor, detenerle y ponerle a disposición judicial, o comunicarle que se está protegiendo a su pareja o ex pareja; sin embargo, al estar la víctima localizada y, por tanto, cumplir los plazos de la Instrucción y completar con ella el siguiente protocolo de valoración, **el riesgo se sigue manteniendo** incluso incrementándose en algunos casos. Con todo ello se pretende explicar que un 16,3% de

las víctimas con nivel de riesgo alto y un 7% de las víctimas con nivel de riesgo extremo, se mantengan en el mismo nivel de riesgo en la próxima valoración. Este dato sería interesante tenerlo en cuenta con respecto a los plazos que manda la Instrucción, y en este sentido se podría proponer un criterio más flexible que tuviera en cuenta estas circunstancias.

Entre los casos que empeoran, el porcentaje más elevado corresponde a aquellos que de nivel de riesgo alto evolucionan a un nivel de riesgo extremo. Ante esos resultados se podría concluir que existe un porcentaje de casos para los que las medidas policiales parece que no están siendo eficaces, puesto que el nivel de riesgo no disminuye. En este sentido, sería interesante estudiar en profundidad estos casos, analizar los protocolos, ver los ítems en los que más han puntuado y en cuáles menos, y, finalmente, hablar con el agente policial que ha realizado la valoración. Todo ello con el objetivo de buscar una explicación a estos resultados y estudiar si es conveniente algún cambio en las medidas policiales a aplicar.

Con relación a la segunda secuencia de protocolos (VPER1-VPER2), el primer dato a destacar es el porcentaje de casos de nivel de riesgo “no apreciado”, y que por tanto debían haber salido del sistema, que por alguna razón se han vuelto a valorar evolucionando además a niveles de riesgo más elevados. Este dato por sí mismo informa que la Instrucción de la SES no se está cumpliendo como debería, en cuanto que hay un 23% de casos que debiendo salir del Sistema VDyG se vuelven a reevaluar, manteniendo la mayoría el riesgo no apreciado (70,5%), pero lo que es más preocupante, empeorando un tercio de ellos (29,5%). La Instrucción de la SES lo que contempla es que si algún caso del SVyG con riesgo no apreciado experimenta alguna modificación que aconseje una nueva valoración, lo que debería hacerse es un nuevo VPR, empezando de nuevo un ciclo de valoraciones, y no un VPER. En este sentido sería interesante recalcar este aspecto de la Instrucción y clarificarlo para que no se cometan estos errores a la hora de valorar los casos. Por otro lado, también se ha observado que en muchos casos los agentes siguen cumplimentando VPERs a víctimas con nivel de riesgo no apreciado y que teóricamente deberían salir del Sistema VDyG. Es preciso indicar que a la hora del diseño el sistema no preveía esta conducta de los agentes. Una hipótesis que podría explicar este comportamiento puede residir en la excesiva presión mediática que existe en España sobre la VDG, que puede ocasionar que los agentes policiales encargados de hacer las valoraciones VPR y VPER sientan temor, debido a las posibles responsabilidades que sobre ellos pueda recaer en el caso

de que esa víctima sea nuevamente atacada. Por todo ello, el agente policial puede actuar muchas veces “*por si acaso*”, no permitiendo que determinados casos lleguen a salir del sistema. Siendo loable ese afán de protección, lo cierto es que si cada año ingresan en el SVyG decenas de miles de víctimas a quienes hay que facilitar protección policial, no es nada operativo que no lleguen a salir del sistema, puesto que de este modo lo colapsarían.

En cuanto a la evolución de las valoraciones, en la segunda secuencia de protocolos se han obtenido los mayores porcentajes de evolución de riesgo en los niveles donde el riesgo se mantenía, un hallazgo que nuevamente va en contra de lo esperado. En este sentido es conveniente indicar que más de la mitad de la muestra se mantiene en el mismo nivel de riesgo, correspondiendo a los niveles bajos y medio (no apreciado, bajo y medio) los porcentajes con mayor volumen de casos (29,6%, 34,7% y 26,7% respectivamente).

Finalmente, y más importante de cara a la crítica al sistema, sea la proporción de casos que parecen ser insensibles al sistema de protección. Con esta afirmación se hace referencia a aquellos casos que en la siguiente valoración obtienen un nivel del riesgo más elevado con respecto a la evaluación anterior. En concreto, el porcentaje más alto correspondía a aquellos casos que procedían de nivel de riesgo no apreciado (70%), seguido del nivel de riesgo bajo (20,28%), pero no se puede obviar el 1,44% de víctimas que del nivel de riesgo alto pasan al riesgo extremo; y el 7,9% que de nivel de riesgo medio pasan a riesgo alto y/o extremo. Al igual que en el apartado anterior, sería interesante explorar minuciosamente estos casos y comprobar dónde reside el problema, recogiendo información precisa tanto de la víctima, como del autor, así como de todos los datos procedentes de fuentes policiales, y buscar en cada caso determinado por qué el nivel de riesgo aumenta. Explorar si hay nuevas circunstancias en el caso que hayan agravado la situación anterior (motivo para volver a hacer un nuevo VPR según la Instrucción 5/ 2008), o bien si las medidas policiales en estos casos no se están aplicando como debieran; o dándose como debieran, hay alguna circunstancia que haga que el riesgo no baje. En cualquier caso, la información exhaustiva sobre estos casos arrojaría datos muy importantes para adaptar el sistema de protección a las circunstancias reales y comprobar de esta manera qué es lo que puede estar fallando en estos casos. Del mismo modo sería interesante proceder al estudio de los ítems de los protocolos, y ver qué ítems han puntuado más alto y cuáles más bajo.

Analizando la siguiente secuencia de datos, correspondientes a los protocolos VPER2 y VPER3 se observa que, al igual que en la secuencia anterior, hay un porcentaje muy elevado de casos (21,18%) que debiendo salir del sistema se mantienen en él. Por otro lado, en relación con la evolución de los casos se comprueba que el porcentaje más voluminoso corresponde con los casos que se mantuvieron (68,15%), seguido de los casos que mejoraron (25,8%) y, por último, los casos que empeoraron (6,01%). Dentro de estos, un 66,66% procedían de casos no apreciados, que pueden ser explicados por la misma razón que en los casos previamente comentados.

En relación con el resto de secuencias (8 secuencias; desde el VPER2 hasta el VPER 10; recogidas en el anexo V, se encontraron exactamente los mismos resultados que en la secuencia anterior. La categoría más representada correspondió a aquellos casos en los que el nivel de riesgo se mantenía, seguido de los casos en los que mejoraban y por último aquellos que empeoraban. Estos datos son interesantes de cara a la evaluación del sistema VDyG en general, puesto que éste se ha diseñado para que a raíz de las medidas policiales aplicadas los casos vayan saliendo progresivamente del sistema y de hecho **se puede comprobar como el porcentaje de casos se va reduciendo** paulatinamente. De manera resumida se podría concluir diciendo que las víctimas con diferentes niveles de riesgo entran a formar parte del sistema VDyG, van recibiendo el tratamiento policial y seguidamente van reduciendo su riesgo hasta salir del sistema, observándose **dos resultados que deberían** ser evaluados exhaustivamente:

- 1) Un porcentaje elevado de casos con resultado de “no apreciado” que debiendo abandonar el sistema, se mantienen en él.
- 2) Un porcentaje (reducido) de casos, denominados “resistentes”, que parecen ser invulnerables a las medidas policiales, incrementándose el riesgo.

Ambas circunstancias debieran ser analizadas profunda y exhaustivamente. En el primer caso para potenciar la optimización de recursos, puesto que tal y como están configuradas las plantillas policiales, no hay suficiente personal para atender a todas las víctimas si éstas no llegan a salir del sistema, invirtiéndose trabajo y esfuerzos en dar protección y seguridad a unas víctimas quizá en detrimento de otras que lo pueden necesitar más. En el segundo caso, se debería hacer un análisis profundo de los casos que no mejoran a pesar de las medidas policiales, obteniendo información exhausta del

caso, de la víctima, de cada uno de los ítems que forman los protocolos, así como de la opinión del agente que rellena estos protocolos, todo ello para conseguir la máxima información posible y adecuar las medidas policiales a estas circunstancias.

En resumidas cuentas, este estudio avala científicamente el Sistema VDyG, puesto que se ha comprobado que los casos que entran a formar parte en él, después de haberles administrado una serie de medidas policiales, han ido disminuyendo su riesgo de manera paulatina, salvo con dos salvedades que deberían ser revisadas: por un lado, el porcentaje hallado de casos que se mantienen en el nivel de riesgo y por otro lado el pequeño porcentaje de casos denominados “resistentes”. En el primer caso, con una circular o instrucción de servicio, el problema podría ser fácilmente subsanado, en el segundo se sugiere una futura línea de investigación que trate de investigar y extraer información sobre esos casos.

## CAPÍTULO 9

### DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

#### (VERSIÓN EN CASTELLANO)

El trabajo aquí presentado responde al objetivo principal de esta Tesis Doctoral: validar el procedimiento de valoración del riesgo de los casos de VDG del Ministerio del Interior de España. Para ello se realizaron tres estudios cuya pretensión general fue recoger evidencias empíricas que pudieran proporcionar base científica a los resultados encontrados.

Es importante resaltar que en esta Tesis Doctoral se entiende la validación como un proceso de recolección de evidencias empíricas en continuo estado de revisión, dentro de un marco teórico de referencia. En este sentido, lo que se trató con esta investigación, fue acumular datos empíricos que avalasen científicamente el uso, tanto del sistema integral de valoración del riesgo, como de los instrumentos VPR y VPER incardinados en él.

A continuación se va a presentar una reflexión conjunta del resultado de esta Tesis Doctoral, aportando las principales conclusiones obtenidas a través de los estudios empíricos en referencia a los contenidos teóricos correspondientes a la primera parte de esta investigación.

#### 9.1.- JUSTIFICACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL

En la conferencia Mundial de Derechos humanos de 1993, se reconoció que la violencia contra las mujeres era algo incompatible con la dignidad y valía de la persona humana, consagrándose como problema social y situándose dentro de los **Derechos Humanos**. Dos años más tarde, en la IV Plataforma de Acción de Beijing, bajo auspicios de la ONU, se amplió la definición de violencia hacia las mujeres, reconociendo la vulnerabilidad de mujeres pertenecientes a minorías (ancianas, indígenas, refugiadas y niñas entre otras), y se definieron un **conjunto de objetivos estratégicos y medidas** a adoptar con el fin de eliminar todos los obstáculos que entorpecían el adelanto de la mujer. En 1998, la OMS consideró la violencia doméstica como una **prioridad**



**internacional** para los servicios de salud, bienestar y los derechos de las mujeres. A nivel europeo, se han ido aprobando una serie de resoluciones (94/ 45; 58/ 185; 58/ 147) adoptándose diferentes medidas de tipo penal y legal para proteger a las víctimas contra la violencia. Igualmente, se han ido creando diferentes programas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como programas específicos para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre niños, jóvenes y mujeres, protegiendo especialmente a las víctimas y grupos de riesgo (Programas *Daphne*).

Acorde con estos instrumentos internacionales, España ha ido mostrando avances en materia legislativa a favor de las mujeres. En 1989 se actualizó el Código Penal, introduciendo el **delito de maltrato habitual en el ámbito familiar**. La Ley 11/ 1999 creó la **pena de alejamiento** (prohibición de aproximación, residencia y comunicación). La Ley 14/ 1999 introdujo la **violencia psíquica** incluyendo relaciones matrimoniales que hubieran existido en el pasado y análogos (ex cónyuges y ex parejas). Igualmente, la Ley 38/ 2002 aprobó los “**juicios rápidos**” por delitos de violencia doméstica. Con la Ley 27/ 2003 no solamente nació la **orden de protección**, sino que se constituyó el antecedente más inmediato de la Ley que marcaría un antes y un después en materia de VDG. En efecto, con esta Ley Orgánica (L.O. 1/ 2004) se regularon de manera conjunta distintos mecanismos encargados de la prevención, asistencia y persecución de los actos de VDG, creándose no solo nuevos organismos (Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer, Juzgados exclusivos y Fiscalías especiales) sino también una serie de reformas legislativas (modificando entre otras las siguientes leyes: Ley del Derecho a la Educación, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, Ley General de Publicidad, Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Ley del Estatuto de Trabajadores, etc.), así como la creación de un conjunto de nuevas medidas en la lucha contra este fenómeno.

De esta manera, desde el Ministerio del Interior se aprobó un **catálogo de medidas urgentes contra la violencia de género**, que obligó a la elaboración y puesta en funcionamiento de un protocolo común de valoración del riesgo para FCSE y policías autonómicas. En los últimos diez años, ya se había puesto de manifiesto la importancia de la investigación en predicción del riesgo de violencia (Borum, 1996), y las guías estructuradas de valoración y gestión del riesgo de la conducta violenta, propulsadas, entre otros por Webster y Hart en Canadá, dirigidas a optimizar la validez

y fiabilidad de las predicciones y guiar las intervenciones de gestión del riesgo, habían significado un gran aporte a la comunidad científica (Arbach, 2007). Así, en julio de 2007, se aprobó el **protocolo para la valoración policial de riesgo en violencia contra la mujer** en los supuestos de la Ley Orgánica 1/ 2004, y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, naciendo la Instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad 10/ 2007. Bajo esta Instrucción (modificada en dos ocasiones 14/ 2007 y 5/ 2008) se puso en marcha el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VDyG).

Básicamente, este sistema estaba formado por dos protocolos de valoración del riesgo (VPR y VPER), y un conjunto de medidas policiales de protección y seguridad, diseñadas para que tras su aplicación, el riesgo de una víctima de volver a ser agredida, se hubiese eliminado o en su defecto disminuido. Con respecto a los protocolos de valoración del riesgo, es preciso indicar que estos se basan en la predicción de la conducta futura, utilizando una serie de factores de riesgo (estáticos y dinámicos). Estos instrumentos se crearon atendiendo las especificaciones que la investigación en esta área ha ido desarrollando en los últimos veinte años, y que resultaban fundamentales para no cometer errores en el pronóstico (contexto, propósito, población a la que va dirigida, parámetros y aproximación (Kropp, y cols., 1995; Heilbrun y cols., 2009). La mayoría de sus ítems estaban basados en los principales instrumentos de valoración del riesgo de violencia contra la pareja (SARA y B-SAFER), y debido al medio al que iban dirigidos (policial), se siguieron los principios que la ACPO dictaminó en 2005 sobre el diseño y elaboración de los instrumentos de valoración de riesgo (relación probabilística entre factores de riesgo y conducta, manejo de las situaciones, dinamismo, rapidez, revisiones científicas, información multidisciplinar, confidencialidad y privacidad). El objetivo final que el proceso de valoración policial de riesgo debía alcanzar era el siguiente: cuantificar el nivel de riesgo, servir de guía para la toma de decisiones, evitar la probabilidad de nuevas agresiones, contribuir al incremento de la satisfacción de la víctima evitando la victimización secundaria y, finalmente lograr el control policial del agresor. En relación a las medidas policiales, se diseñaron para prevenir o disuadir la situaciones posteriores a la primera evaluación del riesgo, en concreto, se trataba de un conjunto de medidas policiales, tanto obligatorias como opcionales, cuyo objetivo era evitar o disminuir la probabilidad de que el agresor volviese a cometer una conducta violenta.

Bajo estos principios se desarrollo el Sistema VDyG, cuya característica principal fue constituir una plataforma informática diseñada para favorecer el seguimiento y coordinación de las actuaciones desarrolladas por diferentes administraciones competentes en materia de VDG. Posibilitaba así un control permanente de la situación en la que se encontraban las víctimas, facilitando protección y asistencia. En esta plataforma quedaban incardinados tanto los protocolos de valoración de riesgo, como la administración y gestión de medidas policiales de seguridad. El desarrollo del Sistema VDyG, fue pasando por diferente fases, desde la génesis de los protocolos, hasta la puesta en explotación a finales de julio del año 2007. A la hora del diseño de los protocolos, se tuvo en cuenta entre otros aspectos que el evaluador iba a ser un funcionario policial no necesariamente especializado en VDG, cuyo objetivo era estimar un nivel de riesgo al finalizar el atestado policial para adoptar inmediatamente las medidas de protección a la víctima.

De este modo, y tras la recogida de los fundamentos de los instrumentos académicos existentes (esencialmente SARA y B-SAFER), se diseñó el VPR y, puesto que la literatura recomendaba la revaluación del riesgo en un periodo de tiempo desde los seis a los doce meses después del suceso, o cuando hubiese un importante cambio en el estado del caso (Kropp y cols., 1999), se creó igualmente un protocolo para la evaluación de la evolución del riesgo (el VPER). Para determinar la fórmula de puntuación, así como los intervalos de riesgo se hicieron en total cuatro estudios pilotos (dos con el VPR y dos con el VPER), de este modo en aproximadamente tres años (comenzando en el 2007 y, a fecha de redacción de esta Tesis siguen en proceso de estudio y mejora) nacieron ambos protocolos de valoración del riesgo, para estimar con un cierto grado de probabilidad que un individuo cometa VDG en el futuro. No se diseñaron para valorar otro tipo de violencia, ni estaba recomendado su uso en casos donde se sospechase o se supiese que la persona sufría un trastorno mental. El evaluador iba a ser siempre un policía no especializado en VDG, no necesitando completar un programa de formación específica (a diferencia de otros instrumentos). El procedimiento policial diseñado fue el siguiente: el VPR se cumplimentaba en el sistema informatizado, que en función del algoritmo de puntuación asignaba automáticamente uno de los cinco posibles niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Cada nivel de riesgo tenía asignado un catálogo de medidas policiales de aplicación inmediata, así como un tiempo para realizar una nueva valoración (VPER).

Llegado el plazo que indicaba la Instrucción para cada nivel de riesgo se debían ir cumplimentando los VPER,s hasta que se llegase al nivel de riesgo “no apreciado”, donde el caso debería salir obligatoriamente del sistema (Instrucción 10/ 2007).

Este sistema, representó un avance importante por el que se interesaron numerosos países de nuestro entorno (Ministerio del Interior, 2010). A fecha de la lectura de esta Tesis Doctoral, lleva cinco años en funcionamiento y, en contra de los *Standars for Educational and Psychological Testing* (1999), no se ha validado empíricamente. Por ello, la investigación que aquí se presenta, merece especial importancia por dos motivos fundamentales: primero, porque el Sistema lleva en funcionamiento desde julio del año 2007 sin haber sido validado, y segundo, porque moviliza diariamente a más de 20 mil agentes policiales (del CNP y de la GC, y desde el 01-01-2011 también tienen acceso los Mossos D’Esquadra y algunas Policías Municipales), y la seguridad de las víctimas depende de él, por lo que los resultados aquí mostrados, deberían traducirse en recomendaciones que garantizasen su continua utilización, así como en líneas estratégicas de optimización policial.

## **9.2.- CONCLUSIONES DE ESTUDIOS**

Antes de comentar las principales conclusiones, es preciso indicar que la muestra con la que se han hecho los estudios es representativa del conjunto de la población que denuncia un hecho de VDG, debido a dos factores principales: el gran tamaño (VPR= 20.576 casos y VPER1= 2.592 casos), y la procedencia: se han obtenido datos de toda la geografía española, a excepción de las demarcaciones de las Policías Autonómicas. Del mismo modo, se ha hallado que los datos sociodemográficos analizados (edad, nacionalidad, relación sentimental víctima-agresor, nivel académico) siguen la línea de los resultados arrojados en otras investigaciones similares (Labrador y cols., 2006; Echeburúa y cols., 2008; Observatorio Estatal De violencia Sobre la Mujer, 2011), acerca de las características de las víctimas que denuncian un hecho de VDG.

En términos generales, se puede comenzar indicando que los resultados obtenidos en los tres estudios que forman parte del objetivo general permiten cubrir satisfactoriamente los propósitos a partir de los que fueron planteados. Las principales conclusiones que se pueden extraer de todos los estudios son las siguientes:

1. El primer estudio analizaba el **cuestionario VPR**. Los resultados concluyen que el cuestionario se ajusta perfectamente al sistema de puntuación para el que fue diseñado. El análisis de los ítems que forman el instrumento informó que estos eran relevantes para expresar el concepto que se pretendía evaluar y que se correspondían con la realidad del fenómeno estudiado. En este sentido el análisis de la “variable niveles de riesgo”, informó que el porcentaje más elevado de casos denunciados correspondían con el nivel de riesgo “no apreciado”, seguido de manera decreciente por el resto de niveles de riesgo (bajo, medio, alto y extremo). Esto refuerza el procedimiento que engloba todo el Sistema VDyG, ya que sería inviable la protección y seguridad de las víctimas con niveles de riesgo “alto” y “extremo” si el porcentaje fuese superior al hallado. Recordemos que un nivel de riesgo “extremo” implica supervisión permanente, tanto de los movimientos del agresor como de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza (Instrucción 5/ 2008).

Respecto a la **calidad métrica** del instrumento VPR validado, ésta viene indicada por su fiabilidad y validez. Tal y como se ha expuesto previamente, la fiabilidad del VPR es de ,855; ,814 para el CNP y ,807 para la GC. Siguiendo las indicaciones de Ciachetti (1994) la fiabilidad del VPR es satisfactoria y más cercana a la excelencia que a la mera adecuación. Tras el estudio de la contribución de cada uno de los ítems a esa fiabilidad, se puede concluir que en principio es recomendable mantener todos los elementos que conforman el VPR. Ninguno tiene claramente un funcionamiento psicométrico negativo que justifique su eliminación; todos los ítems muestran un funcionamiento razonablemente bueno; los ítems que muestran una correlación mas baja con el total de la prueba son el 8 y el 9, y, sin embargo la eliminación de cualquiera de ellos no se traduce en aumentos en fiabilidad total del instrumento, por lo que se opta por su mantenimiento (Musitu, y cols., 1995, 1999).

Sobre la validez de constructo (APA, AERA y NCME, 1999), y en relación a los análisis factoriales, se ejecutó un AFE con la primera muestra y un AFC con la segunda, logrando de este modo obtener un modelo basado en la validación cruzada, consiguiéndose explicar el 36% de la varianza. Se hallaron un total de 4 factores principales (**aspectos psicológicos, violencia, comportamiento desadaptativo y relación con la justicia**), compuestos por

tres ítems cada uno, a excepción del último factor que quedó compuesto por dos. Por otra parte se constató empíricamente la calidad de los datos obtenidos a través de los indicadores de bondad de ajuste, ofreciendo resultados excelentes, con valores por encima de ,90, lo que sugiere un ajuste más que aceptable del modelo. Finalmente, se calculó la robustez a través de los coeficientes de contingencia y de la invarianza factorial, probándose la equivalencia entre los casos pertenecientes al CNP y los casos correspondientes a la GC. Los resultados fortalecieron el modelo ya que se demostró que la variable “cuerpo policial” no atentaba contra la validez del mismo.

En suma, todos los análisis efectuados indicaron que el VPR cumplía satisfactoriamente con las propiedades psicométricas que debe reunir cualquier instrumento de evaluación, lo que apoya y fortalece las garantías sobre la utilización del VPR por todos los agentes policiales dedicados a la lucha contra la VDG.

2. El segundo estudio analizó las **características métricas del cuestionario VPER**. La primera conclusión hace referencia al ajuste de los elementos del test en relación al modo en que fue diseñado, obteniéndose resultados que corroboraron lo que se esperaba. En este sentido, se halló que las medias del primer bloque de ítems (del 1 al 10) fueron en general altas, lo que demuestra la eficacia del Sistema VDyG, puesto que atendiendo al contenido de los ítems (*el autor se ha distanciado de la víctima, muestra una actitud pacífica, cumple con el régimen de separación, exterioriza una actitud cívica, muestra un arrepentimiento expreso, tiene una situación laboral estable; la víctima goza de un entorno favorable para su seguridad; y hay avances en el tiempo sin incidencias*), estos indican que van todos en la misma dirección: situación posterior a la aplicación de las medidas policiales. Solamente se encontró un ítem con resultados muy bajos (ítem 9: *la víctima ha trasladado su residencia habitual a un lugar con escasas posibilidades de ser conocido por el autor*), correspondiendo este a contenidos que no son interpretables como resultado directos de las medidas policiales. Con respecto al segundo bloque de ítems, los resultados también han ido en la línea de lo esperable, puesto que se han alcanzado resultados muy altos en casi todos los ítems (*el agresor está fugado o en paradero desconocido, tiene dificultades para rehacer su vida, presenta*

*rasgos alarmantes; la víctima va en contra de su propia seguridad, inicia una nueva relación, es especialmente vulnerable; y la víctima o el autor tienen en su entorno personas que suponen una amenaza realista contra la integridad de la víctima*), lo que significa que estos indicadores “no se dan”. Todo ello puede ser interpretado nuevamente como consecuencia directa de las medidas policiales aplicadas, con lo cual quedaría reforzado el sistema VDyG. Igualmente, la variable “niveles de riesgo” informó de una adecuada distribución de los casos, puesto que la mayoría se fueron concentrando en los niveles “no apreciado” y “bajo”, para ir disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el nivel de riesgo “extremo”, donde se concentró un porcentaje muy reducido. Esta información avala completamente el diseño con el que se programó el Sistema VDyG, puesto que como ya se indicó anteriormente, sería contradictorio el que hubiera más casos en los niveles de riesgos “medios” y “altos” una vez que se han aplicado las medidas policiales de protección.

La evaluación de la calidad métrica del VPER se llevó a cabo a través de los estudios de **fiabilidad y validez**. En relación a la **fiabilidad**, se puede hablar de dos resultados diferenciados en función de los dos bloques que conforman los ítems. En el primero de ellos (ítems del 2 al 10) se obtuvo un coeficiente de fiabilidad aceptable ( ,713). Sin embargo, este índice muestra debilidad en relación al segundo bloque de ítems (del 11 al 17), puesto que se obtuvo un coeficiente de fiabilidad moderado ( ,559), un resultado que puede estar justificado por la escasa longitud del test (7 ítems), por lo que en este sentido sería interesante hacer algunas modificaciones (que se expondrán más adelante en el apartado de futuras líneas de investigación) a fin de incrementar la fiabilidad de este segundo conjunto de datos. El estudio de la **validez de constructo**, realizado a través de la validación cruzada, permitió aceptar la existencia de cuatro factores generales (**comportamiento prosocial del autor, dificultades del autor en su nueva vida, vulnerabilidad de la víctima y obstáculos físicos**), que explicaron un 31% de la varianza y fueron corroborados posteriormente con el Análisis Factorial Confirmatorio. Por otra parte se constató empíricamente la adecuación de los datos obtenidos a través de los indicadores de bondad de ajuste, ofreciendo resultados excelentes, con valores por encima de ,90, lo que sugiere una buena calidad del modelo. En relación a

la robustez, los índices de congruencia así como los estudios de invarianza métrica realizados indicaron que no existían diferencias en el modelo en relación a los cuerpos de procedencia de la muestra (CNP-GC), lo que fortalecía el modelo ya que las dos muestras diferenciadas no amenazan a la validez. Finalmente es preciso indicar que el **funcionamiento del ítem 9 del VPER** (*la víctima ha trasladado su residencia habitual a un lugar con escasas posibilidades de ser conocido por el autor*), no resultó del todo adecuado, y su eliminación supondría un aumento en la fiabilidad del conjunto, puesto que este indicador ha sido el que menos correlación obtuvo con respecto al test global. Por todo ello, sería interesante la revisión de su contenido así como su redacción.

3. Seguidamente, esta Tesis ha aportado evidencia empírica relevante en relación con las **tres variables consideradas como criterios externos de validez**. La primera de ellas consistió en el **grado de conformidad del agente de policía con el resultado ofrecido por el Sistema VDyG**. En este sentido, en primer lugar se puede afirmar que en el VPR, más del 90% de los agentes policiales que completan estos protocolos están conformes con el resultado del sistema, lo que aporta ya de por sí robustez y confianza al mismo. Y en segundo lugar, el índice de conformidad analizado a lo largo de diez protocolos VPER, informó que los porcentajes de conformidad son igualmente muy elevados, oscilando entre el 88% y 98% a lo largo de las secuencias estudiadas. Por todo ello, y al considerar la opinión de los agentes como un “juicio de expertos” se puede afirmar que estos resultados refuerzan la validez externa del Sistema VDyG.

A propósito de la segunda variable criterio, **la satisfacción de las víctimas con el sistema de protección y seguridad recibido por las FCSE**, los resultados indicaron dos conclusiones principales: por un lado, que el cuestionario de satisfacción utilizado presentaba un coeficiente de fiabilidad elevado, y que su estructura factorial estaba compuesta por la existencia de un único factor; por otro lado, que la información extraída de los estadísticos descriptivos del contenido de los ítems (porcentajes de satisfacción de las víctimas con las medidas policiales), apoya absolutamente la validez externa del Sistema VDyG, puesto que al ser un sistema diseñado y programado para dar seguridad a las víctimas, quién mejor que ellas pueden corroborar que esta



protección está siendo eficaz. En este sentido, el haber obtenido unos porcentajes de satisfacción muy elevados, habla muy a favor del sistema, y de que las víctimas depositen confianza en los cuerpos policiales a la hora de denunciar un hecho de esta naturaleza. No obstante, es preciso reconocer que tanto la escasez de la muestra, como el medio donde se realizó este estudio (dependencias policiales), pueden suponer problemas de cara a la generalización de resultados. Se trata, sin embargo, de un primer estudio que arroja cifras de la satisfacción del colectivo de víctimas denunciantes con respecto a la actuación policial recibida, por lo que en futuras líneas de investigación se tendría que incrementar la representatividad de la muestra, aportando incluso datos sobre el cruce del grado de satisfacción con variables correspondientes al perfil de la víctima

Vista la relación entre la satisfacción de las víctimas con el sistema de protección policial, debería mantenerse o incluso potenciarse este factor, tratando de mejorar la calidad de las actuaciones policiales en delitos de este tipo e incrementando los esfuerzos que se dedican a la motivación y paciencia que requieren los funcionarios destinados en estas unidades. En este sentido, resulta interesante comentar que la investigadora principal de esta Tesis ha realizado una guía de Primeros Auxilios Psicológicos para personal destinado en estas unidades con el objetivo de incrementar las habilidades interpersonales en relación a la VDG para el conjunto de guardias civiles que trabajan día a día en esta labor.

En relación con la tercera variable, **evolución de los niveles de riesgo**, es preciso indicar que quizá sea ésta la variable que más información arroje con respecto a la eficacia del Sistema VDyG en general. En primer lugar, porque pone directamente en tela de juicio que la Instrucción de la SES 5/2008 no se está cumpliendo como debería, en cuanto que hay un porcentaje muy elevado de agentes policiales que siguen valorando a las víctimas con nivel de riesgo “no apreciado”. Desde un punto de vista crítico, uno podría hipotetizar que si esta medida va en aras de la protección de las víctimas, no esta de más ofrecer más protección. Sin embargo, el Sistema VDyG está diseñado como un procedimiento dinámico en constante cambio, donde las víctimas deben estar en el sistema por un tiempo determinado: hasta que el riesgo haya desaparecido.

Resulta absolutamente inviable mantener a las víctimas dentro del sistema cuando su resultado es de riesgo “no apreciado”, puesto que esto significa tiempo y recursos, que quizá sean más necesarios en otras víctimas con un nivel de riesgo más elevado. Por ello, una conclusión al respecto **es que habría que comunicar esta información a los agentes policiales, para mejorar la eficacia desde el punto de vista operativo.**

En segundo lugar, este estudio demuestra que **el sistema se muestra eficaz, puesto que los casos se van distribuyendo de la manera en la que se preveía cuando se diseñó:** a los casos con diferentes niveles de riesgo se les aplica una serie de medidas policiales, y estos van bajando de nivel de riesgo hasta desaparecer del Sistema VDyG. Sin embargo, es preciso indicar que se detectó un porcentaje reducido de casos, denominados “resistentes”, que parecen invulnerables a las medidas policiales.

Tanto estos casos “resistentes” como aquellos con riesgo “no apreciado” que se siguen evaluando, podrían ser analizados con detalle, extrayendo la máxima información posible desde todos los puntos de análisis (examinar todos los ítems de los protocolos, entrevistarse con el agente que realizó las valoraciones, y finalmente, si se tuviera posibilidad, entrevistarse igualmente con la víctima y demás familiares y amigos cercanos que pudieran aportar información sobre esa situación). Estos estudios servirían no solo para la **optimización de recursos**, puesto que tal y como están configuradas las plantillas policiales, no habría suficiente personal para atender a todas las víctimas si éstas no salen del Sistema VDyG, sino también para el **diseño de líneas estratégicas futuras** que vayan en aras de la mejora del Sistema. Solo con estudios de este tipo se pueden obtener resultados que impliquen la reforma o modificación de las Instrucciones que obligan a un agente a actuar. A través de estudios retrospectivos de estos casos se podría tener información real sobre el por qué una víctima con protección se mantiene en el mismo nivel de riesgo o incluso empeora.

4. Además de los estudios generales relativos a la composición de los instrumentos de valoración de riesgo, **el análisis de la variable “cuerpo policial de procedencia”** aportó información interesante a nivel de contenido. Los resultados obtenidos en este sentido revelaron que en principio parecían existir

diferencias entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Sin embargo, se debe ser cauteloso a la hora de su interpretación, puesto que la mayoría de ellas son muy débiles y pueden ser justificadas por el tamaño muestral. De hecho, es obvio que la VDG no se experimenta igual en el medio urbano (CNP) que en el medio rural (GC). En este último normalmente existen menos recursos básicos, especialmente de información; además la invisibilidad de la violencia de género es mayor que en zonas urbanas (observatorio Estatal de la Violencia Sobre la Mujer, 2011). Por otro lado y, con respecto a las diferencias en relación al VPER, es cierto que en pueblos pequeños se tiende a conocer más de los casos con los que se trabaja, y a tener información más precisa o exhaustiva del caso. En este sentido, se podrían explicar algunas de las diferencias encontradas con respecto al sistema de puntuación. Normalmente en pueblos pequeños es más fácil localizar, detener y hacer el seguimiento del autor que en áreas urbanas, donde los censos de población son mayores, además de otras circunstancias propias de la ciudad, que muchas veces dificultan la localización del autor de los hechos (por ejemplo por la infraestructura urbana o los medios de transporte, entre otros).

A lo largo de este apartado se han expuesto las conclusiones más destacables de los estudios empíricos previamente presentados. A continuación se abordarán algunas implicaciones que los resultados obtenidos en la presente Tesis tendrían para las Fuerzas Policiales, junto con las principales limitaciones que se han ido encontrando. Finalmente se irán proponiendo futuras líneas de investigación, con el objetivo de paliar las limitaciones previamente halladas.

### **9.3.- IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN**

Los resultados obtenidos a lo largo de la presente Tesis Doctoral tienen algunas implicaciones obvias para las FCSE. En primer lugar, porque **se detallan datos de uno de los problemas que más preocupan** en el seno el Ministerio del Interior, y que es de especial sensibilidad en la sociedad española actual: la VDG. En este sentido, las FCSE en su obligación de garantizar la seguridad ciudadana tienen un rol muy activo en este

fenómeno, protegiendo los derechos de las víctimas y persiguiendo las infracciones de los agresores. En este estudio se valida el Sistema VDyG, especialmente los protocolos de valoración del riesgo incardinados en él (VPR y VPER), donde se recoge la casuística de VDG denunciada en cuerpos de policía estatales, desde agosto de 2008 hasta diciembre de 2009, llegando a contar con una muestra de más de 100 mil hechos de este tipo.

En segundo lugar, porque se está validando **un sistema que lleva en uso desde mediados del año 2007 y que no había sido previamente validado**. En este sentido, la última edición disponible de los *Standars for Educational and Psychological Testing* (1999) ha reafirmado la importancia de la validación de los test, indicando que el proceso de validación debe iniciarse en el momento previo a la construcción de un instrumento, y que debe guiar y acompañar su desarrollo y vigencia para así poder asegurar las puntuaciones derivadas de él. Es por eso que en este momento se puede afirmar que tanto los cuerpos policiales como las víctimas que denuncian un hecho de VDG, pueden estar seguros y confiar en el Sistema VDyG, puesto que los estudios que se han efectuado, avalan de manera científica la utilización y el empleo de los dos cuestionarios de valoración del riesgo (VPRy VPER).

Por último, y en aras de la **optimización de recursos**, es imprescindible realizar investigaciones como la que aquí se presentan, puesto que estudios estadísticos de este tipo se pueden **traducir en líneas estratégicas para las fuerzas y cuerpos de seguridad** que se encargan diariamente del tema de la VDG. De esta manera, estos estudios han puesto de manifiesto tres avances principales que merecen ser tenidos en cuenta de cara a la mejora del proceso de valoración y a la optimización de recursos policiales humanos y materiales:

- I. **Mejoras en la formación.** Se ha encontrado que la última Instrucción de Seguridad 5/ 2008, no se está cumpliendo como debería. En primer lugar, por la existencia de protocolos VPER que no se rellenan en los plazos indicados (cabe recordar en este momento que de los 119 mil casos de la primera base de datos, aproximadamente 50 mil no se completaron en los plazos obligatorios); y en segundo lugar por la cantidad de casos con nivel de riesgo “no apreciado” que se mantienen activos en el Sistema VDyG, cuando deberían salir de él.

II. **Medidas policiales.** En este sentido nace el siguiente interrogante: ¿se están aplicando correctamente las medidas policiales que emanan de la última Instrucción? Para contestar a esta pregunta, es preciso dar respuesta a las preguntas siguientes: **¿Hay suficiente plantilla para ofrecer a las víctimas las medidas policiales que su nivel de riesgo determina?, ¿se está dando seguridad eficazmente?, ¿se está centrando más la protección en algunos casos con menos riesgo o riesgo “no apreciado” (falsos positivos) en detrimento de otros con riesgo pero no detectados (verdaderos positivos)?, ¿se está haciendo un uso eficaz de las plantillas policiales?** Actualmente las unidades policiales adolecen de no tener suficiente plantilla para hacer frente al volumen de casos que llevan. La sobrecarga de trabajo y la escasez de las plantillas hacen que la respuesta a las víctimas a veces no sea la más adecuada. Por otro lado, dado que las medidas de protección derivan del nivel de riesgo resultante, los agentes se ven en ocasiones presionados para no elevar en la medida de lo posible el resultado final de los cuestionarios, todo ello con la finalidad de que las medidas de protección que se deban aplicar no impliquen el destinar la mayor parte del potencial de servicio a esta tarea y no a otros cometidos. Hay que tener en cuenta que si el resultado del VPR es “extremo” se deberá realizar una vigilancia permanente de la víctima, hasta que cese la situación de peligro. De todo esto se pueden extraer dos conclusiones diferenciadas:

- a. **A nivel operativo:** Se debe indicar el absoluto respeto a la Instrucción y a sus plazos. Del mismo modo, no se deben mantener en el Sistema VDyG, los casos con riesgo “no apreciado”. Desde otro punto de vista, otra futura línea de investigación debería ir encaminada a comprobar si hay suficientes recursos para afrontar el problema que existe de VDG en cada unidad. Por último, se debería insistir en la no manipulación intencionada del Sistema por el agente, recalcando la existencia de un indicador que permite el cambio del nivel de riesgo de no existir conformidad con el resultado obtenido.

- b. **A nivel académico:** Investigar detalladamente los casos que “se están manteniendo en el Sistema” cuando deberían desaparecer, al objeto de extraer información relevante que quizá podría explicar estos porcentajes. En este sentido, sería interesante indagar sobre los ítems así como sobre los agentes que completan los cuestionarios. En definitiva, recoger la máxima información posible sobre estos casos para posteriormente analizarla y poder extraer conclusiones.

Por todo ello, el seguimiento, estudio y validación del Sistema VDyG ofrece conclusiones de aplicación tanto a nivel de diseño del sistema, como conclusiones operativas para el conjunto de agentes policiales que diariamente realizan cometidos de seguridad ciudadana y de investigación criminal en estos delitos.

A continuación y para poner fin a este último capítulo, se van a comentar algunas de las principales limitaciones halladas en esta investigación, al tiempo que se van proponiendo futuras líneas de investigación, con el objetivo de ofrecer una panorámica general de posibles vías de solución a los interrogantes derivados de los resultados que se han obtenido.

#### **a) Sobre la validez**

Es importante advertir algunas limitaciones estadísticas que son fundamentales a la hora de hablar de validez, y que deben ser tenidas en cuenta para futuras investigaciones como posibles líneas de desarrollo. En el estudio de la predicción de los comportamientos violentos existe un método por excelencia que revela los mejores predictores para el resultado futuro: la **validez predictiva**. Esta aproximación trata del seguimiento de la población que ha estado expuesta a un riesgo. Por ejemplo, a los hombres que han sido identificados como maltratadores se les evalúa en unas variables hipotéticas que servirán como predictoras y se les realiza un seguimiento. Sólo cuando ha habido un resultado final se puede medir el grado de validez de esas variables predictoras. En nuestro estudio, al no contar con una variable *gold standard* (*outcome* o resultado) resultó imposible trabajar este tipo de validez. El número de datos de reincidencia, para poder utilizar ésta como variable *outcome*, era demasiado pequeño (lo que ya es un resultado en sí mismo) como para poder hacer estudios de este tipo.

Igualmente, se encontraron problemas para localizar en el Sistema VDyG a las víctimas que habían denunciado y, posteriormente, habían sido asesinadas; aunque la cifra, de haberse localizado, seguramente resultara muy pequeña para los estudios de validez predictiva que se querían hacer. Sin embargo, se sabe de la importancia de este tipo de validez, y por ello se sigue investigando en este sector, para que en un futuro a corto plazo se puedan ofrecer resultados respecto a la potencia predictiva de los protocolos.

Del mismo modo, sería interesante estudiar la **validez convergente** con otros instrumentos de predicción de riesgo de violencia de pareja. En este sentido se mantienen lazos con el departamento de Criminología de la *Mitt Sweden University*, con el objetivo de poder hacer ese tipo de análisis con el B-SAFER o con el SARA. Al igual que desde los Estados Unidos, Campbell, experta en valoración del riesgo y creadora del *Danger Assessment Tool*, está interesada en llevar a cabo este tipo de estudio cruzando datos procedentes del DA con los procedentes del VPR y del VPER.

#### **b) Sobre la robustez**

En esta investigación se ha obtenido información que avala la robustez de ambos protocolos a través de la variable cuerpo policial de procedencia. Para el futuro, se cree conveniente indagar la robustez en relación a otras variables, como pueden ser la Comunidad Autónoma de procedencia, la nacionalidad u otras variables sociodemográficas de la víctima (edad, nivel académico, relación sentimental).

#### **c) Sobre los cuestionarios**

En relación con los instrumentos de valoración del riesgo validados, nace una pregunta general que ha de servir como futura línea de investigación: **¿se entienden correctamente los ítems de los protocolos?** En principio los ítems de los instrumentos estaban redactados para poder ser utilizados por todos los funcionarios policiales sin tener que ser expertos en valoración del riesgo, ni mucho menos expertos en conducta humana. Ahora bien, ¿puede un policía determinar el ítem 16 del VPR (*tendencia suicida del agresor*)? Se ha de recordar que esta base de datos está confeccionada con información procedente en su mayoría de la víctima. En el estudio empírico 1 se ha observado que el ítem con el porcentaje más alto en la opción “no se sabe” corresponde a este ítem (16). La cuestión ahora es la siguiente ¿puede un policía tipificar la

tendencia suicida del agresor con información procedente de la víctima? Las principales escalas que miden la ideación suicida (*SSI* de Beck, Kovacs y Weissman, 1979; *EDB* de Beck, Wissamn, Lestre y Trexter, 1974) se basan en ítems que pretenden medir el deseo de morir, o las razones para vivir. Señalando que este ítem se está explorando a través de la información que aporta la víctima en ese momento determinado, quizá el ítem no sea muy eficaz, puesto que a modo de crítica constructiva, es difícil evaluar la tendencia suicida de una persona y etiquetarla en cuatro niveles de respuesta en el caso de que esté presente (se da bajo, medio, alto y extremo), a través de la información obtenida por una tercera persona.

Por otra parte, se ha detectado la existencia de ciertos indicadores, como por ejemplo los ítems 8, 9 y 11 del VPR (*“incumplimiento de disposiciones judiciales cautelares”*, *“quebrantamiento de penas o medidas de seguridad”* y *“antecedentes penales y policiales”* respectivamente) y algunos ítems del VPER (ítem 3: *“el autor muestra una actitud pacífica”*; ítem 4: *“el autor cumple con el régimen de separación”*; e ítem 16: *“el autor tiene una situación laboral estable”*) que son difíciles de categorizar entre los niveles de respuesta que ofrece el protocolo (bajo, medio, alto o extremo). Todos estos comportamientos se producen o no, se quebranta o no se quebranta, se tienen antecedentes o no se tienen, etc., y desde este punto de vista crítico, se piensa que si estos ítems fuesen dicotómicos, ofrecerían más claridad para el agente policial que completa el cuestionario. Igualmente, se ha llegado a la conclusión de que los indicadores son en general muy largos, y a veces resulta difícil determinar en relación al contenido de los ítems si estos se presentan poco, bastante, mucho o nada, puesto que algunos de ellos contienen varias afirmaciones en el mismo. A modo de ejemplo se puede visualizar en el siguiente ítem *“el autor cumple con el régimen de separación y cargas familiares, especialmente habiéndose iniciado /producido trámites de separación/divorcio; o existiendo hijos en común. Por ejemplo, el denunciado participa positivamente en los trámites de separación/divorcio, o si ya se han producido respeta el régimen de separación, de visitas, cumple con las obligaciones económicas impuestas, no quebranta ningún tipo de medida / condena, no se plantean conflictos significativos a la hora de ver a los hijos, etc”*.

En conclusión, las futuras líneas de investigación deberían ir encaminadas a los siguientes puntos:



- Revisión de la redacción de los ítems<sup>1</sup>.
- Dificultades del ítem 16.
- Existencia de ítems dicotómicos.

Una vía de revisión de estas limitaciones, sería **preguntar directamente a los agentes** que trabajan diariamente en estas labores. Se podría hacer un estudio temporal, colgándose a través de la red interna “intranet” un pequeño cuestionario a rellenar por estos funcionarios recogiendo esta información.

#### **d) Sobre la operativa policial**

Hay un componente fundamental del Sistema SVyG que no se ha validado todavía: las medidas policiales asociadas a cada nivel de riesgo, por lo que cabría preguntarse si **¿son las medidas policiales de cada nivel las más adecuadas, o caben otras?** Para contestar a este interrogante sería preciso preguntar a los propios agentes policiales. Esa información sólo la pueden determinar los policías, que son los que trabajan diariamente con esta problemática. Para ello se ha diseñado (como futura línea de investigación) un cuestionario denominando OPPOL (Anexo VIII) con el objetivo de recabar información sobre la utilidad de las medidas policiales desplegadas cuando una víctima entra en el procedimiento de valoración del riesgo. Este cuestionario sería rellenado una sola vez por cada agente policial que normalmente trabaja con el sistema. Contempla todas las medidas policiales recogidas en la última instrucción (5/ 2008), tanto las obligatorias como las complementarias, para que se estudie el grado de utilidad percibido por los agentes sobre de cada una de ellas. Asimismo ofrece un cuadro en blanco para que el agente pueda agregar la/s medida/s que él considere o pueda considerar más útiles. Información de este tipo compensaría el déficit de datos que tenemos en este sentido. De esta forma podríamos comprobar si las medidas policiales que llevan casi cinco años en ejecución son las más adecuadas, a juicio del agente policial que es el que las aplica diariamente: un juicio de expertos.

---

<sup>1</sup> Es preciso indicar en este momento que los protocolos con los que se ha hecho esta investigación corresponden a las versiones iniciales de ambos cuestionarios (Anexos I y II). Conviene aclarar que ambos protocolos han ido sufrido diversas modificaciones con el paso el tiempo, siendo la redacción de los ítems uno de los cambios más considerables, abreviándose su redacción. En los anexos VI y VII figuran las versiones que están vigentes a fecha de la lectura de esta Tesis (mayo 2012).

**e) Sobre los casos con resultado mortal**

Abundando en el apartado anterior, sería fundamental hacer un seguimiento a los casos en los que se producen víctimas mortales. Un estudio retrospectivo de cada caso con resultado de muerte, arrojaría información sobre qué es lo que ha podido ocurrir en ese caso. Si la víctima no llegó a denunciar, se podría ver por qué y extraer información que permita prevenir. Si había denunciado y murió estando bajo la protección del SVyG, se podrían ver por qué las medidas policiales no fueron adecuadas; si el nivel de riesgo no correspondía con la realidad que estaba vivenciando esa víctima; o por otro lado si fue la propia víctima la que quebrantó el perímetro de seguridad; a qué hora se produjo la muerte; si hubo alguna circunstancia que pudiera explicar la ausencia de protección policial en ese momento; si hubo algún acercamiento por parte de la víctima; cual es la opinión de la familia y amigos que rodean el caso. En ese sentido el poder recoger información de los familiares y allegados más cercanos ofrecería información valiosa sobre la aplicación de las medidas policiales.

**f) Sobre la satisfacción de las víctimas**

A raíz de los resultados mostrados en el estudio B del capítulo 8, se cree conveniente indagar en el grado de satisfacción de las víctimas de VDG en relación a las medidas policiales de protección y seguridad recibidas. Estableciéndose a ser posible el **cruce de determinadas variables** como el nivel de riesgo, la edad, la nacionalidad, la localidad de procedencia, con el nivel de satisfacción. Del mismo modo, sería interesante ser más riguroso con determinados aspectos a evaluar, es decir, evaluar el grado de satisfacción de la víctima en relación a diferentes áreas de intervención (rapidez en la intervención, claridad en la información, confidencialidad y discreción en la protección policial, facilidad para contactar con las fuerzas policiales, calidad de la protección, consideración de los agentes hacia la víctima, etc.). Todo ello arrojaría información que podría ser utilizada para la mejora de la intervención policial.

**g) Perfil del agente policial**

Si bien es cierto que uno de los puntos principales que se tuvo en cuenta en las fases del diseño del Sistema VDyG, fue que éste debería poder ser utilizado por cualquier funcionario policial, sin que fuera relevante la formación o la existencia de habilidades

específicas, cabe indicar en este momento, y en aras de la mejora constante del funcionamiento del Sistema VDyG, que durante el trabajo de campo de la investigadora principal de esta Tesis Doctoral (a través de diversas rotaciones por diferentes unidades policiales), se constató la heterogeneidad del comportamiento policial en las unidades dedicadas a la VDG, y cómo éste repercutía sobre las víctimas.

Por ello, sería interesante que una línea futura de investigación tratará de responder al siguiente interrogante: **¿reúnen todos los policías el perfil adecuado para intervenir con víctimas de violencia de género y consecuentemente valorar el riesgo?** El policía que trabaja en violencia de género tiene que recoger mucha información para adecuar su conducta a la gravedad de cada caso y, sobre todo, para realizar una correcta valoración del riesgo. Por tanto, se estima que debería poseer ciertas características actitudinales, llegando a hablar algunos autores incluso de la necesidad de que se ajusten a un perfil específico (Albacete, 2010). Sin embargo, con detectar ciertas actitudes o habilidades a la hora de la selección de estos funcionarios sería suficiente. Es importante que tengan dotes de comunicación y escucha, un alto grado de empatía y que sean mínimamente capaces de manejar emociones. La formación continua y el entrenamiento deberían ser un aspecto fundamental a tener en cuenta constantemente.

Este tipo de competencias desarrolladas adecuadamente garantizarían la eficacia de las intervenciones policiales en situaciones de violencia de género y evitarían además efectos no deseados como la **victimización secundaria** (Albacete, 2010), ya que ésta se debe, en parte, a la falta de preparación y /o sensibilización del personal que atiende a las víctimas. Cuando la policía no responde apropiadamente a las necesidades de la víctima, puede afectar negativamente a las decisiones sobre abandonar o no a su pareja o ex pareja (Barnett, 2000), incluso a seguir o no dentro del procedimiento judicial. Se debería concienciar más a los agentes, puesto que en sus manos puede estar a veces que la víctima no sea asesinada. De hecho, se ha comprobado que las acciones policiales pueden provocar en las víctimas que se vuelvan mas reacias a abandonar la relación, aumentando indirectamente el riesgo y peligro de éstas (Barnett, 2000). La investigación en este tema indica la absoluta necesidad de sensibilizar y formar a las plantillas policiales en el área de VDG (Russell y Light, 2006; Eigenberg y Moriarty, 1991; Newmark, Harrell y Adams, 1995). Finalmente, tal y como se comentó anteriormente, la autora de esta Tesis diseñó una Guía de Primeros Auxilios

Psicológicos para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la intención de dotar al agente policial de las habilidades mínimas para trabajar en este campo.

**h) Sobre la última Instrucción de la SES (5/ 2008)**

Debido a que se obtuvo un porcentaje considerable de casos que se mantenían en el mismo nivel de riesgo a pesar de las medidas policiales aplicadas entre una evaluación y otra, se ha de recordar que cuando una víctima obtiene un nivel de riesgo “extremo” o un nivel de riesgo “alto” se ha de realizar la siguiente valoración en 72 horas en el primer caso y en 7 días en el segundo. En este sentido, hay que destacar que muchas veces en estos intervalos temporales no hay suficiente tiempo para detener al agresor, especialmente si este se encuentra en medio urbano, y si además concurre la circunstancia de que está fugado o en paradero desconocido. Estas circunstancias se agravan especialmente cuando las víctimas cambian de residencia y las diligencias pasan a formar parte del otro cuerpo policial. Todo ello hace que en muchas ocasiones no se pueda cumplir la Instrucción tal y como está redactada. Por ello, con los resultados de esta investigación se propone que la futura Instrucción procedente de la SES tuviese un criterio más flexible a la hora de programar los plazos de revisión del riesgo.

Para terminar, es preciso comentar que todas las futuras líneas de investigación aquí comentadas enriquecerían la investigación en este campo, y permitirían el desarrollo y adaptación continua de los instrumentos VPR y VPER en particular y del Sistema VDyG en general, a las circunstancias más reales de la vida, aquellas que suceden cuando una víctima cierra los ojos y grita.



## **CAPÍTULO 9**

### **GENERAL DISCUSSION AND CONCLUSIONS**

#### **(ENGLISH VERSION)**

The work presented here is the primary purpose of this PhD dissertation: to validate the risk assessment procedure in cases of the GBV Interior Ministry of Spain. For this purpose, three studies whose overall aim was to collect empirical evidence that could provide a scientific basis for the findings. Most importantly, in this PhD dissertation validation means the continual state of review of gathering empirical evidence within a theoretical framework. In this regard, which was treated with this research, was to gather scientific evidence that could corroborate its use in both the integrated system of risk assessment, and the tool.

The following will present a joint reflection on the outcome of this PhD dissertation, providing the main conclusions obtained through empirical studies in reference to the theoretical for the first part of this research.

#### **9.1.- PhD DISSERTATION JUSTIFICATION**

In the Human Rights World Conference of 1993, it was recognized that violence against women was incompatible with the dignity and worth of a human being, having become a social problem and being a part of the Human Rights issue. Two years later, the Platform for Action, under UN auspices, expanded the definition of violence against women recognizing the vulnerability of the minority of women (aged, foreign, refugee and young girls among others). In 1998, World Health Organization considered domestic violence an international priority for the health, welfare and rights for women. At the European level, were approved a series of resolutions (94/ 45 58/ 185, 58/ 147) adopting different measures of offenses and remedies to protect victims from violence. Similarly, we have been creating different programs for equal opportunities between men and women, and specific programs to prevent and combat violence against children, youth and women, protecting especially the victims and groups at risk (*Daphne Program*).

According to these international instruments, Spain has been showing legislative advances in favor of women. In 1989 it updated its Criminal Code, introducing the offense of habitual abuse in the family. The law created in 11/ 1999 enforced the withdrawal penalty (the residence and communication approach prohibition). Law 14/ 1999 introduced the psychological violence code including the marital relations that had existed in the past and like the former spouses and former partners. Likewise, Law 38/ 2002 adopted the "speedy trial" for crimes and "snap judgments" for offenses of domestic violence. When Law 27/ 2003 was incepted, not only the protection order was born, but it was also the predecessor of the Act that would mark a before and after in terms of GBV. Indeed, the successor Act (LO 1/ 2004) was regulated jointly between different mechanisms for prevention, care and prosecution of acts of GBV, not only creating new organisms (Special Government Delegation on Violence against Women, the office of the State Observatory court on Violence against Women and an exclusive special prosecutor) but also a series of legislative reforms (were renovated including the following laws: Law on Right to Education, Law on General Education Management, General Law advertising, law reform measures to the public, law status of workers, etc.) and the creation of a set of new measures to tackle this phenomenon.

Thus, **a catalog of approved urgent measures against gender based violence**, which forced the development and operation of a common protocol for risk assessment (designed to estatal law enforcement). In the last ten years, they had already shown the importance of research in predicting the violence risk (Borum, 1996), and guidance structures and risk management assessment of violent behavior, propelled, including by Webster and Hart in Canada, aimed at optimizing the validity and reliability of predictions and the guide risk management interventions had made a significant contribution to the scientific community. Thus, in July 2007 was approved the protocol for risk assessment of police violence against women in cases of the Organic Law 1/ 2004, and reported to the courts and the prosecutor, born Secretariat Instruction Security Status 10/ 2007. Under this Code (as amended on two different times 14/ 2007 and 5/ 2008) was launched the Comprehensive Tracking System cases of Domestic Violence (VDyG System).

Basically, this system consisted of two risk assessment protocols the (VPR and VPER), and a set of measures of protection and security police, designed so that after its

application, the risk of a victim of being attacked again, he would have removed or otherwise diminished. With regard to risk assessment protocols, it should be noted that these are based on the prediction of future behavior, using a number of risk factors (static and dynamic). These instruments were developed in response to research specifications in this area has developed over the last twenty years, and were crucial to avoid mistakes in forecasting (context, purpose, population it is addressed, and approximation parameters (Kropp, y cols., 1995Heilbrun , Yasuhara and Shah, 2009). Most of its items were based on the main tools for assessing the risk of intimate partner violence (SARA and B-SAFER), and because the medium they were targeted (police), followed the principles which ruled in 2005 ACPO on the design and development of risk assessment instruments (probabilistic relationship between risk factors and behavior management situations, dynamic, fast, scientific reviews, multidisciplinary information, confidentiality and privacy). The ultimate goal that the process of risk assessment should reach Police was as follows: to quantify the level of risk, provide guidance for decision-making, avoid the likelihood of further aggression, contribute to increased victim satisfaction and avoid secondary victimization and police finally gain control of the aggressor. Concerning the police measures were designed to prevent or deter the first post-assessment of risk, in particular, was a police package, both mandatory and optional aimed at preventing or reducing the likelihood that the return offender to commit violent behavior.

Under these principles the VDyG System was developed, which main feature was to provide a software platform designed to facilitate the monitoring and coordination of activities carried out by different competent authorities of GBV. Made possible and permanent control of the situation in which they were the victims, providing protection and assistance. Under this platform were incardinated both risk assessment protocols, such as administration and management of police security measures. System development VDyG was going through different phases, from the genesis of the protocols, to put into operation in late July 2007. At the time of protocol design, was taken into account among other things, that the evaluator would be a police officer not necessarily specialized in GBV. The objective was to estimate the level of risk at the end of the police report to take immediate action to protect the victim.



Thus, after collecting the foundations of the existing academic tools (basically B-SAFER and SARA), VPR was designed and recommended literature since the reevaluation of risk in a period of time from six to twelve months after the event, or when there was a significant change in case status (Kropp et al., 1999), also created a protocol for evaluating the evolution of risk (the VPER). To determine the scoring formula and the risk intervals were done in all four pilot studies (two to two with the VPR and PVER), thus, in about three years (starting in 2007 and nowadays they keep on updating), both protocols were born risk assessment, which objective was to estimate with any degree of probability that an individual commits GBV in the future. Not designed to assess other violence, nor was recommended for use in cases where they suspected or knew that the person suffered a mental disorder. The evaluator needed not always be a specialist police VDG, did not need to complete a specific training program (as opposed to other instruments). The police procedure was designed as follows: the VPR is complimented in the computerized system, which according to the scoring algorithm automatically assigned one of five possible risk levels: unappreciated, low, medium, high or extreme. Each risk level was assigned a catalog of police measures for immediate implementation and a time for a reassessment (VPER). At the time that indicated the instruction for each level of risk should be completing the VPER, until it reached the level of risk "unappreciated", where the case should necessarily leave the system (Instruction 10/ 2007).

This system is a major breakthrough for which many countries were interested in our environment (Ministry of Interior, 2010). As of reading this PhD dissertation, has spent five years running, and against the Standards for Educational and Psychological Testing (1999), has not been validated empirically. Therefore, the research presented here, special importance for two reasons: first, because it has been running a long time without being validated, and second daily mobilizes more than 20.000 police officers throughout the Spanish territory, and victims' safety depends on it, so the results shown here, should lead to results that would ensure its continued use, and identify possible strategic police optimization.

## **9.2.- CONCUSSIONS OF THE STUDIES**

Before discussing the main findings, it should be noted that the sample with which they have done studies is representative of the general population reporting a VDG fact, due to two main factors: the large size (VPR = 20,576 cases and VPER1 = 2,592 cases), and source: data were obtained throughout the Spanish territory, except for the boundaries of the regional police forces. Similarly, it was found that analyzed demographic data (age, nationality, personal relationship victim-offender, educational level) are in line with the results obtained in other similar studies (Amor et al., 2002; Labrador et al. , 2006; Echeburúa et al., 2008; Observatory on Violence against Women, 2010), about the characteristics of victims who report an act of VDG.

In general, you can begin by stating that the results obtained in the three studies are part of the overall objective can cover satisfactorily the purposes from which they were raised. The main conclusions can be drawn from all studies are as follows:

1. The first study analyzed the questionnaire VPR. The results suggest that the questionnaire fits perfectly to the scoring system for which it was designed. The analysis of the items forming the instrument reported that these were relevant to express the concept that was intended to assess and which correspond to the reality of the phenomenon studied. In this sense the analysis of the "variable levels of risk, "reported the highest percentage of reported cases correspond to the level of risk "unappreciated" followed by a reducing the remaining risk levels (low, medium, high and extreme). This reinforces the procedure that encompasses the entire VDyG system as it would be impractical to safety and security of victims with risk levels "high" and "extreme" if it exceeds the percentage found. Recall that a risk level of "extreme" implies continuous monitoring of both the movements of the aggressor and the victim, until the circumstances of the offender no longer a threat (Instruction 5/ 2008). Regarding the quality metrics VPR validated instrument, it is indicated by its reliability and validity. As previously discussed, the reliability of VPR is , 855, ,814 for the National Police Corp (NPC) and , 807 for Civil Guard (GC). Following the instructions in Ciachetti (1994) VPR reliability is satisfactory

and closer to excellence than mere adequacy. After studying the contribution of each of the items to the reliability, we can conclude that in principle it is advisable to keep all elements of the VPR. None has a clear negative psychometric performance to justify their disposal, all the items show a reasonably good performance, the items that show a lower correlation with the total test are 8 and 9, and yet the removal of any of them does not translate into increases in overall reliability of the instrument, so you opt for its maintenance (Musitu et al., 1995, 1999).

**On the construct validity** (APA, AERA, and NCME, 1999), and in relation to factor analysis, an exploratory factorial analysis (EFA) ran with the first sample and a confirmatory factorial analysis (CFA) with the second, thereby achieving obtain a model based on cross-validation, achieving the 36% explained variance. We found a total of 4 main factors (**psychological, violence, maladaptive behavior and relationship with the law**), composed of three items each, except the last factor was composed of two. Moreover it was found empirically quality of data obtained through the goodness of fit indicators, providing excellent results, with values above 90, suggesting a more than acceptable fit of the model. Finally, we calculated the strength through the contingency coefficients and factorial invariance, proving the equivalence between the cases belonging to the NPC and the cases corresponding to the GC. The results strengthened the model since it was shown that the variable "police force" a contradiction to the validity. In addition, all analyzes indicated that VPR satisfactorily met psychometric properties must meet any assessment tool, which supports and strengthens the safeguards on the use of VPR for all police officers involved in the fight against VDG.

The second study analyzed the **metric characteristics of the VPER questionnaire**. The first conclusion refers to adjust the elements of the test in relation to how it was designed; obtaining results corroborated what was expected. In this sense, it was found that half of the first block of items (1 through 10) were generally high, demonstrating the effectiveness of System VDiG, since according to the content of the items (the author has distanced himself from the victim, shows a peaceful attitude, compliance with the regime of

separation, it expresses a civic attitude shows an express repentance, has a stable employment situation, the victims are given a favorable environment for their safety, and there is progress over time without incident) These indicate that they all in the same direction: situation after the application of police measures. We found only one item with very low (item 9: the victim has moved his residence to a place with little chance of being known by the author), this corresponds to content that is not interpretable as direct result of police action. On the second block of items, the results have been in line with the expected, since results have been achieved very high in almost all the items (the offender is fugitive or missing, have difficulty rebuilding their lives, presents alarming features, the victim goes against their own security, start a new relationship, is especially vulnerable, and the victim or the offender are in their environment who pose a realistic threat to the integrity of the victim), which means these indicators "do not occur." This can be interpreted again as a direct result of police measures applied, which would be reinforced VDiG System. Similarly, the variable "risk levels" reported an adequate distribution of cases, since most were concentrated at the "unappreciated" and "low", and gradually decreased progressively to the level of risk "extreme" , where he concentrated a very small percentage. This information supports fully the design with which the system was programmed VDiG, since as noted above, would be contradictory to have more cases in the levels of risk "means" and "high" after the measures have been implemented police protection.

Evaluating the quality metric was conducted VPER through studies of reliability and validity. With regard to reliability, one can speak of two different results depending on the two blocks that make up the items. In the first of these (items 2 to 10) had an acceptable reliability coefficient (, 713). However, this index shows weakness in relation to the second block of items (11 to 17), since we obtained a moderate reliability coefficient (, 559), a result that can be justified by the short length of the test (7 items), so in this sense would be interesting to make some changes (which are discussed below in the section on future research) to improve the reliability of this second set of data. The study of construct validity, realized through cross-validation, allowed to accept the

existence of four general factors (pro-social behavior of the author, the author's difficulties in his new life, the vulnerability of the victim and physical barriers) that explained a 31% of the variance and were later corroborated with confirmatory factor analysis. Moreover it was found empirically the adequacy of the data obtained through the indicators of goodness of fit, providing excellent results, with values above 90, suggesting a good model quality. Regarding the robustness, consistency indices and metric invariance studies indicated no difference in the model in relation to the bodies of origin of the sample (CNP-GC), which strengthened the model since the two different samples do not threaten the validity. Finally it should be noted that the operation of item 9 of VPER (the victim has moved his residence to a place with little chance of being known by the author), was not entirely adequate, and its elimination would increase the reliability of whole, since this indicator has been the least correlation obtained with respect to the global test. Therefore, it would be interesting to review the content and wording.

3. Next, this PhD dissertation has provided important empirical evidence regarding the **three variables considered as external criteria of validity**. The first one consisted in the agreement **of the police officer with the result provided by the system VDyG**. In this regard, first we can say that the VPR, over 90% of police officers who complete these protocols are unhappy with the outcome of the system, which already provides strength and confidence to it. Secondly, the index in accordance analyzed during ten VPER protocols, said percentages being equally under very high, ranging between 88% and 98% along the sequences studied. Therefore, and considering the opinion of the agents as an "expert judgment" can be said that these results reinforce the external validity VDyG System.

With regard to the second criterion variable, **satisfaction of victims with protection and security system received by the security forces**, the results indicated two main conclusions: first, to the satisfaction questionnaire used had a high reliability coefficient, and factor structure that was composed by the existence of a single factor, on the other hand, that the information extracted from the descriptive statistics of item content (percentage of victim satisfaction

with police action), fully supports the external validity of VDyG system, as is a system designed and programmed to provide security for the victims, who better than they can substantiate that this protection is working. In this sense, having obtained a very high satisfaction rates, speaks strongly in favor of the system, and that the victims deposited confidence in the police report when an event of this nature. However, it is clear that both the scarcity of the sample, as the environment where this study was conducted (police) may pose problems facing the generalization of results. It is, however, an initial study that sheds figures collective satisfaction of victims complaining about policing received, so that in future research would need to increase the representativeness of the sample, providing even data on the crossing of the degree of satisfaction with variables corresponding to the profile of the victim.

Having regard to the relationship between victim satisfaction with police protection system should be maintained or even enhanced by this factor, trying to improve the quality of policing in such crimes and increasing efforts devoted to the motivation and patience requiring officials working in these units. In this sense, it is interesting to note that the lead researcher of this PhD dissertation has made a Psychological First Aid Guide for staff engaged in these units in order to increase interpersonal skills in relation to the GBV for all civil guards who work day day in this work.

Regarding the third variable, **changing levels of risk**, it should be noted that this is perhaps the most informative variable throw about the effectiveness of VDyG System in general. First, because it directly challenged the SES Instruction 5/ 2008 is not being enforced as it should, in that there is a very high percentage of police officers who continue to value the level of risk victims "no appreciated". From a critical standpoint, one could hypothesize that if this measure is in the interest of protecting victims, not more offer more protection. However, VDyG System is designed as a dynamic process in constant change, where the victims should be on the system for a fixed period: until the danger is removed. It is absolutely unfeasible to keep victims within the system when its outcome is at risk "unappreciated", since this means time and resources that may be more needed in other victims with a higher risk level. Therefore, **a**

**conclusion about it is that should this information to police officers, to improve efficiency from an operational standpoint.**

Second, this study demonstrates that the **system is effective, because cases are distributed in the manner in which anticipated when it was designed**: to cases with different levels of risk are treated with a series of police measures, and these are risk level down to nothing VDyG System. However, it must indicate that it detected a small percentage of cases, called "resistant", who seem invulnerable to police action.

Both these cases "resistant" and those at risk "unappreciated" are still being evaluated, could be analyzed in detail, extracting as much information as possible from all points of analysis (considering all items of the protocols, meet with the agent assessments made, and finally, if you had possibility, also meet with the victim and other family members and close friends who could provide information on the situation). These studies serve not only for the optimization of resources, since as the templates are set up police would not have enough staff to serve all victims if they do not leave the VDyG system, but also for the future design of strategies that be in the interest of improving the system. Only with such studies can produce results that involve the amendment or modification of the instructions that require an agent to act. Though retrospective studies of these cases could have real information about why a victim protection is maintained at the same level of risk or could even get worse.

4. In addition to general studies on the composition of risk assessment instruments, analysis of the variable "**body law enforcement source**" provided interesting information content level. The results obtained in this regard revealed that at first seemed to be differences between the National Police and Civil Guard. However, one must be cautious in their interpretation, since most of them are very weak and can be justified by the sample size. In fact, it is obvious that the VDG is not experienced equally in urban areas (CNP) in rural areas (GC). In the latter usually there are fewer basic resources, especially information, plus the invisibility of violence is higher than in urban areas (State Observatory court on Violence against Women, 2011). On the other side and, with respect to

differences in relation to VPER is true that in small towns tend to know more of the cases with which we work, and to have more accurate or exhaustive of the case. In this sense, it could explain some of the differences found with respect to the scoring system. Usually in small towns is easier to locate, arrest and monitoring of the author that in urban areas where population censuses are higher, and other circumstances of the city, often difficult to locate the perpetrator (for example for urban infrastructure and transportation, among others).

Throughout this section we have exposed the most noteworthy findings of the empirical studies presented previously. The following will address some implications of the results obtained in this PhD dissertation would have to police forces, along with the main constraints that have been found. Finally, we will propose future research, in order to alleviate the limitations previously encountered.

### **9.3.- IMPLICATIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH**

The results obtained during this PhD dissertation have some obvious implications for the security forces. First, because detailed data from one of the most worrying problems within the Interior Ministry, which is particularly sensitive in Spanish society: the GBV. In this sense, the security forces in their obligation to ensure public safety have a very active role in this phenomenon, protecting the rights of victims and prosecuting violations of the aggressors. This study validates the VDyG System, especially the risk assessment protocols incardinated in it (and VPER VPR), which collects the casuistry of VDG denounced police state, from August 2008 until December 2009, reaching having a sample of more than 100 000 made of this type.

Second, because we are validating **a system that has been in use since mid 2007 and had not been previously validated**. In this sense, the latest edition available from the Standards for Educational and Psychological Testing (1999) has reaffirmed the importance of validation of the test, indicating that the validation process should be initiated at the time prior to the construction of an instrument, and that should guide and



monitor its development and effective in order to ensure the scores derived from it. That's why right now we can say that both the police and victims who report an act of GBV, rest assured and trust in the System VDyG, since studies have been carried out, support the use of scientifically and the use of the two risk assessment questionnaires (VPRy VPER).

Finally, for the sake of **optimization of resources** is essential to conduct research as presented here, since statistical studies of this type can be translated into strategic lines for security and police forces that are responsible for daily theme the VDG. Thus, these studies have revealed three major developments that deserve to be taken into account for the enhancement of the assessment process and the optimization of human and material resources police:

- I. **Improvements in training.** It is found that the latest Security Instruction 5/2008, not being fulfilled as it should. First, the existence of protocols VPER not filled before the deadline (remember at this time that of the 119 thousand cases of the first database, approximately 50 000 were not completed within the time required) and secondly by the number of cases with risk level "unappreciated" who are active in VDyG System when they should leave it.
- II. **Policing.** In this connection the following question arises: is being correctly applied by police measures emanating from the last instruction? To answer this question, we must answer the following questions: **Is there enough staff to provide victims with police measures your level of risk determined?, Are we providing security effectively?, Are we focusing more protection in some cases with less risk or risk "unappreciated" (false positives) to the detriment of others at risk but not detected (true positives)?, are we making effective use of templates police? Currently police units suffer from not having enough staff to cope with the volume of cases held.** Overwork and lack of templates make the response to victims sometimes not the most appropriate. Furthermore, since the protective measures derived from the degree of risk, the agents are sometimes not raise pressure to the extent possible the final result of the questionnaires, all with the aim that measures protection to be applied not involve the use most of the potential of service to this task and other

tasks. Keep in mind that if the result of VPR is "extreme" should be continuous surveillance of the victim, until there is danger. From all this two conclusions can be differentiated:

- a) At the operational level: Indicate the absolute respect for the Instruction and deadlines. Similarly, it should be kept in the System VDyG, cases with risk "unappreciated." From another perspective, another future line of research should aim to check whether there are sufficient resources to address the problem that exists in each unit of VDG. Finally, we should emphasize the deliberate manipulation of the system not by the agent, emphasizing the existence of an indicator to change the risk level of absence in accordance with the results.
- b) **At the academic level:** To investigate in detail the cases "are being maintained in the system" when they should go, in order to extract relevant information that perhaps could explain these percentages. In this sense, it would be interesting to investigate the items as well as agents who complete the questionnaires. In short, gathering as much information as possible about these cases to further analyze and reach conclusions.

Therefore, monitoring, and validation study VDyG System offers conclusions apply to both the system design level, as operational conclusions for all police officers who perform daily tasks of public security and criminal investigation into these crimes.

Below and to end this last chapter will discuss some of the major limitations encountered in this investigation, while they propose future research with the aim of providing an overview of possible solutions to questions arising from the results that were obtained.

#### **a) On the validity**

It is important to note some limitations that are fundamental to statistics when speaking of validity, and should be considered for future research and possible lines of development. In the study of predicting violent behavior there is a method par

excellence which reveals the best predictors for future outcome: **the predictive validity**. This approach is the monitoring of population has been exposed to a risk. For example, men who have been identified as abusers are tested in a hypothetical variables serve as predictors and were traced. Only when a final result has been to measure the degree of validity of these predictors. In our study, not having a gold standard variable (*outcome or result*) was impossible to work this type of validity. The number of recidivism data in order to use this as an outcome variable was too small (which is already a result in itself) as to make such studies. Similarly, problems were found to locate in the System VDiG victims who had reported and then were killed, although the figure has been reached, probably too small to prove the predictive validity studies that wanted to do. However, we know the importance of this type of validity, and therefore further research in this area, so that in the foreseeable future can provide results regarding the predictive power of the protocols.

Similarly, it would be interesting to study the **convergent validity** with other instruments for predicting risk of partner violence. In this sense we have ties with the Department of Criminology at the University Mitt Sweden, in order to be able to do that kind of analysis with the B-SAFER or the SARA. As from the United States, Campbell, an expert in risk assessment and creator of the Danger Assessment Tool, is interested in performing this type of study data from the DA crossing with those from VPR and VPER.

### **b) On the robustness**

In this study we have obtained information that supports the robustness of both protocols over the police force of variable origin. For the future, it is thought desirable to investigate the robustness in relation to other variables, such as the region of origin, nationality or other socio-demographic variables of the victim (age, educational level, personal affair).

**c) On the questionnaires**

In view of the results obtained in relation to the questionnaires, a question arises Overview: What protocols are applied correctly? In principle the instrument items were written to be used by all police officers without having to be experts in risk assessment, let alone experts in human behavior. Now, can a police determined the item 16 of VPR (suicidality the aggressor)? We must remember that this database is made of information from most of the victim. In the empirical study 1 has been observed that the item with the highest percentage in the "not known" corresponds to this item (16). The question now is this Can a suicidal police criminalize the perpetrator to information from the victim? The main scales measuring suicidal ideation (SSI Beck, Kovacs, and Weissman, 1979; EDB Beck Wissamn, Lestre and Trexter, 1974) are based on items intended to measure the desire to die, or the reasons for living. Noting that this item is being explored through the information given by the victim at that particular time, the item may not be very effective, since the form of constructive criticism, it is difficult to assess the suicidal tendency of a person and label it in four levels of response in the event that involves (given low, medium, high and extreme), through information obtained by a third party.

On the other hand, has detected the existence of certain indicators, such as items 8, 9 and 11 of VPR ("breach of legal provisions precautionary", "breach of penalties or security measures" and "criminal and police" respectively) and some PVER items (item 3, "the author shows a peaceful attitude" Item 4: "The author meets with the regime of separation" and item 16, "the author has a stable employment situation") that are difficult to categorize between levels of response provided by the protocol (low, medium, high or extreme). All these behaviors occur or not, is broken or not broken, you have a history or do not have, etc., And from this critical perspective, it is thought that if these items were dichotomous, would provide more clarity for police officer completing the survey. Similarly, it has come to the concussion that the indicators are generally very long and sometimes difficult to determine in relation to the content of the items if they are little, pretty, little or nothing, since some of them contain several statements therein. As an example can be viewed on the following item "he fulfills his segregation and dependents, especially having started / produced process of separation / divorce, or there children together. For example, the defendant participates positively in

the process of separation / divorce, or if you already have occurred respecting the separation regime, visits, meet the financial obligations imposed, does not violate any measures / conviction, no conflicts arise significant time to see the children, etc ". In conclusion, future research should aim at the following points:

- Review of the wording of the items<sup>1</sup>
- Difficulties of item 16
- Existence of dichotomous items

One way of review of these limitations, would be **to ask directly to the agents** who work daily in this work. You could do a temporary studio, hanging over the internal network "intranet" a short questionnaire to be filled by these officers collecting this information.

#### **d) On the operational police**

There is a fundamental component of SvyG System not yet validated: the police measures associated with each level of risk, so are they might be asked **whether police measures in the most appropriate level, or fit other?** To answer this question would need to ask themselves police officers. This information can be determined only the police who are working daily with this problem. This is designed (as a future line of research) a questionnaire calling OPPOL (Anexo VIII) in order to gather information on the usefulness of measures deployed police when a victim enters the risk assessment procedure. This questionnaire would be completed once for each police officer who normally works with the system. Covers all police measures contained in the last statement (5/ 2008), both compulsory and complementary to that consideration the degree of utility perceived by agents on each of them. It also provides a blank for the agent to add the / s as / s that he found or may find it more useful. Information of this type of data offsetting the deficit we have in this regard. In this way we could check

---

<sup>1</sup>It should be noted at this point that the protocols with which it has done this research correspond to the initial versions of both questionnaires (Annexes I and II). It is clear that both protocols have been undergone several modifications over time, with the wording of the items one of the most significant changes, abbreviated wording. Annexes VI and VII include versions that are in use when reading this PhD dissertation (May 2012).

whether the police actions that lead almost five years running are the most appropriate, according to the police officer that is applied daily: an expert opinion.

**e) On cases with fatal outcome**

Would be essential to track the cases in which fatalities occur. A retrospective study of each case resulting in death, would yield information about what has happened to that case. If the victim did not report, you could see why and extract information to prevent. If there was denounced and died while under the protection of SvyG Sysitem, could see why the police measures were not adequate, if the risk level does not correspond to reality I was experiencing the victim, or on the other hand if the victim was the that violated the security perimeter, at what time death occurred, if there was anything else that could explain the lack of police protection at the time, if there was any approach by the victim, which is the opinion of family and friends surrounding the case. In that sense the power to collect information from family members and close associates provide valuable information sobe the application of police measures.

**f) On the victims satisfaction**

Following the results shown in study B of Chapter 8, it is thought desirable to investigate the degree of satisfaction of victims of VDG in relation to measures of protection and security police received. Established if possible the crossing of certain variables such as level of risk, age, nationality, place of origin, with the level of satisfaction. Similarly, it would be interesting to be more strict with certain aspects to be evaluated, ie, evaluate the degree of satisfaction of victims in relation to different areas of intervention (intervention speed, clarity of information, confidentiality and discretion in the protection police facility to contact the police, quality of protection, consideration of stakeholders towards the victim, etc.). This would yield information that could be used to improve police intervention.

**g) On the police profiling**

While it is true that one of the main points taken into account in the design phases VDiG System was that it should be able to be used by any police officer, without the relevant training or the existence of specific skills, it indicates at this time and in the interest of improving the functioning of the VDiG System that during the field work of the principal investigator of this PhD dissertation (through various rotations by different police units), it was found the heterogeneity of behavior police units dedicated to the GBV, and how this had an impact on the victims. Now, after this research the following question arises: **police gather all the right profile to assess risk?** The policeman who works in domestic violence should have certain personal characteristics or skills, leading to some authors speak of the existence of a specific profile (Albacete, 2010). However, to detect certain attitudes or skills when selecting these officials would be sufficient. It is important that these agents are listening communication skills and a high degree of empathy and minimally capable of handling emotions. Continuing education and training should be a fundamental aspect to keep in mind constantly. This type of skills developed adequately guarantee the effectiveness of police interventions in situations of gender violence and avoid unwanted effects as well as secondary victimization (Albacete, 2010), as this is due in part to the lack of preparation and / or sensitization of staff working with victims. When the police do not respond appropriately to the needs of the victim, may adversely affect decisions about leaving or not their partner or former partner (Barnett, 1996), whether to continue or not in the legal proceedings. Should be more aware agents, since in their hands many times is that the victim is not killed. In fact, it was found that police actions can have on victims who become more reluctant to leave the relationship, indirectly increasing the risk and danger of them (Barnett, 1996). The research in this area indicates the absolute need to sensitize and train police templates VDiG area (MT Baker, Miller, Johnston, Van Hasselt and Bourke, 1998; Eigenberg & Moriarty, 1991; Newmark, Harrell and Adams, 1995 .) Finally, as discussed above, the author of this PhD dissertation designed a Psychological First Aid Guide for Security Forces, in order to provide the police officer the minimum skills to work in this field

**h) On the last Instruction of the SES (5/ 2008)**

Because it was a considerable percentage of cases that remained at the same level of risk despite police measures applied between evaluation and other, has to remember that when a victim gets a level of risk "extreme" or level of "high risk" due for release the following assessment within 72 hours in the first case and 7 days in the second. In this sense, it is noteworthy that many times in these time intervals is not enough time to stop the aggressor, especially if this is in urban areas, and if it concurs the fact that it is absconded or missing. These circumstances are aggravated especially when the victims change of residence and the notes become part of another police force. All this means that often can not fulfill the instruction as written. Therefore, the results of this research suggests that future instruction from the SES had a more flexible when scheduling the periods for review of the risk.

Finally it is necessary to mention that all future research discussed here enrich research in this field and enable the development and continuous adaptation of VPR instruments and in particular VPER, and VDyG system in general, the actual circumstances life, those that happen when a victim closes his eyes and screams.





# PARTE III

# REFERENCIAS



## REFERENCIAS

- Ackerman, T.A. (1992). A didactic explanation of item bias, item impact and item validity from a multidimensional perspective. *Journal of Educational Measurement*, 29, 67-91.
- ACPO (2005). *Identifying, assessing and managing risk in the Context of policing domestic violence* (National Centre for Police Excellence).
- Albacete, A. (2010). La policía local y su intervención en violencia de género. En Nicolás Marchal (Dir.). *Manual de lucha contra la violencia de género*. Navarra: Thomson Reuters, 641-660.
- Alberdi, I. (2005). Cómo reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres. *Violencia: Tolerancia Cero*. Barcelona: Fundación “La Caixa”.
- Aldridge, M. y Browne, K. D. (2003). Perpetrators of spousal homicide: A review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 4, 265-276.
- Alvarado, P. (2008). Protección policial de víctimas de violencia de género. Disponible en: [http://www.sctfe.es/fileadmin/user\\_upload/Archivos\\_para\\_descargar/Servicios\\_Mujer/Ponencias/proteccion\\_victimas.pdf](http://www.sctfe.es/fileadmin/user_upload/Archivos_para_descargar/Servicios_Mujer/Ponencias/proteccion_victimas.pdf)
- American Psychological Association (1954). Technical recommendations for psychological tests and diagnostic techniques. *Psychological Bulletin*, 51(2), 1-38.
- American Psychological Association (APA), American Educational Research Association (AERA) y National Council on Measurement in Education (NCME). (1999). *Standards for Educational and Psychological Testing*. Washington, D. C.: American Psychological Association.
- Amor, P. J., Echeburúa, E., Corral, P., Zubizarreta, I., Sarasua, B. (2002). Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer en función de las circunstancias del maltrato. *International Journal Of Clinical and Health Psychology*, 2, 227-246.
- Anastasi, A. (1986). Evolving concepts for test validation. *Annual Review of Psychology*, 37, 1-15.

- Andrés-Pueyo, A. y Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. *Papeles del psicólogo*, 28 (003), 157-173.
- Andrés-Pueyo, A., López, S., y Álvarez, E. (2008). Valoración del riesgo de violencia contra la pareja por medio de la SARA. *Papeles del psicólogo*, 29 (1), 107-122.
- Andrés-Pueyo, A. (2009). La predicción de la violencia contra la pareja. En E. Echeburúa, J. Fernández-Montalvo y P. Corral (Eds.). *Predicción del riesgo del homicidio y de violencia grave en la relación de pareja*. Valencia: Centro Reina Sofía, 21-55.
- Andrés-Pueyo, A. y Echeburúa, E. (2010). Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles e indicadores de aplicación. *Psicothema*, 22, 403-409.
- Andrews, D. y Bonta, J. (1994). The psychology of criminal conduct. (1ed.) Cincinnati (Ohio): Anderson. En: Nguyen, T., Arbach, K. y Andrés-Pueyo. Factores de riesgo de la reincidencia violenta en población penitenciaria. *Revista de Derecho penal y criminología*, 6, 273-294.
- Andrews, D. y Bonta, J. (2006). *The Psychology of Criminal Conduct* (4ª ed.). Cincinnati (Estados Unidos): Anderson Publishing Co.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5ª ed.). New Providence, NJ: Lexis Nexis. En I. Loinaz, M. Iruleta, y F. Doménech. *Análisis de la reincidencia en agresores de pareja*. Centro de estudios jurídicos. Departamento de Justicia. Generalitat de Catalunya.
- Arbach, K. (2007). Predicción de la conducta violenta en pacientes psiquiátricos. Tesis de Doctorado para la obtención del título de doctor en Psicología, Universidad de Barcelona.
- Arbach, K. y Álvarez, E. (2009). *Evaluación de la violencia psicológica en la pareja en el ámbito forense*. Centro de estudios jurídicos. Departamento de Justicia. Generalitat de Catalunya.
- Arbuckle, J. L. (1997). *Amos users' guide version 3.6*. Chicago, IL: SmallWaters.
- Arbuckle, J. L. y Wothke, W. (1999). *AMOS users guide version 5.0*. Chicago: SmallWaters.
- Au, A., Cheung, C., Kropp, P. R., Yuk-chung, C., Lann, G., y Sung, P. (2008). A preliminary validation of the brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER) in Hong Kong. *Journal of Family violence*, 23, 727-735.

- Barnett, O. W. (2000). Why battered women do not leave, Part 1: External inhibiting factors within society. *Trauma, Violence, & Abuse*, 1(4), 343-372.
- Bjorkly, S. (2000). SCL-90-R Profiles in a sample of severely violent psychiatric inpatients. *Aggressive Behavior*, 28, 446-457.
- Bennett-Cattaneo, L., y Goodman, L. A. (2005). Risk factors for reabuse in intimate partner violence: A cross-disciplinary critical review. *Trauma, Violence and Abuse*, 6, 141-175.
- Bentler, P. M. (1980). Multivariate Analysis with latent variables: Causal modeling. *Annual Review of Psychology*, 31, 419-456.
- Bollen, K. A. (1989). *Structural Equations with Latent Variables*. Nueva York: John Wiley y Sons, Inc.
- Borum, R. (1996). Improving the Clinical Practice of Violence Risk Assessment. *American Psychologist*, 51(9), 945-956.
- Buchanan, A. (1999). Risk and Dangerousness. *Psychological Medicine*, 29, 465-473.
- Buzawa, E., Austin, T. y Buzawa, C. (1995). Responding to crime of violence against women: Gender differences versus organizational imperative. *Crime & Delinquency*, 41, 443-466.
- Byrne, B. (1989). *A primer of LISREL: Basic applications and programming for confirmatory factor analytic models*. Nueva York: Springer-Verlag.
- Cairns, K. V. (2004). *Alberta mental health board domestic violence treatment program evaluation: report to the partnering ministries committee*. Edmonton, AB, Canada: Alberta Mental Health Board. En Otto y Douglas (Edt.) (2010). *Handbook of violence risk assessment*. Routledge: Nueva York.
- Calvete, E., Corral, S. y Estévez, A. (2007). Factor Structure and Validity of the Revised Conflict Tactics Scales for Spanish Women. *Violence against women*. 13 (10), 1072-1087.
- Campbell, J. (1986). Bursing assessment of risk of homicide for battered women. *Advances in nursing science*, 8 (4), 36-51. En Campbell, J. (2009). The danger assessment. Validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide. *Journal of Interpersonal violence*. 24 (4), 63-674.
- Campbell, J. (1995). *Assessing dangerousness*. Newbury Park: Sage

- Campbell, J. y Runyuan, C.W. (1998). Femicide: Guest editors' introduction. *Homicide Studies*, 2 (4), 347–352.
- Campbell, J., Sharps, P. y Glass, N. (2001). Risk assessment for intimate partner homicide. En G. Pinard G. y L. Pagani (Eds.), *Clinical assessment of dangerousness: Empirical contributions*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Campbell, J., O'Sullivan, C., Roehl, J. y Webster, D. (2005). *Intimate partner violence risk assessment validation study, final report*. National Criminal Justice Reference Service, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, 2005. Disponible en: <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/209731.pdf>
- Cano, L., Berrocoso, A., De Arriba, L., De Quirós, R., Alamar, J. y Cardo, A. (2010). Prevalencia de Violencia de Género en mujeres que acuden a consultas de Atención Primaria. *Revista Clínica medicina Familiar*, 3 (1),10-17.
- Cantos, S. (2010). Enfoque de los medios de comunicación en materia de violencia de género. En Nicolás Marchal (Dir.). *Manual de lucha contra la violencia de género*. Navarra: Thomson Reuters, 519-543.
- Carretero-Dios, H. y Pérez, C. (2005). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 5 (3), 521-551.
- Catalano, J. (2007). *Intimate Partner Violence in USA*. US Department of Justice. OJP. BJS. Disponible en [www.ojp.usdoj.gov/bjs/](http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/).
- Catálogo de Medidas Urgentes Contra la Violencia de Género. Consejo de Ministros del 15 de Diciembre del 2006.
- Cattell, Raymond. (1966). The screen test for the number of factors. *Multivariate Behavioral Research*, 1, 245-276.
- Cattell, R. B. (1978). *The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences*. Nueva York: Plenum.
- CEPOL (2009). *Common curricula on policing violence I. European Police College. Münster* 5-8 Junio. Alemania.
- CEPOL (2011). *Domestic Violence. International Aspects and Experience*. Escuela de la Guarda Nacional Republicana. Queluz. 4-8 Julio. Portugal.

- Cheung, G. W. y Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling*, 9, 233-255.
- Cicchetti, D. V. (1994). Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and standardized assessment instruments in psychology. *Psychological Assessment*, 6, 284-290.
- Circular nº 1/ 2003, de 17 de septiembre, sobre aprobación de la actualización del Manual de Policía Judicial.
- Cocozza, J., y Steadman, H. (1976). The failure of psychiatric predictions of dangerousness: Clear and convincing evidence. *Rutgers Law Review*, 29, 1084-1101.
- Cook, T. D. y Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: design and analysis for field setting*. Chicago: Rand McNally.
- Cronbach, L. J. y Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological test. *Psychological Bulletin*, 52, 281-302.
- Cronbach, L. J. (1984). *Essentials of psychological testing* (4ª ed.). Nueva York: Harper.
- Cronbach, I. J. (1990). *Essential of psychological testing* (5ª ed.), Nueva York: Harper and Row.
- Daly, M., y Wilson, M. (1988). *Homicide*. Hawthorne NY: Aldine de Gruyter.
- Delgado, C. (2010). Raíces de la violencia de género. En Nicolás Marchal (Dir.), *Manual de lucha contra la violencia de género*. Navarra: Thomson Reuters, 43-65.
- De Frutos, B., Ruiz, M.A. y San Martín, R. (1998). *Análisis Factorial confirmatorio de las dimensiones del compromiso organizacional*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Del Val, J. (2005). *La fiabilidad*. En R. Ramos (Coord.). *Métodos y diseños de investigación en psicología*. Granada: Grupo Editorial Universitario, 141-171.
- Domènech, E. (1996). La Peligrosidad: Enigma o Acertijo. *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales*. UNLP.
- Dictamen del consejo Económico y social Europeo. Disponible en <http://www.esc.eu.int>



- Doland, M. y Doyle, M. (2000). Violence risk prediction. *British Journal of Psychiatry*, 177, 303-311.
- Douglas, K y Kropp, P. R. (2002). A prevention-based paradigm for violence risk assessment: Clinical and research applications. *Criminal Justice and Behavior*, 2 (5), 617-658.
- Douglas, K. S., Cox, D. N. y Webster, C. D. (1999). Violence risk assessment: science and practice. *Legal and Criminological Psychology*, 4, 149-184.
- Dutton, D. G. y Hart, S. D. (1992). Risk markers for family violence in a federally incarcerated population. *International Journal of Law and Psychiatry*, 15, 101-112.
- Dutton, D.G. (1995). *The Batterer: A Psychological Profile*. Nueva York: Basic Books.
- Dutton, D. y Kropp, P. R. (2000). A review of domestic violence risk instruments. *Trauma, Violence, and Abuse*, 1 (2), 171-181.
- Echeburúa, E. y Corral, P. (1998). *Manual de violencia familiar*. Madrid: Siglo XXI.
- Echeburúa, E., Corral, P. y Amor, P.J. (2002). Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. *Psicothema*, 14 supl., 139-146.
- Echeburúa, E., Fernández-Montalvo, J. y Corral, P. (2008). ¿Hay diferencias entre la violencia grave y la violencia menos grave contra la pareja?: un análisis comparativo. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 8, 355-382.
- Echeburúa, E., Amor, P.J., Loínaz, I. y Corral, P. (2010). Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja-Revisada- (EPV-R). *Psicothema*, 22 (4), 1054-1060.
- Echevarría, J. (1989). *Introducción a la metodología de la Ciencia*. Barcelona: Barcanova.
- Echevarría, A. (2005). La validez. En R. Ramos (Coord.). *Métodos y diseños de investigación en Psicología* (171-199). Granada Grupo Editorial Universitario.
- Eigenberg, H. y Moriarty, L. (1991). "Domestic Violence and Local Law Enforcement in Texas: Examining Police Officer's Awareness of State Legislation," *Journal of Interpersonal Violence* 6, (1), 102-109.

- Elbogen, E., B. (2002). The process of violence risk assessment: a review of descriptive research. *Aggression and Violent Behavior*, 7, 591-604.
- Elosua, P. (2003). Sobre la validez de los tests. *Psicothema*, 15 (2), 315-321.
- Embrestson, S., E. (1983). Construct validity: construct representation versus nomothetic span. *Psychologica Bulletin*, 93 (1), 179-197.
- Esbec, E. (2003). Valoración de la Peligrosidad Criminal (Riesgo-Violencia) en Psicología forense. Aproximación conceptual e histórica. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 3 (2), 45-64.
- Escorial, S. (2008). Proceso de validación de un instrumento de evaluación psicológica para la medición de las dificultades del temperamento según el modelo de Davil Lykken. Tesis de Doctorado para la obtención del título de doctor en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid.
- Fagan, J. A., Stewart, D. K. y Hansen, D.V. (1983). Violent men or violent husbands? Background factors and situational correlates. En D. Finkelhor, R.F. Gelles, y G. T. Hataling, (Eds.). *The dark side of families: Current family violence research* (49-67). Newbury Park, CA: Sage.
- Ferraro, K. y Johnson, J. (1983). How women experience battering: The process of victimization. *Social Problems*, 30, 325-339. En Campbell, J. (2009). The danger assessment. Validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide. *Journal of Interpersonal violence*, 24(4), 63-674.
- Finn, M. A. y Stalans, L. J. (1997). The influence of gender and mental state on police decisions in domestic assault cases. *Criminal Justice and Behavior*, 24, 157-176.
- Fernández, M. y Pérez, M. (2010). La Ley integral de medidas contra la violencia de género. En Nicolás Marchal (Dir.), *Manual de lucha contra la violencia de género*. Navarra: Thomson Reuters, 43-65.
- Ferris, L., Sandercock, J., Hoffman, B., Silverman, M., Barkun, H., Carlisle, J. y Katz C. (1997). Risk Assessments for Acute Violence to Third Parties: A Review of the Literature. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 42, 1051-1060.
- Fontanil, Y., Ezama, E., Fernández, R., Gil, P., Herrero, F. J. y Paz, D. (2005). Prevalencia del maltrato de pareja contra las mujeres. *Psicothema*, 17, 90-95.

- García-Cueto, E. (1993). *Introducción a la Psicometría*. Madrid: Siglo XXI.
- Gardner, W., Lidz, C. W Mulvey, E. y Shaw, E. (1996). Clinical versus Actuarial Predictions of Violence in Patients with Mental Illnesses. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64 (3), 602-609.
- Gelles, R. y Tolman, R. (1998). *The Kingston Screening Instrument for Domestic Violence (K-SID)*. Providence, RI: University of Rhode Island.
- Gendreau, P., Goggin, C. y Smith, P. (2002). Is the PCL-R really the «unparalleled» measure of offender risk? *Criminal Justice and Behavior*, 29, 397-426. En: Nguyen, T., Arbach, K. y Andrés-Pueyo. Factores de riesgo de la reincidencia violenta en población penitenciaria. *Revista de Derecho penal y criminología*. 3º Época, 273-294.
- George, D. y Mallery, P. (1995). *SPSS: Step by step*. Belmont CA: Wadsworth Publishing.
- Goldmith, H. R. (1990). Men who abuse their spouses: an approach to assessing future risk. *Journal of ofender Counseling, Services and Rehabilitation*, 15, 45-56.
- Gondolf, E. W. (1988). Who are those guys? Toward a behavioral typology of batterers. *Violence and victims*, 2, 187-203.
- Gordon, M. (2000). Definitional issues in violence against women. *Violence Against Women*, 7 (6), 747-783.
- Grann, M. y Wedin, M. (2002). Risk factors for recidivism among spousal assault and spousal homicide offenders. *Psychology, Crime & Law*, 8, 5-23.
- Hambleton, R. K. y Swaminathan, H. (1985). *Item response theory: Principles and applications*. Boston: Kluwer-Nijhoff.
- Hanson, R. K., y Wallace-Capretta, S. (2004). Predictors of criminal recidivism among male batterers. *Psychology, Crime, & Law*, 10 (4), 413-427.
- Hanson, R. K. y Morton-Bourgon, K. (2004). *Predictors of sexual recidivism: An updated meta-analysis*. Ottawa, ON: Public Safety and Emergency Preparedness Canada.

- Harris, G., Rice, M. y Quinsey, V. (1993). Violent recidivism of mentally disordered offenders: the development of a statistical prediction instrument. *Criminal Justice and Behavior*, 20, 315-335.
- Hare, R. D. (1983). Diagnosis of antisocial personality disorder in two prison populations. *American Journal of Psychiatry*, 140, 887-890.
- Hare, R. D. (1991). *Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Hart, S. D., Dutton, D. G., y Newlove, T. (1993). Personality disorder among wife assaulters. *Journal of personality disorders*, 7, 328-340.
- Hart, S. D. (2010). *Clinical Risk Assessment and management of complex cases*. Proactive Resolution. Conferencia presentada en los Workshops on Clinical risk Assessment and Management of Complex Cases. Edimburgo. Escocia.
- Hartwig, F. y Dearing, B. (1979). *Exploratory data analysis*. California: SAGE Publications.
- Heckert, D. y Gondolf, E. (2001). Predicting levels of abuse and reassault among batterer program participants. Paper presentado en la American Society of Criminology, Atlanta, GA.
- Heilbrun, K., Yasuhara, K. y Shah, S. (2009). Violence Risk Assessment Tools: Overview and Critical Analysis. En R. K. Otto y K. Douglas (Eds.), *Handbook of Violence Risk Assessment Tools*. Nueva York, NY: Routledge Press.
- Hernández-Ávila, M., Garrido, F. y Salazar-Martínez, E. (2000). Sesgos en estudios epidemiológicos. *Salud Pública Mexicana*, 42, 438-46.
- Hilterman, E. y Andrés Pueyo, A. (2005). *HCR-20. Guía para la valoración de comportamientos violentos*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Lang, C., Cormier, C. A. y Lines, K. J. (2004). A brief actuarial assessment for the prediction of wife assault recidivism: The Ontario Domestic Assault Risk Assessment. *Psychological Assessment*, 16, 267-275.
- Hilton, N. Z. y Harris, G. (2005). Predicting wife assault: A critical review and implications for policy and practice. *Trauma, Violence and Abuse*, 6, 3-23.

- Hilton, N. Z., Harris, G. T. y Rice, M. E. (2010). *Risk assessment for domestically violent men. Tools for criminal justice, offender intervention, and victim services*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Horn, J. L., McArdle, J. J. y Mason, R. (1983). When is invariance not invariant: A practical scientist's look at the ethereal concept of factor invariance. *Southern Psychologist*, 1, 179-188.
- Hotaling, G. T. y Sugarman, D. B. (1986). An analysis of risk markers in husband to wife violence: The current state of knowledge. *Violence and Victims*, 1 (2), 101-124.
- Hu, L. y Bentler, P. (1995). Evaluating model fit. En R. Hoyle (ed.), *Structural equation modeling: concepts, issues and applications*. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 76-99.
- Instituto de la Mujer (2006). *III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres. Informe de resultados*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Instrucción 10/ 2007, de 10 de julio, de la SES por la que se aprueba el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre y su comunicación a los órganos judiciales y al ministerio Fiscal.
- Instrucción 14/ 2007, de 10 de octubre, de la SES por la que se modifica la instrucción 10/ 2007.
- Instrucción 5/ 2008, de 28 de agosto, de la SES que modifica la instrucción 14/ 2007.
- Jensen, A. R. (1998). *The g factor: The Science of Mental Ability*. Westport: Praeger.
- Jiménez, A. J. A. (2011). *Control y seguimiento de las víctimas de violencia de Género en la guardia civil*. Madrid: Instituto Universitario de Seguridad Interior (UNED).
- Kemshall, H. (1996). *Reviewing Risk: A review of research on the assessment and management of risk and dangerousness: Implications for policy and practice in the probation service (A report for the home office research and statistics directorate)*. London: Home Office.
- Kline, P. (2000). *Handbook of psychological testing* (2º ed.). Nueva York: Routledge.

- Kraemer, H., Kazdin, A., Offord, D., Kessler, R., Jensen, P. y Kupfer, D. (1997). Coming to terms with the terms of risk. *Archives of General Psychiatry*, 54, 337-343.
- Kroner, D., Mills, J. y Reddon, J. (2005). A coffee can, factor analysis, and prediction of criminal risk: the structure of criminal risk. *International Journal of Law and Psychiatry*, 28, 360-374. En Nguyen, T., Arbach, K. y Andrés-Pueyo. Factores de riesgo de la reincidencia violenta en población penitenciaria. *Revista de Derecho penal y criminología*. 3º Época, (6), 273-294.
- Kropp, P.R., Hart, S.D., Webster, C.D. y Eaves, D. (1995). *Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide (2nd edition)*. Vancouver, B.C., Canada: The British Columbia Institute on Family Violence.
- Kropp, P. R. (1995). Development of the Spousal Assault Risk Assessment Guide. Paper presentado en la mental disorder and criminal justice conference: Changes, Challenges and Solutions, Vancouver. BC.
- Kropp, P. R., Hart, S., Webster, C. y Eaves, D. (1999). *The Spousal Risk Assessment guide user's manual*. Toronto, ON, Canada: Multi-Health Systems and BC Institute Against Family Violence.
- Kropp, P. R. y Hart, S. (2000). The Spousal Risk Assessment guide. Realitibity and validity in adult male offenders. *Law and human behavior*, 24, 101-118.
- Kropp, P. R. y Hart, S. (2004). *The development of the brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER): a tool for criminal justice professionals*. Department of Justice Research and Statistics Division, editor. Ottawa, ON: Government of Canada. Disponible en: <http://canada.justice.gc.ca/en/ps/rs/rep/2005/rr05fv-1/fv-1/pdf>
- Kropp, P. R., Hart, S. D., Webster, C. D. y Eaves, D. (2005). *SARA: Manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja*. En A. Andres Pueyo y S. López Ferré, (Trad.). Barcelona: Publicacions y Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Kropp, P. R., Hart, S., Webster, C. y Eaves, D. (2008). *Spousal assault Risk Assessment Guide (2<sup>nd</sup> Edition)*. Canadá: The Cognitivie Centre Foundation.

- Kropp, R. (2008). *Development of the spousal assault assessment guide (SARA) and the brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER)*. En Constanza y Willem (Eds). *Intimate partner problem, prevention and intervention. The risk assessment and management approach*. Nueva York: NOVA.
- Kropp, R., Hart, S. y Belfrage, H. (2010). *Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)* Second Edition. User manual. Canadá: Proactive Resolutions.
- Krug, E., Dahlberg, L. Mercy, J. y Lozan, A. (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization. Disponible en: [http://www5.who.int/violence\\_injury\\_prevention/download.cfm?id=0000000582](http://www5.who.int/violence_injury_prevention/download.cfm?id=0000000582)[  
Links ].
- Labrador, F.J., Fernández-Velasco, M.R. y Rincón, P.P. (2006). Eficacia de un programa de intervención individual y breve para el trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia domestica. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 6, 527-547.
- Larsen, D. L., Attkinsson, C.C., Hargreaves, W. A. y Nguyen, T. D (1979). Assessment of client/ patient satisfaction: development of a general scale. *Evaluation and Program Planning*, 2 (3), 197-207.
- Ley 16/ 1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer. (BOE 26-10-1983).
- Ley 38/ 2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
- Ley 27/ 2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
- Ley Orgánica 2/ 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 11/ 1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal.
- Ley Orgánica 15/ 1999, de Protección de Datos (13 de diciembre de 1999).

- Ley Orgánica 14/ 1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Ley Orgánica 11/ 2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
- Ley Orgánica 13/ 2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.
- Ley Orgánica 15/ 2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (BOE, de 29 de diciembre de 2004).
- Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- Ley Orgánica 2/ 2009, de 11 de diciembre. Reforma de la Ley de Extranjería.
- Lila, M., Gracia, E. y García, F. (2010). Actitudes de la policía ante la intervención en casos de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: influencia del sexismo y la empatía. *Revista de Psicología Social*, 25 (3), 313-323.
- Loevinger, J. (1957). Objective tests as instruments of psychological theory. *Psychological Reports (Monograph Supp. 9)*, 3, 635-694.
- Loinaz, I. Iruleta, M. y Doménech. F. (2010). *Análisis de la reincidencia en agresores de pareja*. Centro de estudios jurídicos. Departamento de Justicia. Generalitat de Catalunya.
- Macía, F. (2010). Validez de los Tests y el Análisis Factorial: Nociones Generales. *Ciencias generales y trabajo*, 12 (35), 276-280.
- Maqueda, M. (2006). La violencia de género, entre el concepto jurídico y la realidad social [en línea]. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. Disponible en: <http://criminnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf> ISSN 1695- 0194.
- Martínez-Arias, R. (1996). *Psicometría: Teoría de los tests psicológicos y educativos*. Madrid: Síntesis.
- Martínez, M., Hiltermann, E. y Andrés-Pueyo, A. (2005). *SVR-20. Guía para la*



- valoración del riesgo de violencia sexual*. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
- McArdle, J. J. (1996). Current direction in structural factor analysis. *Current Directions in Psychological Science*, 5, 11-18.
- MacCallum, R. C., Roznowski, M., Mar, M. y Reith, J. V. (1994). Alternative strategies for cross-validation of covariance structure models, *Multivariate Behavioral Research*, 29, 1-32
- McMillan, D., Hastings, R. P. y Coldwell, J. (2004). Clinical and Actuarial Prediction of Physical Violence in a Forensic Intellectual Disability Hospital: A Longitudinal Study. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 17, 255-265.
- Medina-Ariza, J. y Barberet, R. (2003). Intimate Partner Violence in Spain. Findings From a National Survey. *Violence against women*, 9, 302-322
- Medina, J. y Barberet, R. (2005). *A Spanish version of the CTS2*. Instituto Andaluz de Criminología. Universidad de Sevilla.
- Meltzoff, J. (2000). *Crítica a la investigación. Psicología y campos afines*. Madrid: Alianza Editorial.
- Messick, S. (1980). Test validity and ethics of assessment. *American Psychologist*, 35, 1012-1027.
- Messick, S. (1989). Validity. The specification and development of tests of achievement and ability. En R. L. Lino (Ed.), *Educational Measurement (3th edition)*. Washington, DC: American Council on Education.
- Ministerio del Interior (2010). *Manual de Buenas Prácticas Policiales*. Grupo de Estudios de Seguridad Interior. Gobierno de España.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2001). II Plan Integral contra la violencia doméstica 2001-2004. *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, 40, 125-34.
- Monahan, J. (1992). Mental disorder and violent behavior. *American Psychologist*, 47 (4), 511-521.
- Monahan, J. (1993). Limiting therapist exposure to *Tarasoff*, liability: Guidelines for risk containment. *American Psychologist*, 48 (3), 242-250.

- Monahan, J. y Steadman, H. J. (1994). Violent Storms and Violent People. How meteorology can inform risk communication in mental health law. *American Psychologist*, 51 (9), 931-938.
- Monahan, J. y Steadman, H. (1996) *Toward a rejuvenation of risk assessment research. In Violence and Mental Disorder*. En J. Monahan y H. Steadman (eds.), Chicago: University of Chicago Press, 1-17.
- Monahan, J., Steadman, H. J., Silver, E., Appelbaum, P. S., Clark Robins, P., Mulvey, E. P. (2001). *Rethinking risk assessment. The MacArthur Study of Mental Disorder and Violence*. Nueva York, USA: Oxford University Press.
- Moss, P. (1992). *Shifting Conceptions of Validity in Educational Measurement: Implications for Performance Assessment* en *Review of Educational Research*, 62 (3), 229-258.
- Mossman, D. (1994). Assessing predictions of violence: being accurate about accuracy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 62 (4), 783-792.
- Mossman, D. (2000). Book Review: Evaluating Violence Risk "By the Book": A Review of HCR-20, Version 2 and The Manual for the Sexual Violence Risk-20. *Behavioral Sciences and the Law*, 18, 781-789.
- Mowat-Leger, V. (2002). Risk factors for violence: A comparison of domestic batterers and other violent and non-violent offenders. *Dissertation Abstracts International*, 63(4-B), 20-46.
- Muñiz, J. (1996). *Fiabilidad*. En J. Muñiz (Coord.). *Psicometría*. Madrid: Editorial Universitas.
- Musitu, G., García, F. y Gutiérrez, M. (1995). *Escala de autoconcepto forma a (AFA)*. Madrid: Tea Ediciones.
- Musitu, G. y García, F. (1999). *Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF-5)*. Madrid: Tea Ediciones
- MTAS (Instituto de la Mujer) (2002 y 2006). Macroencuesta sobre “*violencia contra las mujeres*”. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Naciones Unidas (2010). *Manual sobre respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer*. Nueva York: Naciones Unidas.

- Navas, M. J. (2001). *Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología*. Madrid: UNED.
- Newmark, L., Harrell, A.V., y Adams, B. 1995. *Evaluation of Police Training Conducted Under the Family Violence Prevention and Services Act*. Project report submitted to the National Institute of Justice. Washington, D.C.: The Urban Institute.
- Norma Técnica Número 1/ 2008, de 31 de julio de 2008, sobre Procedimiento de actuación de las unidades de la guardia civil en materia de violencia de género. Disponible en: [www.guardiacivil.es](http://www.guardiacivil.es).
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer (2011). Disponible en [www.observatorio.org](http://www.observatorio.org)
- Observatorio de salud de la mujer (OSM; 2005). *Catálogo de instrumentos para cribado y frecuencia del maltrato físico, psicológico y sexual*. Escuela Andaluza de Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Organización de las Naciones Unidas (1993). Conferencia mundial para los Derechos humanos en Viena. Disponible en [www.onu.org/documentos/confmujer.htm](http://www.onu.org/documentos/confmujer.htm)
- Organización Mundial de la Salud (1998). *Violencia contra las mujeres. Un tema de salud prioritario*.
- Organización Mundial de la Salud. (2002). *World Report on Violence and Health: Summary*. Génova: World Health Organization.
- Ortega, J. (2003). *Fenomenología criminal*. Apuntes del curso de la Escala Facultativa Superior de la Guardia civil. Academia de Aranjuez. Madrid.
- Patró, R. y Limiñana, R. M. (2005). Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. *Anales de psicología*, 21(1), 11-17.
- Paz, M. D. (1996). *Validez*. En J. Muñiz (Cord.), *Psicometría*. Madrid: Editorial Universitas, 49-103.
- Pérez-Gil, J. A. Chacón, S. y Moreno, R. (2000). Validez de constructo: el uso del análisis factorial exploratorio-confirmatorio para obtener evidencias de validez. *Psicothema*, 12, 442-446.

- Pérez, M. y Ross, S. (2008). Police response to domestic violence. Making decisions about risk and risk management. *Journal of interpersonal violence*, 23 (4), 454-473.
- Pickup, F., Williams S. y Sweetman C. (2001). *Ending violence against women: A challenge for development and humanitarian work*. Londres: Oxfam.
- Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género de 10 de junio de 2004.
- Protocolo de actuación y coordinación de fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado y abogados ante la Violencia de género regulada en la ley orgánica 1/ 2004, de Medidas de protección integral contra la violencia de Género. Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2005
- Protocolo de colaboración y coordinación entre las FCSE y Policía local en materia de protección de víctimas de violencia doméstica y de género de 13 de marzo de 2006.
- Quinsey, V., Harris, G., Rice, M. y Cormier, C. A. (1998). *Violent offenders: Appraising and managing risk*. Washington, DC: American Psychology Association.
- Real Decreto 355/ 2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica.
- Real Decreto 95/ 2009, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
- Reed, J. (1997). Risk Assessment and Clinical Risk Management: The Lessons from Recent Inquiries. *British Journal of Psychiatry*, 170 (32), 4-7.
- Resolución 58/ 147, de 22 de diciembre de 2003. de la Asamblea General sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar.
- Resolución 58/ 185 Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer de 22 de diciembre. Asamblea General.

- Rice, M. E., y Harris, G. T. (1992). A comparison of criminal recidivism among schizophrenic and nonschizophrenic offenders. *International Journal of Law and Psychiatry*, 15, 397-408.
- Rice, M. E., Harris, G. T., y Quinsey, V. (2002). The appraisal of violence risk. *Current Opinion in Psychiatry*, 15, 589-593.
- Ruiz, M. A. (2000). *Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales*. Madrid: UNED.
- Ruiz-Pérez, I., Plazaola-Castaño, J., Vives-Cases, C., Monero-Piñar, M. I., Escrivà-Agüir, V. y Jiménez-Gutiérrez, E. (2010). Geographical variability in violence against women in Spain. *Gaceta sanitaria*, 24 (2), 128-135.
- Russell, M. y Light, L. (2006). Police and victim perspectives on empowerment of domestic violence victims. *Police Quarterly*, 9 (4), 375-396.
- Sanmartín, J. (2006). *Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y legislación*. II informe internacional. Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Universidad de Valencia.
- Sanmartín, J., Iborra, I., García, Y. y Martínez P. (2010). *III Informe Internacional. Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y legislación*. Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Universidad Internacional de Valencia.
- Santamaría, P., Arribas, D., Pereña, J. y Seisdedos, N. (2005). *EFAI. Evaluación factorial de las aptitudes intelectuales*. Madrid: Tea Ediciones.
- Santiesteban, C. (1990). *Psicometría. Teoría y practica en la construcción de test*. Madrid: Ediciones Norma.
- Saunders, D.G. (1992). A typology of men who batter women: three types derived from cluster analysis. *American Journal of Orthopsychiatry*, 62, 264-275.
- Scott P. D. (1977) Assessing Dangerousness in Criminals. *British Journal of Psychiatry*, 131, 127-142.
- Scott, C. L. y Resnick, P. J. (2006). Violence risk assessment in persons with mental illness. *Aggression and Violent Behavior*, 11, 598-611.

- Segura, L. (2010). Atención médica a víctimas de violencia de género. En Nicolás Marchal (Dir.), *Manual de lucha contra la violencia de género*. Navarra. Thomson Reuters, 545-564.
- Schmitt, F. F. (1995). *Truth: A primer*. Boulder, Colorado: Westviw Press.
- Schumarcher, J. A., Feldbau-Kohn, S., Slep, M. y Heyman, R. (2001). Risk factors for male-to-female partner physical abuse. *Aggression and Violent Behavior*, 6, 281-352.
- Silva, C., McFarlane, J., Soeken, K., Parker, B. y Reel, S. (1997). Symptoms of posttraumatic stress disorder in abused women in a primary care setting. *Journal of Women's Health*, 6, 543-552.
- Snyder, D. K. Y Fruchtman, L.A. (1981). Differential patterns of wife abuse: a data-based typology. *Journal of counsulting and clinical psychology*, 49, 878-885.
- Sonkin, D. J., Martin, D., y Walker, L. (1985). *The male batterer: a treatmen approach*. Nueva York: Springer.
- Sonkin, D. J. (1987). The assessment of court-mandated male batterers. En Sonkin, D.J. (Ed.), *Domestic violence on trial: Psychological and legal dimensions of family violence* (174-196). Nueva York: Springer.
- Steadman, H. J., Mulvey, E. P., Monahan, J., Clark Robins, P., Appelbaum, P. S. y Grisso, T. (1998). Violence by people discharged from acute psychiatric inpatient facilities and by others in the same neighborhoods. *Archives of General Psychiatry*, 55 (5), 393-401.
- Stith, S. M., Smith, D. B., Penn, C. E., Ward, D. B. y Tritt, D. (2004). Intimate partner physical abuse perpetration and victimization risk factors: A meta-analytic review. *Aggression & Violent Behavior*, 10, 65-98.
- Stout, W. (1987). A nonparametric approach for assessing latent trait unidimensionality. *Psychometrika*, 52, 589-617.
- Stout, W. (1990). A new item response theory modeling approach with applications to unidimensional assessment and ability estimation. *Psychometrika*, 55, 293-326.
- Streiner, D. y Norman, G. (1989). *Health Measurement Scales. A practical guide to their development and use*. Oxford: Oxford University Press.

- Stuart, E. P. y Campbell, J.C. (1989). Assessment of patterns of dangerousness with battered women. *Issues in Mental Health Nursing*, 10, 245-260.
- Thurstone, L. (1931). Measurement of social attitudes. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 26, 249-269.
- Tittle, C., Villemez, W. y Smith, D. (1978). *American sociological review*, 43, 643-656.
- Tjaden, P. y Thoennes, N. (2000). Extent, nature, and consequences of intimate partner violence. Research Report. Findings from the National Violence Against Women Survey: U.S. Department of Justice. Office of Justice Programs. National Institute of Justice. En Andrés-Pueyo, A., López, S., y Álvarez, E. (2008). Valoración del riesgo de violencia contra la pareja por medio de la SARA. *Papeles del psicólogo*, 29 (1), 107-122.
- Velando, M. (2005). La RAE y la violencia de género: reflexiones en torno al debate lingüístico sobre el título de una ley. En Nicolás Marchal (Dir.), *Manual de lucha contra la violencia de género*. Navarra: Thomson Reuters.
- Vives-Cases, C., Torrubiano-Dominguez, D. y Álvarez-Dardet, C. (2008). Distribución temporal de las denuncias y muertes por violencia de género en España en el periodo 1998-2006. *Revista Española de salud pública*, 82 (1), 91-101.
- Walker, L. E. (1979). *The battered woman*. Nueva York: Harper y Row.
- Walker, L. E. (1989). Psychology and violence against women. *American Psychologist*, 44, 695-702.
- Webster, C., Dickens, B. y Addario, S. (1985). *Constructing dangerousness: Scientific, legal and policy implications*. Toronto: Centre of Criminology, University of Toronto.
- Webster, C., Douglas, K. Eaves, D. y Hart, S. (1997). *HCR-20: Assessing risk for violence (version 2)*. Vancouver, British Columbia, Canadá: Simon Fraser University.
- Williams, R. y Houghton, A. (2004). Assessing the risk of domestic violence reoffending: a validation study. *Law and Human Behavior*, 28, 437-455.
- Wilson, M., Daly, M. y Wright C. (1993). Uxoricide in Canada: demographic risk patterns. *Canadian Journal of Criminology*, 35, 263-291.

- Zorrilla, B., Pires, M., Laheras, L., Morant, C., Seoane, L. Sánchez, L. y Durbán, M. (2010). Intimate partner violence: Last year prevalence and association with socio-economic factors among women in Madrid, Spain. *European Journal of Public Health*, 20, 169-175.





# ANEXOS



Anexo I. Formulario de Valoración Policial del riesgo (VPR)

FORMULARIO VPR												
VALORACIÓN POLICIAL DE RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA												
FUENTE				INTENSIDAD								
V	A	T	I		INDICADORES A VALORAR	No sabe	No se da	Bajo	Medio	Alto	Extremo	
				i1	Violencia física. Con o sin lesiones							
				i2	Violencia sexual.							
				i3	Empleo de armas u objetos contra la víctima.							
				i4	Amenazas o planes dirigidos a causar daño físico/psíquico a la víctima.							
				i5	Incremento y/o repetición de episodios o amenazas de violencia.							
				i6	Violencia psíquica del agresor hacia la víctima.							
				i7	Daños sobre la vivienda, bienes u otros objetos.							
				i8	Incumplimiento de disposiciones judiciales cautelares.							
				i9	Quebrantamiento de penas o medidas de seguridad.							
				i10	Conducta desafiante y/ o de menosprecio del agresor hacia la Autoridad o sus agentes o hacia la víctima en presencia de éstos.							
				i11	Antecedentes penales y/o policiales del agresor, especialmente aquellos donde se empleó violencia.							
				i12	Abuso de sustancias tóxicas (estupefacientes), alcohol o medicamentos por parte del agresor.							
				i13	El autor muestra celos exagerados y/u obsesión por la víctima.							
				i14	Problemas patentes en la relación de pareja.							
				i15	Problemas laborales y/o financieros del agresor.							
				i16	Tendencia suicida del agresor.							
V	A	T	I		Si lo desea, puede añadir indicadores nuevos, valorando fuente y magnitud							
RESULTADO						PUNTUACIÓN TOTAL:						
¿Está usted de acuerdo con el resultado automático de la valoración? Marque la opción deseada:						SI		NO				
Si NO está de acuerdo, ¿Qué resultado le parece a usted más adecuado?. Por favor, márkelo y razone su opinión:						NO APRECIADO						
						BAJO						
						MEDIO						
						ALTO						
						EXTREMO						

Anexo II. Formulario de Valoración Policial de la Evolución del riesgo (VPER)

FORMULARIO VPER										
VALORACIÓN POLICIAL DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA										
FUENTE				Indicadores a valorar		Intensidad				
V	A	T	I	Ítems		No se sabe	No se da	Se da Poco	Se da Bastante	Se da totalmente
				i1	<b>El autor tiene dificultades objetivas para agredir a la víctima.</b> Por ejemplo el denunciado ha ingresado en un establecimiento para una estancia prolongada forzado por alguna circunstancia (prisión, centro psiquiátrico, residencia de la tercera edad); o experimenta una significativa falta de movilidad (por enfermedad o incapacidad física); o autor y víctima se encuentran en países diferentes residiendo de forma estable.					
				i2	<b>El autor se ha distanciado de la víctima de forma voluntaria y efectiva.</b> Por ejemplo, el denunciado ha cambiado de residencia en lugar no próximo a la víctima; o muestra una clara voluntad de no coincidir físicamente con ella y cumplir con órdenes de alejamiento; no molesta a la víctima con llamadas, mensajes electrónicos, cartas, etc.					
				i3	<b>El autor muestra una actitud pacífica.</b> Por ejemplo, desde la formalización de la denuncia ya no se han advertido actitudes ni comentarios que indiquen una actitud violenta del autor o que expresen ánimo de venganza; o, incluso, existen comentarios que indican su disposición pacífica; o en el sentido de admitir claramente la posibilidad de separación de su pareja, incluso habiéndose celebrado juicios, e incluso aunque la relación haya sido de larga duración.					
				i4	<b>El autor cumple con el régimen de separación y cargas familiares, especialmente habiéndose iniciado /producido trámites de separación/divorcio; o existiendo hijos en común.</b> Por ejemplo, el denunciado participa positivamente en los trámites de separación/divorcio, o si ya se han producido respeta el régimen de separación, de visitas, cumple con las obligaciones económicas impuestas, no quebranta ningún tipo de medida / condena, no se plantean conflictos significativos a la hora de ver a los hijos, etc.					
				i5	<b>El autor exterioriza una actitud cívica y respetuosa con la ley.</b> Por ejemplo, el denunciado avisa a la Autoridad o sus agentes cuando necesita acercarse o contactar con la víctima; recurre a procedimientos legales para la defensa de los intereses, etc.					
				i6	<b>El autor tiene una situación laboral estable.</b> El denunciado desarrolla una vida estable en el aspecto personal (por ejemplo, convive con normalidad con otras personas, incluso con una nueva pareja, o de manera autónoma) o en el laboral (no pasa por dificultades significativas, o aunque tenga algunas se las va arreglando).					
				i7	<b>El autor muestra un arrepentimiento expreso o se acoge voluntariamente a programas de ayuda.</b> Por ejemplo, el denunciado muestra arrepentimiento o se ha acogido de forma voluntaria a programas de ayuda para lograr estabilidad emocional o superar adicciones (asistencia social, tratamiento psicológico o psiquiátrico, etc), en los que se exterioriza un progreso positivo.					
				i8	<b>La víctima goza de un entorno favorable para su seguridad.</b> Por ejemplo, la víctima cuenta con apoyo y protección de su entorno familiar/laboral/servicios sociales; o la víctima colabora activamente con las FCS en su protección; o manifiesta claramente que se siente segura.					
				i9	<b>La víctima ha trasladado su residencia habitual a un</b>					

[illegible]

**Puntuación Total:**

SI

**NO**

**NO APRECIADO**

BAJO

**MEDIO**

ALTO

**EXTREMO**

Anexo III

**Niveles de Riesgo estimado y medidas policiales de protección a adoptar**  
**Instrucción SES 5/ 2008.**

<b>MEDIAS POLICIALES DE PROTECCIÓN A ADOPTAR (Instrucción SES 5/2008)</b>			
<b>NIVELES DE RIESGO</b>	<b>NO APRECIA DO</b>	Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para cualquier otro ciudadano denunciante. Especialmente información de derechos y de recursos que tiene a su disposición.	
	<b>BAJO</b>	<b>OBLIGATORIAS</b>	Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24h). con las FCS más próximas. Contactos telefónicos esporádicos con la víctima. Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección. Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes. Información precisa sobre el servicio de tele-asistencia móvil.
		<b>COMPLEMENTARIAS</b>	Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima (acordar con ella la conveniencia de emplear o no uniforme y/o vehículo con distintivo). Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor, que llevará el personal de patrulla. Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio si la Autoridad Judicial acuerda su salida.
	<b>MEDIO</b>	<b>OBLIGATORIAS</b>	Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como entrada/salida centros escolares de los hijos. Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima. Procurar que se facilite a la víctima un Terminal móvil (tele-asistencia). Entrevista personal con la víctima por el responsable de su protección.
		<b>COMPLEMENTARIAS</b>	Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de protección. Entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctima / puntos de atención municipal para identificar otros modos efectivos de protección. Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida.
	<b>ALTO</b>	<b>OBLIGATORIAS</b>	Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como entrada/salida centros escolares de los hijos. Si no se ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días, especialmente si no se ha procedido a la detención del autor. Control esporádico de los movimientos del agresor.
		<b>COMPLEMENTARIAS</b>	Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima, vecinos, familia, trabajo, lugares de ocio. Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor.
	<b>EXTRE MO</b>	<b>OBLIGATORIAS</b>	Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza inminente. Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima.

# Anexo IV

## Cuestionario de Satisfacción

<b>Cuestionario de Satisfacción con las medidas policiales establecidas en los casos de violencia de género.</b>	
<p><b>Ayúdenos a mejorar nuestro programa contestando algunas preguntas sobre la atención policial que ha venido recibiendo. Estamos interesados en sus opiniones sinceras, ya sean positivas o negativas. Por favor señale con una X la respuesta elegida</b></p> <p><b>FECHA:</b> _____</p>	
1.	Cómo calificaría la calidad del servicio que ha recibido: <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala
2.	¿En qué medida nuestro programa ha satisfecho sus necesidades? <input type="checkbox"/> Totalmente <input type="checkbox"/> En general <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Ninguna
3.	Si una amiga necesitara una ayuda similar ¿le hablaría de nuestras medidas? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Probablemente no <input type="checkbox"/> Probablemente si <input type="checkbox"/> Sí
4.	¿En qué grado está satisfecho/a con el tipo de atención recibida? <input type="checkbox"/> Mucho <input type="checkbox"/> Bastante <input type="checkbox"/> Poco <input type="checkbox"/> Nada
5.	¿Le han ayudado las medidas adoptadas por los servicios policiales a hacer frente más eficazmente a sus problemas? <input type="checkbox"/> Mucho <input type="checkbox"/> Bastante <input type="checkbox"/> Poco <input type="checkbox"/> Nada
6.	En conjunto, ¿en qué grado está satisfecha con el servicio recibido? <input type="checkbox"/> Mucho <input type="checkbox"/> Bastante <input type="checkbox"/> Poco <input type="checkbox"/> Nada
7.	¿En qué grado se ha sentido protegida, gracias a las medidas adoptadas por los servicios policiales? <input type="checkbox"/> Mucho <input type="checkbox"/> Bastante <input type="checkbox"/> Poco <input type="checkbox"/> Nada
8.	¿En qué grado cree que los servicios policiales le ayudan a encontrar una solución a su situación? <input type="checkbox"/> Mucho <input type="checkbox"/> Bastante <input type="checkbox"/> Poco <input type="checkbox"/> Nada
9.	¿Cambiaría usted algo sobre la atención y servicios recibidos por los servicios policiales? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
El que: _____	



## ANEXO V

### Secuencias de evolución de los casos VPER con respecto al VPER anterior

Evolución de los casos VPER 4 con respecto al VPER 3 (N= 585)							
VPER4							
VPER3	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	100	840	19	16
	Bajo	67	28,4	163	69,1	6	2,5
	Medio	53	31	112	65,5	6	3,5
	Alto	21	36,1	36	62,1	1	1,7
	Extremo	1	100			0	
	TOTAL	142	24,27	411	70,25	32	5,47
Evolución de los casos VPER 5 con respecto al VPER 4 (N= 384)							
VPER5							
VPER4	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	68	81,0	16	19,1
	Bajo	27	18,6	108	74,5	10	6,9
	Medio	19	17	92	82,1	1	0,0
	Alto	11	26,2	31	73,8	0	0
	Extremo	1	100				
	TOTAL	58	15,10	299	77,86	27	7,03
Evolución de los casos VPER 6 con respecto al VPER 5 (N=255)							
VPER6							
VPER5	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	32	84,2	6	15,8
	Bajo	19	20,9	70	76,9	2	2,2
	Medio	20	20,8	72	75,0	4	4,2
	Alto	6	20	24	80		
	Extremo						
	TOTAL	45	17,64	198	77,64	12	4,7
Evolución de los casos VPER 7 con respecto al VPER 6 (N=160)							
VPER7							
VPER6	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	19	90,5	2	9,6
	Bajo	8	16,7	37	77,1	3	6,3
	Medio	8	12,7	54	85,7	1	1,6
	Alto	6	21,5	21	75,0	1	3,6
	Extremo						
	TOTAL	22	13,75	131	81,87	7	4,3
Evolución de los casos VPER 8 con respecto al VPER 7 (N=110)							
VPER8							
VPER7	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	7	63,3	4	36,4
	Bajo	3	12,5	21	87,5	0	0
	Medio	8	15,3	44	85,6	0	0
	Alto	7	31,8	15	68,2	0	0
	Extremo	1	100				
	TOTAL	19	17,2	87	79,09	4	3,6

Evolución de los casos VPER 9 con respecto al VPER 8 (N=75)							
VPER9							
VPER8	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	2	40	3	60
	Bajo	3	21,4	11	78,6		
	Medio	4	10,0	36	90		
	Alto	1	0,3	15	93,8		
	Extremo						
TOTAL		8	10,66	64	85,33	3	4
Evolución de los casos VPER 10 con respecto al VPER 9 (N=60)							
VPER10							
VPER9	Niveles de Riesgo	Casos mejoran		Casos que se mantiene		Casos que empeoran	
		N	%	N	%	N	%
	No apreciado	-----	-----	1	50,5	1	50,1
	Bajo	0		10	76,9	3	23,1
	Medio	2	6,6	29	93,5		
	Alto	1	7,1	13	92,9		
	Extremo						
TOTAL		3	5	53	88,33	4	6,66

**Anexo VI**

**Formulario VPR vigente (Mayo 2012)**

<i>Ítems</i>	<i>FORMULARIO VPR</i>	<i>NO SE sabe</i>	<i>No se da</i>	<i>bajo</i>	<i>medio</i>	<i>Alto</i>	<i>Extremo</i>
1	Violencia física. Con o sin lesiones						
2	Violencia Sexual						
3	Empleo de armas contra la víctima						
4	Amenazas o planes dirigidos a causar daño físico/psíquico a la víctima						
5	Incrementos y/ repetición de episodios o amenazas de violencia						
6	Violencia psíquica del agresor hacia la víctima						
7	Daños sobre la vivienda, bienes u otros objetos						
8	Incumplimiento de disposiciones cautelares						
9	Quebrantamiento de penas o medias penales de seguridad						
10	Conducta desafiante y/o de menosprecio del agresor hacia la autoridad, sus agentes, o hacia la víctima en presencia de éstos.						
11	Antecedentes penales/ policiales del agresor. Especialmente en los que se empleó violencia.						
12	Abuso de sustancias tóxicas (estupefacientes), alcohol medicamentos por parte del agresor						
13	El autor muestra celos exagerados y/u obsesión por la víctima						
14	Problemas patentes en relación de pareja						
15	Problemas laborales y/o financieros del agresor						
16	Tendencia suicida del agresor						

**Anexo VII**

**Formulario VPR vigente (Mayo 2012)**

<i>Ítems</i>	<i>FORMULARIO VPR</i>	<i><u>NO</u> <u>SE</u> <u>sabe</u></i>	<i><u>No</u> <u>se</u> <u>da</u></i>	<i><u>bajo</u></i>	<i><u>medio</u></i>	<i><u>Alto</u></i>	<i><u>Extremo</u></i>
1	El autor tiene imposibilidad de agredir a la víctima. Ha ingresado en prisión u otro centro de internamiento, se ha trasladado a otro país o está incapacitado físicamente.						
2	El autor se ha distanciado de la víctima. No molesta a la víctima, ha cambiado de residencia a un lugar alejado, cumple con las medidas judiciales (si existen), incluidas las telemáticas (pulseras).						
3	El autor desde la denuncia muestra una actitud pacífica. Asume su situación respecto a la víctima, sin ánimo de venganza contra ella o su entorno.						
4	El autor cumple con el régimen de separación y cargas familiares. <u>Si no existen, conteste SI.</u>						
5	El autor exterioriza una actitud respetuosa con la ley y de colaboración con sus agentes.						
6	El autor tiene una situación socio, laboral y económica estable.						
7	El autor muestra un arrepentimiento y/o se acoge voluntariamente a programas de ayuda.						
8	La víctima cuenta con apoyo social favorable para su seguridad.						
9	La víctima ha trasladado su residencia a un lugar con escasas posibilidades de ser conocido por el autor.						
10	Avance en el tiempo sin incidentes desde la última valoración.						
11	El autor está fugado y/o en paradero desconocido.						
12	El autor muestra celos exagerados y/u obsesión por la víctima.						
13	El autor muestra tendencias suicidas, problemas psicológicos/psiquiátricos, o de adicciones.						
14	La víctima propicia incumplimientos de medidas judiciales, muestra deseo de retirar la denuncia o de renunciar a la protección.						
15	La víctima tiene una relación de pareja que el autor no acepta y/o presenta demanda de separación/divorcio.						
16	La víctima presenta problemas psicológicos/psiquiátricos y/o de adicciones.						
	La víctima o el autor tienen en su entorno personas que suponen una amenaza real contra la integridad de la víctima.						

## ANEXO VIII

### Cuestionario de opinión policial sobre las medidas policiales

#### OPPOL

Tiempo en el puesto: \_\_\_\_\_

Estamos trabajando para mejorar el sistema de seguimiento integral de las víctimas de violencia de género.

El objetivo es obtener un conocimiento riguroso de la percepción y valoración que tienen los guardias civiles y policías sobre la aplicación de las medidas policiales.

Vuestra opinión es muy valiosa, para identificar problemas y puntos débiles de nuestro sistema susceptibles de resolver con la adopción de medidas apropiadas.

No hay respuestas buenas ni malas, tu opinión es la que vale.

Recordamos que es un cuestionario totalmente anónimo y voluntario.

#### INSTRUCCIONES

Pon una X en la casilla correspondiente, en función de tu percepción del grado de utilidad.

- 1 → Muy útil                      2 → Bastante útil  
3 → Bastante inútil            4 → Totalmente inútil

Nivel de Riesgo	Medias policiales	Utilidad			
		1	2	3	4
1	1 Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24h) con las FCS más próximas				
	2 Contactos telefónicos esporádicos con la víctima				
	3 Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección				
	4 Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes				
	5 Información precisa sobre el servicio de tele-asistencia móvil				
	6 Contactos personales, esporádicos y discretos con la víctima (acordar con ella la conveniencia de emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos)				
	7 Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor, que llevará el personal de la patrulla				
	8 Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio si la A. Judicial acuerda su salida del mismo				
2	9 Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como entrada/salida centros escolares de los hijos				
	10 Acompañamiento a víctimas en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, que se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima				
	11 Procurar que se facilite a la víctima un Terminal móvil (tele-asistencia).				
	12 Entrevista personal con la víctima por el responsable de su protección.				
	13 Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de protección.				
	14 Entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctima / puntos de atención municipal para identificar otros modos efectivos de protección.				
	15 Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida.				
	16 Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como entrada/salida centros escolares de los hijos.				

3	17	Si no se ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días especialmente si no se ha procedido a la detención del autor.				
	18	Control esporádico de los movimientos del agresor.				
	19	Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima, vecinos, familia, trabajo, lugares de ocio.				
	20	Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor.				
4	21	Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza inminente.				
	22	Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima.				
	23	Vigilancia entrada/salida centros escolares de los hijos (en su caso).				

¿Qué medidas añadirías por cada nivel?

1	
2	
3	
4	
5	

Para finalizar, ¿Qué tiempo estima que pasa desde que la víctima viene a denunciar hasta que se toman las primeras medidas policiales?

\_\_\_\_\_ (especifique: horas/minutos/segundos).